



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/ACC/TLS/34
WT/MIN(24)/4

18 de enero de 2024

(24-0429)

Página: 1/180

**Grupo de Trabajo sobre la Adhesión
de Timor-Leste**

Original: inglés

**INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ADHESIÓN
DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	5
DOCUMENTACIÓN FACILITADA	5
DECLARACIONES INTRODUCTORIAS	5
II. POLÍTICAS ECONÓMICAS	5
- Políticas monetaria y fiscal	7
- Sistema cambiario y de pagos exteriores	9
- Régimen de inversiones	10
- Propiedad estatal y privatización	14
- Política de precios	16
- Política de competencia	19
III. MARCO PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS	20
- Facultades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial	20
- Entidades gubernamentales encargadas de elaborar y aplicar las políticas que afectan al comercio exterior	22
- División de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos subcentrales	23
- Descripción de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos	23
IV. POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE MERCANCÍAS	25
- Derechos comerciales	25
- Facilitación del comercio	26
A. REGLAMENTACIÓN DE LAS IMPORTACIONES	29
- Derechos de aduana propiamente dichos	29
- Otros derechos y cargas	29
- Contingentes arancelarios, exenciones arancelarias	29
- Derechos y cargas por los servicios prestados previstos en el Código Aduanero	31
- Restricciones cuantitativas a la importación, con inclusión de las prohibiciones, los contingentes y los regímenes de licencias	31
- Procedimientos para el trámite de licencias de importación	32
- Valoración en aduana	33
- Normas de origen	36
- Inspección previa a la expedición	37
- Otras formalidades aduaneras	37
- Aplicación de impuestos internos a las importaciones	37
- Regímenes antidumping, de derechos compensatorios y de salvaguardias	39
B. REGLAMENTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES	40
- Aranceles, derechos y cargas por servicios prestados, aplicación de impuestos internos a las exportaciones	40
- Restricciones cuantitativas a la exportación, con inclusión de las prohibiciones, los contingentes y los regímenes de licencias	40
- Subvenciones a la exportación	40

C. POLÍTICAS INTERNAS QUE AFECTAN AL COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS	41
- Política industrial, con inclusión de las subvenciones	41
- Obstáculos técnicos al comercio, normas y certificación	42
- Medidas sanitarias y fitosanitarias	44
- Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio	54
- Zonas francas y zonas económicas especiales	54
- Contratación pública	55
- Tránsito	58
- Políticas agrícolas	58
a) Importaciones	59
b) Exportaciones	59
c) Políticas internas	59
V. RÉGIMEN COMERCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	61
1. ASPECTOS GENERALES	61
- Aplicación del trato nacional y del trato de la nación más favorecida a los nacionales de otros países	62
- Derechos e impuestos	62
2. NORMAS SUSTANTIVAS DE PROTECCIÓN	62
- Derecho de autor y derechos conexos	62
- Marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios	63
- Indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen	63
- Dibujos y modelos industriales	63
- Patentes	63
- Protección de las obtenciones vegetales	64
- Esquemas de trazado de los circuitos integrados	64
- Prescripciones sobre la información no divulgada, incluidos los secretos comerciales y los datos de pruebas	64
3. MEDIDAS DE CONTROL DEL ABUSO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	64
4. OBSERVANCIA	65
- Procedimientos y recursos judiciales civiles	65
- Procedimientos y recursos administrativos	66
- Medidas provisionales	66
- Medidas especiales en frontera	66
- Procedimientos penales	67
5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS	67
VI. POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE SERVICIOS	68
VII. TRANSPARENCIA	71
- Publicación de información sobre el comercio	71
- Notificaciones	72
VIII. ACUERDOS COMERCIALES	73

CONCLUSIONES	73
ANEXO 1: Leyes, reglamentos y demás información facilitada por Timor-Leste al Grupo de Trabajo	75
ANEXO 2: Indicadores comerciales y económicos de Timor-Leste	84
ANEXO 3: Indicadores incluidos en el informe <i>Doing Business</i>	88
ANEXO 4: Marco legislativo para la lucha contra la corrupción	90
ANEXO 5: Resumen de la reglamentación en materia de IED	91
ANEXO 6: Empresas de propiedad estatal	92
ANEXO 7: Mantenimiento en vigor de las leyes vigentes antes de la independencia	96
ANEXO 8: Clasificación de las actividades económicas en Timor-Leste	97
ANEXO 9: Comité Nacional de Facilitación del Comercio	113
ANEXO 10: Disposiciones legislativas relacionadas con la facilitación del comercio	115
ANEXO 11: Proyecto de ventanilla única nacional: actividades y calendario	117
ANEXO 12: Categorías de compromisos en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC	120
ANEXO 13: Lista de mercancías exentas de derechos de importación	123
ANEXO 14: Derechos y cargas por los servicios prestados previstos en el Código Aduanero	125
ANEXO 15: Plan de Acción para la redacción de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley de Impuestos y Derechos (revisión)	127
ANEXO 16: Plan de Acción para la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC	128
ANEXO 17: Especies invasoras en Timor-Leste	130
ANEXO 18: Plan de Acción para aplicar el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC	131
ANEXO 19: Plan de Acción para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC	143
ANEXO 20: Formas jurídicas de empresas disponibles en virtud de la Ley Nº 10/2017 de Sociedades Mercantiles, de 17 de mayo de 2017	145
ANEXO 21: Medidas que afectan al movimiento de personas físicas	147
ANEXO 22: Fuentes de derecho pertinentes relativas a los intereses inmobiliarios	150
ANEXO 23: Ministerios y organismos estatales responsables de la reglamentación de sectores y subsectores de servicios específicos	154
ANEXO 24: Reglamentación del comercio de servicios	155
ANEXO 25: Acuerdos bilaterales	172
ANEXO 26: Situación relativa a la adhesión de Timor-Leste a la ASEAN	174
ANEXO 27: Participación de Timor-Leste en las organizaciones económicas multilaterales y en programas de otras organizaciones multilaterales relacionados con el comercio	176
APÉNDICE	177

I. INTRODUCCIÓN

1. El Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste (en adelante, Timor-Leste) solicitó la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 7 de abril de 2015 (documento [WT/ACC/TLS/1](#)). En la reunión que celebró el 7 de diciembre de 2016, el Consejo General estableció un Grupo de Trabajo encargado de examinar la solicitud de adhesión a la OMC presentada por el Gobierno de Timor-Leste de conformidad con el artículo XII del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. En el documento [WT/ACC/TLS/2/Rev.8](#) figuran el mandato y la composición del Grupo de Trabajo.

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 1 de octubre de 2020, 29 de julio de 2021, 29 de abril de 2022, 30 de septiembre de 2022, 20 de abril de 2023, 11 de octubre de 2023 y 11 de enero de 2024 bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Rui Macieira (Portugal).

DOCUMENTACIÓN FACILITADA

3. Como base para sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí un Memorándum sobre el régimen de comercio exterior de Timor-Leste ([WT/ACC/TLS/3](#) y [WT/ACC/TLS/3/Corr.1](#)), las preguntas relativas al régimen de comercio exterior de Timor-Leste presentadas por los Miembros, con las correspondientes respuestas, así como información de otra índole facilitada por las autoridades de Timor-Leste ([WT/ACC/TLS/4](#), [WT/ACC/TLS/8](#), [WT/ACC/TLS/10](#), [WT/ACC/TLS/11](#), [WT/ACC/TLS/12](#), [WT/ACC/TLS/13/Rev.2](#), [WT/ACC/TLS/14](#), [WT/ACC/TLS/16](#), [WT/ACC/TLS/20](#), [WT/ACC/TLS/24](#), [WT/ACC/TLS/24/Corr.1](#), [WT/ACC/TLS/28](#), [WT/ACC/TLS/31](#) y [WT/ACC/TLS/33](#)), incluidos los textos legislativos y los demás documentos enumerados en el ANEXO 1 del presente informe.

DECLARACIONES INTRODUCTORIAS

4. El representante de Timor-Leste informó de que la adhesión a la OMC constituía una prioridad para su Gobierno, pues ayudaría a sacar mayor partido de las mejoras en curso en los ámbitos de la infraestructura, el capital humano y la capacidad administrativa a fin de acelerar el crecimiento y la diversificación económica. Timor-Leste estaba determinado a impulsar su adhesión a la OMC y contaba con la firme voluntad política, compartida por todos los partidos, de llevar a cabo en el ámbito nacional las reformas estructurales, legislativas y de política necesarias para cumplir sus futuros compromisos en el marco de la OMC. Los objetivos de la política económica y comercial nacional respaldaban esa determinación.

5. Los Miembros acogieron con agrado la solicitud de adhesión a la OMC de Timor-Leste y, recordando las directrices sobre la adhesión de los PMA de 2002/2012, se comprometieron a colaborar con el país para lograr ese objetivo. Los Miembros reconocieron los esfuerzos de Timor-Leste por cumplir las normas de la OMC y manifestaron su disposición a prestar asistencia.

6. El Grupo de Trabajo examinó las políticas económicas y el régimen de comercio exterior de Timor-Leste, así como las disposiciones que podrían figurar en un proyecto de Protocolo de Adhesión a la OMC. En los párrafos 7 a 336 *infra*, se resumen las opiniones de los miembros del Grupo de Trabajo acerca de los distintos aspectos del régimen de comercio exterior de Timor-Leste y las condiciones para su adhesión a la OMC.

II. POLÍTICAS ECONÓMICAS

7. El representante de Timor-Leste informó de que Timor-Leste era un país menos adelantado (PMA) de ingresos bajos con un PIB total de 2.017,9 millones de dólares EE.UU. (en 2019), 1.237 millones de dólares EE.UU. (en 2020) y 1.295 millones de dólares EE.UU. (en 2021). Llevaba desde 2008 sin depender de la asistencia para el desarrollo. No obstante, la economía seguía siendo frágil y dependía de los ingresos procedentes del petróleo y del gas. Según las estimaciones, en 2022 el PIB no petrolero de Timor-Leste crecería un 3%, tras una contracción de -7,9% en 2020, seguida de un incremento del 3,4% en 2021. La política fiscal seguía siendo el principal motor de la actividad económica, la inversión privada se mantenía en niveles bajos (aunque pasó de representar un 4% del PIB a un 12% del PIB en 2020-2021) y el mercado interno de Timor-Leste seguía estando poco integrado. Desde su independencia, el Gobierno había introducido importantes mejoras en sus infraestructuras; sin embargo, los costos del comercio interior continuaban siendo elevados y la

actividad económica se seguía concentrando en la capital. Los principales indicadores comerciales y económicos de Timor-Leste figuran en los anexos 2 A) a 2 C).

8. El objetivo futuro del país se plasmó en el Plan de Desarrollo Estratégico para 2011-2030, según el cual Timor-Leste dejaría de ser una economía de ingresos bajos para transformarse en una de ingresos medianos altos con una población sana, instruida y segura antes de 2030. En el Plan se reconocía que para lograr el crecimiento económico sería necesario diversificar la economía. Los sectores prioritarios a la hora de impulsar la diversificación económica eran los sectores de elaboración avanzada del petróleo, la agricultura, el turismo, la pesca, las manufacturas ligeras y la minería. Para lograr el crecimiento económico era fundamental atraer la inversión privada. El objetivo consistía en tener una economía de mercado impulsada por el sector privado antes de 2030. El Gobierno estaba trabajando para mejorar los indicadores relacionados con la percepción y su posición mundial.

9. Los cimientos de la estrategia para la reforma y el crecimiento de la economía se habían definido en la Guía de Reforma y Fomento Económicos (GRFE), que establecía las directrices para construir un mercado libre y predecible y cumplir las normas y directrices de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la OMC, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BASD). La reforma se había centrado en los aspectos siguientes: i) la creación de un marco normativo sencillo, seguro y transparente en el que las empresas pudieran llevar a cabo su actividad; ii) la eliminación de los trámites burocráticos innecesarios y excesivos que encarecían la actividad comercial; iii) la simplificación de los procesos de importación y exportación; iv) el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y el establecimiento de sistemas eficaces de prestación de servicios a los sectores empresariales; v) el desarrollo de infraestructuras de apoyo al sector privado, como producción y distribución de energía eléctrica, carreteras, puertos y aeropuertos, y redes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene; y vi) la identificación de medidas específicas para desarrollar los sectores económicos prioritarios. El objetivo de esas reformas consistía en destinar los ingresos procedentes del petróleo y del gas de Timor-Leste a la financiación de la diversificación económica. La Guía había estado en vigor hasta 2018.

10. La pandemia de COVID-19 había empeorado los resultados económicos y comerciales de Timor-Leste, lo que se tradujo en un descenso del PIB, debido a la merma del rendimiento de los agentes económicos y la contracción en la oferta y la demanda, consecuencias a su vez del distanciamiento social, el cierre de fronteras, el cierre de empresas y la falta de inversiones. En agosto de 2020, el Gobierno había aprobado el Plan de Recuperación Económica para 2020-2023 con el propósito de hacer frente a esos efectos negativos. En el Plan se había definido un conjunto de medidas de recuperación a corto, medio y largo plazo, entre las que se incluían el apoyo temporal a las familias y empresas, medidas para proteger el empleo y garantizar los ingresos de las familias y las empresas que atravesaban dificultades, intentando reducir todo lo posible el estancamiento de las actividades económicas, contribuir a la transformación económica, crear más empleos decentes, consolidar los programas sociales para la inversión pública y cambiar la estructura económica con el objetivo de contribuir al crecimiento económico de Timor-Leste. En 2020-2022, el Gobierno había aplicado cuatro de las medidas previstas en el Plan para fomentar la recuperación en el corto plazo, a saber: i) un programa de distribución de canastas básicas, ii) subvenciones para la recuperación del sector privado, iii) subvenciones contributivas para el sector privado, y iv) apoyo especial para los trabajadores del sector informal. El Plan se había interrumpido en junio de 2023.

11. Un Miembro pidió que se facilitaran ejemplos de cómo había logrado el Gobierno mejorar el entorno empresarial. En su respuesta, el representante de Timor-Leste señaló que, en cuanto a la facilidad para hacer negocios, Timor-Leste ocupaba el puesto 181 entre 190 países según los indicadores incluidos en el informe *Doing Business 2020* del Banco Mundial. Hizo referencia a las actividades que se habían llevado a cabo entre 2019 y 2020 con objeto de mejorar el entorno empresarial institucional en el marco del componente Nº 5 del Programa de Reforma de la Administración Pública 2019-2023 (en adelante, el PARP), aprobado mediante la Resolución Nº 38/2020 del Gobierno, de 23 de septiembre de 2020, cuyo fin era mejorar la clasificación en el índice *Doing Business* y el entorno empresarial en general. Con la asistencia técnica de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Gobierno había creado un grupo de trabajo que se encargaría de consolidar la reforma en ese ámbito, y había elaborado un plan de acción para introducir reformas con el fin de simplificar los procedimientos de concesión de esas licencias. Las novedades relacionadas con indicadores específicos de *Doing Business* figuran en el ANEXO 3.

12. Asimismo, informó sobre la adopción de la Resolución del Gobierno N° 34/2022 sobre el Apoyo al Sector Privado, de 16 de noviembre de 2022. En esta Resolución, el Gobierno había reconocido la necesidad de establecer una estrategia para aplicar los requisitos en materia de legislación y política necesarios para el desarrollo del sector privado en Timor-Leste. El objetivo de esta estrategia era contribuir al crecimiento económico y la prosperidad como sigue: i) aumentando el número de empresas que operan en Timor-Leste; ii) aumentando la inversión del sector privado; iii) aumentando las oportunidades de empleo en el sector privado, incluso para los jóvenes timorenses; y iv) mejorando la disponibilidad de crédito facilitado por las instituciones financieras. Esta estrategia se centraba en conceder prioridad a las reformas que beneficiaran al sector privado, abordar los obstáculos al desarrollo del sector privado y proporcionar incentivos y apoyo al establecimiento y el funcionamiento de las empresas.

13. Un Miembro solicitó además que se facilitara información sobre las medidas que adoptaba el Gobierno para luchar contra la corrupción. El representante de Timor-Leste informó de que, según el índice de corrupción de Transparency International de 2022, con el tiempo, Timor-Leste había logrado avances significativos y se había clasificado en el puesto 77 de 180 países tras un aumento de nueve puntos desde 2012. Destacó el marco legislativo en esa esfera, que incluía: el Código Penal (Decreto Ley N° 19/2009, de 8 de abril de 2009); la Ley N° 3/2004 de Partidos Políticos, de 14 de abril de 2004; la Ley N° 2/2009 de Protección de Testigos, de 6 de mayo de 2009; la Resolución N° 25/2008 del Parlamento Nacional, de 10 de diciembre de 2008, por la que se ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Resolución N° 12/2019, de 13 de marzo de 2019, sobre el Código de Conducta de los Miembros del Gobierno; y, más recientemente, la Ley N° 7/2020 de Medidas para Prevenir y Combatir la Corrupción, de 26 de agosto de 2020. Las disposiciones de estas leyes se describen detalladamente en el ANEXO 4.

- Políticas monetaria y fiscal

14. El representante del Gobierno de Timor-Leste informó de que la legislación pertinente de Timor-Leste en relación con las políticas monetaria y fiscal y la libre circulación de capitales era la siguiente: i) el Decreto Ley N° 20/2003 sobre la Moneda Oficial de Timor-Leste, de 13 de noviembre de 2003; ii) la Instrucción Pública N° 4/2009 sobre Importación y Exportación de Efectivo, de 2 de septiembre de 2009; iii) la Ley N° 5/2011 del Marco Reglamentario del Banco Central de Timor-Leste (CBTL), de 15 de junio de 2011; iv) la Ley N° 10/2011, de 14 de septiembre de 2011, por la que se aprueba el Código Civil; v) la Ley N° 17/2011 de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, de 28 de diciembre de 2011, modificada por la Ley N° 4/2013, de 14 de agosto de 2013; y vi) el Reglamento N° 1/2013 del CBTL de Acuñación y Utilización de Monedas, de 6 de septiembre de 2013.

15. Según el Decreto Ley N° 20/2003 y el artículo 79.1 de la Ley N° 5/2011, la moneda oficial de Timor-Leste era el dólar de los Estados Unidos. Además de los billetes de dólares de los Estados Unidos, también estaban en circulación las monedas metálicas de 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 200 centavos de Timor-Leste como sustitutos de los centavos de dólar de los Estados Unidos. De conformidad con lo especificado en el Decreto Ley N° 20/2003, esas monedas, emitidas por el Banco Central de Timor-Leste (CBTL), podían pasar a ser la moneda de curso legal y gozaban de autenticidad para ser utilizadas en cualquier transacción pública o privada. No obstante, Timor-Leste seguía manteniendo el dólar de los Estados Unidos como su única moneda de curso legal dado que los centavos de Timor-Leste solo se podían utilizar dentro del país.

16. Por consiguiente, Timor-Leste no tenía una política monetaria propia ni disponía de los principales instrumentos que permitían controlar la oferta monetaria, la tasa de inflación o el tipo de interés a fin de garantizar la estabilidad de los precios. Sin embargo, esta se consideraba una situación transitoria. De conformidad con los artículos 79.1 y 79.3 de la Ley N° 5/2011, el dólar de los Estados Unidos era la moneda nacional de curso legal obligatorio hasta que se definiese y aplicase un régimen cambiario específico con arreglo a la Constitución de Timor-Leste. Por el momento, en 2023 aún no se había indicado la fecha en que se adoptaría una moneda propia para Timor-Leste. El Gobierno había encomendado al CBTL que llevase a cabo una investigación para estudiar esta posibilidad.

17. Cuando se diseñase un régimen cambiario específico en Timor-Leste, las facultades y responsabilidades en materia de definición y aplicación de la política cambiaria y la emisión de su propia moneda nacional se encomendarían exclusivamente al CBTL (artículo 143 de la Constitución). El CBTL era una entidad autónoma e independiente tanto del Gobierno como del Parlamento

Nacional. Este carácter independiente y autónomo en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones se garantizaba, entre otras cosas, por el hecho de que, en principio, no se podía destituir al Gobernador, los Vicegobernadores o los miembros no ejecutivos del Consejo de Administración del CBTL, salvo en situaciones muy concretas estipuladas en la legislación pertinente (artículos 49 y 50 de la Ley Nº 5/2011).

18. La cartera del CBTL podía incluir los siguientes activos extranjeros: i) oro u otros metales preciosos custodiados por el Banco Central, incluidos saldos de cuentas en oro y otros metales preciosos; ii) billetes y monedas denominados en divisas libremente convertibles, custodiados por el Banco Central o en su poder; iii) depósitos y saldos interbancarios en efectivo o a corto plazo denominados en divisas libremente convertibles y que estuvieran depositados en las cuentas del CBTL, en los libros de contabilidad de bancos centrales extranjeros o en entidades financieras internacionales; iv) títulos de deuda fácilmente negociables emitidos o autorizados por Gobiernos extranjeros, bancos centrales o entidades financieras internacionales; v) bonos de entidades financieras internacionales que fueran el resultado de acuerdos de recompra, venta y compra, y de acuerdos de préstamo de valores en el caso de los títulos de deuda mencionados en el epígrafe iv); vi) derechos especiales de giro depositados en una cuenta de Timor-Leste en el Fondo Monetario Internacional (FMI); y vii) la posición de reserva de Timor-Leste en el FMI.

19. Debido a las limitaciones de la política monetaria, el equilibrio macroeconómico global dependía principalmente de la política fiscal. El gasto público se financiaba básicamente con la producción marítima de petróleo. Por consiguiente, Timor-Leste presentaba una deuda pública mínima. El Gobierno había mantenido la estabilidad macroeconómica desde la proclamación de la independencia del país, cuya inflación superó por poco tiempo el 10% en 2011 y 2012, pero en general se había mantenido en valores de 1 solo dígito. En junio de 2022, el promedio de inflación en Timor-Leste era del 8,0%. Mientras tanto, según las estimaciones del Gobierno y de acuerdo con lo establecido en su Plan de Desarrollo Estratégico, el rango de la inflación oscilaba entre el 4% y el 6%.

20. La financiación pública de Timor-Leste dependía en gran medida de los ingresos procedentes del sector del petróleo y el gas, que representaban alrededor del 74% de los Presupuestos del Estado de 2021 (1.880 millones de dólares EE.UU.). Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno estaba aplicando, además de la reforma económica que ya estaba en curso, una reforma fiscal que comprendía dos intervenciones principales y complementarias encaminadas a: i) generar más recursos financieros en el marco de un régimen fiscal moderno y ii) lograr un presupuesto más equilibrado. Para ello, se estaban volviendo a evaluar las fuentes de ingresos actuales, así como los medios necesarios para reformar los gastos. En concreto, al objeto de mejorar la recaudación de impuestos, el Gobierno había modernizado la legislación mediante la revisión del Código Aduanero en 2017 y tenía previsto revisar la Ley de Impuestos y Derechos e introducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA), como dos de los principales elementos de la reforma fiscal (como se describe en las secciones "Facilitación del comercio" y "Aplicación de impuestos internos a las importaciones"). La formulación de nuevas políticas cumplía las normas y directrices de la OMC y la ASEAN, como si Timor-Leste ya fuera miembro de esas dos organizaciones. Todos los textos legislativos se sometieron a un proceso de consulta pública en el que participaron la comunidad empresarial, la sociedad civil y otras partes interesadas. Como resultado de esa reforma, el Gobierno esperaba desarrollar y aplicar un sistema mejorado de administración y recaudación fiscal, basado en tecnología de la información moderna, una cultura de prestación de servicios mejorada, una mayor integridad de los funcionarios públicos y un sistema mejorado de rendición de cuentas.

21. El representante de Timor-Leste añadió que, en diciembre de 2022, su Gobierno había aprobado la Estrategia de Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas para 2022-2027 de Timor-Leste, que incluía la hoja de ruta para la reforma fiscal. La nueva Estrategia de Reforma se centraba en seis ámbitos: i) refuerzo de la política fiscal; ii) mejora de la movilización de recursos; iii) mejora de la planificación basada en políticas y la presupuestación basada en un programa; iv) mejora del gasto público; v) fortalecimiento de la contabilidad y la auditoría interna; y vi) refuerzo de la vigilancia y auditoría externas. La Estrategia también reflejaba el compromiso sostenido del Gobierno con una visión moderna de la construcción de un Estado y el desarrollo institucional alineado con normas internacionales.

- **Sistema cambiario y de pagos exteriores**

22. El representante de Timor-Leste señaló que el Banco Central de Timor-Leste (CBTL) controlaba el sistema cambiario y de pagos exteriores y tenía la facultad y la responsabilidad de definir, desarrollar y adoptar las normas cambiarias aplicables en el país. En el desempeño de sus funciones como autoridad cambiaria, el CBTL estaba facultado para realizar transacciones en divisas y custodiar y administrar reservas oficiales de divisas.

23. Los precios de todos los productos y servicios, así como la consideración monetaria de todas las transacciones restantes, se denominarían en unidades de la moneda oficial de Timor-Leste, es decir, todos los pagos originados en el país o relacionados con cualquier contrato ejecutado en el territorio nacional, entre ellos los siguientes: i) los pagos relacionados con cualquier deuda u obligación, y ii) los pagos adeudados a cualquier entidad pública de Timor-Leste, o debidos por cualquier entidad pública, que tenían que realizarse en dólares de los Estados Unidos. Esto no significaba que las partes de un contrato determinado no podían denominar la transacción pertinente en una divisa. Sin embargo, en ese caso, el deudor siempre debería efectuar los pagos correspondientes en la moneda local y al tipo de cambio del día en que se abonasen, salvo que se incluyera en el contrato una renuncia expresa.

24. En ese momento, las únicas restricciones cambiarias en vigor en Timor-Leste se aplicaban al movimiento físico de entrada y salida de moneda. En virtud de la legislación vigente, la Instrucción Pública Nº 4/2017 sobre Importación y Exportación de Efectivo, de 28 de marzo de 2017, publicada por el CBTL, tanto la importación como la exportación de efectivo en Timor-Leste por un valor superior a 20.000 dólares EE.UU., o su equivalente en divisas, requería la autorización previa del CBTL. En la Instrucción Pública se estipulaba asimismo que, si la cantidad de efectivo importado o exportado superaba los 5.000 dólares EE.UU., o su equivalente en otra divisa, pero era inferior a 20.000 dólares EE.UU., o su equivalente en otra divisa, tenía que declararse ante el funcionario de aduanas en el puerto de llegada o de partida. Además, no se permitía ninguna importación o exportación de efectivo superior a 150.000 dólares EE.UU., o su equivalente en otra divisa, salvo: i) cuando fuera efectuada por un banco o una institución financiera debidamente autorizada para operar en Timor-Leste; y ii) en situaciones excepcionales, cuando la restricción a la importación o exportación de dinero en efectivo por encima de 150.000 dólares EE.UU. pudiera causar un daño grave, por ejemplo, en situaciones de emergencia médica, a reserva de la autorización del CBTL. No existían restricciones similares para las transferencias electrónicas de fondos (independientemente de la moneda y los importes en cuestión) con origen o destino en cuentas bancarias abiertas en Timor-Leste, salvo las normas relativas al conocimiento de los clientes y de lucha contra el blanqueo de dinero.

25. Con respecto al procedimiento que debía seguirse para solicitar una autorización al CBTL, el representante de Timor-Leste especificó además que las solicitudes y los documentos conexos (documento de identidad del solicitante, prueba de propiedad del efectivo, etc.) debían presentarse al CBTL al menos cinco días hábiles antes de la fecha de importación/exportación propuesta. Las solicitudes urgentes podían presentarse con menor antelación. Al presentar una solicitud, había que abonar al CBTL los derechos siguientes: i) en el caso de las solicitudes ordinarias: USD 100; ii) en el caso de las solicitudes urgentes: USD 300. Las solicitudes debían enviarse a:

Central Bank of Timor-Leste
Financial System Supervision Department
Licensing and Regulation Division
Dirección: Avenida Xavier do Amaral 9, Dili, Timor-Leste
Correo electrónico: dsflicensing@bancocentral.tl

26. El CBTL adoptaba una decisión sobre la autorización antes de la fecha de importación/exportación de efectivo propuesta. En el caso de las solicitudes urgentes de autorización para la exportación de efectivo, las decisiones tenían que expedirse 48 horas antes de la exportación y, en el caso de las importaciones, 72 horas antes de la importación. Si el CBTL no emitía una decisión, la solicitud se consideraba denegada. Las autorizaciones eran válidas para una sola importación o exportación de efectivo y tenían una validez máxima de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición.

27. La Ley Nº 17/2011 de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, de 28 de diciembre de 2011, modificada por la Ley Nº 5/2013, de 14 de agosto de 2013, se basaba en algunos de los principios y normas fundamentales del modelo europeo, en particular en los que figuraban en las Directivas Nos 2005/60/CE y 2006/70/CE de la UE. Las normas de lucha contra el blanqueo de dinero afectaban a las corrientes de pagos y las transferencias. De hecho, las entidades financieras debían abstenerse de efectuar transacciones (incluidos pagos y transferencias), con independencia del importe, si sospechaban que podían estar relacionadas con blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, y tenían que notificar sus sospechas a la Unidad de Información Financiera, establecida en el marco del CBTL. Si las entidades financieras (y otras entidades sujetas a la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo) efectuaban transacciones puntuales por un valor igual o superior a 10.000 dólares EE.UU., en una o en varias transacciones aparentemente vinculadas, debían cumplir con su deber específico de identificación de los clientes y los beneficiarios finales de la transacción subyacente. El CBTL había elaborado nuevas orientaciones al respecto, que figuraban en la Instrucción Pública Nº 5/2017 sobre Identificación de Clientes, Mantenimiento de Registros y Declaración de Transacciones, de 25 de agosto de 2017.

- Régimen de inversiones

28. Los principales objetivos de Timor-Leste en la esfera de las inversiones consistían en promover y estimular las inversiones tanto nacionales como extranjeras e incrementar el papel del sector privado en la diversificación y el desarrollo económicos del país, concretamente mediante la creación de oportunidades de empleo y el estímulo del crecimiento de la exportación. El sistema para atraer y facilitar las inversiones era una esfera fundamental de la reforma en curso. La Ley Nº 15/2017 de Inversiones Privadas, de 23 de agosto de 2017, había reemplazado a la Ley Nº 14/2011 de Inversiones Privadas, de 28 de septiembre de 2011, como principal instrumento por el que se regían las operaciones de inversión en el país, tanto de inversores nacionales como extranjeros. Esta Ley había eliminado el proceso de examen previo de la inversión extranjera directa y lo sustituía por licencias sectoriales y una limitada lista negativa de inversiones. En el Decreto Nº 2/2018 del Gobierno se regulaban los procedimientos de inversión privada en Timor-Leste.

29. La Ley se complementaba con el Plan de Reformas en materia de Inversión (IRM) elaborado por el Banco Mundial entre 2016 y 2017, que consistía en un documento de política no vinculante en el que se esbozaba la promoción y atracción de la inversión extranjera directa en determinados sectores de la economía. En el marco del IRM se proponía al Gobierno de Timor-Leste que se centrara en los siguientes sectores prioritarios que podían ser rentables para los inversores y tenían un impacto significativo en el desarrollo: i) turismo sostenible (turismo de peregrinación y religioso, turismo cultural e histórico, turismo ecológico y marítimo, agroturismo y turismo comunitario, turismo de aventura y deportivo); ii) infraestructuras estratégicas (carreteras, aeropuertos, puertos marítimos (conectividad); transporte y comunicaciones (accesibilidad); y energía como las energías renovables (crecimiento)); iii) materiales de construcción (fabricación de cemento, construcción); iv) industrias agropecuarias (cultivos industriales (por ejemplo, café, coco, nuez de la India, maíz, arroz, cacao, vainilla); silvicultura (por ejemplo, madera de sándalo, madera de teca, bambú); ganadería (bovinos, cabras, cerdos, pollos)); y v) cultivos agrícolas (horticultura (por ejemplo, hortalizas (brécol, coliflor); frutas (plátanos, mangos, aguacates, tangerinas); legumbres (frijoles rojos, frijoles mung, habas de soja, cacahuetes; especias (pimientos, clavos)). Era necesario realizar reformas a corto plazo para desarrollar esos sectores. Asimismo, en el IRM también se proponía que se centrara la atención en los sectores que podían ser beneficiosos para Timor-Leste, pero que aún no eran atractivos para los inversores: i) pesca, ii) ganadería, iii) industrias petroquímicas de transformación avanzada, y iv) prendas de vestir. En el caso de esos sectores, era necesario realizar reformas a medio y largo plazo. El Organismo de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones (TradeInvest Timor-Leste) había reorientado sus actividades para concentrarse en ellos y había elaborado un plan estratégico quinquenal para 2022-2027 en que se destacaba el carácter prioritario de esos sectores. El Gobierno estaba decidido a formalizar el IRM mediante la revisión necesaria a fin de adaptarse a la situación y al entorno en materia de inversiones en ese momento en Timor-Leste. El IRM revisado, en su forma aprobada en octubre de 2023, incluía información sobre los subsectores de cada sector prioritario seleccionado, así como las tendencias de las exportaciones y las inversiones en Timor-Leste.

30. En cuanto a TradeInvest Timor-Leste, el representante aclaró que servía como ventanilla única del Gobierno para los inversores. Establecido de nuevo en virtud del Decreto Ley Nº 45/2015, de 30 de diciembre de 2015, modificado por última vez por el Decreto Ley Nº 58/2022, de 24 de

agosto de 2022, la función principal de este organismo consistía en promover, facilitar, supervisar y abogar por las inversiones privadas y las exportaciones, centralizando todos los procedimientos administrativos que debían realizar los inversores que quisieran disfrutar de los incentivos fiscales y aduaneros establecidos en la Ley de Inversiones Privadas. El sitio web de TradeInvest Timor-Leste (<http://www.tradeinvest.tl/>) contenía información general sobre el marco de inversión y la normativa aplicable, así como las últimas noticias sobre inversiones y exportaciones y descripciones de determinadas oportunidades de inversión y exportación por sectores económicos y ubicación geográfica. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste añadió que TradeInvest Timor-Leste concedía suma importancia a la participación de la mujer en las actividades económicas. A ese respecto, indicó que el Decreto Ley Nº 45/2015 sobre el Establecimiento de TradeInvest Timor-Leste había sido modificado por el Decreto Ley Nº 58/2022, de 24 de agosto de 2022, en el que se señalaba específicamente que la igualdad de género era una prioridad.

31. Por otra parte, el representante explicó que entre los derechos y garantías de los inversores consagrados en la Ley de Inversiones Privadas se encontraban los siguientes: i) trato justo y equitativo; ii) acceso a los tribunales; iii) acceso a la información; iv) propiedad y uso de la tierra; v) garantía contra la expropiación; vi) derecho de importación y exportación; vii) derecho de acceso al crédito; viii) transferencia de fondos al extranjero; ix) derechos de propiedad intelectual; x) secreto (respeto del secreto profesional, bancario y comercial); xi) confidencialidad; y xii) contratación de trabajadores y colaboradores extranjeros. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste añadió que la Ley estipulaba que todos los inversores, independientemente de su nacionalidad, gozaban de los mismos derechos, estaban sujetos a las mismas obligaciones y disfrutaban del mismo nivel de protección, salvo en relación con el derecho a la propiedad de la tierra, excepción que estaba regulada por la Constitución.

32. En concreto, el artículo 10.3 de la Ley establecía que todos los inversores gozaban de las mismas oportunidades para acceder a los incentivos a la inversión. Entre los beneficios fiscales (tributarios y aduaneros) y no fiscales que la Ley de Inversiones Privadas otorgaba a los inversores (artículos 29 y 30) figuraban: i) exención del 100% del impuesto sobre la renta durante un período de 5 a 10 años, en función de dónde se realizase la inversión; ii) a los efectos de determinar la base impositiva, se podrían considerar como costos hasta el 100% de los gastos incurridos con respecto a la construcción y reparación de infraestructuras viales no asociados con el ejercicio de actividades empresariales imposables; iii) exención del 100% del impuesto sobre las ventas durante un período de 5 a 10 años, en función de dónde se realizase la inversión, aplicable a todos los bienes de capital y equipos utilizados para el establecimiento o la gestión del proyecto de inversión o reinversión; iv) exención del 100% del impuesto sobre los servicios durante un período de 5 a 10 años, en función de dónde se realizase la inversión, aplicable a las iniciativas encaminadas a la prestación de servicios específicos; v) exención del 100% de los derechos de aduana sobre las importaciones durante un período de 5 a 10 años, en función de dónde se realizase la inversión, aplicable a todos los bienes de capital y equipos utilizados para el establecimiento o la gestión del proyecto de inversión o reinversión; vi) garantía de un mínimo de cinco visados de trabajo para trabajadores o colaboradores cualificados en funciones de supervisión, dirección o técnicas, según correspondiera al proyecto de inversión; y vii) oportunidad de arrendar terrenos estatales/privados por un período máximo de 50 años, renovable por períodos de 25 a 100 años. Los beneficios se proporcionaban en función de las zonas (véase el Cuadro 1).

Cuadro 1 Beneficios especiales en función de la zona

Zona	Período de exención fiscal
Zona A	5 años en el caso del municipio de Dili, esto es, las zonas que correspondían con los puestos administrativos de Cristo Rei, Dom Aleixo, Na'i Feto y Vera Cruz
Zona B	8 años en el caso de las zonas que correspondían a las situadas fuera de los límites de la zona urbana del municipio de Dili
Zona C	10 años en el caso de las zonas especiales de Oe-Cusse Ambeno y Ataúro

33. El representante de Timor-Leste también aclaró que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley y el Decreto Nº 2/2018 del Gobierno, los incentivos podían otorgarse a las inversiones con un valor mínimo de 50.000 dólares EE.UU. (en el caso de un inversor nacional); 500.000 dólares EE.UU. (en el caso de un inversor extranjero); y 250.000 dólares EE.UU. (en el caso de empresas conjuntas o una de las formas jurídicas de asociación entre inversores extranjeros y nacionales en las que estos últimos controlasen al menos el 75% del capital social de las sociedades de que se tratase). Las inversiones y reinversiones admisibles debían estar realizadas en el territorio de Timor-Leste por

nacionales y debían contribuir al desarrollo socioeconómico del país (es decir, contribuir a la creación de empleo y a la transferencia de conocimientos y tecnología). Los incentivos no eran aplicables en el caso de inversiones realizadas por el Estado o por empresas públicas, incluidas las inversiones realizadas por personas jurídicas en las que más del 50% de su capital estuviera en manos del Estado o de una empresa pública (artículo 2.3 de la Ley). En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste confirmó que estos incentivos a la inversión eran compatibles con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC y no estaban condicionados al uso de productos de producción nacional.

34. El marco normativo contemplaba la concesión de certificados de incentivo (declaraciones de beneficios y acuerdos especiales de inversiones) y el apoyo a los inversores mediante la concesión de autorizaciones, visados, permisos y registros, así como los servicios de facilitación prestados por TradeInvest. Para poder disfrutar de los incentivos, los inversores tenían que obtener un certificado de incentivo de TradeInvest. Para ello era necesario seguir el siguiente procedimiento: i) un inversor tenía que presentar una solicitud a TradeInvest con otros documentos jurídicos y un plan de inversión; ii) TradeInvest realizaba un análisis técnico de los documentos y se aseguraba de que se aportaba toda la documentación necesaria; iii) la documentación se presentaba a los ministerios competentes para someterla a su valoración; iv) los ministerios podían aportar observaciones de carácter técnico en un plazo de seis días laborales para reflejarlos en el informe de TradeInvest; v) el informe se presentaba al Ministro Coordinador de Asuntos Económicos como órgano de supervisión de TradeInvest; y vi) el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos tomaba la decisión de conceder el certificado de incentivo a la inversión. El representante de Timor-Leste explicó que las tasas que se habían establecido con arreglo a la anterior Ley de Inversiones Privadas (500 dólares EE.UU. para los nacionales de Timor-Leste y 2.000 dólares EE.UU. para los inversores extranjeros) se habían suprimido con la entrada en vigor de la Ley Nº 15/2017. No se percibía ningún derecho por los servicios prestados de promoción y facilitación de la inversión, ni por la tramitación de la solicitud de declaración de beneficios y la negociación de un acuerdo especial de inversiones.

35. El representante de Timor-Leste añadió que, si bien Timor-Leste se había comprometido a abrir su economía a los inversores extranjeros, tenía que mantener una serie de restricciones, limitaciones o prohibiciones a la entrada de las inversiones extranjeras directas. El Gobierno había adoptado políticas destinadas a orientar las inversiones extranjeras directas hacia sectores, municipios y proyectos de inversión que se consideraban especialmente beneficiosos para el desarrollo y la diversificación de la economía de Timor-Leste. En el anexo 5 se resume la normativa en materia de inversiones extranjeras directas en Timor-Leste.

36. El representante informó de que los proyectos de importancia nacional, debido a su impacto económico, social, tecnológico y ambiental, podían ser objeto de un régimen especial de inversiones que debía negociarse con el inversor con arreglo a condiciones especiales aprobadas por el Gobierno. El artículo 10.4 de la Ley de Inversiones Privadas preveía excepciones al régimen descrito anteriormente en los casos de inversiones que, por su naturaleza o volumen, estuvieran sujetas a acuerdos especiales, las inversiones de los nacionales que pudieran recibir un apoyo o un trato más favorable por parte del Estado, y las inversiones que contribuyeran a las prioridades de desarrollo nacional (definidas mediante el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2011-2030), en particular en las zonas económicas especiales y en las áreas industriales especiales, tal como se definía en la Guía de Inversiones de Timor-Leste de 2017 (véase la sección titulada "Zonas francas y zonas económicas especiales"). En octubre de 2023 se había revisado la Guía de Inversiones de 2017 para tener en cuenta la situación en ese momento.

37. El representante aclaró además que se habían impuesto restricciones a la inversión en varios sectores (por ejemplo, servicios postales, comunicaciones públicas (que incluían actividades de periodismo (investigación, recopilación y tratamiento de la información al público), y establecimiento de agencias de noticias), producción y distribución de armas, o en zonas que pudieran afectar a áreas protegidas) que estaban reservadas principalmente al Estado. En respuesta a la pregunta de un Miembro, añadió que la Ley de Inversiones Privadas permitía realizar inversiones en cualquier actividad económica, siempre que estuvieran permitidas por la legislación sectorial, sin requerir una autorización previa además de los procedimientos establecidos por la Ley (artículo 9.1), con la excepción de las actividades económicas expresamente reservadas a la propiedad o explotación exclusiva del Estado (artículo 9.2). En consonancia con el artículo 9.3 de la Ley y la legislación sectorial pertinente, TradeInvest Timor-Leste había elaborado la lista de actividades y sectores prohibidos o restringidos ("lista negativa de inversiones") tras haber mantenido debates con la Cámara de Comercio e Industria de Timor-Leste (CCI-TL), los inversores y otros operadores

económicos y partes interesadas. Esa lista ha sido proporcionada al Grupo de Trabajo para su consideración. La lista negativa distinguía entre dos tipos de sectores, a saber: i) sectores prohibidos/restringidos en los que la actividad de inversión estaba prohibida/restringida tanto para los inversores nacionales como para los extranjeros; y ii) sectores condicionados en los que la participación de inversores extranjeros en las actividades de inversión estaba sujeta a determinadas condiciones. Se trataba de un documento de carácter evolutivo, es decir, en cualquier momento podían suprimirse o añadirse sectores a la lista en función de la legislación pertinente. El representante de Timor-Leste informó asimismo de que, de conformidad con la última revisión de la lista, publicada el 19 de agosto de 2022, varios sectores habían sido eliminados de la lista, a saber: actividades relacionadas con la producción y distribución de armas y municiones (que ya no estaban reservadas al Estado); actividades de publicación de libros, publicaciones periódicas, periódicos y otras actividades editoriales; y actividades de operadores aéreos (que ya no imponían condiciones a la participación de inversores extranjeros). El resumen más reciente de la clasificación sectorial en la lista negativa puede verse en el Cuadro 2.

Cuadro 2 Resumen de la clasificación sectorial en la lista negativa

Sectores prohibidos/restringidos para todos los inversores (5 sectores)	Sectores en los que la participación de inversores extranjeros está sujeta a determinadas condiciones (5 sectores)
1. Delincuencia 2. Actividades relacionadas con la ofensa de costumbres tradicionales 3. Actividades relacionadas con las zonas de protección ambiental 4. Servicios postales y de mensajeros 5. Actividades relacionadas con los servicios funerarios	1. Actividades relacionadas con los servicios públicos de comunicaciones y otros servicios de medios de comunicación 2. Actividades de transporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano y otras actividades de transporte terrestre de pasajeros 3. Actividades de transporte aéreo 4. Juegos de azar y otras actividades recreativas 5. Actividades de seguros

38. En respuesta a una pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste explicó que la inclusión de actividades relacionadas con las zonas de protección ambiental y los servicios postales y de mensajeros que figuraban en la lista no excluía la prestación de servicios privados relacionados con el medio ambiente, como los servicios de consultoría ambiental o la vigilancia de las condiciones ambientales para clientes privados, ni la prestación de servicios de entrega, como la entrega urgente, que operaban con independencia del servicio nacional de correos de Timor-Leste.

39. Añadió que, en los casos raros en los que se incorporaran nuevos sectores en la lista, i) se detendría la participación de inversores extranjeros en un sector incorporado que estuviese prohibido o restringido para todos los inversores; o ii) se detendría la participación de inversores extranjeros en un sector incorporado que impusiera condiciones a los inversores extranjeros hasta que los inversores extranjeros cumplieran los requisitos establecidos en la ley para su participación. TradeInvest Timor-Leste publicaba las modificaciones de la lista en su sitio web oficial. Si bien no se daba ningún aviso anticipado, dado que los cambios legislativos tardaban un tiempo en entrar en vigor, el Gobierno podía entablar un diálogo con los inversores extranjeros para llegar a un entendimiento entre todas las partes interesadas.

40. También eran objeto de regímenes jurídicos específicos la prospección, exploración y producción de petróleo y gas; las actividades mineras y las asociaciones público-privadas. Por consiguiente, la prospección, exploración y producción de petróleo y gas estaban sujetas a las disposiciones previstas en la Ley Nº 3/2005 de Actividades Petroleras, que preveía el régimen jurídico de todas las actividades petroleras realizadas en el territorio nacional. La Ley establecía un régimen normativo que permitía a las empresas petroleras explotar los recursos petrolíferos en el territorio nacional, con el objetivo de proporcionar beneficios a Timor-Leste y a su población, y de garantizar la estabilidad y la transparencia a la hora de reglamentar el desarrollo de los recursos petrolíferos. Los contratos petroleros eran contratos de producción compartida. La participación del Estado en la explotación petrolífera estaba sujeta a las condiciones acordadas con las empresas seleccionadas en los respectivos contratos de producción compartida.

41. Las inversiones en actividades mineras, incluida la concesión de licencias de extracción de minerales (minas y canteras) para actividades extractivas a mediana y gran escala, habían estado sujetas a un marco jurídico especial, definido en la Orden Ministerial Nº 64/2016 sobre las Normas

Específicas de Concesión de Licencias para las Actividades de Prospección de Minerales, de 16 de noviembre de 2016, cuyo objetivo consistía en regular el uso de piedras ornamentales y materiales de construcción. El régimen jurídico no se había aplicado a las actividades en pequeña escala realizadas manualmente por pequeñas unidades económicas familiares con un volumen total de extracción no superior a 30 toneladas mensuales.

42. El Código de Minería (Ley Nº 12/2021, de 30 de junio de 2021) había entrado en vigor en enero de 2022 y abolido la Orden Ministerial Nº 64/2016. Se trataba de una amplia ley que regulaba todas las actividades mineras, incluidas las labores de reconocimiento, prospección, evaluación, desarrollo, explotación, procesado, refinado y comercialización. Regulaba los procedimientos administrativos para la concesión de licencias y autorizaciones, así como las normas para determinar las zonas de concesiones, los derechos, las obligaciones y las normas de inspección y supervisión. Abarcaba todas las etapas de las actividades mineras e incluía disposiciones sobre salud y seguridad, protección ambiental, contenido nacional, planes de mano de obra aplicables y multas, catastro minero, transparencia y buenas prácticas. De conformidad con el Código Minero, se otorgaba un derecho o un permiso tras un procedimiento de licitación competitiva (norma general) o por adjudicación directa (en casos excepcionales). El Gobierno podía recurrir a la adjudicación directa en los siguientes casos (artículos 11.1 y 11.2): i) se consideraba que la zona que se iba a adjudicar conllevaba una nueva delimitación y no se disponía de la información y los datos suficientes; ii) la licitación pública había quedado desierta; iii) había riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente asociados a la zona minera; iv) se trataba de minerales estratégicos; v) era un caso de adjudicación directa a la empresa nacional de minería; y vi) los permisos de explotación minera artesanal siempre se otorgaban por contrato directo. El Código Minero facilitaba el descubrimiento y la explotación de recursos minerales con el fin de promover los beneficios económicos y sociales para el país.

43. El representante añadió que en Timor-Leste también se podía realizar inversiones a través de asociaciones público-privadas. El marco jurídico por el que se regían este tipo de asociaciones se había aprobado en el Decreto Ley Nº 42/2012, de 7 de septiembre de 2012, modificado por el Decreto Ley Nº 2/2014, de 15 de enero de 2014. El Gobierno garantizaba la participación del sector privado en la construcción de infraestructuras públicas en el país mediante licitaciones públicas, en condiciones de transparencia y competencia leal. Se podían concertar acuerdos de asociación público-privada para el diseño, la construcción, la ejecución, la explotación y el mantenimiento de infraestructuras. Por medio de la Ley se regulaba el establecimiento de las asociaciones público-privadas, así como la aprobación de procedimientos de contratación público-privada, de conformidad con el respectivo ciclo de proyecto (que incluía las etapas siguientes: etapa inicial, etapa de viabilidad, etapa de contratación y negociación y etapa de aplicación y ejecución).

44. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste confirmó que su Gobierno estaría dispuesto a adherirse al Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo en el marco de la OMC cuando este estuviera concluido.

45. Además, en respuesta a la petición de un Miembro, el representante de Timor-Leste confirmó que su Gobierno estaba dispuesto a sumarse a la labor relacionada con el comercio y el empoderamiento económico de la mujer y con las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) una vez fuera Miembro de la OMC.

- Propiedad estatal y privatización

46. El representante de Timor-Leste señaló las siguientes empresas de propiedad estatal que operaban en el país: i) Public Company for Administration of Airports and Air Navigation of Timor-Leste (ANATL, E.P.); ii) Timor-Leste's National Oil Company (TIMOR GAP, E.P.); iii) Radio and Television of Timor-Leste (RTTL, E.P.); iv) Public Electricity Company of Timor-Leste (EDTL, E.P.); v) empresa pública de abastecimiento de agua y saneamiento de Timor-Leste: BEE Timor-Leste (BTL, E.P.); vi) Mining Company of Timor-Leste (CMTL, S.A.); vii) National Commercial Bank of Timor-Leste (BNCTL, S.A.); y viii) Company for the Management of Industrial Parks (GESPIN, S.A.). El ANEXO 6 contenía más información sobre esas empresas de propiedad estatal.

47. Las empresas de propiedad estatal y las empresas del sector privado competían en igualdad de condiciones. El Estado no intervenía ni restringía la competencia en los sectores en los que operaban las empresas de propiedad estatal. Además, todas las empresas de propiedad estatal y

las empresas privadas recibían el mismo trato en lo que se refería a sus operaciones comerciales. Las empresas de propiedad estatal actuaban basándose en consideraciones comerciales, con excepciones limitadas, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 14/2003 sobre las Empresas Públicas, de 24 de septiembre de 2003. Entre esas excepciones figuraba la necesidad de prestar servicios esenciales por debajo del precio de mercado o del costo de producción con el fin de prestar servicios sociales que no fueran económicamente viables en un momento dado. El representante de Timor-Leste añadió que las empresas de propiedad estatal no estaban reguladas de manera preferencial con respecto a las empresas competidoras del sector privado. Asimismo, en sus compras o ventas que entrañasen importaciones o exportaciones, las empresas de propiedad estatal se ajustaban a los principios generales de no discriminación, como las entidades comerciales normales o las empresas privadas.

48. En respuesta a la pregunta de un Miembro, también aclaró que, de conformidad con el artículo 40 del Decreto Ley Nº 14/2003 sobre las Empresas Públicas, de 24 de septiembre de 2003, las empresas de propiedad estatal podían transformarse en sociedades privadas de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. La transformación era posible previa autorización de la entidad con competencia para crear o establecer la sociedad de propiedad estatal (es decir, el Consejo de Ministros o el Parlamento Nacional). De conformidad con el artículo 6 del Decreto Ley, las empresas de propiedad estatal también podían suscribir acciones y, por lo tanto, adquirir una participación en empresas del sector privado a fin de establecer empresas con inversión estatal, siempre que el Gobierno concediese la correspondiente autorización. Las empresas con inversión estatal o "empresas mixtas" son empresas privadas participadas por el Estado.

49. Asimismo, el representante de Timor-Leste señaló que actualmente no había empresas gubernamentales o no gubernamentales, incluidas empresas comerciales del Estado, ni empresas privadas, ni entidades de comercialización, a las que se les hubieran concedido derechos o privilegios exclusivos en las operaciones de exportación o importación. En respuesta a la pregunta de un Miembro, aclaró que no había empresas comerciales del Estado ni empresas privadas que tuvieran derechos exclusivos o especiales en lo que se refería a la financiación en comparación con las empresas comerciales, tanto extranjeras como nacionales. Añadió que el Gobierno respetaba los principios generales de no discriminación en las políticas públicas que afectaban a las importaciones o exportaciones efectuadas por comerciantes privados. Asimismo, confirmó que esos principios se seguirían respetando en el caso de que se crearan empresas comerciales del Estado en Timor-Leste como respuesta a necesidades del mercado no satisfechas por el sector privado.

50. Añadió que Timor-Leste aún no había adoptado ninguna medida de política en relación con las empresas comerciales del Estado. El representante informó de que el Gobierno tenía previsto realizar un examen exhaustivo de las medidas de política pública que afectaban al comercio de Estado, que aún estaban por desarrollar, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del artículo XVII del GATT de 1994 y la máxima transparencia posible en las notificaciones correspondientes, a fin de permitir una apreciación clara del modo de operar de las empresas notificadas y de los efectos de sus operaciones sobre el comercio internacional. En cuanto al párrafo [21] de la sección "Políticas monetaria y fiscal", el representante informó de que el Gobierno había aprobado la Estrategia de Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas para 2022-2027 en diciembre de 2022. La reforma se haría extensiva a las empresas públicas.

51. El representante de Timor-Leste confirmó que Timor-Leste se aseguraría de que las compras de bienes y servicios de todas las empresas de propiedad estatal o con capitales públicos y de las demás empresas que gozaran de privilegios especiales o exclusivos que no fueran para uso del Gobierno, así como las ventas en el marco del comercio internacional, se realizaran exclusivamente sobre la base de consideraciones comerciales, es decir, el precio, la calidad, el potencial de comercialización y la disponibilidad, y de que las empresas de otros Miembros de la OMC tuvieran las facilidades adecuadas para competir y participar en esas compras o ventas. Además, Timor-Leste no influiría, directa o indirectamente, en las decisiones de las empresas de propiedad estatal, las empresas con capitales públicos y otras empresas con privilegios especiales o exclusivos, en lo que se refería, entre otras cosas, a la cantidad, el valor o el país de origen de las mercancías compradas o vendidas, salvo de manera compatible con el Acuerdo sobre la OMC. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, Timor-Leste notificaría y suministraría información sobre las actividades de todas las empresas de propiedad estatal, las empresas con capitales públicos y otras empresas con privilegios especiales o exclusivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC y el Entendimiento relativo a ese artículo. Confirmó además que Timor-Leste notificaría

todas las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo XVII. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Política de precios

52. Timor-Leste adoptaba políticas económicas abiertas encaminadas a facilitar la actividad comercial en el país. Dado que Timor-Leste era un país joven, su política de precios vigente era tan solo una medida provisional destinada a garantizar el abastecimiento normal de alimentos básicos a precios asequibles y justos para la población. El país importaba la mayor parte de sus bienes de consumo básicos del extranjero. En consecuencia, era vital que las políticas actuales impidieran la especulación de precios, el desabastecimiento de productos esenciales, el aumento de la inflación y el incremento anormal de los precios.

53. Existían unos cuantos instrumentos jurídicos para garantizar normas o precios mínimos en sectores específicos, a saber: i) Resolución Nº 20/2008 del Gobierno sobre el Suministro Público de Productos Esenciales, de 13 de agosto de 2008, modificada por el Decreto Ley Nº 27/2019, de 27 de agosto de 2019; ii) Decreto Nº 13/2008 del Gobierno por el que se regula la intervención del Gobierno en el suministro público y los precios, de 13 de agosto de 2008; iii) Decreto Ley Nº 29/2011, de 20 de julio de 2011, por el que se aprueba el marco jurídico de los precios justos (por el que se establecen las normas aplicables a la intervención del Gobierno en la fijación de los precios de determinados productos y servicios considerados esenciales para la comunidad); iv) Decreto Ley Nº 28/2008 sobre el Suministro Público de Productos Esenciales y la Gestión de los Efectos Negativos de la Inflación, de 13 de agosto de 2008; v) Orden Ministerial Nº 6/2008 del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria por la que se establecen las medidas para estabilizar los precios, luchar contra la inflación y evitar la especulación, de 24 de diciembre de 2008; vi) Orden Ministerial Nº 6/MTCI/III/2011 del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria relativa al Precio de Venta y la Distribución del Maíz de Producción Local, de 23 de marzo de 2011; vii) Resolución Nº 13/2012 del Gobierno por la que se establece el régimen para determinar los márgenes de venta máximos de determinados productos esenciales y demás medidas de lucha contra la inflación, de 9 de mayo de 2012; y viii) Orden Ministerial Nº 1/2013 del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria relativa a la Intervención en el Suministro Público de Arroz y la Normalización de los Precios, de 30 de enero de 2013. El objetivo principal de estos instrumentos era incrementar la justicia social y económica en relación con los productos básicos y facilitar el acceso a esos productos mediante la fijación de precios justos. La intervención del Gobierno se producía únicamente en circunstancias excepcionales y afectaba solo a determinados productos y servicios que se consideraban vitales para la subsistencia de las familias más vulnerables del país. Cuando dejaron de existir las circunstancias excepcionales en cuestión, se dejaron de aplicar intervenciones en materia de precios.

54. Con arreglo al Decreto Ley Nº 29/2011, en ese momento se aplicaban distintos tipos de controles de precios a determinados productos destinados a la distribución y venta nacionales. La intervención del Gobierno tenía por objeto controlar la especulación y la subida de los precios al por mayor y de venta en el mercado interno: i) productos sujetos a un régimen de precios máximos: arroz; aceites de cocina; productos alimenticios destinados a niños menores de un año de edad; cemento; varillas de hierro para la construcción; gasolina utilizada como combustible para motores (al por mayor y al por menor); diésel utilizado como combustible para motores (al por mayor y al por menor); gasóleos; y gases licuados de petróleo; y ii) productos sujetos a un régimen de precios supervisados: azúcar (al por menor); arroz (al por mayor y al por menor); maíz (etapas de importación y de comercialización al por menor); carne de pollo, gallo o gallina y otros despojos (etapas de importación y de comercialización al por menor); cemento (etapas de comercialización al por menor); taxis y coches de alquiler con conductor; transportes colectivos urbanos; transportes colectivos interurbanos; aceites de cocina (al por mayor y al por menor); huevos en su estado natural (al por menor); pasta; arena y piedras para el sector de la construcción; y los fármacos que especificase el Ministerio de Salud.

55. Los Miembros pidieron más aclaraciones acerca de las prescripciones en materia de precios mínimos que se contemplaban en los instrumentos enumerados en el párrafo 53, el conjunto de mercancías abarcadas por esos instrumentos y los mecanismos empleados para mantener los precios por encima de los precios de mercado. El representante de Timor-Leste respondió que no había ninguna política para fijar precios mínimos. Los precios mínimos se fijaban mediante mecanismos inherentes del mercado. La finalidad de los instrumentos jurídicos era limitar los precios máximos, con arreglo al Decreto Ley Nº 28/2008, que garantizaba a la población la posibilidad de

obtener bienes de primera necesidad a precios sostenidos o subvencionados. El Decreto Ley Nº 29/2011 de Precios Justos, de 20 de julio de 2011, determinaba que los precios de las mercancías y los servicios vendidos, suministrados o prestados podían estar sujetos a los regímenes siguientes: i) fijación de precios máximos en el caso de ventas al por menor por mayoristas y ventas al consumidor final, es decir, al público; ii) establecimiento de márgenes de venta; iii) precios contractuales; iv) precios supervisados; v) precios libres, siempre y cuando no estuvieran sujetos a regímenes anteriores.

56. En lo referente a las circunstancias excepcionales en las que el Gobierno podía intervenir para fijar precios justos, el representante se remitió al artículo 1.3 del Decreto Ley Nº 29/2011, donde se determinaban las siguientes circunstancias excepcionales: i) situaciones de distorsión ilícita de los precios del mercado mediante monopolios, cárteles o colusión para fijar precios artificiales; ii) variación sustancial de los precios con márgenes de beneficio especulativos e injustificados dado el contexto nacional e internacional; iii) señales de atesoramiento de productos básicos; o iv) otras situaciones anómalas de los precios del mercado que no justificaran una intervención en el marco del régimen jurídico del suministro público o que no estuvieran en el ámbito de ese tipo de intervención. Esas circunstancias podían incluir, entre otras cosas, la subida de los precios internacionales de los alimentos, las emergencias alimentarias (desastres naturales, catástrofes), las distorsiones del mercado (especulación de precios) y los descensos de la producción agrícola.

57. Con arreglo al artículo 12 del Decreto Ley Nº 29/2011, el establecimiento de regímenes de precios era responsabilidad del Primer Ministro o de la persona en quien este delegara tal responsabilidad, a partir de una propuesta del Ministerio de Comercio e Industria que definía el ámbito de los bienes y servicios sujetos a regímenes de precios. El establecimiento de regímenes de precios debía anunciarse y publicarse previamente mediante una orden ministerial, en la que figurasen el resumen de las causas de la intervención, la duración de esta, los productos abarcados y las especificaciones a las que se hacía referencia en la orden ministerial. Los regímenes de precios estarían en vigor hasta que se revocasen o se sustituyesen expresamente mediante una nueva orden ministerial.

58. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste explicó que en el Decreto Ley Nº 29/2011 se enumeraban los bienes y servicios que estaban sujetos a un margen de comercialización fijo y a un precio supervisado. No obstante, según el artículo 5.2 del Decreto Ley, esos bienes y servicios podían estar sujetos a diferentes regímenes de precios, en función de las condiciones del mercado. Los productos siguientes estaban sujetos a precios supervisados: i) azúcar (al por menor); ii) arroz (al por mayor y al por menor); iii) maíz (importación y al por menor); iv) carne de pollo (importación y al por menor); v) cemento (al por menor); vi) aceite de cocina (al por mayor y al por menor); vii) huevos (al por menor); viii) pasta; ix) arena y piedras para el sector de la construcción; x) fármacos que especifique el Ministerio de Salud; y xi) servicios de transporte público (taxis, vehículos de alquiler, transporte colectivo urbano, autobuses interurbanos). En el Cuadro 3 figuraba la lista de productos sujetos a márgenes de comercialización fijos.

Cuadro 3 Productos sujetos a un margen de comercialización fijo

	Al por mayor	Al por menor
Arroz con un 5% o menos de grano quebrado	10%	15%
Arroz con un 5% o más de grano quebrado	8%	10%
Aceites de cocina	8%	10%
Productos alimenticios, naturales, en polvo, en conserva o en cualquier otra forma, destinados a niños menores de un año de edad	8%	10%
Cemento	10%	15%
Varillas de hierro para obra civil	10%	15%
Carburantes, con independencia de su contenido de plomo, clasificados en la subpartida 2710.11 del arancel de aduanas de Timor-Leste/Nomenclatura Combinada para venta al por mayor y venta al por menor	-	-
Combustibles diésel, clasificados en la subpartida 2710.19 del arancel de aduanas de Timor-Leste/Nomenclatura Combinada para venta al por mayor y venta al por menor	-	-
Gasóleos con un contenido de plomo superior al 1%, clasificados en la subpartida 2710.19 del arancel de aduanas de Timor-Leste/Nomenclatura Combinada	-	-
Gas licuado de petróleo, clasificado en la subpartida 2711.13 del arancel de aduanas de Timor-Leste/Nomenclatura Combinada, comercializado en bombonas	-	-

59. En cuanto a los planes del Gobierno de su país para reducir sus intervenciones de modo que las empresas que realizaban actividades comerciales establecieran los precios en función de consideraciones de carácter comercial, el representante de Timor-Leste añadió que las medidas de intervención tenían carácter temporal y no alterarían el régimen y el modelo económicos de modo que se apartaran de la libre competencia en el mercado, como se especificaba en el Decreto Ley Nº 28/2008 sobre el Suministro Público de Productos Esenciales y la Gestión de los Efectos Negativos de la Inflación, de 13 de agosto de 2008. Las intervenciones podían retirarse en cualquier momento, una vez que las circunstancias excepcionales volviesen a la normalidad.

60. El representante de Timor-Leste añadió que el Gobierno, a través del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria, había puesto en marcha el programa "Povu Kuda, Governu Sosa" (El Pueblo Cultiva, El Gobierno Compra), con el objetivo de fomentar el cultivo de productos agrícolas de todo tipo dentro del territorio nacional. En el marco de este programa, que se había establecido en 2008 como medida para responder a la crisis política y económica de Timor-Leste desatada en 2006, se fijaban los precios para la compra de productos agropecuarios básicos a los agricultores locales; se aplicaba únicamente al arroz y al maíz, cereales básicos para la seguridad alimentaria del país. Así, el Gobierno de Timor-Leste había establecido el precio al que el Ministerio de Turismo, Comercio e Industria compraba esos cereales, y también el precio de venta en los mercados municipales, calculado en función de la distancia a la que se encontraba cada municipio. Los textos jurídicos más recientes relativos al arroz y el maíz eran la Orden Ministerial Nº 32/2017 por la que se regulaba el precio de reventa del arroz, de 17 de mayo de 2017, y la Orden Ministerial Nº 6/MTCI/III/2011 relativa al Precio de Venta y la Distribución del Maíz de Producción Local, de 23 de marzo de 2011. Esa política se enmarcaba en la estrategia del Gobierno para fomentar la producción nacional y atender las necesidades en materia de seguridad alimentaria que el país pudiera tener en el futuro.

61. Un Miembro pidió al representante de Timor-Leste que especificara las asignaciones presupuestarias destinadas al programa, así como el valor estimado de la producción agrícola de los cultivos especificados. En su respuesta, el representante de Timor-Leste señaló que el programa había sido ejecutado por el sector privado con un capital mínimo de 5.000 dólares EE.UU., destinado a la compra de productos esenciales, como arroz y maíz. En el Cuadro 4 se indicaba el valor estimado de la producción agrícola, según el informe de la FAO sobre los efectos positivos de esta ayuda para los productos esenciales (en miles de dólares de los Estados Unidos). El programa había concluido en 2012.

Cuadro 4 Valor estimado de la producción agrícola en Timor-Leste, 2008-2012*En miles de dólares EE.UU.*

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012
Rendimiento de los cereales en Timor-Leste, total	14.427	23.155	24.514	25.861	20.899
Producción de cereales de Timor-Leste	180.430	255.490	261.816	148.080	182.005

62. Un Miembro pidió también al representante de Timor-Leste que describiera cómo se fijaban los precios de compra en el marco de ese programa y qué productos podían acogerse a esos precios. El representante de Timor-Leste aclaró que los precios de compra se establecían en función del precio de mercado de los productos agrícolas básicos, según lo cual el Gobierno adquiriría arroz, maíz, alubias y otros productos agrícolas básicos a un precio subvencionado, es decir, el precio de mercado más los costos de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 28/2008 sobre el Suministro Público de Productos Esenciales y la Gestión de los Efectos Negativos de la Inflación, de 13 de agosto de 2008.

63. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, la política de precios de Timor-Leste se aplicaría en consonancia con las disposiciones de los artículos III.4 y XI.1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Señaló además que al aplicar controles de precios en la actualidad o en el futuro, Timor-Leste aplicaría esas medidas de forma compatible con las normas de la OMC y tendría en cuenta los intereses de los Miembros de la OMC exportadores, tal como se prevé en el artículo III.9 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC. Timor-Leste publicaría en su Boletín Oficial la lista de bienes y servicios sujetos a regímenes de vigilancia y cualquier modificación de esas listas. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Política de competencia

64. Como resultado del nivel de desarrollo económico y de inversiones privadas en ese momento, el país todavía no había elaborado una política de competencia. Además, puesto que había pocas grandes empresas o grupos empresariales (y no había sociedades cotizadas en bolsa porque en la actualidad no existía una bolsa de valores) que tuvieran la capacidad de controlar o monopolizar sectores de la economía, el país no había establecido aún una autoridad nacional de competencia, aunque se habían aprobado determinadas políticas públicas para regular sectores económicos específicos y se había indicado la posibilidad de reglamentar la competencia en determinados sectores económicos (concretamente, en las telecomunicaciones y en las actividades avanzadas del sector del petróleo).

65. Sin embargo, el Gobierno reconocía la importancia de la competencia para el desarrollo estratégico de la economía tanto a nivel nacional como internacional y para la promoción del crecimiento económico y el desarrollo. Por ello había establecido un Grupo de Trabajo para examinar y elaborar una Política de Promoción de la Competencia, basada en las normas internacionales. La Política de Promoción de la Competencia se redactó por primera vez en 2015 y estaba siendo revisada. Los tres resultados previstos de la Política eran: i) la elaboración de una ley sobre competencia; ii) la elaboración de una política de protección de los consumidores; y iii) el establecimiento del Instituto de Calidad de Timor-Leste (IQTL) dependiente del Ministerio de Comercio e Industria (MCI). Las autoridades competentes encargadas de la aplicación de la Política de Promoción de la Competencia eran: i) la Dirección de Comercio Exterior del MCI; ii) el IQTL; y iii) TradeInvest Timor-Leste.

66. Además, el Parlamento Nacional había aprobado la Ley N° 8/2016 de Protección del Consumidor, de 8 de julio de 2016, por la que se establecía el régimen jurídico para la protección y la asistencia jurídica de los consumidores y se definían las funciones del Estado, los derechos de los consumidores y el papel de las asociaciones de consumidores. La Ley se aplicaba a los productos y servicios suministrados, prestados y transmitidos por personas físicas y jurídicas, nacionales e internacionales, públicas y privadas, que realizaban de manera profesional actividades de producción, manufactura, exportación, importación, construcción, distribución, transporte o venta de productos y servicios, con el fin de obtener beneficios. En futuros debates se seguirían definiendo

las principales esferas que debían reglamentarse y los marcos institucionales necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley.

III. MARCO PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS

- Facultades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial

67. El representante de Timor-Leste informó de que el 22 de marzo de 2002, los miembros de la Asamblea Constituyente en sesión plenaria, actuando como representantes legítimos del pueblo de Timor-Leste elegidos el 30 de agosto de 2001, habían aprobado y proclamado la Constitución de la República Democrática de Timor-Leste (en adelante, la "Constitución").

68. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución, Timor-Leste era un Estado de derecho que se apoyaba en los principios de separación y equilibrio de poderes, con tres ramas separadas pero coordinadas: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial (artículos 1 y 69 de la Constitución). De conformidad con estos principios, existían cuatro órganos soberanos: i) el Presidente de la República; ii) el Parlamento Nacional; iii) el Gobierno; y iv) los tribunales (artículo 67 de la Constitución).

69. El Presidente de la República era el Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas de Defensa. En los artículos 74 a 89 de la Constitución se definían la función y las facultades del Presidente. Este se elegía por sufragio universal, libre, directo, secreto e individual para un mandato de cinco años de duración (artículos 65.1, 75 y 76). Era investido por la Asamblea Nacional, ante la cual prestaba juramento, y podía ser reelegido una vez más (artículos 77.1 y 75.3 de la Constitución). El Presidente tenía facultad para designar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Primer Ministro (artículo 106.2). Entre las facultades del Presidente se incluía la de promulgar o vetar las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional y los decretos leyes aprobados por el Gobierno (artículo 88), así como la de disolver el Gobierno, si el Parlamento Nacional rechazaba el programa del Gobierno en dos ocasiones consecutivas (artículo 86 g)).

70. El Gobierno de Timor-Leste estaba encabezado por un Primer Ministro, designado por el Presidente de la República tras consultas con los miembros del Parlamento y teniendo en cuenta los resultados electorales y la existencia o no de una mayoría política o de posibilidades de coalición (artículo 106 de la Constitución). El Gobierno constituía el órgano supremo de la administración pública responsable de dirigir y ejecutar la política general del país (artículo 103 de la Constitución) y se encargaba de negociar y preparar la adhesión a los tratados internacionales (artículo 115.1 f) de la Constitución). También ostentaba poderes legislativos (artículo 115.3 de la Constitución).

71. El Parlamento Nacional constituía el poder legislativo de Timor-Leste. Tenía una estructura unicameral y estaba integrado por un mínimo de 52 representantes y un máximo de 65, elegidos mediante elecciones por votación secreta para un mandato de cinco años de duración (artículos 92 y 93 de la Constitución). La Constitución no limitaba el número de mandatos que podía ejercer un miembro electo del Parlamento Nacional. Con arreglo a la Constitución, el Parlamento Nacional estaba facultado para aprobar la legislación (artículos 95 y 96 de la Constitución), así como aprobar, denunciar o ratificar convenios, tratados y otros acuerdos internacionales (artículo 95.3 f) de la Constitución). En consecuencia, para que Timor-Leste pudiera convertirse en Miembro de la OMC, el Parlamento Nacional tendría que ratificar el Protocolo de Adhesión de conformidad con la Constitución.

72. El representante de Timor-Leste aclaró que en la Constitución se establecía la división entre los poderes legislativos del Parlamento Nacional y el Gobierno. Existían: i) esferas en las que la responsabilidad de aprobar leyes recaía exclusivamente sobre el Parlamento Nacional, por ejemplo, los planes y presupuestos del Estado, la división territorial del país, la ley electoral y el sistema de referéndum, la política fiscal, la política en materia de defensa y seguridad, y la declaración del estado de emergencia (artículo 95.2 de la Constitución); ii) esferas en las que el Parlamento Nacional tenía la responsabilidad primordial de legislar o podía autorizar al Gobierno a legislar, por ejemplo, el sistema monetario, el sistema bancario y financiero, la definición de delitos, las sentencias, las medidas de seguridad y sus respectivos requisitos previos; la definición de los procedimientos civiles y penales; la organización del poder judicial y la condición de los magistrados (artículo 96.1 de la Constitución); iii) esferas en las que los poderes legislativos se superponían de modo que tanto el Parlamento Nacional como el Gobierno podían legislar y que no estaban indicadas en la Constitución,

por ejemplo, las normas de contratación pública; y iv) esferas reservadas exclusivamente al poder legislativo del Gobierno, por ejemplo, asuntos relativos a la organización y el funcionamiento del Gobierno, incluida la organización de la administración pública y la creación de organismos autónomos (artículo 115.3 de la Constitución). El Parlamento adoptaba sus instrumentos legislativos en forma de leyes, mientras que el Gobierno promulgaba los decretos leyes. Tanto las leyes como los decretos leyes eran instrumentos legislativos que se distinguían por su forma y no por su fondo. No había jerarquía entre ellos. Todas las leyes, incluidas aquellas por las que se aprobaba, denunciaba o ratificaba un convenio, tratado o acuerdo internacional y los decretos leyes tenían que presentarse al Presidente de la República para que procediera a su promulgación (artículos 73, 85 a) y 88.1 de la Constitución) antes de su publicación en el Boletín Oficial ("Jornal da República", disponible en: <http://www.mj.gov.tl/jornal/>). En el ANEXO 7 se explica la continuidad del efecto de las leyes vigentes antes de la independencia.

73. El representante añadió que el sistema jurídico de Timor-Leste adoptaba los principios generales o consuetudinarios del derecho internacional (artículo 9 de la Constitución). Al sistema jurídico interno de Timor-Leste se le aplicaban directamente las normas establecidas en los convenios, tratados y acuerdos internacionales aprobados o ratificados por Timor-Leste. Todas las disposiciones que eran contrarias a esas normas eran inválidas.

74. En respuesta a la pregunta de un Miembro, añadió que todos los marcos reglamentarios de Timor-Leste evolucionaban constantemente para adaptarse a los requisitos de los procesos de adhesiones a la ASEAN y a la OMC a fin de mantener un sistema jurídico conforme a las normas internacionales. Esto incluía la revaluación de la legislación vigente debido a la alteración de las circunstancias, la evolución científica o tecnológica u otra información nueva.

75. El representante de Timor-Leste confirmó que los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento Nacional, incluido el Acuerdo sobre la OMC, tenían precedencia sobre la legislación nacional. En caso de que las leyes y otras medidas de Timor-Leste estuvieran en conflicto con tratados o acuerdos internacionales, se aplicarían las disposiciones del tratado o acuerdo internacional en cuestión (por ejemplo, el Acuerdo sobre la OMC). Todos los instrumentos legislativos o reglamentarios necesarios para la aplicación de las disposiciones de la OMC serían aprobados y promulgados desde el momento de la adhesión, salvo aquellos relativos a esferas en que se hubieran concedido a Timor-Leste períodos de transición de conformidad con su Protocolo de Adhesión. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

76. De conformidad con el artículo 123 de la Constitución, el sistema judicial de Timor-Leste se componía de los órganos siguientes: i) tribunales de jurisdicción general, siendo el Tribunal Supremo de Justicia el máximo tribunal de apelación; ii) tribunales fiscales y administrativos, siendo el Tribunal Superior Administrativo, Fiscal y de Cuentas el máximo tribunal de apelación; y iii) los tribunales militares. Además, podían crearse tribunales de arbitraje y de asuntos marítimos. No obstante, en la Constitución se prohibía la creación de tribunales especiales con objeto de juzgar determinadas categorías de delitos penales. Los tribunales eran órganos soberanos e independientes, y estaban sujetos únicamente a la Constitución y las leyes (artículos 118 y 119 de la Constitución).

77. El sistema judicial de Timor-Leste todavía estaba en proceso de transición con respecto al sistema existente previo a la independencia. Por tanto, aún no se habían creado todas las instituciones judiciales previstas en la Constitución. En diciembre de 2023, el sistema judicial seguía estando compuesto por cuatro Tribunales de Distrito (en Dili, Baucau, Suai y Oecussi), que se encargaban de asuntos en materia civil, penal, fiscal y administrativa en calidad de tribunales de primera instancia, y por un Tribunal de Apelación *ad hoc* temporal situado en Dili, que se ocupaba de las apelaciones y reunía las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal de Apelación permanente (ambos pendientes de creación). De conformidad con la Ley Nº 25/2021 del Sistema de Tribunales, de 2 de diciembre de 2021, modificada por la Ley Nº 12/2022, de 21 de diciembre de 2022, el 21 de junio de 2025 a más tardar se establecerían el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal de Apelación permanente, como órganos judiciales superiores y garantes de la aplicación uniforme de la ley, con jurisdicción en todo el territorio de Timor-Leste para tratar, entre otras, cuestiones constitucionales y electorales. El Tribunal de Apelación permanente, una vez establecido, sucedería al Tribunal temporal. Además, se crearían 13 tribunales de primera instancia en municipios o en una región administrativa especial para tratar asuntos civiles, penales y de familia. Cuatro de estos tribunales sustituirían a los 4 tribunales de distrito existentes. Los 9 tribunales restantes de primera instancia se establecerían una vez que se dieran las

condiciones financieras necesarias y se dispusiera de los recursos humanos correspondientes. Hasta entonces, los tribunales de primera instancia establecidos podrían decidir ampliar su jurisdicción territorial para abarcar más de un municipio.

78. Además, el Tribunal de Cuentas había sido creado en 2011 en virtud de la Ley Nº 9/2011, de 17 de agosto de 2011, para supervisar las finanzas públicas y garantizar la transparencia de las cuentas públicas. En virtud de la Ley Nº 25/2021, este se sustituiría por el Tribunal Superior de Asuntos Administrativos, Fiscales y de Auditoría, que se encargaría de resolver las diferencias que surgieran en el marco de relaciones jurídicas administrativas y fiscales. Dentro de este Tribunal, se establecería la Cámara de Auditoría y, de manera subordinada, tribunales administrativos y fiscales de primera instancia. Hasta entonces, sus competencias serían ejercidas por los tribunales judiciales.

- Entidades gubernamentales encargadas de elaborar y aplicar las políticas que afectan al comercio exterior

79. Con arreglo a la estructura orgánica del VIII Gobierno Constitucional, aprobado en virtud del Decreto Ley Nº 14/2018, de 17 de agosto de 2018, modificado por el Decreto Ley Nº 27/2019, de 19 de junio de 2019, el comercio y otras cuestiones relacionadas con el comercio eran antes competencia del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria y el Ministerio de Agricultura y Pesca, ambos bajo la coordinación del Ministro Coordinador de Asuntos Económicos (MCAE). De acuerdo con la estructura orgánica del IX Gobierno Constitucional, aprobada en virtud del Decreto Ley Nº 46/2023, de 28 de julio de 2023, esas cuestiones habían pasado a ser responsabilidad del Ministerio de Turismo y Medio Ambiente (MTA), el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura (MALFF). El Ministro Coordinador de Asuntos Económicos (MCAE) seguía ocupándose de la coordinación de todos esos ministerios.

80. El Ministro Coordinador de Asuntos Económicos (MCAE) ayudaba al Primer Ministro a supervisar la política económica y se ocupaba de coordinar la aplicación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico. El MCAE coordinaba directamente los siguientes ministerios y organismos competentes: i) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura (MALFF); ii) Ministerio de Turismo y Medio Ambiente (MTE); Ministerio de Comercio e Industria (MCI); iv) Ministerio de Transporte y Comunicaciones; v) Secretaría de Estado de Política de Formación Profesional y Empleo; vi) Secretaría de Estado de Cooperativas; y vii) Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

81. Los asuntos de política comercial eran responsabilidad del Ministerio de Comercio e Industria (MCI), que se encargaba de formular políticas comerciales que tuviesen en cuenta todas las ramas de producción, y políticas relativas a las actividades económicas comerciales. También estaba facultado para elaborar marcos jurídicos que afectasen al suministro de bienes y servicios.

82. El Ministerio de Hacienda se encargaba de redactar, aplicar, coordinar y evaluar las políticas relativas al presupuesto anual y la planificación y el seguimiento de las finanzas. Esto implicaba prestar asesoramiento al Gobierno en materia de economía general y políticas fiscales gubernamentales. La Autoridad Aduanera gestionaba las leyes que regían la percepción de derechos de aduana; ese órgano dependía del Ministerio de Hacienda y se encargaba de supervisar las políticas gubernamentales relacionadas con la administración de las importaciones y las exportaciones.

83. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura se encargaba de redactar, aplicar, coordinar y evaluar las políticas relativas a los sectores agrícola, forestal, pesquero y ganadero, y a la cuarentena, lo que, a su vez, conllevaba la responsabilidad de fomentar e inspeccionar la producción alimentaria, incluidas las semillas, y promover el desarrollo de las industrias pesquera y ganadera. El Ministerio también se encargaba de las medidas fitosanitarias.

84. Las leyes que regulaban las inversiones privadas (tanto extranjeras como nacionales) eran administradas por el Organismo de Promoción de las Inversiones y Exportaciones (TradeInvest Timor-Leste), un organismo que estaba bajo la supervisión del MCAE. Este organismo, que se restableció en virtud del Decreto Ley Nº 45/2015, de 30 de diciembre de 2015, se encargaba de promover, facilitar, supervisar y fomentar las inversiones privadas y las exportaciones y actuaba como servicio de ventanilla única para las inversiones privadas y las exportaciones en Timor-Leste.

85. El Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE), organismo también bajo la supervisión del MCAE, se encargaba de aplicar las leyes relativas al registro mercantil. Ese organismo se había establecido plenamente en virtud del Decreto Ley N° 7/2017 como instituto público cuya misión era aplicar y promover políticas relacionadas con los procedimientos de registro comercial y de trámite de licencias con objeto de fomentar un entorno propicio a los negocios. El SERVE también actuaba como servicio de ventanilla única que facilitaba la expedición de licencias por parte de los ministerios y organismos competentes.

86. El representante de Timor-Leste informó asimismo de que su Gobierno había establecido la Secretaría Nacional sobre la Adhesión a la OMC, cuya labor se centraba en las cuestiones relacionadas con la Organización. El Decreto N° 3/2023 del Gobierno, de 17 de mayo de 2023, en el que se definían la estructura y las competencias de la Secretaría, había sido presentado al Grupo de Trabajo.

87. Un Miembro preguntó también por la Comisión Interministerial para la Coordinación de la Cadena de Valor y el Fomento de la Producción Local. El representante de Timor-Leste explicó que había sido creada en virtud de la Resolución N° 20/2022 del Gobierno, de 18 de mayo de 2022. La Comisión era una entidad consultiva, no un organismo encargado de la aplicación, y no realizaba actividades relacionadas con productos agropecuarios o industriales ni prestaba servicios de comercialización o promoción. La Comisión formulaba recomendaciones al Consejo de Ministros destinadas a mejorar las políticas públicas, los sistemas y los procedimientos administrativos, y prestaba asesoramiento sobre el marco jurídico relacionado con la coordinación de la cadena de valor y la estimulación del crecimiento de la producción nacional. La Comisión estaba integrada por el Primer Ministro; el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos; el Ministro de Comercio e Industria; el Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura; el Ministro de Hacienda; y el Ministro de Obras Públicas.

- División de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos subcentrales

88. Timor-Leste era un Estado unitario con un Gobierno central (artículo 1 de la Constitución), que se dividía en 12 municipalidades y una región administrativa especial. Las municipalidades habían sido creadas con arreglo a la Ley N° 11/2009, de 7 de octubre de 2009, modificada por la Ley N° 4/2016, de 25 de mayo de 2016, si bien estas aún no habían entrado plenamente en vigor. Se consideraban administraciones de carácter autónomo del Gobierno local, aunque no disponían aún de cuerpos legislativos locales, y se dividían en 67 puestos administrativos que, a su vez, podían dividirse en sucus (es decir, aldeas). El Gobierno central desempeñaba funciones administrativas en cada una de las 12 municipalidades, con arreglo al Decreto Ley N° 3/2016, de 16 de marzo de 2016. También definía las competencias y el funcionamiento de los Gobiernos locales (artículo 72.2 de la Constitución). Como Gobiernos locales, las autoridades y administraciones municipales aplicaban las decisiones del Gobierno central a nivel local con cierto grado de autonomía y eran supervisadas por el Ministerio de Administración Estatal. Aunque aún no se habían establecido plenamente, poco a poco estaba previsto que los Gobiernos locales fuesen elegidos directamente por sus propias circunscripciones, convirtiéndose así en entidades de poder local reales, que no dependerían jerárquicamente del Gobierno central.

89. En 2014, el Parlamento Nacional había creado la Región Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, y estableció la Zona Especial de Economía Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno y de Ataúro, cuyo objetivo consistía en crear las condiciones favorables para aumentar las inversiones extranjeras y locales en dichas regiones. Se habían otorgado a los órganos ejecutivos de la Región Administrativa facultades reglamentarias, administrativas, económicas y financieras, incluida la concesión de servicios públicos, supervisión de determinados sectores y expropiación por motivos de interés público, para que pudieran alcanzar sus objetivos (Ley N° 3/2014 de 18 de junio de 2014, modificada en virtud de la Ley N° 3/2019 de 15 de agosto de 2019).

- Descripción de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos

90. Desde 2008, Timor-Leste disponía de procedimientos administrativos que podían aplicarse en el seno de la Administración antes de someter una diferencia a un tribunal (Decreto Ley N° 32/2008, de 27 de agosto de 2008). Las personas físicas y jurídicas tenían derecho a presentar una reclamación ante la entidad pública directamente implicada en el asunto y ante la autoridad

supervisora. Los procedimientos administrativos relativos a las decisiones aduaneras se regían por los artículos 67 a 77 del Código Aduanero (Decreto-Ley N° 14/2017, de 5 de abril de 2017). En respuesta a la pregunta de un Miembro, añadió que las apelaciones de medidas administrativas ante las autoridades administrativas superiores se regían por el Decreto Ley N° 32/2008 sobre el Procedimiento Administrativo, de 27 de agosto de 2008. En el Decreto Ley se consagraba el derecho de los particulares y las empresas afectados por una decisión administrativa (incluso las sujetas a las normas de la OMC) a interponer un recurso (artículo 68). Los recursos tenían que presentarse ante las autoridades administrativas superiores que habían emitido la decisión (artículo 75) o ante las autoridades administrativas superiores con competencias sobre la entidad que había emitido la decisión (artículo 84). En el Decreto Ley también se consagraba el principio de acceso a los tribunales para recurrir las decisiones emitidas por entidades públicas (artículo 9).

91. No había tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o administrativos, que se ocupasen específicamente de cuestiones relativas al comercio. Por consiguiente, los conflictos que surgían con respecto a esos asuntos se resolvían en los tribunales judiciales. El acceso a los tribunales era un derecho fundamental consagrado en el artículo 26 de la Constitución, que establecía que el acceso a los tribunales estaba garantizado para todos a fin de defender sus derechos e intereses protegidos jurídicamente. No podía denegarse el acceso a la justicia por insuficiencia de medios económicos, por lo que había un organismo público específico que garantizaba la asistencia jurídica a quienes carecían de recursos financieros. Asimismo, en el artículo 12 de la Ley N° 15/2017 de Inversiones Privadas, de 23 de agosto de 2017, se indicaba que el acceso a los tribunales era un derecho primordial de los inversores. Los procedimientos que debían seguirse para plantear procedimientos civiles y administrativos ante los tribunales figuraban en el Decreto Ley N° 1/2006 por el que se aprueba el Código de Procedimiento Civil, de 21 de febrero de 2006.

92. La Ley de Arbitraje N° 6/2021, de 29 de marzo de 2021, había sido diseñada sobre la base de la Ley de Arbitraje Internacional de 2006, recomendada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Esa Ley proporcionaba medios alternativos para resolver las diferencias comerciales y, así, aumentar la seguridad jurídica y agilizar la resolución de conflictos. Contenía un conjunto completo de normas de procedimiento que las partes podían utilizar para la sustanciación de las actuaciones arbitrales atinentes a sus diferencias comerciales. El representante añadió que Timor-Leste también era un Estado miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y formaba parte del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI), según lo establecido en la Resolución N° 14/2016 del Parlamento Nacional, de 31 de agosto de 2016.

93. El representante de Timor-Leste confirmó que la Constitución y las leyes y reglamentos en vigor proporcionaban la base institucional necesaria para la pronta revisión administrativa y judicial de las medidas administrativas. Confirmó además que, a partir de la fecha de adhesión, las leyes y los reglamentos de Timor-Leste garantizarían a los particulares y a las empresas afectados por una medida administrativa sujeta a las disposiciones de la OMC el derecho de interponer un recurso contra esa medida sin incurrir en sanciones, tanto ante una autoridad administrativa superior y ante los tribunales como ante cualquier tribunal independiente de conformidad con las obligaciones asumidas en la OMC, incluidas las establecidas en el artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el artículo 23 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, el artículo 11 del Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, el artículo 62 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC y el artículo VI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El recurso a una revisión judicial o administrativa comprendería también las medidas relativas a la aplicación del trato nacional, la evaluación de la conformidad, así como la reglamentación, el control y el suministro o la promoción de un servicio, con inclusión de la concesión o denegación de una licencia para prestar un servicio, y otras cuestiones. Los tribunales o autoridades administrativas encargados de esas revisiones serían imparciales e independientes del organismo encargado de aplicar las medidas administrativas y no tendrían ningún interés sustancial en el resultado del asunto. El procedimiento de revisión incluiría la oportunidad de que los particulares o las empresas afectados por una medida administrativa sujeta a revisión interpusieran recursos sin ninguna sanción. El fallo del recurso y las razones de ese fallo se notificarían por escrito a las partes interesadas. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

IV. POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE MERCANCÍAS

- Derechos comerciales

94. El representante de Timor-Leste informó de que su país no tenía disposiciones específicas que estipulasen el registro obligatorio para realizar actividades de importación/exportación. Sin embargo, antes, las personas físicas y jurídicas que importaban o exportaban mercancías en condiciones de mercado debían obtener una autorización (licencia) expedida por la autoridad competente a través del Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE), de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017. Ese marco jurídico, que se aplicaba a las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, y tenía por objeto la concesión de licencias para diversas actividades comerciales, entre otras, de venta al por mayor, venta al por menor, comercio acumulativo (mayorista y minorista), comercio en general, importación, exportación y servicios, además de otro tipo de actividades comerciales no previstas en una legislación específica, había quedado sin efecto cuando se adoptó el Decreto Ley Nº 83/2022, de 23 de noviembre de 2022. Este Decreto Ley había sido adoptado con el propósito de simplificar y hacer menos engorroso y burocrático el procedimiento de concesión de licencias.

95. El representante de Timor-Leste explicó que, antes de la adopción del Decreto Ley Nº 83/2022, de 23 de noviembre de 2022, en los anexos I a III del Decreto Ley Nº 34/2017 se establecían los tipos de actividades comerciales según los criterios de riesgo bajo, medio y alto, recogidos en los **anexos 8 a 8 C**). La clasificación de actividades se basaba en las normas internacionales (CIU) adoptadas por la División de Estadística de las Naciones Unidas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). La importación de mercancías clasificadas dentro de la categoría de riesgo bajo se realizaba antes con arreglo a un procedimiento de concesión automática de licencias para actividades económicas. Para la importación de las mercancías clasificadas en la categoría de riesgo medio o alto, los importadores debían obtener licencias no automáticas para actividades económicas basadas en la actividad comercial en cuestión. Con la adopción del Decreto Ley Nº 83/2022, esa clasificación se había eliminado. En el nuevo marco jurídico establecido en virtud del Decreto Ley Nº 83/2022 se habían simplificado los procedimientos para el trámite de licencias y se había reducido el alcance de las actividades que requerían licencia. La necesidad de obtener licencias para determinadas actividades económicas dependía ahora de la existencia de un marco jurídico sectorial específico (por ejemplo, para la explotación de minas, las infraestructuras, la aviación, las instalaciones turísticas y de esparcimiento, las telecomunicaciones, etc.). La lista de las actividades económicas para que las que se necesitaba una licencia con arreglo a ese marco sectorial, y en la que ya no figuraban las importaciones o exportaciones comerciales, aparecía en el **anexo 8 D**).

96. En cuanto al procedimiento relativo a las licencias de actividad, añadió que el SERVE actuaba como ventanilla única para la recepción de las solicitudes de esas licencias. Una vez recibidas las solicitudes, el SERVE remitía la documentación a los ministerios u organismos competentes para obtener una licencia supeditada a los requisitos sectoriales. En función de los requisitos específicos establecidos por los ministerios competentes y las medidas concretas que se tenían que aplicar en el proceso de autorización, ese procedimiento podía durar hasta un mes. Tras la expedición de las licencias, las actividades objeto de las mismas podían comenzar de manera inmediata.

97. El representante de Timor-Leste añadió que seguían aplicándose prescripciones en materia de licencias para algunos tipos concretos de importaciones. Así, en virtud del Decreto Ley Nº 12/2004 sobre Actividades Farmacéuticas, de 26 de mayo de 2004, las importaciones de productos farmacéuticos estaban sujetas a reglamentos sanitarios, bajo la autoridad del Ministerio de Salud. El artículo 3 del Decreto Ley determinaba que las actividades de importación (así como el almacenamiento, la venta al por mayor, la venta al por menor y la exportación de medicinas de uso humano) solo podrían ser realizadas por entidades debidamente registradas de conformidad con la ley aplicable para el registro de empresas y debidamente autorizadas por la Comisión de Regulación de Actividades Farmacéuticas con arreglo a este Decreto Ley, previa consulta con el Consejo de Administración en virtud del apartado d) del párrafo 1 del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud. Esos requisitos se detallaban en la subsección "Procedimientos para el trámite de licencias de importación".

98. Asimismo, el representante informó de que, en el momento de la importación/exportación, la Autoridad Aduanera requería que todos los importadores/exportadores comerciales demostraran que contaban con un número de identificación fiscal (NIF) de Timor-Leste. Además, las empresas tenían

que demostrar que estaban debidamente constituidas. Este requisito se aplicaba a todos los particulares o empresas que realizaran actividades de importación/exportación de carácter comercial.

99. Además de requisitos en materia de licencias de actividad, se aplicaban requisitos en materia de registro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 16/2017 sobre el Registro Mercantil, de 17 de mayor de 2017. Los empresarios individuales y sociales podían solicitar el registro de su empresa en el SERVE. El registro de empresas, comerciantes individuales y sociedades no conllevaba costos. En consonancia con el Decreto Ley N° 16/2017, se tenían que presentar los siguientes documentos: i) estatutos sociales; ii) documentos de identidad de los accionistas y, si estaban casados, justificante del certificado de matrimonio y/o régimen matrimonial; iii) número de identificación fiscal de los accionistas (si lo tenían, en caso contrario podía ser atribuido por el SERVE en el momento del registro); iv) identificación de los órganos de la empresa; v) cartas de aceptación para cada miembro de los órganos de la empresa; vi) documentos que certificasen que el capital de la empresa había sido depositado si se mencionaba en los estatutos sociales; vii) plano donde se mostrase la ubicación de las oficinas registradas; y viii) copias certificadas de autorizaciones previas para realizar actividades comerciales, si procedía. El registro de empresas era realizado por el SERVE en un plazo de uno a cinco días laborales. Al final del proceso, los documentos de registro podían recuperarse en el SERVE: el certificado de registro, que indica el número de registro de la empresa, del comerciante individual y de la sociedad, el número de identificación fiscal, el certificado de constitución y las autorizaciones/licencias comerciales.

100. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, Timor-Leste otorgaría a toda persona física o jurídica, con independencia de su presencia física o de las inversiones efectuadas en Timor-Leste, el derecho a ser el importador registrado de cualquier producto que pudiera importarse legalmente en el país, a cualquier nivel de distribución, y que que las leyes y reglamentos del país relativos al derecho a dedicarse al comercio de mercancías y todos los derechos, cargas o impuestos recaudados en relación con esos derechos estarían en plena conformidad con las obligaciones dimanantes de la OMC, incluidas las establecidas en los artículos VIII.1 a), XI.1 y III.2 y 4 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el artículo III del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC y el artículo 63 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC. También confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, se concederían plenos derechos de importar y exportar, de forma no discriminatoria y no discrecional, y que las prescripciones de registro comercial o de solicitud de derechos comerciales se establecerían únicamente con fines aduaneros y fiscales, no exigirían invertir en Timor-Leste y no constituirían un obstáculo al comercio. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Facilitación del comercio

101. Para Timor-Leste, la facilitación del comercio era la herramienta de acceso a los mercados exteriores esencial para impulsar el crecimiento. Por ello, Timor-Leste fomentaba activamente las políticas de facilitación del comercio con el fin de que el comercio internacional fuese más sencillo y eficiente. En 2016, había iniciado la aplicación de políticas de facilitación del comercio con el establecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (Resolución del Gobierno N° 6/2016, de 17 de febrero de 2016), foro de diálogo consultivo entre el Gobierno, el sector privado y otras partes interesadas, como los asociados para el desarrollo, a fin de formular recomendaciones de reformas con el objetivo último de coordinar esfuerzos y mejorar la facilitación del comercio. Entre las responsabilidades del Comité figuraban las siguientes: i) promover el análisis de los trámites de importación y exportación y proponer la adopción de medidas armonizadas y simplificadas; ii) coordinar las consultas públicas y elaborar recomendaciones para facilitar la importación y la exportación; iii) apoyar al Gobierno en la aplicación de reformas legislativas y de procedimiento para facilitar la importación y la exportación; y iv) coordinar la labor realizada por todos los organismos públicos en materia de facilitación de la importación y la exportación. La lista de miembros del Comité, en su forma modificada por la Resolución N° 24/2023 del Gobierno, de 24 de mayo de 2023, figuraba en el ANEXO 9.

102. El Gobierno de Timor-Leste se proponía modernizar el marco aduanero nacional con el fin de mejorar los procesos de importación/exportación en Timor-Leste, en el contexto de los esfuerzos que está desplegando para modernizar la economía y cumplir las normas de la OMC y la ASEAN. Con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Autoridad Aduanera estaba trabajando en una reforma aduanera. Los principales objetivos de esta reforma eran reducir la

burocracia, aumentar la transparencia y simplificar las formalidades de importación y exportación. Para lograrlos, el Gobierno estaba examinando la posibilidad de aplicar tres etapas principales: i) un examen del marco legislativo en materia de aduanas; ii) la integración de los sistemas de los servicios de aduanas y de cuarentena (incluidos los sistemas informáticos); y iii) la celebración de un debate público para que las partes interesadas pudieran participar durante la fase de aplicación (ministerios, agentes de aduanas, grandes importadores, etc.).

103. El proceso de reforma aduanera se había iniciado con la aprobación del Código Aduanero de 2017 (Decreto-Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017). Este Código reflejaba la voluntad política del Gobierno de Timor-Leste de apoyar la facilitación del comercio y se basaba en el Convenio de Kyoto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Por lo tanto, el Gobierno esperaba que el Código también cumpliera el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC. El Código definía las formalidades aduaneras, adoptaba la gestión de riesgos aduaneros y promovía la integridad y la transparencia, según lo convenido en la Declaración de Arusha. Comprendía las siguientes cuestiones: i) control y supervisión aduaneros; ii) zonas sujetas a control aduanero; iii) potestad aduanera; iv) derechos de aduana; y v) infracciones aduaneras. Para aplicar el Código, era necesario contratar y formar a profesionales. El Código había reemplazado a las leyes siguientes: i) el Código Aduanero anterior (Decreto Ley Nº 11/2004, de 19 de mayo de 2004); ii) el Decreto Ley Nº 9/2004 sobre el Régimen General de Importación, Almacenamiento y Movimiento de Mercancías sujetas al Impuesto Selectivo al Consumo, de 19 de mayo de 2004; iii) el Decreto Ley Nº 10/2004 relativo a las Infracciones Fiscales y Aduaneras, de 19 de mayo de 2004; iv) el Decreto Ley Nº 15/2005 relativo al Estatuto de los Agentes de Aduanas Autorizados; y v) el Decreto Ley Nº 5/2007, de 13 de agosto de 2007, por el que se establece el Régimen Tributario General de Aduanas y de los Derechos Destinados al Fondo Aduanero. El Código servía de orientación para toda la legislación aduanera subsidiaria que era necesario elaborar (véase el ANEXO 10). La reforma aduanera proseguiría hasta finales de 2025.

104. Para profundizar en la reforma, Timor-Leste estaba desarrollando una ventanilla única nacional para, en su caso, actuar como vínculo entre una posible ventanilla única de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y la ventanilla única de la ASEAN, convirtiéndose en un centro y una plataforma que interrelacionase un mercado de más de 2.400 millones de personas. Para ello, el Código Aduanero contenía:

- el capítulo I del título V relativo a los registros y pagos electrónicos, basado en las leyes modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);
- el artículo 79, que autorizaba al Comisario de la Autoridad Aduanera a exigir que determinados documentos o pagos se transmitiesen por vía electrónica;
- los artículos 79 y 80, que estipulaban que el Director Nacional podría autorizar a determinadas personas a presentar documentos o realizar pagos por vía electrónica y otorgaban al Director General la flexibilidad de modificar la autorización para adaptarse a los cambios tecnológicos;
- el artículo 82, que autorizaba el uso de firmas electrónicas e incluía una definición del concepto de firma electrónica, basada en la definición que figuraba en las leyes modelo de la CNUDMI;
- el artículo 83, que preveía el efecto jurídico y la exigibilidad de los documentos y las firmas electrónicas;
- el artículo 84, que preveía el efecto jurídico de las decisiones adoptadas por la Autoridad Aduanera mediante un sistema automatizado;
- el artículo 85, que prohibía el acceso no autorizado a los sistemas informáticos de aduanas;
- el artículo 86, que autorizaba al Comisario a establecer requisitos técnicos en relación con los registros electrónicos, las firmas electrónicas y los procesos y trámites de control asociados.

El Gobierno había adoptado el Sistema Automatizado de Datos Aduaneros como plataforma tecnológica con la que gestionar todas las formalidades y documentación aduaneras (SIDUNEA World, de conformidad con la Resolución Nº 24/2017 del Gobierno, de 17 de mayo

de 2017, igual que la ASEAN). Se estaban dejando de utilizar los formularios en papel para los trámites aduaneros, que se realizaban en línea. La ejecución del proyecto de ventanilla única nacional había comenzado en enero de 2020. Estaba previsto aplicarlo plenamente para fines de 2024. El calendario de ejecución del proyecto figura en el ANEXO 11.

105. La Oficina del Comisario de la Autoridad Aduanera estaba trabajando en la mejora de las instalaciones informáticas y las conexiones a Internet en todos los puertos y en el aeropuerto para que el personal portuario pudiera introducir datos directamente en el sistema SIDUNEA. Hasta la fecha se habían realizado obras en este sentido en los siguientes puestos aduaneros: i) puerto marítimo de Dili, aeropuerto de Dili, puerto marítimo de Baucau, puerto marítimo de Salele Suai, puerto marítimo de Oe-Cusse; y ii) aduanas terrestres: Suai-Salele, Oe-Cusse y Maliana.

106. En el marco de la reforma aduanera, con el sistema "Servicios Integrados de Aduanas y Cuarentena", junto con la base de datos de importadores que ya existía en Timor-Leste, la Autoridad Aduanera y la CFI también pretendían crear un sistema integrado que redujera la carga burocrática y aumentara el intercambio de información entre la Autoridad Aduanera, los Servicios de Cuarentena y otros departamentos públicos de servicios pertinentes, para que el importador/exportador interactuase con una sola autoridad administrativa durante todo el proceso de importación/exportación. También se esperaba que, una vez se aplicase el sistema SIDUNEA World, toda la información sobre las mercancías sujetas a licencia se almacenase en la base de datos correspondiente.

107. Con la ayuda de la CFI, la Oficina del Comisario de la Autoridad Aduanera estaba intentando mejorar el sistema de despacho anticipado de la carga. En el marco de este proyecto, la CFI procuraba asimismo mejorar la capacidad de la Oficina de Cuarentena para administrar un sistema de despacho anticipado de la carga. Este proyecto preveía el establecimiento de procedimientos internos para controlar los casos en que se interrumpiese el despacho de aduana cuando se hubiese concedido el despacho anticipado.

108. En respuesta a una pregunta de un Miembro sobre la intención del Gobierno de utilizar estudios de tiempo de despacho para identificar cuellos de botella en los procedimientos de importación y exportación, el representante de Timor-Leste dijo que estaba de acuerdo en que el Estudio de Tiempo de Despacho de la OMA era una herramienta reconocida internacionalmente para medir el tiempo real que se requería para el levante y/o despacho de las mercancías, con miras a detectar los cuellos de botella que se producían en las corrientes comerciales y adoptar las medidas necesarias para mejorar la efectividad y eficiencia de los procedimientos en frontera. El Gobierno de Timor-Leste, por conducto de la Autoridad Aduanera, daría a conocer la información y publicaría las correspondientes medidas normativas y operativas para seguir mejorando la facilitación del comercio en la frontera.

109. En respuesta a una pregunta sobre la intención de Timor-Leste de aplicar el AFC y clasificar sus futuros compromisos en el marco de las categorías A, B y C, el representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno de su país se había comprometido a cumplir el AFC aplicando el sistema SIDUNEA World desde abril de 2017 para acelerar el movimiento, levante y despacho de las mercancías. No obstante, habida cuenta de su condición de PMA, el pleno cumplimiento del AFC requeriría el fortalecimiento de las disposiciones jurídicas/normativas, los procedimientos, la infraestructura y los recursos humanos necesarios. La clasificación propuesta por Timor-Leste de sus compromisos en virtud del AFC figura en el ANEXO 12.

110. El representante de Timor-Leste tomó nota del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 27 de noviembre de 2014 ([WT/L/940](#)) (el "Protocolo del AFC"), que había entrado en vigor el 22 de febrero de 2017, y había insertado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. El representante de Timor-Leste confirmó que su Gobierno aceptaría el Protocolo del AFC al aceptar el Protocolo de Adhesión. Confirmó además que Timor-Leste aplicaría el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC a partir de la fecha de adhesión, utilizando las categorías de compromisos propuestas en el ANEXO 12, como país menos adelantado. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

A. REGLAMENTACIÓN DE LAS IMPORTACIONES

- Derechos de aduana propiamente dichos

111. El representante de Timor-Leste informó de que, anteriormente, con arreglo al Decreto Ley Nº 8/2008, de 30 de junio de 2008, por el que se aprueba la Ley de Impuestos y Derechos, el Gobierno de su país había establecido un tipo de derecho de importación uniforme del 2,5% *ad valorem* para todas las mercancías importadas, con independencia de su clasificación. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Nº 15/2022 del Presupuesto del Estado para 2023, de 21 de diciembre de 2022, a partir del 1 de enero de 2023 el tipo del derecho de importación uniforme sobre todas las mercancías importadas había aumentado al 5% *ad valorem*, con el objetivo de incrementar los ingresos presupuestarios.

112. De conformidad con el Código Aduanero de Timor-Leste (Decreto Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017), el Arancel Aduanero del país comprendía la Nomenclatura de Mercancías con arreglo al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Así, puesto que se aplicaba un tipo de derecho de importación uniforme del 5% *ad valorem*, no se imponían otros impuestos, gravámenes o cargas a las líneas arancelarias. En ese momento, la Autoridad Aduanera de Timor-Leste utilizaba la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado de 2017. El Gobierno había ratificado el Convenio del Sistema Armonizado y estaba alineando la nomenclatura arancelaria nacional con la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de la ASEAN, que se basaba en el SA 2022. Tenía previsto comenzar a aplicar la Nomenclatura Arancelaria del SA 2022 antes de finales de 2023.

113. El representante añadió que su Gobierno tenía previsto aumentar los derechos aplicados a los productos agropecuarios y no agropecuarios en el mediano plazo. La aplicación de este plan estaría sujeta a la revisión de la Ley de Impuestos y Derechos, de conformidad con el Plan de Acción previsto en el ANEXO 15, y se ajustaría a las concesiones arancelarias y los compromisos negociados con los Miembros.

114. En respuesta a la petición de un Miembro, el representante de Timor-Leste confirmó que su país había presentado sus proyectos de Listas anexas al Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) y al Acuerdo de Ampliación del ATI al Comité del ATI y al grupo de participantes en la ampliación del ATI de 2015 para que fueran verificadas y aprobadas, de conformidad con los procedimientos del ATI y de su Acuerdo de Ampliación, a fin de que Timor-Leste pudiera adherirse a dichos Acuerdos cuando pasara a ser Miembro de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

115. Las Listas anexas al Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) y al Acuerdo de Ampliación del ATI habían sido aprobadas el 19 de octubre de 2023 por el Comité del ATI y el grupo de participantes en la ampliación del ATI de 2015 de la OMC. Las Listas se habían incorporado en la Lista de concesiones y compromisos en materia de mercancías de Timor-Leste (CLXXVIII).

- Otros derechos y cargas

116. El representante de Timor-Leste informó de que su país no aplicaba otros derechos o cargas en el sentido del artículo II.1 b) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC. Confirmó que Timor-Leste consolidaría en cero los demás derechos y cargas en su Lista de concesiones y compromisos. El Grupo de Trabajo tomó nota de ese compromiso.

- Contingentes arancelarios, exenciones arancelarias

117. El representante de Timor-Leste informó de que su país no aplicaba contingentes arancelarios y no tenía previsto aplicar ningún límite cuantitativo a los volúmenes de importación.

118. La Ley de Impuestos y Derechos preveía una lista de mercancías exentas de derechos de importación. Las exenciones se aplicaban a las mercancías: i) que no tuvieran carácter comercial, fueran importadas por viajeros y se situaran por debajo de un valor de umbral; ii) que fueran importadas en virtud de franquicias diplomáticas y de las Naciones Unidas; iii) que fueran importadas por organizaciones benéficas; iv) que fueran importaciones temporales; y v) algunas otras, como se detalla en el ANEXO 13.

119. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Nº 15/2022 del Presupuesto del Estado para 2023, de 21 de diciembre de 2022, también estaban exentas de derechos de importación: i) las importaciones por el Estado u otras personas jurídicas públicas de armas y municiones para la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL), la Policía Científica para las Investigaciones Penales (PCIC) y las Fuerzas Armadas de Timor-Leste (FALINTIL); y ii) las importaciones de mercancías donadas o utilizadas en la producción o construcción de bienes donados al Estado por Estados extranjeros, organismos públicos de Estados extranjeros u organizaciones internacionales.

120. Además, el Código Aduanero establecía asimismo la exoneración del pago de derechos de importación para una serie de mercancías que no tuvieran carácter comercial y que estuvieran comprendidas en alguna de las 11 categorías siguientes:

- efectos personales y enseres domésticos importados por particulares que transfirieran su residencia, de forma definitiva, al territorio aduanero de Timor-Leste, a condición de que esas mercancías hubieran sido custodiadas por esos particulares y, cuando se tratara de productos no perecederos, hubieran sido utilizadas por esos mismos particulares en su anterior residencia habitual durante al menos los seis meses precedentes a la fecha en que hubieran abandonado esa residencia en el tercer país, y que esas mercancías estuvieran destinadas a los mismos fines en la nueva residencia habitual;
- bienes muebles, artículos de canastilla y regalos importados con ocasión de una boda, a condición de que fueran propiedad de uno de los cónyuges o de la pareja, que, a raíz de la boda, transfiriera su residencia habitual a Timor-Leste;
- efectos personales adquiridos por sucesión;
- envíos entre particulares, de valor poco significativo, que se hicieran directamente desde un país extranjero a un particular domiciliado en Timor-Leste;
- productos que formaran parte del equipaje personal de los viajeros, a condición de que fueran importaciones ocasionales que no tuvieran carácter comercial, cuyos límites se establecían en el Decreto Ley Nº 10/2003, de 22 de julio de 2003;
- instrumentos, objetos, aparatos científicos y otros instrumentos de carácter educativo, cultural o pedagógico para establecimientos u organismos públicos, o servicios públicos, siempre que estas entidades estuvieran reconocidas jurídicamente y el Ministro de Planificación y Hacienda, o su representante, autorizara las importaciones;
- regalos recibidos en el marco de relaciones internacionales, a condición de que los hubieran importado personas que hubieran ido al país con ocasión de una visita oficial a un país extranjero, o personas que visitaran Timor-Leste y llevaran regalos para las autoridades anfitrionas, o que esos regalos se enviaran como muestra de amistad a una autoridad pública, a una comunidad, a un organismo o a grupos que realizaran actividades de interés público;
- productos que se regalaran a los jefes de Estado o a personalidades que disfrutaran de prerrogativas similares en el ámbito internacional, o productos que estuvieran destinados a ser utilizados o consumidos durante la visita oficial de jefes de Estado extranjeros, en función de los límites y condiciones que estableciera la Autoridad Aduanera;
- máquinas y aparatos importados exclusivamente para exposiciones y ferias, así como los materiales destinados a construir o decorar pabellones provisionales en ferias o exposiciones;
- catálogos, folletos, libros, revistas, guías, mapas o fotografías destinados a la promoción del turismo; o
- publicaciones de Gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales para su distribución gratuita, así como documentos enviados gratuitamente a los servicios públicos.

121. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre la categoría iv) de envíos de valor poco significativo, el representante aclaró que el artículo 278 2) del Código Aduanero se refería a los artículos sin valor comercial, es decir, aquellos cuyo valor no superara el umbral estadístico, definido

en la Ley de Impuestos y Derechos. El Gobierno, por medio de la Comisión del IVA, había revisado la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e incorporado la posibilidad de establecer un valor de umbral de USD 500. Este proyecto de ley estaba en trámite para que el Gobierno lo aprobara de conformidad con lo previsto en el Plan de Acción que figura en el ANEXO 15.

122. El representante de Timor-Leste confirmó que, si se introdujeran contingentes arancelarios en el futuro, se aplicarían y administrarían de conformidad con las normas de la OMC, en particular con las disposiciones sobre NMF y trato nacional. También confirmó que, a partir de la fecha de adhesión a la OMC, las exenciones arancelarias solo se aplicarían de conformidad con las disposiciones pertinentes de la OMC, incluidos el artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Derechos y cargas por los servicios prestados previstos en el Código Aduanero

123. La Autoridad Aduanera recaudaba derechos y cargas en concepto de servicios prestados de conformidad con el Código Aduanero, que establecía el Régimen Tributario General de Aduanas y de los Derechos Destinados al Fondo Aduanero, como figura en el ANEXO 14.

124. Además, el artículo 66 del Decreto Ley N° 21/2003 sobre Cuarentenas y Controles Sanitarios de las Mercancías Importadas y Exportadas, de 31 de diciembre de 2003, autorizaba al Ministerio de Agricultura y Pesca y al Ministerio de Hacienda a publicar una orden ministerial conjunta que definiera las tasas de servicios por la concesión de licencias de importación, la expedición de certificados o cualquier otra tasa por la prestación de servicios. El Decreto Ley N° 36/2023 sobre la Preservación de los Vegetales y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, y el Decreto Ley N° 41/2023 sobre la Salud Animal y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, por los que se había derogado el Decreto Ley N° 21/2003, contenían también una disposición sobre la posibilidad de introducir esas tasas en virtud de una orden ministerial. Hasta la fecha no se había adoptado ninguna medida relativa a la introducción de esas tasas. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste añadió que su Gobierno no tenía previsto introducir esas tasas. En caso de que decidiera hacerlo en el futuro, se aseguraría de que fueran compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, en particular con los artículos VIII y X del GATT de 1994.

125. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, todos los derechos y cargas por servicios prestados, aplicados con ocasión de la importación o exportación o en conexión con ellas, estarían en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, en particular con los artículos VIII y X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de ese compromiso.

- Restricciones cuantitativas a la importación, con inclusión de las prohibiciones, los contingentes y los regímenes de licencias

126. El representante de Timor-Leste informó de que, como se detalla en la sección "Medidas sanitarias y fitosanitarias", por motivos de salud pública, estaba prohibida la importación de los siguientes productos: i) cualquier proteína destinada a la alimentación animal que contuviera carne en polvo, harina de hueso, polvo de sangre o grasa de tejidos de mamíferos; ii) carne avícola en polvo para la alimentación de rumiantes; iii) cualquier producto bovino, ovino o caprino de animales que presentaran síntomas clínicos de encefalopatía espongiiforme; iv) cualquier animal o producto derivado de animales que presentaran síntomas clínicos de determinadas enfermedades, por ejemplo, la fiebre aftosa y la gripe aviar; y v) grasa sin elaborar. También estaban prohibidas las importaciones de: i) los artículos enumerados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (artículo 72); ii) los artículos cuyo país o zona de origen o procedencia presentara casos de plagas o enfermedades que estuvieran sujetos a cuarentena (artículo 72); y iii) las semillas exóticas incluidas en una lista aprobada por orden ministerial (artículo 82). No existía ninguna otra restricción cuantitativa a la importación, con inclusión de las prohibiciones y los contingentes.

127. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste confirmó que no existía ninguna restricción cuantitativa para la importación de bebidas alcohólicas, incluidas las bebidas espirituosas, el vino y la cerveza. Al mismo tiempo, la Ley de Presupuesto Anual de 2023

establecía los impuestos sobre el consumo de bebidas alcohólicas que se describen en la sección "Aplicación de impuestos internos a las importaciones".

- Procedimientos para el trámite de licencias de importación

128. El representante de Timor-Leste informó de que su Gobierno no aplicaba ningún régimen general que exigiera licencias para importar mercancías. Las personas físicas y jurídicas que importaban mercancías para fines comerciales debían obtener una licencia de actividad de conformidad con el Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017. Ese requisito se había suprimido con la adopción del Decreto Ley Nº 83/2022, de 23 de noviembre de 2022, como se indicaba en la sección "Derechos comerciales y requisitos de registro para realizar actividades de importación y exportación". Añadió que la información sobre el régimen de licencias de importación vigente se detallaba en el documento [WT/ACC/TLS/10](#).

129. Un Miembro pidió al representante de Timor-Leste que proporcionara información sobre las funciones de los ministerios y organismos que participaban en la tramitación de las licencias, así como los procedimientos para abordar las emergencias relacionadas con las importaciones y exportaciones (como la denegación de mercancías importadas en el país). El representante de Timor-Leste dijo que para toda cuestión relacionada con las importaciones y exportaciones, incluidas las emergencias, existían varios ministerios autorizados a denegar importaciones de mercancías al país, o exportaciones desde el país. Sus procedimientos jurídicos se detallaban en los decretos leyes pertinentes, con arreglo a la estructura más reciente establecida en el Decreto Ley Nº 46/2023 sobre la Estructura Orgánica del IX Gobierno Constitucional de Timor-Leste, de 28 de julio de 2023. Se trataba de los ministerios siguientes: i) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura (productos de origen animal y vegetal), ii) Ministerio de Salud (productos farmacéuticos), iii) el Ministerio de Defensa (explosivos para actividades de construcción civil y extracción petrolera y minera), iv) la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (refrigeradores) y v) el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (vehículos automóviles).

130. El representante añadió que la Autoridad Aduanera dependía del Ministerio de Hacienda y se regía por el Decreto Ley Nº 2/2020 sobre el Estatuto Orgánico de la Autoridad Aduanera, de 8 de enero de 2020. El artículo 3 del Decreto Ley determinaba que la Autoridad Aduanera tenía la misión general de controlar todo el territorio aduanero nacional con fines fiscales, económicos y de protección social, en particular en la esfera de la seguridad pública, el medio ambiente, la cultura y la salud, así como de administrar la recaudación de impuestos y los derechos de aduana y otros gravámenes que eran objeto de un compromiso jurídico. La Autoridad Aduanera aplicaba el Código Aduanero que establecía las normas y los procedimientos generales para la importación y exportación de mercancías (incluida la denegación de las mercancías importadas en el país), su movimiento y utilización en el territorio aduanero, el control de los pasajeros y las facultades administrativas y coercitivas de dicha Autoridad (artículo 1.1 del Código). Las facultades aduaneras se detallaban en el título III del Código.

131. Como se indica en la sección "Medidas sanitarias y fitosanitarias", con arreglo a los artículos 33 y 35 del Decreto Ley Nº 36/2023 sobre la Preservación de los Vegetales y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, y el Decreto Ley Nº 41/2023 sobre la Salud Animal y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, respectivamente, las importaciones de productos de origen vegetal y animal estaban sujetas a los reglamentos de cuarentena. La Dirección General de Cuarentena y Bioseguridad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, se ocupaba de las cuestiones relacionadas con la supervisión de la aplicación y el cumplimiento de las leyes y los reglamentos aplicables al control fitosanitario y zoonosanitario y a la cuarentena, incluida la expedición de permisos de importación. Los siguientes productos estaban sujetos a permisos de importación: i) animales vivos; ii) plantas vivas; iii) productos de origen animal o vegetal especificados por la ley; y iv) cualquier otro producto, mercancía, animal u organismo vegetal especificados por la ley.

132. Las importaciones de armas y explosivos (así como su fabricación, exportación, comercio, transporte y uso) estaban sujetas a la obtención de una licencia y a inspecciones previas que eran realizadas con la ayuda de la Policía Nacional de Timor-Leste, con arreglo al artículo 20 c) del Decreto Ley Nº 9/2009, de 18 de febrero de 2009, y el Decreto Ley Nº 7/2020 sobre la Importación, Transporte, Almacenamiento y Utilización de Explosivos para Actividades de Construcción Civil y

Extracción Petrolera y Minera, de 19 de febrero de 2020. La Policía Nacional de Timor-Leste dependía del Ministerio del Interior.

133. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, Timor-Leste se abstendría de introducir, reintroducir o aplicar restricciones cuantitativas a las importaciones u otras medidas no arancelarias tales como contingentes, prohibiciones, permisos, requisitos en materia de autorización previa, licencias de importación u otras prescripciones o restricciones con un efecto equivalente que no pudieran justificarse con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. El régimen de licencias de importación estaría plenamente en conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC. El representante confirmó asimismo que la facultad legal del Gobierno de Timor-Leste de suspender las importaciones o aplicar requisitos en materia de licencias que pudieran utilizarse para suspender o prohibir el comercio o restringir de otro modo su volumen se ejercería en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, así como el Entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en materia de balanza de pagos. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Valoración en aduana

134. El representante de Timor-Leste informó de que el Código Aduanero (Decreto Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017) contenía disposiciones sobre la valoración en aduana en el capítulo IV del título VII sobre el valor de las mercancías a efectos aduaneros (artículos 97 a 101 y Lista I), que se ajustaban fielmente a las normas contenidas en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, incluidas sus Notas interpretativas. El Código Aduanero prescribía la utilización del valor de transacción siempre que fuera posible, teniendo en cuenta los casos en que el precio facturado no pareciera auténtico. Cuando el valor de un producto importado, según figurara en la factura, fuera inferior al valor justo de mercado del mismo producto, la Autoridad Aduanera podía calcular el valor justo de mercado de la transacción tomando como referencia el valor de transacciones similares entre empresas que operaran con criterios comerciales (artículo 97.1). Los artículos 92.2 y 92.3 preveían ajustes al valor de transacción en consonancia con el artículo 8 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC). El Gobierno de Timor-Leste estaba adoptando medidas para que su legislación y sus prácticas aduaneras fueran plenamente compatibles con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. La Autoridad Aduanera había aplicado también un sistema de resoluciones anticipadas mediante el cual los comerciantes podían solicitar una resolución con respecto a la aplicación de los criterios de valoración aduanera para un caso en particular, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. En el documento [WT/ACC/TLS/8](#) figuraba información detallada sobre la aplicación y administración del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

135. Un Miembro solicitó al representante de Timor-Leste que aclarara el significado de las expresiones "valor justo de mercado" y "valor de transacciones similares entre empresas que operan con criterios comerciales". Con respecto a las situaciones en que el precio facturado no pareciera auténtico y la Autoridad Aduanera pudiera calcular el valor justo de mercado de la transacción tomando como referencia el valor de transacciones similares entre empresas que operaran con criterios comerciales, un Miembro preguntó si ello podía ser motivo para rechazar el método basado en el valor de transacción. El representante de Timor-Leste aclaró que el artículo 97 establecía que el valor en aduana de las mercancías era el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se vendían para su exportación al país de importación. Cuando la Autoridad Aduanera tuviera motivos para dudar de la veracidad o la exactitud del valor en aduana declarado, y después de haber solicitado más explicaciones u otras pruebas de que dicho valor representaba la cantidad total pagada o por pagar por las mercancías importadas, la cláusula 2 5) de la Lista I disponía que la Autoridad Aduanera lo determinara aplicando por orden sucesivo los siguientes métodos de valoración: i) el valor de transacción de mercancías idénticas (cláusula 4); ii) el valor de transacción de mercancías similares (cláusula 5); iii) el valor deductivo (cláusula 6); iv) el valor reconstruido (cláusula 7); y v) la base residual de valoración (última instancia, cláusula 8). De conformidad con la cláusula 2 6) de la Lista I, previa solicitud por escrito del importador a la Administración Aduanera, podía invertirse el orden de aplicación de la cláusula 6 (valor deductivo) y la cláusula 7 (valor reconstruido). Añadió que su Gobierno acogía con satisfacción toda propuesta de mejora del Código Aduanero, para garantizar la plena conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

136. Un Miembro preguntó además si el Gobierno de Timor-Leste tenía la intención de adoptar legislación adicional relativa a la valoración de mercancías perdidas o averiadas. El representante de Timor-Leste confirmó que la Lista I del Código Aduanero no contenía disposiciones especiales ni arreglos de tipo práctico relativos a la valoración de las mercancías perdidas o averiadas. Sin embargo, en el artículo 201 2) del Código se definían principios generales, según los cuales el encargado autorizado del depósito se hacía cargo del pago de los derechos y otras cargas relacionadas con las mercancías perdidas, en particular por hurto o robo, sin perjuicio de un posible procedimiento por infracción de las obligaciones fiscales con arreglo a la ley. Confirmó además que los métodos de valoración en aduana se aplican por orden jerárquico de conformidad con el artículo 98 del Código, que se aplica a todas las mercancías importadas, incluidas las mercancías dañadas. Asimismo, señaló que su Gobierno tenía la intención de establecer normas para la valoración de mercancías perdidas o averiadas.

137. Un Miembro subrayó que el artículo 10 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC establecía que la Autoridad Aduanera no podía revelar ninguna información que se suministrara con carácter confidencial a los efectos de la valoración en aduana sin autorización expresa de la persona o el Gobierno que la hubiera proporcionado, salvo en la medida en que fuera necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial. Por consiguiente, un Miembro solicitó al representante de Timor-Leste que aclarara qué leyes preveían una excepción al requisito de confidencialidad con arreglo al artículo 17.3 del Código Aduanero. El representante de Timor-Leste respondió que, de conformidad con el artículo 17 del Código, los funcionarios de aduanas tenían la obligación de mantener el secreto profesional respecto de los hechos, la información y los documentos confidenciales de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La obligación de confidencialidad cesaba cuando la persona o entidad que hubiera comunicado los hechos, la información o los documentos confidenciales autorizara explícitamente su divulgación, o cuando así lo requiriera un tribunal en el marco de un procedimiento judicial u otra autoridad debidamente facultada por ley (Decreto Ley Nº 19/2009, de 8 de abril de 2009 (Código Penal); Ley Nº 17/2011 de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, de 28 de diciembre de 2011).

138. Un Miembro preguntó si el artículo 69 del Código Aduanero establecía el derecho de recurso, sin penalización, de conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. El representante de Timor-Leste confirmó que así era. Aunque en primera instancia el recurso se podía interponer ante un órgano superior de la Administración Aduanera, en última instancia el importador tenía el derecho de recurrir ante una autoridad judicial. El representante aclaró además que, conforme a lo dispuesto en el artículo 69, se podían interponer dos tipos de recursos respecto de las decisiones aduaneras: i) un recurso administrativo dirigido al Ministro, para las decisiones de la Administración Aduanera o la decisión definitiva del Director General respecto de una reclamación; y ii) en el curso de un procedimiento contencioso aduanero, un recurso judicial ante el tribunal competente, respecto de las decisiones definitivas del Director General y del Ministro. De conformidad con el artículo 70.1 a) del Código Aduanero, las decisiones o medidas adoptadas por la Administración Aduanera respecto del valor en aduana de las mercancías se podían recurrir, en particular: las decisiones sobre los derechos de aduana y otras cargas aplicables a las mercancías, con inclusión de todas las conclusiones o determinaciones en que se basara el establecimiento de la clasificación arancelaria, el país de origen y el valor en aduana de las mismas. Toda persona que hubiera solicitado una decisión de las autoridades aduaneras y no hubiera recibido una respuesta en un plazo de 30 días podría interponer un recurso. De conformidad con el artículo 73 del Código Aduanero, el plazo para presentar un recurso administrativo era de 30 días contados a partir de la notificación de la decisión de la Administración Aduanera. Una vez recibido el recurso administrativo, la autoridad competente debía examinar y confirmar, modificar o anular la decisión impugnada (artículo 74.3). Si la decisión impugnada se alteraba o modificaba, la Administración Aduanera debía reembolsar o devolver inmediatamente los derechos de aduana, otras cargas o sanciones administrativas que se hubieran percibido en exceso (artículo 77.2).

139. En relación con el artículo 172.2 b) del Código Aduanero, un Miembro preguntó qué otras cargas eran pagaderas por las mercancías. El representante de Timor-Leste respondió que todas las cargas pagaderas eran: los derechos de aduana, el impuesto sobre las ventas y los impuestos sobre el consumo (solo aplicables a las mercancías enumeradas en el anexo II de la Ley Nº 8/2008 de Impuestos y Derechos), como se describe en las secciones pertinentes de este informe. No se imponía ninguna otra carga.

140. Un Miembro solicitó al representante de Timor-Leste que aclarara si la Decisión 3.1 sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas se aplicaba tanto si

facilitaba la financiación el vendedor como si lo hacía una entidad bancaria u otra persona física o jurídica, y si se aplicaba en los casos en que las mercancías se valoraban con un método distinto del basado en el valor de transacción. El representante de Timor-Leste informó de que, según la cláusula 1 5) de la Lista I del Código Aduanero, los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías importadas no podían considerarse parte del valor en aduana siempre que: i) los intereses se distinguieran del precio realmente pagado o por pagar por dichas mercancías; ii) tales mercancías se vendieran realmente al precio declarado como precio realmente pagado o por pagar; y iii) cuando se le requiriera, el comprador pudiera demostrar que el acuerdo de financiación se había concertado por escrito y que el tipo de interés declarado no excedía del valor aplicado en ese momento a este tipo de transacciones en el país en que se concedió la financiación. El tipo de interés declarado no excede del valor aplicado en ese momento a este tipo de transacciones en el país en que se concedió la financiación. El representante confirmó que su Gobierno estaba dispuesto a modificar su legislación para reflejar plenamente los requisitos de la Decisión.

141. Un Miembro pidió al representante de Timor-Leste que identificara las disposiciones por las que se aplicaban los artículos 1.2 a) y 1.2 c) del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC relativos a las partes vinculadas. El representante de Timor-Leste respondió que estas disposiciones figuraban en las cláusulas 1 a 3 de la Lista I del Código Aduanero. De conformidad con la cláusula 1 2) de la Lista I del Código Aduanero, se consideraba que las personas estaban vinculadas: i) si una de ellas estaba empleada o bien ocupaba un cargo de dirección en una empresa de la otra; ii) si estaban legalmente reconocidas como asociadas en negocios; iii) si estaban en relación de empleador y empleado; iv) si una de las personas tenía la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambas; v) si una de ellas controlaba directa o indirectamente a la otra; vi) si ambas personas estaban controladas directa o indirectamente por una tercera; vii) si juntas controlaban directa o indirectamente a una tercera persona; viii) si eran de la misma familia (hasta cuarto grado). Se consideraban miembros de la misma familia: a) cuando tuvieran una relación de parentesco de hasta cuarto grado; b) cuando estuvieran casados o mantuvieran una unión civil o de hecho entre sí o, si una de las personas estaba casada, cuando esta mantuviera una unión civil o de hecho con una persona que tuviera una relación de parentesco de hasta cuarto grado con la otra persona; c) cuando una persona hubiera sido adoptada como hijo de la otra persona o de un tercero con la que la otra persona mantuviera una relación de parentesco de hasta tercer grado.

142. El representante hizo referencia a la cláusula 2 1) d) del Código Aduanero, en la que se especificaba que el valor en aduana de las mercancías importadas debía ser su valor de transacción si el comprador y el vendedor de las mercancías no estaban vinculados en el momento en que las mercancías se vendieron para la exportación o, si el comprador y el vendedor estaban vinculados en ese momento, su relación no influyó en el precio pagado o por pagar por las mercancías y el importador demostró que el valor de transacción de las mercancías se ajustaba a las prescripciones establecidas en la cláusula 2 2) en relación con las ventas entre personas vinculadas. El importador debía presentar pruebas de que el valor de transacción de las mercancías objeto de valoración, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, se aproximaba significativamente al valor en aduana de otras mercancías exportadas en el mismo momento o en uno aproximado, ya sea: a) el valor de transacción de mercancías idénticas o similares en el marco de una venta para su exportación a Timor-Leste realizada entre un vendedor y un comprador que no estaban vinculados en el momento de la venta; b) el valor deductivo de mercancías idénticas o similares; o c) el valor reconstruido de mercancías idénticas o similares.

143. El representante de Timor-Leste explicó además que, de conformidad con la cláusula 2 3) de la Lista I del Código Aduanero, cuando la Autoridad Aduanera opinaba que la vinculación entre el comprador y el vendedor de cualquier mercancía había influido en el precio pagado o por pagar por ellas, notificaba por escrito al importador los motivos que la habían llevado a formarse esta opinión y le daba una oportunidad razonable para presentar documentación que demostrara que la vinculación no había influido en dicho precio.

144. Un Miembro solicitó además al representante de Timor-Leste que identificara las disposiciones por las que se aplicaba el artículo 6.2 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC relativo al valor reconstruido. El representante de Timor-Leste respondió que la Lista I del Código Aduanero no contenía ninguna disposición por la que se solicitara o exigiera a una persona no residente en su propio territorio que exhibiera, para su examen, un documento de contabilidad o de otro tipo, o que permitiera el acceso a ellos, con el fin de determinar un valor reconstruido. La cláusula 7 4) de la

Lista I establecía que la cantidad correspondiente a los beneficios y gastos generales necesarios para establecer el valor reconstruido de las mercancías debía calcularse de forma porcentual y determinarse sobre la base de datos preparados de manera conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país de producción de las mercancías y suministrados por el productor de las mercancías objeto de valoración, o en su nombre. En los casos en que la información proporcionada no fuera suficiente, la Autoridad Aduanera podía examinar las ventas para la exportación a Timor-Leste del grupo o la gama más específicos de mercancías de la misma clase o tipo para obtener más información.

145. Un Miembro señaló que el artículo 14 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC establecía que las Notas interpretativas que figuran en el Anexo I y las notas de los Anexos II y III formaban parte integrante del Acuerdo y que los artículos del Acuerdo debían interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas Notas interpretativas. Sin embargo, al parecer, no todas las Notas interpretativas se habían aplicado en el Código Aduanero de Timor-Leste. Un Miembro preguntó cómo y cuándo el Gobierno de Timor-Leste tenía previsto incorporar todas las Notas interpretativas en su legislación. En respuesta, el representante de Timor-Leste informó de que el Gobierno de su país había adoptado el Decreto Ley Nº 87/2022, de 14 de diciembre de 2022, relativo a la Primera Modificación del Decreto Ley Nº 14/2017 sobre el Código Aduanero, de 5 de abril de 2017, que armonizaba su legislación con las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y sus Notas interpretativas.

146. El representante de Timor-Leste declaró que la legislación sobre la valoración de las mercancías importadas con fines aduaneros e impositivos de conformidad con las prescripciones del Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 se promulgaría antes de la adhesión de Timor-Leste a la OMC. Timor-Leste aplicaría el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 y su Anexo I (Notas interpretativas) a partir de la fecha de adhesión y, en caso de utilizar una base de datos como referencia para validar el precio declarado de una mercancía, no usaría ninguna forma de valor mínimo o lista de valoración fija para la valoración en aduana de las mercancías. Si el valor de transacción facilitado estuviera en entredicho, Timor-Leste despacharía las mercancías previo depósito de una garantía suficiente para cubrir la cuantía máxima de los pagos aduaneros que podrían adeudarse. Timor-Leste aplicaría también la Decisión 3.1 del Comité de Valoración en Aduana (Trato de los intereses en el valor en aduana de los productos importados) y el párrafo 2 de la Decisión sobre la valoración de los medios con soporte lógico para el equipo de proceso de datos (Decisión 4.1). El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- **Normas de origen**

147. El representante de Timor-Leste informó de que, hasta hacía poco, su Gobierno no había aplicado normas de origen porque las medidas nacionales que afectaban a las importaciones no establecían discriminaciones entre las mercancías importadas en función del origen. Se aplicaba el mismo tipo del derecho de aduana a todos los productos con independencia de su procedencia. La Autoridad Aduanera podía calcular el derecho pagadero determinando el valor de las mercancías, sin determinar su país de origen. Así pues, la Ley de Impuestos y Derechos no contenía normas para determinar el origen de las mercancías.

148. Los artículos 94 a 96 del Código Aduanero (Decreto Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017) contenían las normas generales de clasificación de las mercancías por país de origen y las prescripciones relativas a la certificación del origen. El Decreto Ley Nº 95/2022, de 28 de diciembre de 2022, contenía el marco jurídico relativo a las normas de origen recién establecido. El Decreto Ley se ajustaba a las disposiciones del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC, incluidas las definiciones y los criterios de origen establecidos en las Partes I y II del Acuerdo, pues en él se adoptaban los principios de imparcialidad, transparencia, previsibilidad, coherencia y neutralidad de las normas de origen, así como las definiciones y los criterios de origen recogidos en las Partes I y II del Acuerdo. Se abarcaban las normas de origen preferenciales y no preferenciales. El Gobierno estaba elaborando la legislación subsidiaria que regularía los trámites y procedimientos de certificación del origen, con miras a ultimar ese texto legislativo en la primera mitad de 2024.

149. El representante de Timor-Leste aclaró que se podían solicitar también certificados de origen en caso de sospecha de fraude (artículo 95 del Código Aduanero), por ejemplo, para la importación de mercancías sujetas a prescripciones sanitarias y fitosanitarias. El Decreto Ley sobre Normas de Origen tenía asimismo por objeto determinar el trato NMF o preferencial para los productos. Este

nuevo marco jurídico se utilizaría para fines de estadísticas comerciales, para imponer medidas e instrumentos de política comercial, como medidas comerciales correctivas, y para aplicar requisitos de etiquetado y marcado.

150. El representante de Timor-Leste dijo que, a partir de la fecha de adhesión, las leyes y reglamentos de Timor-Leste relativos a normas de origen preferenciales y no preferenciales estarían plenamente en consonancia con el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC. Confirmó además que las normas de origen de Timor-Leste se notificarían al Comité de Normas de Origen de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Inspección previa a la expedición

151. Timor-Leste no disponía de un sistema para realizar inspecciones previas a la expedición ni tenía previsto adoptarlo porque estaba poniendo en marcha un sistema de facilitación del comercio, de conformidad con las normas de la ASEAN y las prescripciones de la OMC y la OMA.

152. El representante de Timor-Leste señaló que, si se introdujeran requisitos de inspección previa a la expedición, serían de carácter temporal y estarían en conformidad con las prescripciones del Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición. Timor-Leste asumiría la responsabilidad de garantizar que las empresas de inspección previa a la expedición que pudiera contratar observaran las prescripciones de los Acuerdos pertinentes de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Otras formalidades aduaneras

153. El representante de Timor-Leste dijo además que su país era miembro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) desde el 19 de septiembre de 2003. Todavía no era parte en el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, modificado el 3 de febrero de 2006 (Convenio de Kyoto revisado), pero las prácticas aduaneras nacionales se basaban en las normas internacionales como las establecidas en ese Convenio.

- Aplicación de impuestos internos a las importaciones

154. En Timor-Leste se aplicaban los siguientes impuestos: i) impuesto sobre la renta, ii) impuesto sobre los servicios, iii) impuesto sobre el consumo, iv) impuesto sobre las ventas y v) impuesto en origen. Los tres últimos se aplicaban a las importaciones y recaudaban en el momento de la importación.

155. El impuesto sobre el consumo gravaba los productos enumerados en la Lista II de la Ley de Impuestos y Derechos y en las leyes del presupuesto anual. En la Lista II de la Ley de Impuestos y Derechos figuraban los productos siguientes: i) bebidas alcohólicas, entre las que se incluían la cerveza stout con un contenido de alcohol inferior al 4,5%, la cerveza de malta con otro contenido de alcohol, el vino, el vermut y las demás bebidas fermentadas; ii) el alcohol etílico; iii) el tabaco y los productos relacionados con el tabaco; iv) la gasolina, el petróleo y otros productos relacionados con el petróleo; v) los automóviles de lujo; vi) las armas y municiones; vii) los encendedores para fumadores; viii) las pipas; y ix) las embarcaciones de recreo y aeronaves particulares. El alcance exacto de los productos y los tipos de los impuestos especiales aplicables se establecían anualmente.

156. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley del Presupuesto Estatal de 2023 (Ley Nº 15/2022 de 21 de diciembre de 2022), en 2023 se aplicaba el impuesto sobre el consumo a: i) azúcares y productos de confitería, partidas 1701, 1702, 1703 y 1704 (1,00 dólares EE.UU. por kg); ii) agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y otras bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09, partida 2202 (3,00 dólares EE.UU. por litro); iii) cerveza de malta con un contenido de alcohol inferior al 4,5%, partida 2203.00.10 (2,70 dólares EE.UU. por litro); iv) cerveza de malta con otro contenido de alcohol, partida 2203.00.20 (4,50 dólares EE.UU. por litro); v) vino, vermut y las demás bebidas fermentadas, partidas 2204, 2205 y 2206 (4,50 dólares EE.UU. por litro); vi) tabaco, partidas 2401, 2402 y 2403 (100,00 dólares EE.UU. por kg); vii) vehículos automóviles para el transporte de personas, partida 8703 (10% del valor que exceda de 10.000 dólares EE.UU., 20% del valor que exceda de 25.000 dólares EE.UU. y 30% del valor que exceda de 50.000 dólares EE.UU.); viii) pistolas de perno cautivo para el sacrificio de

animales, partida 9303.90.00 (10% del valor). Las compras por el Estado u otras personas jurídicas públicas de armas y municiones para la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL), la Policía Científica para las Investigaciones Penales (PCIC) y las Fuerzas Armadas de Timor-Leste (FALINTIL) están exentas del pago del impuesto sobre el consumo, así como otros impuestos, derechos y gravámenes.

157. Con arreglo a los artículos 10.1 y 10.2 de la Ley de Impuestos y Derechos, el impuesto sobre el consumo se aplicaba por igual a los productos importados y a los fabricados en el país. En el caso de los productos fabricados en el país, el impuesto se abonaba cuando los productos salían del almacén de un fabricante registrado, y en el de los productos importados, cuando esos productos se despachaban y ponían en circulación. Los productos exportados desde Timor-Leste en los 28 días siguientes a su producción o importación no estaban sujetos al impuesto sobre el consumo. Para ser eximido del pago del impuesto, el contribuyente debía presentar al Banco Central de Timor-Leste (CBTL) documentación que demostrara la exportación de dichos productos. Estaba previsto que el impuesto sobre el consumo se mantuviera en el marco de la reforma fiscal en curso.

158. Las ventas de mercancías y servicios estaban sujetas al impuesto sobre las ventas con arreglo a la Lista III de la Ley. El artículo 15 y la Lista III establecían que el impuesto se aplicaba a: i) las mercancías imponibles importadas a Timor-Leste (2,5%); ii) las mercancías imponibles vendidas en Timor-Leste a partir de la fecha que especificara el Parlamento Nacional (0%); o iii) los servicios imponibles suministrados en Timor-Leste a partir de la fecha que especificara el Parlamento Nacional (0%). En el caso de los productos importados, el impuesto sobre las ventas se pagaba cuando los productos importados se despachaban y ponían en circulación. Las mercancías exentas del pago de derechos de aduana en virtud de la Ley de Impuestos y Derechos, o sujetas a una exención total o parcial prevista en el Código Aduanero, conforme a lo dispuesto en los párrafos 118-120, estaban exentas del impuesto sobre las ventas en virtud del artículo 16 de la Ley de Impuestos y Derechos.

159. El representante de Timor-Leste añadió que su Gobierno era consciente de que las disposiciones relativas al impuesto sobre las ventas aplicables a los productos importados, pero no a los productos de fabricación nacional, eran incompatibles con el requisito del trato nacional contenido en el artículo III del GATT de 1994. Estaba previsto que la reforma fiscal en curso reemplazara el impuesto sobre las ventas por un impuesto sobre el valor añadido (IVA), que se aplicaría por igual a los productos importados y de fabricación nacional.

160. Los pagos realizados por entidades residentes por la compra de mercancías a proveedores no residentes estaban sujetos a un impuesto en origen del 10%, aplicable al importe bruto del pago, como se establecía en el artículo 57 de la Ley de Impuestos y Derechos. Este reglamento se estaba revisando en el marco de la reforma fiscal, ya que incumplía el artículo III del GATT de 1994 sobre la aplicación no discriminatoria de los impuestos.

161. En lo que se refería al IVA, el representante de Timor-Leste aclaró que su Gobierno tenía intención de introducir este impuesto como parte de la reforma fiscal en curso mediante la revisión de la Ley Nº 8/2008 de Impuestos y Derechos, de 30 de junio de 2008, y la aprobación de una nueva Ley del IVA, con la finalidad de lograr los siguientes objetivos: i) modernizar el régimen fiscal y mejorar la recaudación generando información sobre los elementos fundamentales del valor añadido (salarios y beneficios) y mejorando el mantenimiento de registros; ii) aumentar los ingresos de forma más eficiente reduciendo el número de instrumentos fiscales que debía gestionar el Gobierno para recaudar una cantidad determinada de ingresos; de esa forma, Timor-Leste consideraría la posibilidad de sustituir el impuesto sobre las ventas, el impuesto en origen y el impuesto sobre los servicios por el IVA; iii) crear condiciones equitativas y reducir el costo de la actividad empresarial adoptando medidas que repercutieran en el consumo y estableciendo incentivos para el cumplimiento que fueran iguales para todos los sectores de la economía; iv) mejorar el entorno empresarial y atraer la inversión promoviendo una mayor transparencia de las transacciones y convirtiendo al país en una zona franca de facto para las exportaciones; y v) reducir la informalidad en la economía estableciendo mecanismos de crédito/devolución para el sector informal. Esos mecanismos servirían para que el sector informal se integrara en el régimen del IVA. Se aseguraría la cobertura eficaz de la cadena de valor y se definiría el umbral pertinente al nivel adecuado.

162. Para lograr estos objetivos, el Gobierno de Timor-Leste estaba estudiando la posibilidad de adoptar un régimen relativamente sencillo del IVA que incluyera las siguientes características: i) un IVA basado en el consumo en virtud del cual el impuesto recayera sobre los consumidores finales y que incluyera la concesión de bonificaciones a las empresas por los impuestos pagados al

adquirir bienes de capital; ii) que abarcara todos los productos y servicios que entraran en la cadena de valor, obteniendo así un efecto incentivador completo, y que facilitara toda la información que permitiera la realización de reembolsos o la concesión de bonificaciones a la exportación; iii) un tipo único del IVA para evitar "trampas" y reducir la complejidad de su administración; iv) un tipo nulo únicamente para las exportaciones que funcionaría como una herramienta para atraer IED y convertiría al territorio nacional en una zona libre de derechos aduaneros; y v) una exención limitada a los alimentos no elaborados, que no entraran en la cadena de valor y, por tanto, pudieran declararse exentos, lo que beneficiaría a más del 60% del consumo de las familias más vulnerables del país.

163. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante añadió que el proceso legislativo para aprobar la Ley del IVA había empezado ya en 2017. Desde diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda, a través de la Autoridad Tributaria, estaba volviendo a examinar un programa conjunto de reformas presupuestarias y de gestión de las finanzas públicas. Estaba recabando opiniones, observaciones y comentarios de la población, así como de estudios jurídicos, sobre el proyecto de Ley del IVA, antes de presentarlo al Consejo de Ministros y al Parlamento Nacional antes de finales de 2023. El proyecto de Ley del IVA había sido presentado al Grupo de Trabajo. El Plan de Acción para revisar la Ley de Impuestos y Derechos y aprobar la Ley del IVA figura en el ANEXO 15.

164. El representante de Timor-Leste confirmó que, para el 1 de julio de 2025, las leyes, reglamentos y otras medidas de Timor-Leste relativas a los impuestos y cargas internos aplicables a las importaciones estarían en plena conformidad con las obligaciones del país en el marco la OMC, incluido el artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, y que el país aplicaría esas leyes, reglamentos y otras medidas de manera plenamente conforme con esas obligaciones. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Regímenes antidumping, de derechos compensatorios y de salvaguardias

165. El representante de Timor-Leste informó de que su país no había establecido ningún régimen antidumping, de derechos compensatorios ni de salvaguardias. El Gobierno tenía la voluntad política de aplicar y cumplir las disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping), el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. A finales de 2023 se había ultimado la formulación de la política y la legislación sobre medidas comerciales correctivas. La Política y el Decreto Ley sobre Medidas Comerciales Correctivas, que todavía debían ser promulgados y puestos en vigor, se habían compartido con el Grupo de Trabajo.

166. Un Miembro solicitó al Gobierno de Timor-Leste que se comprometiera a no imponer ninguna medida antidumping, compensatoria o de salvaguardia, incluida la iniciación de investigaciones, hasta que las autoridades y la legislación del país fueran notificadas a los comités de la OMC. El representante de Timor-Leste respondió que, como su país no había puesto en vigor aún ningún marco en materia de medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia, una vez que se aprobara y notificara a los comités pertinentes de la OMC una legislación adecuada y compatible con las normas de la OMC podrían adoptarse decisiones de política al respecto.

167. El representante de Timor-Leste confirmó que su Gobierno no aplicaría ninguna medida antidumping, compensatoria ni de salvaguardia hasta que hubiese aplicado y notificado a la OMC las leyes apropiadas, compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Timor-Leste garantizaría la plena conformidad de esa legislación con las disposiciones pertinentes de la OMC, incluidos los artículos VI y XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el Acuerdo sobre Salvaguardias, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Una vez puesta en vigor esa legislación, Timor-Leste solo aplicaría derechos antidumping, derechos compensatorios y medidas de salvaguardia de manera plenamente conforme con las disposiciones pertinentes de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

B. REGLAMENTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES**- Aranceles, derechos y cargas por servicios prestados, aplicación de impuestos internos a las exportaciones**

168. El representante de Timor-Leste informó de que no existían leyes que impusieran derechos e impuestos de exportación. El Gobierno de Timor-Leste no tenía previsto introducir derechos e impuestos de exportación como parte de la reforma fiscal. Se imponía una tasa administrativa de 1 dólar EE.UU. por transacción de exportación.

- Restricciones cuantitativas a la exportación, con inclusión de las prohibiciones, los contingentes y los regímenes de licencias

169. No había ninguna ley que impusiera restricciones cuantitativas a la exportación, prohibiciones o contingentes. Se esperaba mantener esta práctica en el futuro puesto que el Gobierno de Timor-Leste estaba redactando un proyecto de Ley de Promoción de las Exportaciones como parte de la política de inversiones del país.

170. Las personas físicas y jurídicas que exportaban en condiciones de mercado debían inscribirse de conformidad con el Decreto Ley Nº 16/2017 sobre el Registro Mercantil, de 17 de mayo de 2017, como se indica en la sección "Derechos comerciales y requisitos de registro para realizar actividades de importación y exportación".

- Subvenciones a la exportación

171. El representante de Timor-Leste informó de que no había ninguna medida de financiación de las exportaciones, de subvenciones a la exportación o de promoción de las exportaciones en vigor. Sin embargo, estos tipos de medidas podían introducirse en las futuras políticas y leyes económicas encaminadas a estimular las exportaciones. El Gobierno estaba redactando una Ley de Promoción de las Exportaciones y sus reglamentos conexos sobre la base de las normas de la OMC. Si las medidas se introdujeran, cumplirían el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC). Informó además de que no existían leyes que impusieran precios mínimos de exportación, limitaciones voluntarias de las exportaciones o acuerdos de comercialización ordenada.

172. El representante informó además de que los artículos 242 y 243 de la sección II del Código Aduanero (Decreto Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017) establecían un régimen de devolución de los derechos de aduana. En el marco de este régimen, los gravámenes aduaneros pagados al importar materias primas, productos semiacabados, componentes y otras partes y piezas desagregadas destinadas a la transformación industrial o las manufacturas se reembolsaban cuando se exportaba el producto final. En el marco de este régimen, solo se permitía importar mercancías a los operadores debidamente autorizados (agentes de aduanas), según determinara el Comisario de la Autoridad Aduanera. De conformidad con el artículo 32.1 y el artículo 34.1 (a-e) del Código, estos operadores debían: i) contar con una licencia válida de agente de aduanas expedida por el Comisario de la Autoridad Aduanera; ii) disponer de un NIF; iii) demostrar que no se tenían deudas pendientes; y iv) demostrar no haber sido condenados en ningún proceso penal o por infracciones fiscales. El artículo 38 establecía que los agentes de aduanas debían presentar una garantía por un valor mínimo de 10.000 dólares EE.UU. y máximo de 150.000 dólares EE.UU.

173. El representante de Timor-Leste confirmó que cualquier programa de subvenciones aplicado por su Gobierno después de la adhesión se administraría de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, incluido el artículo 27, y que toda la información necesaria sobre las subvenciones a la exportación y otros programas de Timor-Leste que se hubiera de notificar se transmitiría al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

C. POLÍTICAS INTERNAS QUE AFECTAN AL COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS

- Política industrial, con inclusión de las subvenciones

174. El representante de Timor-Leste informó de que uno de los objetivos del Gobierno de su país era promover las manufacturas ligeras, que era uno de los cinco sectores prioritarios de la economía. Sin embargo, la utilización del dólar de los Estados Unidos, los salarios mínimos relativamente altos y el elevado costo de las infraestructuras dificultaban el desarrollo de las manufacturas en Timor-Leste. A medio plazo, el desarrollo de las manufacturas se centraría en desarrollar la capacidad industrial mediante iniciativas para añadir valor a los productos agropecuarios y promover la inversión en la elaboración de alimentos y la fabricación de bebidas destinados al mercado interno, como el café, las nueces de la India y los productos de la silvicultura. Por ello, el Gobierno llevaba diseñando una política industrial y un plan de acción para promover el sector manufacturero desde 2017. Esa política había sido aprobada, mientras que el plan de acción debía ser examinado por el Consejo de Ministros antes de finales de 2023. El representante de Timor-Leste confirmó que la política y el plan de acción no incluirían ninguna subvención o incentivo fiscal para promover las manufacturas en subsectores determinados.

175. Un Miembro formuló una pregunta sobre el Plan de Acción mencionado en el párrafo 174. El representante de Timor-Leste explicó que el sector manufacturero de Timor-Leste se enfrentaba a una serie de limitaciones, entre ellas la limitada capacidad de producción nacional, el escaso acceso a la financiación y la falta de competitividad y aptitudes. En el Plan de Acción para promover el sector manufacturero se preverían las medidas necesarias para fomentar la industrialización a fin de contribuir a la creación de empleo, la transferencia de tecnología y las aptitudes de gestión. En concreto, el Plan se centraría en el desarrollo de la manufactura ligera mediante la utilización eficiente de los recursos, sobre la base de la elaboración de materiales, la fabricación de mercancías y la distribución de mercancías, así como la prestación de servicios o cualquier otra actividad especificada por el Gobierno como posibles contribuciones al desarrollo y la diversificación de la economía nacional, con el doble objetivo de fomentar el sector privado local y promover y atraer inversiones extranjeras directas (IED) en el país para crear oportunidades de empleo y absorber el dividendo infrautilizado actualmente que representan los jóvenes.

176. Un Miembro preguntó cómo tenía previsto el Gobierno de Timor-Leste desarrollar la elaboración de productos agropecuarios y alentar la inversión en la elaboración de alimentos y la fabricación de bebidas. En respuesta, el representante de Timor-Leste se refirió a los capítulos III, V y VI de la Ley de Inversiones Privadas (Ley Nº 15/2017, de 23 de agosto de 2017), que abordaban los derechos y garantías, así como los beneficios especiales y fiscales en favor de los inversores, descritos en la sección "Régimen de inversiones". Esos beneficios se otorgaban a los inversores tanto en el sector agrícola como manufacturero (con inclusión de la elaboración de alimentos). En virtud del Decreto Ley Nº 45/2015, de 30 de diciembre de 2015, el Gobierno también había restablecido el Organismo de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones (TradeInvest Timor-Leste) a modo de ventanilla única para las inversiones privadas.

177. En cuanto a la fabricación de bebidas, el representante también hizo referencia a la firma de un Acuerdo Especial de Inversiones entre el Gobierno y Heineken Asia Pacific en 2015. El Acuerdo, por un valor de 40 millones de dólares EE.UU., incluía beneficios y acuerdos de arrendamiento financiero a largo plazo y allanó el camino para que Heineken construyese una fábrica de producción de bebidas que producía diversas bebidas no alcohólicas, cerveza y agua mineral; se habían creado así 200 empleos directos y 800 indirectos. Timor-Leste conservaba su atractivo para que se realizasen inversiones adicionales en el sector de las bebidas.

178. El representante de Timor-Leste confirmó que su país administraría sus programas de subvenciones de manera plenamente conforme con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, incluidos el artículo 3.1 b) y el artículo 27.2. Toda la información necesaria sobre esos programas de subvenciones se notificaría al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

179. Un Miembro señaló que el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC había sido adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) de la OMC el 17 de junio de 2022. Para que el Acuerdo entrara en vigor, dos terceras partes de los Miembros debían depositar sus

"instrumentos de aceptación" en la Secretaría de la OMC. El Miembro invitó a Timor-Leste a ratificar el Acuerdo en el momento de la ratificación de su Protocolo de Adhesión.

180. En respuesta, el representante de Timor-Leste confirmó que, a menos que el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de 2022 o cualesquiera disciplinas completas posteriores relativas a la pesca ya hubieran entrado en vigor en el momento de la aceptación de su Protocolo de Adhesión, Timor-Leste aceptará el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca ([WT/L/1144](#)) y cualesquiera protocolos posteriores que establezcan disciplinas completas relativas a la pesca al mismo tiempo que acepte su Protocolo de Adhesión a la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de ese compromiso.

- Obstáculos técnicos al comercio, normas y certificación

181. El representante de Timor-Leste informó de que no existían reglamentos técnicos, normas ni procedimientos de evaluación de la conformidad (como actividades de pruebas, inspección o certificación) aplicables a las mercancías nacionales o importadas. Sin embargo, el Gobierno tenía interés en diseñar y aprobar ese tipo de normas para asegurar la conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC y las disposiciones de la ASEAN en ese sentido.

182. En respuesta a una pregunta de un Miembro sobre los planes del Gobierno en cuanto a la elaboración de la legislación y los reglamentos necesarios para cumplir las disposiciones del Acuerdo OTC, el representante informó de que el Gobierno estaba creando el marco jurídico e institucional, que incluiría las leyes, reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad adecuados, de conformidad con el Acuerdo OTC, así como el establecimiento de servicios de información y de un organismo encargado de las notificaciones como mecanismos de transparencia, como requería el Acuerdo OTC. El Plan de Acción para la Puesta en Práctica del Acuerdo OTC figura en el ANEXO 16. En respuesta a una pregunta, el representante explicó que su Gobierno había venido realizando un inventario para determinar qué aspectos concretos debía abarcar la nueva legislación. Entre otras cosas, comprendía: i) el establecimiento del Consejo Nacional de Calidad; ii) la metrología, las normas y los sistemas y procedimientos de evaluación de la conformidad; iii) los servicios de verificación de la metrología; iv) directrices para los sistemas de inspección y certificación; v) los sistemas nacionales de calidad; vi) criterios de acreditación; vii) normas nacionales; y viii) reglamentos técnicos.

183. El representante añadió que, en el marco de esos esfuerzos, se había creado el Instituto de Calidad de Timor-Leste (IQTL), en virtud del Decreto Ley Nº 10/2018, de 9 de abril de 2018, que era la entidad de reglamentación nacional encargada de la calificación, la normalización y la metrología. Su cometido consistía en aplicar y administrar el sistema nacional de calidad y otros sistemas reglamentarios de calificación cuya responsabilidad le confería la ley, promover y coordinar las actividades destinadas a demostrar la credibilidad de las acciones de los agentes económicos, así como idear las medidas necesarias para ejercer su función de laboratorio nacional de metrología. El Instituto estaba en proceso de establecimiento. En respuesta a una pregunta de un Miembro, el representante precisó que las atribuciones del IQTL eran las siguientes:

- implantar, gestionar y coordinar un sistema nacional de calidad, que integre todos los elementos necesarios para mejorar la calidad de los productos y servicios y contribuya a aumentar la productividad, la competitividad y la innovación en los sectores público y privado;
- proponer al Gobierno medidas destinadas a definir políticas nacionales relativas al sistema nacional de calidad, en los ámbitos de la normalización, la calificación y la metrología;
- establecer y administrar el laboratorio nacional de metrología, desde un punto de vista científico y práctico, elaborando, manteniendo y desarrollando normas nacionales relativas a las unidades de medida y su correlación con el sistema internacional, y promoviendo su difusión en todo el territorio nacional;
- establecer y gestionar el sistema de control metrológico oficial para los aparatos de medición y reconocer a las entidades competentes para el ejercicio delegado de ese control, cuando ello

resulte necesario para garantizar una cobertura nacional y coordinar la red formada por dichas entidades;

- establecer las marcas de identificación de la calidad del sistema nacional de calidad y asegurar su respectiva gestión;
- desarrollar y promover actividades de formación en el ámbito de la calidad, a saber, en las esferas de la calificación, la normalización y la metrología;
- garantizar y desarrollar la calidad mediante el establecimiento de protocolos y asociaciones estratégicas con entidades públicas y privadas, así como entidades científicas y tecnológicas, que de manera voluntaria o en el desempeño de sus funciones inherentes aúnen esfuerzos para definir principios y medios en favor de las normas de calidad;
- coordinar, cualificar y reconocer a entidades de los sectores público y privado como organismos de normalización sectorial en los que el IQTL delegue funciones de normalización técnica en sectores de actividad específicos;
- desarrollar iniciativas de cooperación y prestación de servicios a entidades nacionales y extranjeras interesadas en el ámbito de la calidad;
- asegurar y promover la participación de Timor-Leste como miembro de organizaciones, grupos de trabajo y otros organismos internacionales en el ámbito de sus facultades y competencias; y
- asegurar la participación de Timor-Leste como miembro de las organizaciones internacionales de metrología y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ello, a saber, la participación en los respectivos trabajos.

184. En cuanto al plan para llegar a ser miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el representante de Timor-Leste añadió que el IQTL estaba facultado para adherirse a la ISO, pero la institución no estaba aún plenamente operativa. El IQTL había estado colaborando con la Autoridad de Inspección y Supervisión de las Actividades Económicas, Sanitarias y Alimentarias (AIFAESA) para facilitar reuniones con la ISO a fin de asegurar que Timor-Leste cumplía las normas establecidas por dicha organización. Esos esfuerzos reflejaban la firme voluntad de Timor-Leste de convertirse en miembro de la ISO a corto plazo. El Gobierno, a través del IQTL, desplegaría los esfuerzos necesarios para promover la coordinación con los órganos competentes (a saber, el Ministerio de Turismo, Comercio e Industria; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura; el Ministerio de Obras Públicas; la AIFAESA; la Autoridad Nacional del Petróleo y los Recursos Minerales, así como el sector privado) a fin de asegurar la armonización con las normas de la ISO. Al mismo tiempo, para lograr la conformidad con las normas de la ISO, el IQTL precisaba más asistencia para desarrollar los medios necesarios, en particular establecer un laboratorio de normalización para facilitar las actividades comerciales y fortalecer la capacidad de recursos humanos en determinados ámbitos.

185. Por lo que se refería al establecimiento del servicio de información OTC, el representante añadió que su Gobierno había establecido el servicio de información OTC como parte de la estructura del IQTL:

Nombre:	Rosito de Sousa Monteiro
Cargo:	Presidente del Instituto de la Calidad de Timor-Leste
Dirección:	Comoro, Av. Pres. Nicolau Lobato, Díli, Timor Plaza, 3rd Floor, IQTL Office
Teléfono:	+670 33 10 158 (fijo); +670 7756 0067 (móvil)
Correo electrónico:	iqtl2022@gmail.com; sousarosito82@gmail.com

186. Además, informó de que, a fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo OTC, Timor-Leste tendría que establecer una infraestructura de evaluación de la conformidad, que debería incluir también la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad de las pruebas, la calibración y la inspección; establecer un organismo encargado de la notificación; y abordar la participación en las actividades de los organismos internacionales de normalización.

187. Un Miembro pidió además que se confirmara si el Gobierno de Timor-Leste tenía previsto establecer un único organismo de acreditación, independiente de los organismos de evaluación de la conformidad y los institutos de pruebas. En respuesta, el representante de Timor-Leste confirmó que para 2025 se establecería un único organismo nacional de acreditación independiente de los organismos de evaluación de la conformidad.

188. Además, en respuesta a la solicitud de un Miembro de que se establecieran procedimientos para la celebración de consultas públicas transparentes con las partes interesadas, que incluyeran la notificación de los proyectos de propuestas legislativas en consonancia con las obligaciones en materia de transparencia previstas en el Acuerdo OTC, el representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno estaba decidido a hacerlo. Su Gobierno también estaba trabajando en el establecimiento, para mayo de 2024, de un mecanismo de consultas públicas transparentes para todos los proyectos de propuestas legislativas referentes a reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad.

189. En respuesta a la pregunta de un Miembro de si el Gobierno solicitaría asistencia técnica para participar en las actividades de los organismos internacionales de normalización, por ejemplo, en las del Codex Alimentarius, el representante informó de que, desde que Timor-Leste había pasado a ser miembro del Codex en febrero de 2018, estaba abierto a solicitar asistencia técnica, a saber, sobre: i) inocuidad y calidad de los alimentos y normas aplicables; y ii) el Programa de Formación de Instructores en la esfera de los OTC.

190. El representante de Timor-Leste confirmó que su país aplicaría progresivamente el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC de conformidad con el Plan de Acción que figura en el ANEXO 16. También confirmó que, durante el período de transición, las medidas vigentes se aplicarían de manera no discriminatoria, es decir, otorgando trato nacional y trato NMF a todas las importaciones. Las medidas vigentes en el momento de la adhesión y ya compatibles con las disposiciones del Acuerdo OTC de la OMC no estarían sujetas a períodos de transición. Timor-Leste se aseguraría de que ninguna modificación introducida en sus leyes, reglamentos y prácticas durante el período de transición tuviera como resultado un grado de compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo menor que el existente en la fecha de adhesión. La plena aplicación del Acuerdo OTC de la OMC comenzaría a partir del 1 de enero de 2026 sin recurrir a ningún otro período de transición. El Grupo de Trabajo tomó nota de este compromiso.

- Medidas sanitarias y fitosanitarias

191. Las medidas sanitarias y fitosanitarias de Timor-Leste se regulaban antes en virtud del Decreto Ley Nº 21/2003 sobre Cuarentenas y Controles Sanitarios de las Mercancías Importadas y Exportadas, de 31 de diciembre de 2003. El Decreto Nº 1/2006 del Gobierno, de 20 de septiembre de 2006, había establecido las normas y procedimientos de aplicación del Decreto Ley Nº 21/2003 sobre la Importación y Exportación de Mercancías Sujetas a Cuarentena (inspección, aislamiento, observación, tratamiento, detención, prohibición de entrada en el país, destrucción y expedición). Esa legislación había sido sustituida por el Decreto Ley Nº 36/2023 sobre la Preservación de los Vegetales y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, y el Decreto Ley Nº 41/2023 sobre la Salud Animal y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023 (en vigor desde el 1 de septiembre de 2023) y seguía aplicándose solo parcialmente hasta que se hubieran adoptado los reglamentos necesarios para la aplicación de los nuevos decretos leyes.

192. La Dirección General de Cuarentena y Bioseguridad (DGQB), dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, administraba las leyes y los reglamentos sobre MSF. Las funciones y competencias de la Dirección estaban definidas en los artículos 7 y 10 del Decreto Ley Nº 41/2023 y en los artículos 6 y 9 del Decreto Ley Nº 36/2023. El Jefe del Servicio Veterinario encargado de la Salud Animal y la Cuarentena (CVO) y el Oficial Nacional de Protección Fitosanitaria (NPPO), pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, se ocupaban de coordinar la aplicación de los reglamentos en materia de salud animal y cuarentena y en materia de medidas fitosanitarias, respectivamente.

193. El Ministerio de Salud era la autoridad encargada de la inocuidad de los alimentos en Timor-Leste y se ocupaba de las medidas en ese ámbito. La Autoridad de Inspección y Supervisión de las Actividades Económicas, Sanitarias y Alimentarias (AIFAESA), establecida por el Decreto Ley Nº 26/2016, de 29 de junio de 2016, era responsable de velar por el cumplimiento del Decreto Ley

Nº 28/2011 sobre el Reglamento de la Industria y la Comercialización de Productos Alimenticios, de 20 de julio de 2011, en virtud del cual las importaciones de productos alimenticios elaborados estaban sujetas a la reglamentación sanitaria, bajo la autoridad del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio e Industria (MCI).

194. El representante de Timor-Leste informó de que su país se había convertido en miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en noviembre de 2010 y de la Comisión del Codex Alimentarius en febrero de 2018. Desde entonces participaba activamente en sus actividades y trabajaba para velar por el cumplimiento de las normas correspondientes.

195. Timor-Leste aún no era parte en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante añadió que el Gobierno había hecho importantes esfuerzos para cumplir lo dispuesto en la CIPF participando en calidad de observador. Sin embargo, el Gobierno reconocía algunos problemas que le impedían cumplir plenamente los requisitos de la CIPF (por ejemplo, el suministro de infraestructuras básicas para crear un laboratorio nacional). Esos problemas eran los siguientes: la falta de instalaciones básicas, como un laboratorio e instalaciones de cuarentena en los puntos de entrada (para el tratamiento, el aislamiento durante el período de incubación, etc.); la falta de recursos humanos cualificados en esferas específicas, en particular para realizar pruebas a los productos importados; y la falta de la financiación permanente necesaria para el funcionamiento de las instalaciones de cuarentena. Dicho eso, Timor-Leste había demostrado su pleno compromiso con la CIPF a través de su adhesión a la Comisión de Protección Fitosanitaria para Asia y el Pacífico (APPPC) en noviembre de 2012 con la esperanza de adherirse a la CIPF una vez que haya establecido la infraestructura necesaria y fortalecido su capacidad en materia de recursos humanos. Timor-Leste estaba abierto a recibir la asistencia de los Miembros para acelerar su adhesión a la CIPF. El punto de contacto de Timor-Leste para la CIPF figuraba en el sitio web de la CIPF desde 2008.¹

196. El representante informó de que Timor-Leste declaraba estar libre de fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina, rabia y gripe aviar de alta patogenicidad (gripe aviar) e imponía restricciones a la importación de animales y productos que puedan introducir esas enfermedades. En consecuencia, por motivos de salud pública, estaba prohibida la importación de los siguientes productos: i) cualquier proteína destinada a la alimentación animal que contenga carne en polvo, harina de hueso, polvo de sangre o grasa de tejidos de mamíferos; ii) carne avícola en polvo para la alimentación de rumiantes; iii) cualquier producto bovino, ovino o caprino de animales que presente síntomas clínicos de encefalopatía espongiforme; iv) cualquier animal o producto derivado de animales que presente síntomas clínicos de determinadas enfermedades, por ejemplo, la fiebre aftosa y la gripe aviar; y v) grasa sin elaborar. Además, no podían expedirse permisos de importación para las siguientes mercancías: i) cualquier mercancía enumerada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (artículo 72); ii) cualquier mercancía cuyo país o zona de origen o procedencia presente casos de plagas o enfermedades que estén sujetos a cuarentena (artículo 72); y iii) semillas exóticas incluidas en una lista aprobada por orden ministerial (artículo 82).

197. Salvo los productos prohibidos indicados en el párrafo 196, cualquier producto agropecuario (esto es, animales, plantas, productos animales o vegetales u otros productos derivados) podía importarse a Timor-Leste previa obtención de un permiso de importación de la DGQB (artículos 33 y 35 de los Decretos Ley N^{os} 36/2023 y 41/2023, respectivamente). Ese requisito se basaba en las listas aprobadas por la OMSA y la CIPF. Las solicitudes de permisos de importación debían ir acompañadas de un certificado de origen. Para obtener un permiso de importación habían de cumplirse determinadas condiciones y prescripciones, relacionadas, entre otras, con las siguientes cuestiones: especificación del origen, inspecciones, tratamientos, puntos de entrada y salida, pruebas, análisis y ensayos, o aislamiento en una instalación de cuarentena en el país de exportación. También debían cumplirse los requisitos de importación específicos del caso y las normas y recomendaciones internacionales pertinentes.

198. En respuesta a la solicitud de información adicional sobre ese procedimiento formulada por un Miembro, el representante explicó que en el formulario de solicitud se debían indicar la dirección y los datos de contacto del exportador y del importador, así como el país de origen. Para cada producto importado, el solicitante debía precisar el país de origen, los nombres comunes de los productos, los nombres científicos, una descripción de los productos y la cantidad o el volumen que se fuera a

¹ <https://www.ippc.int/en/countries/timor-leste/>.

importar. En todos los casos, el importador debía proporcionar detalles del itinerario, el modo de transporte y la fecha prevista de llegada. El importador también debía especificar si tenía acceso a un centro autorizado de cuarentena registrado. Cuando el importador (o el agente de aduanas) presentaba el formulario de solicitud cumplimentado, la DGQB se ponía en contacto con su homólogo en el país exportador para solicitar una verificación. Para cada importación se debía obtener un permiso distinto y completar todo el proceso de verificación. La decisión de otorgar un permiso de importación se adoptaba en un plazo de tres días laborales.

199. El representante también explicó que la importación podía realizarse inmediatamente después de la obtención de un permiso de importación. El permiso era válido hasta la llegada de las mercancías importadas. En el momento de realizar la importación, el permiso de importación debía presentarse a la Autoridad Aduanera para efectuar el despacho de aduana con arreglo al sistema SIDUNEA World. La Autoridad Aduanera tenía el derecho a retener cualquier producto si no existía un permiso conforme a esos criterios para el producto en cuestión. Al mismo tiempo, el Gobierno estaba resuelto a cumplir las disposiciones del Acuerdo MSF, en particular el Anexo C 1) b). En respuesta a la invitación de un Miembro a reconsiderar ese procedimiento de importación y sustituirlo por un sistema de países y establecimientos autorizados que sea menos gravoso, más transparente y pueda proporcionar las garantías adecuadas, el representante de Timor-Leste confirmó que el procedimiento existente se revisaría en cuanto se disponga de los medios necesarios para asegurar la conformidad con las normas internacionales.

200. En respuesta a una pregunta sobre el requisito de que las solicitudes de permisos de importación fueran acompañadas de un certificado de origen, el representante de Timor-Leste se refirió a las condiciones mínimas de la infraestructura nacional para evitar brotes de enfermedades en el país. En ese contexto, el Gobierno consideraba que exigir un certificado de ese tipo sería la medida más eficaz para evitar la importación de enfermedades. El representante creía que ese requisito era compatible con las disposiciones previstas en las normas de la OMSA y la CIPF.

201. Para obtener un permiso de importación, el importador debía pagar los derechos y cargas correspondientes y presentar los documentos siguientes ante la DGQB para poder despachar la carga:

- en el caso de animales vivos, un certificado zoosanitario expedido por la autoridad competente del país exportador y firmado por la oficina de servicios veterinarios que realizó la inspección;
- en el caso de plantas y productos derivados, un certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del país exportador y firmado por el funcionario competente que realizó la inspección. Para las plantas vivas también había que cumplir un requisito de cuarentena previa a la expedición en el país de exportación y un requisito de cuarentena posterior a la importación.

202. El Decreto Ley Nº 21/2003 también había establecido normas específicas aplicables a las siguientes importaciones:

- animales vivos: los animales importados debían estar sujetos a un período de cuarentena mínimo de 14 días (artículo 30) y a una inspección veterinaria (artículo 31);
- huevos para incubar: las importaciones debían proceder de un país que haya sido aprobado por la Dirección de Servicios de Cuarentena y Bioseguridad (artículo 33);
- huevos de gallina para el consumo: debían estar libres de enfermedades o contaminación, como plumas o heces (artículo 34);
- pescado fresco para el consumo humano: no era necesaria una licencia de importación (artículo 35.1);
- pescado seco: las importaciones debían inspeccionarse a su llegada para detectar una posible infestación de insectos (artículo 35.3);
- podrá importarse sin restricciones carne en conserva o en recipientes herméticamente cerrados que no requieran refrigeración (artículo 36.1);

- podrá importarse carne fresca sin restricciones siempre que: a) esté envasada en paquetes o contenedores herméticamente cerrados, su peso sea inferior al 5% del peso de carne del producto y no requiera refrigeración para preservar su calidad, o b) sea carne enlatada que no requiera refrigeración (artículo 36.2);
- leche y productos lácteos: la leche debía ser pasteurizada (artículo 37);
- vacunas para animales: para algunas vacunas debía obtenerse una autorización previa de la Dirección de Servicios de Cuarentena y Bioseguridad (artículo 38); era obligatorio obtener una licencia de importación;
- pieles de animales y productos derivados: los productos acabados importados se sometían a una inspección veterinaria (artículo 39);
- plantas vivas y productos de origen vegetal: debían acompañarse de un certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del país exportador (artículo 42.1);
- importaciones de maquinaria, equipos y vehículos usados: debían someterse a una inspección sanitaria (artículo 44); y
- importación de muestras de suelo: era preciso obtener una licencia de importación (artículo 45).

203. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre esas normas, el representante de Timor-Leste informó de que el Gobierno estaba revisando el marco vigente a la luz del Acuerdo MSF. En relación con el punto vii), aclaró que las prescripciones relativas al peso para las importaciones de carne fresca se utilizaban meramente con fines estadísticos para calcular la capacidad de consumo anual de carne en el país. La medida se revisaría en cuanto se dispusiera de los medios necesarios de conformidad con las normas internacionales.

204. El representante añadió que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura y el Ministerio de Hacienda podían publicar una orden ministerial conjunta para fijar los derechos de los servicios de concesión de permisos de importación, expedición de certificados o cualquier otro derecho por la prestación de servicios. Hasta la fecha no se había adoptado ninguna medida relativa a la introducción de esos derechos. Si se cobraran derechos en el futuro, se basarían en la recuperación de los costos reales, en consonancia con el artículo VIII y X del GATT de 1994, al tiempo que el Gobierno se aseguraría de que el método para calcular esos costos esté a disposición del público o al menos disponible previa solicitud. Ese método se aplicaría de manera transparente.

205. El representante de Timor-Leste añadió que su país importaba en ese momento más de 250 productos de muchos países. Para cada importación debía realizarse un análisis del riesgo a fin de evaluar el riesgo que suponía la importación y establecer la necesidad de imponer condiciones para gestionar ese riesgo. El procedimiento de análisis del riesgo se aplicaba de conformidad con las normas establecidas por el Codex, la OMSA y la CIPF. Al mismo tiempo, debido a la falta de infraestructura y de recursos humanos adecuados en ese momento, los procedimientos se ajustaban a las condiciones nacionales, con arreglo a las cuales los procedimientos científicos, incluidas las medidas de inspección previa a la expedición de los productos, se definían conjuntamente con el país exportador. Antes de elaborar un análisis del riesgo planteado por la importación, ambos países debían firmar un acuerdo para abordar sus preocupaciones en relación con la aplicación de medidas de diagnóstico y evaluación del riesgo. El representante confirmó de nuevo el compromiso de su Gobierno de tomar en consideración las medidas sanitarias o fitosanitarias equivalentes de los Miembros exportadores, de conformidad con las normas internacionales de la OMSA y la CIPF.

206. Añadió que su Gobierno era consciente de que las prescripciones sanitarias y fitosanitarias eran un ámbito de competencia que requería disponer de personal con la debida formación para lograr una plena observancia de los decretos leyes. Se confiaba en que el proceso de adhesión a la OMC permitiera reforzar esa formación para afrontar las cuestiones sanitarias y fitosanitarias. El Gobierno estaba resuelto a proseguir las reformas necesarias para garantizar la conformidad con las normas del Codex, la OMSA y la CIPF en su proceso de elaboración de los reglamentos de aplicación en materia sanitaria y fitosanitaria. El representante recordó además que el Decreto Ley N° 21/2003 había sido derogado al adoptarse los Decretos Leyes N°s 36/2023 y 41/2023, que habían sido

redactados con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (IFC) (miembro del Grupo Banco Mundial) y presentados al Grupo de Trabajo para su examen previo. El Gobierno también estaba preparando un plan de acción para la aplicación de las obligaciones en virtud de la CIPF. El representante informó asimismo de que el Gobierno había elaborado el Plan de Acción para la Puesta en Práctica del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo MSF), que se había facilitado al Grupo de Trabajo en el documento [WT/ACC/TLS/12](#) y aparecía recogido en el **ANEXO 18**. De conformidad con la estrategia 3 de ese Plan de Acción, su Gobierno estaba decidido a contar para 2025 con una metodología de evaluación de riesgos compatible con las normas de la OMC y que estaría basada en los principios establecidos en el Codex, la OMSA y la CIPF.

207. El representante añadió que antes no podían expedirse permisos de importación relativos a plantas vivas a particulares o a empresas privadas (es decir, a personas que no trabajaban para la administración pública, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Gobierno que participen en proyectos para mejorar la agricultura y los bosques). Debía obtenerse una autorización para importar los tipos de semillas siguientes: i) arroz, ii) maíz, iii) café, iv) mandioca (yuca), v) banano, vi) cítricos, vii) mango, viii) coco, ix) *phaseolus vulgaris* (fríjol/judía), x) judías de la especie vigna, xi) ajo, xii) cebolla, xiii) patata común, xiv) piña, y xv) aguacate. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante aclaró que esos productos básicos se habían seleccionado con arreglo a las normas establecidas por la CIPF, pues se había constatado que entrañaban mayores riesgos para la salud de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales. Otros productos que no formaban parte de esa lista se habían identificado como de menor riesgo para la salud y, por lo tanto, no requerían inspecciones previas al despacho antes de la importación. Los riesgos que representaban se habían determinado de conformidad con las listas elaboradas por la CIPF. Añadió que esa prohibición se había eliminado con la adopción del Decreto Ley N° 36/2023. De conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley, los particulares y las empresas privadas podían importar plantas vivas y productos de origen vegetal a Timor-Leste a condición de estar en posesión de a) un permiso de importación (licencia), cuando lo exigiera la ley, b) un certificado fitosanitario expedido por el país de exportación, cuando lo exigiera la ley, y c) cualquier otro documento que prescribieran la ley, sus reglamentos o cualquier otra legislación comercial o aduanera.

208. En referencia al Decreto Ley N° 26/2016, un Miembro preguntó si estaba previsto que la AIFAESA fuera también el organismo nacional de normalización. El representante de Timor-Leste respondió que la AIFAESA se había establecido en virtud del Decreto Ley N° 26/2016, de 29 de junio de 2016, con el mandato de garantizar las actividades de control de la calidad de los productos alimenticios, de las condiciones de transporte, de las condiciones sanitarias y de las condiciones de los lugares de producción y venta. Al mismo tiempo, como se indicaba en la sección "Obstáculos técnicos al comercio", el Instituto de Calidad de Timor-Leste (IQTL) era el organismo encargado de definir las normas nacionales. La AIFAESA se encargaba de ejecutar las normas nacionales definidas por el IQTL realizando labores de inspección y supervisión.

209. En respuesta a una pregunta sobre los reglamentos de aplicación relativos al incumplimiento, el representante de Timor-Leste informó de que el CVO y el NPPO estaban facultados para notificar casos de incumplimiento. La DGOB trabajaba en coordinación con las direcciones pertinentes para realizar inspecciones de la calidad de los productos, y sus resultados serían presentados al CVO y el NPPO para que emprendieran actuaciones ulteriores. Ese procedimiento se implantaría de manera gradual con la ayuda de expertos en la materia para garantizar su plena compatibilidad con el Acuerdo MSF.

210. Un Miembro también pidió al representante de Timor-Leste que proporcionara información sobre la coordinación entre la AIFAESA, el CVO y el NPPO, en particular en lo que se refería al servicio de información sobre MSF, y que se indicase cualquier otra esfera propuesta de coordinación entre el CVO y el NPPO, aparte de las esferas coordinadas a través de la AIFAESA, descritas en los artículos 18 y 19 de los Decretos Leyes N°s 36/2023 y 41/2023, respectivamente. El representante de Timor-Leste aclaró que el CVO y el NPPO coordinaban sus actividades directamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura. Asimismo, trabajaban en coordinación con la AIFAESA para realizar inspecciones y detectar productos con fecha de caducidad vencida, a fin de garantizar la protección de la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales. Por otro lado, la DGQB ejercía su función de control de todos los productos que entraban por la frontera con arreglo al procedimiento de incubación, en función del resultado de las muestras

obtenido en el laboratorio. Aparte de las esferas coordinadas a través de la AIFAESA, se definieron esferas de coordinación en otros ámbitos con las siguientes instituciones:

- Ministerio de Salud: todos los medicamentos para animales debían ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud;
- Ministerio de Turismo, Comercio e Industria (MCI): el MCI proporcionaría el certificado de normas de origen para los productos de origen animal y vegetal destinados a la exportación;
- Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE): para todas las actividades comerciales, incluidas las de importación y exportación, era necesario obtener una licencia comercial del SERVE en la que debía figurar una lista de actividades de exportación/importación; ese documento sería exigido para la inspección por la Autoridad Aduanera;
- Organismo de Promoción de las Inversiones (TradeInvest): las autoridades competentes también coordinarían con TradeInvest sus actividades relacionadas con los certificados de inversión;
- Cámara de Comercio de Timor-Leste (CCI-TL): debía seguir las normas establecidas por el CVO y el NPPO en lo que se refería a los procedimientos de exportación e importación de animales y productos de origen animal, y de vegetales y productos de origen vegetal.

211. En cuanto al servicio de información sobre MSF, el Gobierno había establecido un único punto de contacto a efectos de información ("servicio de información"), que en ese momento se encontraba en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, y cuyos datos de contacto eran los siguientes:

a) Jefa del Servicio Veterinario (SVO):

Nombre: Dra. Joanita Bendita da Costa Jong
 Cargo: Directora Nacional de Servicios Veterinarios/Delegada Permanente ante la OIE (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura)
 Dirección: Presidente Nicolao Lobato Nº 5 Comoro - Dili (Timor-Leste)
 Teléfono: +670 7754 6394
 Correo electrónico: katitadog_2001@yahoo.com, lihirika@gmail.com

b) Oficial Nacional de Protección Fitosanitaria (NPPO):

Nombre: Sr. Americo Alves Brito
 Cargo: Jefe del Departamento de Protección Fitosanitaria, Departamento de Protección Fitosanitaria para la Agricultura y la Horticultura, Dirección Nacional de Agricultura y Horticultura (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura)
 Dirección: Presidente Nicolao Lobato Nº 5 Comoro - Dili (Timor-Leste)
 Teléfono: +670 7766 5056
 Correo electrónico: bamerico@hotmail.com, ameroalvesbrito@yahoo.com

El CVO actuaba como punto de contacto de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), mientras que el NPPO sería el punto de contacto oficial de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) cuando Timor-Leste pasara a ser parte contratante en la CIPF. En cuanto a las demás MSF, como las relativas a la inocuidad de los alimentos, los servicios de información designados actuaban en coordinación con el Ministerio de Salud, la AIFAESA y el Instituto de Calidad de Timor-Leste (IQTL) para facilitar sus aportaciones en ese ámbito.

212. El representante añadió que las autoridades encargadas de presentar notificaciones a la OMC y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia estarían bajo la autoridad de la DGQB. De acuerdo con el artículo 10 1) x) del Decreto Ley Nº 41/2023 y el artículo 9 u) del Decreto Ley Nº 36/2023, la DGCB, en coordinación con las direcciones y entidades nacionales competentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, era la encargada de la presentación de todas las notificaciones internacionales obligatorias a la OMSA y a

otros asociados internacionales dedicados a la salud animal y la cuarentena, así como de todas las notificaciones relacionadas con la salud vegetal y la cuarentena, incluidas las notificaciones en el contexto de la OMC.

213. Un Miembro preguntó también sobre las prescripciones en materia de transparencia vigentes en Timor-Leste, por ejemplo, con respecto a la publicación de proyectos de reglamentos relativos a las MSF, la solicitud de observaciones de las partes interesadas y la incorporación de esas observaciones antes de promulgar la reglamentación definitiva. El representante de Timor-Leste respondió que el Gobierno no había elaborado aún ningún proyecto de reglamento sobre prescripciones en materia de transparencia. No obstante, habida cuenta de su firme determinación de armonizar su marco normativo con las normas internacionales establecidas por el Codex, la OMSA y la CIPF, Timor-Leste se aseguraría de que, para cualquier proyecto de reglamento, se consultara a los asociados pertinentes en una etapa temprana a fin de recabar sus observaciones antes de la publicación y adopción de esos reglamentos. Asimismo, el representante informó de que, si bien el Gobierno aún disponía de un sistema manual para la publicación de las listas de mercancías sujetas a control veterinario y fitosanitario, incluidas aquellas que requerían permisos de importación, certificados veterinarios y fitosanitarios o cualquier otra documentación, estaba resuelto a adoptar una plataforma en línea para publicar esas listas en el futuro.

214. Un Miembro pidió asimismo al representante de Timor-Leste que se explicase dónde se establecerían las condiciones para importar animales y productos de origen animal, así como vegetales y productos de origen vegetal. El representante de Timor-Leste informó de que esas prescripciones en materia de importación se establecerían en una orden ministerial. Esa orden también se referiría a los productos derivados. El representante confirmó que dichas prescripciones serían compatibles con las normas de la OMSA y la CIPF. El proyecto de orden había sido transmitido al Grupo de Trabajo.

215. Además, un Miembro destacó que, de conformidad con la CIPF, correspondía a la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de la parte exportadora garantizar que los productos cumplieran las prescripciones de la parte importadora. Igualmente, la inspección veterinaria de las mercancías debía ser responsabilidad de las autoridades veterinarias del país exportador. Un Miembro pidió al representante de Timor-Leste que aclarase si se solicitarían inspecciones previas al despacho y dónde. El representante de Timor-Leste reconoció el asunto planteado por un Miembro. Informó de que, para ser precavidos ante los riesgos que podían entrañar los brotes de enfermedades de cualquier país de importación, Timor-Leste reconocía la importancia de las medidas preventivas. En la práctica, a través del CVO y el NPPO, Timor-Leste exigía la realización de inspecciones previas al despacho previa solicitud o solo cuando había un brote de enfermedad en un país de importación, donde la inspección previa sería realizada por la autoridad competente. Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometía a sustituir el sistema en vigor con la asistencia que los Miembros le prestaran y suministrar servicios básicos para evitar brotes de enfermedades en el país, de conformidad con los procedimientos establecidos en el marco de la OMSA y la CIPF. Además, el representante de Timor-Leste confirmó que, en caso de que un país exportador tenga un brote localizado de una enfermedad o plaga, el Gobierno permitiría la regionalización de las importaciones de zonas declaradas libres de la enfermedad o la plaga, siempre que las mercancías importadas estén debidamente certificadas con arreglo a las normas establecidas en el marco de la OMSA y la CIPF. Si un país exportador aplicara métodos de aislamiento regional para garantizar la centralización, el control y la atenuación de ese tipo de brotes, el Gobierno de Timor-Leste permitiría las importaciones de productos de ese país, incluidas las semillas, siempre que cuenten con la documentación sanitaria/fitosanitaria adecuada.

216. En relación con los productos objeto de prohibiciones de importación enumerados en el párrafo 196, un Miembro preguntó si Timor-Leste tendría en cuenta el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas de los Miembros y pidió que, de ser así, se describiera el proceso para determinar la manera en que Timor-Leste evaluaría las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades de los Miembros exportadores. En respuesta a ello, el representante de Timor-Leste aclaró que su Gobierno se proponía tener en cuenta la situación y la prevalencia de las plagas de las plantas de un Miembro exportador al evaluar los riesgos fitosanitarios de los productos importados de conformidad con las normas fitosanitarias internacionales sobre análisis del riesgo de plagas (NIMF 2, Marco para el análisis de riesgo de plagas; NIMF 11, Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias; NIMF 21, Análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas). El Gobierno también tenía la intención de adoptar y seguir las normas internacionales para evaluar las zonas libres de

enfermedades animales y las zonas de escasa prevalencia de enfermedades animales de los Miembros exportadores. Entre otras cosas, Timor-Leste se proponía adoptar las disposiciones pertinentes del [Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA](#) y cumplir las normas fitosanitarias internacionales para evaluar las zonas libres de plagas de las plantas (NIMF 4, Requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas), las zonas de escasa prevalencia de plagas (NIMF 22, Requisitos para el establecimiento de áreas de escasa prevalencia de plagas) y la situación de las plagas de las plantas (NIMF 8, Determinación de la condición de una plaga en un área, en particular la sección 5, Intercambio de información entre las ONPF sobre la condición de una plaga) de los Miembros exportadores. Timor-Leste tenía pendiente elaborar medidas para formular determinaciones en materia de regionalización, dentro del período de transición solicitado para la aplicación del Acuerdo MSF.

217. En respuesta a la petición de un Miembro de precisar en qué consistía el procedimiento de inspección previo al despacho, el representante de Timor-Leste añadió que, en todos los casos, el importador debía obtener un permiso de importación antes de la inspección previa al despacho. El procedimiento incluía la realización de un examen exhaustivo de las mercancías importadas basado en las autorizaciones expedidas a los importadores. El Gobierno había construido un laboratorio normalizado para realizar pruebas básicas en el país. Sin embargo, si una prueba exigiese un procedimiento complejo, la muestra se enviaría al laboratorio designado en otro país o a cualquier sitio acreditado con arreglo a las normas de la OMSA/CIPF, para garantizar que los productos no supondrían ningún riesgo. Los procedimientos de prueba establecidos, incluido el procedimiento de toma de muestras y el procedimiento de recurso, eran los siguientes: i) medidas de cuarentena para inspecciones y retención; ii) procedimientos relativos al tratamiento, la instalación y el aislamiento (entre 14 y 21 días); iii) procesos de requisa (medidas que debían adoptarse en el puerto); y iv) si se determinara que algún producto presenta alguna enfermedad que entrañe un riesgo para la salud de las personas o de los animales o la preservación de los vegetales, se adoptarían las medidas necesarias para reembarcar o incinerar los productos en cuestión. Los procedimientos y métodos de toma de muestras establecidos, en particular el proceso de toma de muestras y el procedimiento de recurso para interponer una reclamación, seguían las directrices establecidas en el marco de la OMSA/CIPF. El representante añadió que, aunque Timor-Leste todavía no era miembro de la ISO, el Gobierno haría lo necesario para fomentar la coordinación y la colaboración con los organismos competentes de forma que se adapten a las normas de las ISO y las cumplan, en particular las disposiciones detalladas en la norma ISO 17025: Laboratorios de ensayo y calibración. No obstante, para cumplir las normas de la ISO, el Gobierno todavía precisaba más asistencia para establecer los medios necesarios, en particular un laboratorio acreditado a nivel internacional.

218. El representante añadió que, en el marco de la aplicación de los artículos 46 y 48 de los Decretos N^{os} 36/2023 y 41/2023, respectivamente, podrían adoptarse las siguientes medidas de cuarentena: i) inspección; ii) aislamiento; iii) observación; iv) tratamiento; v) investigación; vi) pruebas; vii) embargo; o viii) eliminación. Cualquier incidente que afectase al control sanitario o tuviese repercusiones en él debía ser comunicado de manera inmediata a las direcciones pertinentes, que decidirían sobre las medidas que debieran adoptarse.

219. Un Miembro pidió que se confirmase si el tratamiento posterior a la entrada para las importaciones de productos hortícolas era una opción incluida en el "tratamiento fitosanitario para eliminar el riesgo" en el marco del Decreto Ley N^o 36/2023. El representante de Timor-Leste confirmó que así era.

220. Un Miembro recalcó que, según el Decreto Ley N^o 41/2023, aunque la DGQB podría regular el uso de coccidiostáticos, antibióticos, hormonas estimuladoras del crecimiento y otras medicinas y sustancias terapéuticas en los piensos, el uso de antibióticos en la producción de animales (incluido, en particular, el uso de estimuladores del crecimiento) era un factor importante del desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. Ese Miembro invitó al Gobierno de Timor-Leste a prohibir el uso de antibióticos para estimular el crecimiento o a elaborar un plan para eliminar gradualmente dicho uso. El representante de Timor-Leste tomó nota de la propuesta del Miembro y aclaró que, en la práctica, el Gobierno de Timor-Leste, a través de la Autoridad Veterinaria, había ejercido su competencia para prohibir la importación de antibióticos y sustancias que estimulan el crecimiento de conformidad con la norma de la OMSA. También aclaró que en el Decreto Ley se preveía la prohibición de los usos no terapéuticos de antimicrobianos. Ese criterio se basaba en el Codex, que recomendaba que los "agentes antimicrobianos que no se consideren de importancia médica no deberían utilizarse para estimular el crecimiento, a menos que se hayan evaluado los riesgos potenciales para la salud humana". Por consiguiente, su Gobierno había decidido prohibir los usos

no terapéuticos de antimicrobianos en todas las circunstancias debido a la falta de capacidad nacional en ese momento para evaluar los riesgos potenciales. En lo que se refería al alcance de los productos importados sujetos a esa prohibición y a la justificación científica de esa medida, el representante explicó que, de conformidad con los Decretos Leyes N^{os} 36/2023 y 41/2023, la lista/el alcance de los productos de importación que estarían prohibidos, incluidos los antibióticos y las sustancias para estimular el crecimiento, estaba pendiente de determinar y se adoptaría por medio de un decreto ministerial tras un estudio científico que aún no se había llevado a cabo.

221. Un Miembro preguntó acerca del régimen de límites máximos de residuos (LMR) aplicado por Timor-Leste, así como sobre su intención de adoptar los LMR del Codex y sobre el procedimiento de referencia para las importaciones de no haber LMR del Codex. El representante de Timor-Leste confirmó que, en calidad de miembro del Codex Alimentarius desde marzo de 2017, Timor-Leste estaba obligado a seguir las directrices establecidas en relación con los LMR del Codex. Dicho eso, el Gobierno no había elaborado aún normas específicas sobre LMR y seguía decidido a adoptar los LMR del Codex Alimentarius en el futuro, una vez se aplicase efectivamente el Decreto Ley N^o 41/2023. Así pues, Timor-Leste estaba adoptando todavía niveles de tolerancia en las importaciones y un procedimiento de referencia para los procedimientos de importación de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la CIPF y las normas generales sobre procedimientos de importación en el país, al tiempo que reconocía la importancia fundamental de los sistemas de inspección y certificación y su uso generalizado como sistemas de control alimentario. Añadió que su Gobierno tenía previsto establecer una lista de LMR de medicamentos veterinarios para 2024. En concreto, estaba ultimando un decreto ley sobre plaguicidas, que estaría en consonancia con las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius y que se sometería a la consideración del Consejo de Ministros a más tardar a finales de 2023. Ese proyecto de Ley había sido sometido al examen del Grupo de Trabajo. Una vez se aprobara y entrara en vigor, se elaboraría la lista de LMR de plaguicidas en los alimentos.

222. En respuesta a una pregunta sobre el Programa Oficial de Control de Residuos de Plaguicidas en Productos de Origen Vegetal, el representante de Timor-Leste informó de que el Gobierno de su país, con la asistencia técnica de la FAO, había elaborado un Proyecto de Ley sobre Pesticidas, según lo dispuesto en el artículo 16 m) del Decreto Ley N^o 26/2016. El Proyecto de Ley establecería directrices para las autoridades con competencias en la aplicación de pesticidas. Una vez que se apruebe esa Ley, las autoridades dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura trabajarían en coordinación con la AIFAESA para reglamentar las directrices establecidas por la Ley.

223. Un Miembro preguntó asimismo cuándo publicaría el Gobierno de Timor-Leste sus listas de plagas reglamentadas y de enfermedades de declaración obligatoria. El representante de Timor-Leste respondió que esas listas se publicarían en cuanto se disponga de los medios necesarios. El Gobierno estaba abierto a recibir de los Miembros la asistencia necesaria para que el país esté cuanto antes en condiciones de adoptar tales sistemas.

224. Un Miembro indicó asimismo que los "organismos vivos modificados" se incluían dentro del ámbito reglamentario de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria y preguntó si el Gobierno de Timor-Leste aceptaría que las evaluaciones del riesgo de las autoridades de reglamentación y las directrices del Codex tenían una validez suficiente para la importación de productos agrícolas de biotecnología. El representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno estaba resuelto a impulsar las reformas necesarias para aceptar que las evaluaciones del riesgo de las autoridades de reglamentación y las directrices del Codex tenían una validez suficiente para la importación de productos agrícolas de biotecnología.

225. Un Miembro señaló también que el artículo 27 2) de la Ley Básica de Medio Ambiente (Decreto Ley N^o 26/2012, de 4 de julio de 2012) establecía que se adoptarían medidas para evitar y minimizar los riesgos que puedan representar para la diversidad biológica y la salud de las personas los organismos vivos modificados genéticamente (OMG). Ese Miembro pidió que se aclarase cómo se determinarían esos riesgos y en función de qué criterios se evaluaría el "peligro para el medio ambiente, la economía nacional o la salud pública" que se señalaba en el artículo 10 del Decreto Ley N^o 21/2003. Ese Miembro pidió que Timor-Leste se asegurase de que toda medida sanitaria o fitosanitaria destinada a proteger la diversidad biológica y la salud de las personas esté basada en principios científicos y tenga el menor efecto de restricción del comercio, como estipulaban los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF.

226. El representante de Timor-Leste respondió que el Gobierno había aprobado el Decreto Ley N° 6/2020 relativo al Marco Jurídico para la Protección y la Conservación de la Diversidad Biológica, de 6 de febrero de 2020, aplicable a la conservación de la diversidad biológica y al uso sostenible de sus componentes, así como a un reparto justo y equitativo de los beneficios generados por los recursos genéticos, como pilares esenciales para la subsistencia de las familias, la seguridad alimentaria y el bienestar y la salud de las generaciones presentes y futuras. El artículo 34 de ese Decreto Ley establecía que la preservación y la conservación de los hábitats esenciales y necesarios para garantizar la supervivencia y el desarrollo de un organismo o una población de especies se lleven a cabo en el marco del Sistema Nacional de Zonas Protegidas, sin perjuicio de que se puedan adoptar medidas específicas ex situ. En el artículo 37 se definían las siguientes medidas de riesgo para la importación de especies exóticas:

- Las especies exóticas que representaban un peligro para los ecosistemas, los hábitats o las especies figuraban en una lista nacional en la que se recogían:
 - las especies exóticas invasoras cuya importación o distribución estaba prohibida en el país;
 - las especies exóticas no invasoras cuya importación o distribución debía estar regulada.
- La lista nacional la elaboraba la entidad gubernamental responsable de la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica tras mantener consultas con la entidad encargada del medio ambiente, el Comité Consultivo sobre Biodiversidad, los servicios de cuarentena y los institutos de investigación pertinentes, teniendo en cuenta la información disponible.
- La lista nacional de especies exóticas se aprobaba mediante una Resolución del Gobierno.
- Cualquier persona, física o jurídica, podía presentar a la entidad gubernamental responsable de la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica una solicitud para que se incluyera una especie en la lista nacional de especies exóticas, o para que se retirara de ella.

La información sobre las especies invasoras en Timor-Leste figuraba en el ANEXO 17. El representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno de su país se aseguraría de que toda medida sanitaria o fitosanitaria destinada a proteger la diversidad biológica y la salud de las personas esté basada en principios científicos y tenga el menor efecto de restricción del comercio, como estipulaban los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF.

227. Un Miembro preguntó por las disposiciones relativas a los OMG consignadas en el artículo 41 de la Ley N° 6/2020 y sobre cómo tenía previsto Timor-Leste asegurarse de que sus leyes y políticas fueran compatibles con las normas pertinentes de la OMC en lo que se refería a la reglamentación basada en el riesgo y en la justificación científica de los productos de la biotecnología agrícola. El representante de Timor-Leste dijo que su Gobierno se había comprometido a garantizar que sus leyes y políticas fueran compatibles con los Acuerdos de la OMC pertinentes en esa esfera, a saber, el Acuerdo MSF y el Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo al artículo 41 del Decreto Ley N° 6/2020, la reglamentación de los OMG, incluida la relativa a los productos de la biotecnología agrícola, estaba sujeta a legislación específica, que estaba por elaborar durante el período de transición solicitado para la aplicación del Acuerdo MSF de la OMC. Timor-Leste velaría por que, cuando se elaborara, la legislación correspondiente fuera compatible con sus compromisos en el marco de la OMC.

228. Un Miembro también pidió al Gobierno de Timor-Leste que notificara a la OMC, en cumplimiento de las obligaciones que le correspondían en virtud del Anexo B del Acuerdo MSF y del artículo 2.9 del Acuerdo OTC, cambios en la reglamentación que puedan tener un efecto significativo en el comercio con otros Miembros o sean de especial interés a partes de otros países Miembros. El representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno de su país notificaría como corresponde a la OMC.

229. El representante de Timor-Leste pidió al Grupo de Trabajo que, como se indicaba en el Plan de Acción para la Puesta en Práctica del Acuerdo MSF de la OMC, consignado en el **ANEXO 18** del presente informe, concediera a su país un período de transición a partir de la fecha de adhesión hasta el 1 de enero de 2028 para la aplicación de dicho Acuerdo. Ese período de transición permitiría

a Timor-Leste cumplir plenamente las obligaciones que había contraído en el marco de dicho Acuerdo. El representante destacó la necesidad de que su Gobierno recibiera asistencia técnica y financiera suficiente para asegurar que el Acuerdo MSF de la OMC se aplicara debidamente.

230. Algunos Miembros destacaron las iniciativas tomadas por Timor-Leste para revisar su legislación MSF e invitaron a Timor-Leste a continuar sus esfuerzos para poner sus reglamentos y su legislación progresivamente en conformidad con las normas de la OMC. Tomaron nota de que Timor-Leste había solicitado un período de transición hasta el 1 de enero de 2028 para la plena aplicación de las disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC y alentaron a Timor-Leste a hacer uso de la asistencia técnica disponible en la esfera sanitaria y fitosanitaria.

231. El representante de Timor-Leste confirmó que su país aplicaría progresivamente el Acuerdo MSF de la OMC de conformidad con el Plan de Acción que figura en el **ANEXO 18**. También confirmó que, durante el período de transición, las medidas vigentes se aplicarían de manera no discriminatoria, es decir, otorgando trato nacional y trato NMF a todas las importaciones. Las medidas vigentes en el momento de la adhesión y ya compatibles con las disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC no estarían sujetas a períodos de transición. Timor-Leste se aseguraría de que ninguna modificación introducida en sus leyes, reglamentos y prácticas durante el período de transición tuviera como resultado un grado de compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo menor que el existente en la fecha de adhesión. La plena aplicación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC comenzaría a partir del 1 de enero de 2028 sin recurrir a ningún otro período de transición. El representante de Timor-Leste confirmó además que su Gobierno celebraría consultas con los Miembros que lo solicitaran si alguno de ellos consideraba que alguna medida aplicada durante el período de transición afectaba negativamente a su comercio. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio

232. El representante de Timor-Leste informó de que su Gobierno no aplicaba medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Si se adoptaran en el futuro, serían compatibles con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) de la OMC, ya que el Gobierno estaba dispuesto a cumplir plenamente las normas de la OMC.

233. El representante de Timor-Leste dijo que su Gobierno no mantendría ninguna medida incompatible con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC y aplicaría lo dispuesto en dicho Acuerdo a partir de la fecha de adhesión sin recurrir a ningún período de transición. El Grupo de Trabajo tomó nota de ese compromiso.

- Zonas francas y zonas económicas especiales

234. El representante de Timor-Leste informó de que el Código Aduanero facultaba al Gobierno para aprobar zonas francas que se beneficiaran de regímenes de exención aduanera. Sin embargo, en la actualidad no había ninguna de esas zonas en el territorio de Timor-Leste.

235. Por medio de la Ley Nº 3/2014, de 18 de junio de 2014, el Parlamento Nacional había aprobado la creación de la Región Administrativa Especial (RAE) de Oe-Cusse Ambeno y la Zona Especial de Economía Social de Mercado (ZEESM) cuyo territorio comprendía el enclave de Oe-Cusse y la isla de Ataúro. La ZEESM había avanzado mucho desde 2014, al establecer un marco administrativo y reglamentario eficaz de ZEE, que había promovido el desarrollo de infraestructuras (por ejemplo, telecomunicaciones, carreteras, puentes, aeropuerto, puerto, sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua, escuelas, dispensarios, red eléctrica, etc.) que contribuían a crear un entorno propicio para el desarrollo económico y la diversificación de la región. El Estatuto de la Región Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, aprobado por el Decreto-Ley Nº 5/2015, de 22 de enero de 2015, disponía que se establecieran en la región una zona franca y una zona franca aduanera industrial. Aún no se habían promulgado las normas específicas aplicables a la zona franca y la zona aduanera industrial.

236. Además, el artículo 10 del proyecto de Ley de Promoción de las Exportaciones preveía el derecho de establecimiento en una zona económica especial. Las empresas exportadoras podían

establecerse en zonas económicas especiales, es decir, en zonas de elaboración para la exportación o depósitos de aduanas y en zonas francas.

237. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre el proceso de desarrollo de esa zona económica especial y los tipos de incentivos previstos, el representante de Timor-Leste informó además de que la Autoridad de la ZEE estaba facultada para adoptar medidas de política pública que se aplicaran dentro de sus límites territoriales, y para eximir del pago de derechos de aduana, y hacer respetar el principio de economía social de mercado como paradigma de crecimiento económico, atrayendo inversiones, tecnología y el establecimiento de empresas, tanto nacionales como extranjeras. Por el momento, eso solo se aplicaba a las mercancías importadas para poner en marcha proyectos y programas de la RAE, de conformidad con el artículo 38.3 de la Ley Nº 3/2014. Dos proyectos públicos, ambos financiados por el Fondo de Desarrollo de la Región Administrativa Especial, se habían beneficiado de una exención aduanera, a saber: i) la construcción de un dispensario y la adquisición de dos dispensarios móviles; y ii) un hotel. Se concedían exenciones fiscales a los inversores en la zona económica especial de Oe-Cusse Ambeno y Ataúro durante un período de hasta 10 años (véase el Cuadro 1 de la sección "Régimen de inversiones"). La Autoridad tenía pendiente definir un paquete de incentivos más detallado, que cumpliría las normas de la OMC.

238. El representante de Timor-Leste indicó además que su Gobierno había adoptado el Decreto Ley Nº 44/2022 sobre el Régimen Jurídico de los Parques Industriales, de 8 de junio de 2022, con el fin de regular el establecimiento, la gestión y las funciones de los parques industriales. El Decreto Ley se había facilitado al Grupo de Trabajo. El nuevo régimen definía los procedimientos administrativos de los parques industriales, incluida la infraestructura necesaria para el establecimiento de un parque industrial, y preveía disposiciones sobre la gestión de los parques industriales, según las cuales cada parque industrial debía ser gestionado por una entidad comercial. La entidad comercial había de contar con un capital superior a 500.000 dólares EE.UU. para gestionar un parque industrial. Ahora bien, el Decreto Ley no abarcaba la ZEESM/Región Administrativa Especial de Oe-Cusse, que se regía por el Decreto Ley Nº 5/2015.

239. El representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, las zonas francas y las zonas económicas especiales se establecerían, mantendrían y administrarían en plena conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, incluidos el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC, y que Timor-Leste se aseguraría de que en esas zonas se cumplieran las obligaciones asumidas en el marco de la OMC. También confirmó que el derecho de las empresas a registrarse y operar en esas zonas no estaría sujeto a prescripciones en materia de resultados de exportación, nivelación del comercio o contenido nacional. Además, el representante de Timor-Leste confirmó que, a partir de la fecha de adhesión, las mercancías importadas en las zonas francas y las mercancías producidas en cualquiera de las zonas francas o en las zonas en las que se aplicaran disposiciones fiscales y arancelarias que eximieran a ciertas importaciones e insumos importados del pago de aranceles y determinados impuestos quedarían sujetas a las formalidades aduaneras normales cuando ingresaran en el resto del territorio de Timor-Leste, con inclusión de los correspondientes aranceles e impuestos. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Contratación pública

240. No existían restricciones o limitaciones importantes a la participación de entidades extranjeras (personas físicas o jurídicas) en los procedimientos de contratación de Timor-Leste. La contratación pública se regía por el Marco de Contratación Pública de Timor-Leste, aprobado por el Decreto Ley Nº 10/2005, de 21 de noviembre de 2005, modificado más recientemente por el Decreto Ley Nº 5/2021, de 23 de abril de 2021.

241. Con respecto al tipo de procedimiento de contratación, informó de que no había restricciones o limitaciones importantes a la participación de entidades extranjeras (personas físicas o jurídicas) en el procedimiento. Como norma general, con independencia de la adquisición de que se tratara (bienes, servicios u obras), debía establecerse un procedimiento de licitación pública nacional si el gasto que se iba a imputar superaba los 100.000 dólares EE.UU. Se convocaría una licitación pública internacional en los siguientes casos: i) obras públicas por importe superior a 1.000.000 de dólares EE.UU.; ii) adquisición de bienes, y de servicios distintos de los de consultoría, por importe superior a 250.000 dólares EE.UU.; o iii) adquisición de servicios o contratos de consultoría por importe superior a 200.000 dólares EE.UU.

242. En el procedimiento de licitación pública nacional, la participación se limitaba a los nacionales de Timor-Leste y/o empresas establecidas en Timor-Leste cuyo capital mayoritario en acciones perteneciera a ciudadanos nacionales (51% como mínimo); alternatively, esos particulares y/o empresas timorenses podían considerarse licitadores preferenciales.

243. Además, mediante el Decreto Ley Nº 2/2010 sobre el Procedimiento Especial de Contratación para Trabajos de Construcción de hasta 250.000 dólares EE.UU., de 18 de febrero de 2010, el Gobierno había aprobado un procedimiento especial de contratación pública para la adjudicación de obras públicas por un importe máximo de 250.000 dólares EE.UU., en el que solo podían participar empresas locales radicadas en el municipio correspondiente. El propósito de ese Decreto Ley era respaldar el desarrollo del sector privado a nivel de los subdistritos y alentar la participación de la comunidad en el desarrollo de infraestructuras en su zona. El principio general de competencia abierta y transparente podría verse limitado también por la aplicación de procedimientos de adjudicación directa. Sin embargo, tanto las entidades nacionales como las extranjeras podían beneficiarse de ese tipo de contratación. El Marco de Contratación Pública enumeraba las normas y procedimientos que permitían adoptar ese tipo de procedimiento, que, sin embargo, se aplicaba en situaciones excepcionales y requería una justificación clara y detallada. Esas situaciones eran, entre otras, las siguientes: i) situaciones de emergencia posteriores a un acontecimiento imprevisto que pusiera en peligro la salud y la seguridad públicas; ii) cuando no hubiera ofertas o no hubiera ninguna que cumpliera los criterios definidos en la convocatoria, o los candidatos no cumplieran los requisitos para participar; iii) cuando solo una entidad concreta pudiera suministrar los bienes y servicios y no hubiera alternativa razonable o no existieran bienes o servicios alternativos en el mercado; iv) para la protección de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos o derechos de propiedad intelectual. También se podía adoptar un procedimiento de adjudicación directa sobre la base de criterios materiales, en cuyo caso la decisión no dependía del valor del respectivo contrato. Adoptar un procedimiento de adjudicación directa sin que estuviera debidamente fundamentado y justificado con arreglo al Decreto Ley podría considerarse una infracción administrativa en virtud del artículo 3 del Decreto Ley Nº 11/2005 sobre el Marco Jurídico de Contratación Pública, de 8 de noviembre de 2005, que establecía el Marco Jurídico de Infracciones Administrativas al Marco Jurídico de Contratación Pública, y en el que se disponía que toda acción u omisión que fuera contraria a las normas establecidas en el Marco de Contratación Pública de Timor-Leste constituía una infracción administrativa.

244. El principio general de competencia abierta y transparente también podía considerarse limitado por la existencia de una instrucción interna del Gabinete del Primer Ministro (Nota Circular Nº 003/GPM/III/2009), en la que se había facultado al Gobierno para comprar preferentemente vehículos Mitsubishi o Toyota, salvo que hubiera un motivo específico que justificara la compra de vehículos públicos de otras marcas. Esa había sido una medida transitoria justificada por la disponibilidad de piezas de repuesto y servicios de mantenimiento, y ya había sido revocada. En respuesta a preguntas de los Miembros sobre la existencia de cualesquiera otros bienes/servicios/sectores específicos para los que se esperara del Gobierno que comprara marcas específicas, el representante de Timor-Leste confirmó que no había ninguno.

245. El representante añadió que, aparte de esas excepciones, el Gobierno de Timor-Leste no limitaba ni restringía la participación de nacionales o entidades de otros países en los procedimientos de licitación pública.

246. En respuesta a una pregunta de un Miembro sobre el procedimiento para las contrataciones cuyo valor fuera superior a 100.000 dólares EE.UU., pero inferior al umbral de licitación pública internacional, informó de que ese umbral había sido introducido por el Decreto Ley Nº 24/2008, de 23 de julio de 2008. Las licitaciones públicas eran obligatorias en las contrataciones de un valor igual o superior a 100.000 dólares EE.UU. y no estaban reservadas a las empresas locales. Cuando compraban bienes y servicios y llevaban a cabo obras públicas, todas las instituciones públicas estaban obligadas a atenerse a principios como el interés público, la competencia, la igualdad de trato, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad, todos ellos establecidos en el Decreto Ley Nº 10/2005.

247. Cuando se le solicitó que facilitara información sobre el número y valor de las licitaciones que superaran el umbral de 100.000 dólares EE.UU. u otros umbrales, el representante de Timor-Leste respondió con una invitación a consultar el portal de contratación electrónica en el enlace <https://www.mof.gov.tl/government-procurement/eprocurement-portal/?lang=en>, en donde se publicaban todos los datos e informaciones pertinentes sobre la contratación pública en Timor-Leste. Además, desde 2015 la Comisión de Contratación Pública mantenía también un portal de contratación (www.cna.gov.tl) que contenía información sobre las licitaciones en curso y las intenciones de adjudicación, y en el que la Comisión anunciaba las invitaciones a licitar, el adjudicatario y los resultados de las evaluaciones realizadas. Ese sitio web también mantenía un registro de las anteriores licitaciones públicas.

248. Un Miembro pidió asimismo que el Gobierno de Timor-Leste confirmara que los licitadores basados en el extranjero y los licitadores nacionales recibían un trato equitativo e igual en los procesos de licitación de un valor superior a USD 100.000. En respuesta, el representante de Timor-Leste hizo referencia al artículo 4 (Principios jurídicos y de igualdad) del Decreto Ley Nº 10/2005, en el que se preveía que las condiciones de acceso y participación eran las mismas para todas las partes interesadas. Toda discriminación de los licitadores estaba prohibida. Así pues, confirmó que los licitadores basados en el extranjero recibían un trato equitativo e igual.

249. Un Miembro pidió que se aclarara cuáles eran los requisitos y las limitaciones relativos al procedimiento de adjudicación directa aplicables a los licitadores basados en el extranjero y si había directrices o criterios que les brindaran orientaciones sobre el recurso al procedimiento de adjudicación directa. El representante de Timor-Leste informó de que ese procedimiento era excepcional. Los artículos 92 a 94 del Decreto Ley Nº 10/2005 establecían los requisitos y las limitaciones relativos al recurso al procedimiento de adjudicación directa aplicables a todos los licitadores, que se describen en el párrafo [243]. Esas eran las directrices aplicables que podían consultar los licitadores basados en el extranjero en lo concerniente al procedimiento de adjudicación directa.

250. En respuesta a preguntas de los Miembros, el representante de Timor-Leste también explicó la modificación introducida por el Decreto Ley Nº 30/2019, que establecía la prescripción de que todas las licitaciones públicas internacionales se publicaran al menos en dos plataformas electrónicas utilizadas internacionalmente a tal efecto, así como en un periódico de circulación nacional, de modo que el anuncio del inicio de la licitación llegara al mayor número de posibles licitadores (modificación del artículo 61). Añadió que la séptima, y última, modificación efectuada por el Decreto Ley Nº 5/2021, de 23 de abril de 2021, introducía un régimen excepcional para facilitar la contratación pública en respuesta a la situación de emergencia y las preocupaciones humanitarias que afrontaba el país a consecuencia de las inundaciones tropicales que habían tenido lugar en abril de 2021.

251. El representante de Timor-Leste añadió que, como PMA, Timor-Leste seguía determinado a ajustarse a las normas de la OMC y a cumplirlas, en consonancia con sus necesidades de desarrollo, con arreglo al artículo V del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y con el objetivo de desarrollar un Marco de Contratación Pública moderno. A tal fin, se estaba prestando asistencia técnica, en el marco de la cual el sistema de contratación pública era objeto de una evaluación realizada con ayuda del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y con arreglo a la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública (MAPS). El informe resultante de esa evaluación se remitiría al Gobierno, junto con las correspondientes recomendaciones, durante 2023.

252. El representante de Timor-Leste informó asimismo acerca de la promulgación del nuevo Decreto Ley sobre el Régimen Jurídico de Aprovisionamiento y Contratación Pública y las Respectivas Infracciones (Decreto Ley Nº 4/2022, de 23 de marzo de 2022). El Decreto Ley, que había entrado en vigor el 1 de enero de 2023, tenía por objeto establecer un régimen de contratación más sencillo y transparente. Los cambios consistían en lo siguiente: i) la integración de los regímenes jurídicos de aprovisionamiento, de contratación pública y de sus infracciones en un solo decreto ley; ii) la simplificación de los procedimientos, con una reducción de las categorías de procedimientos de siete a tres; iii) la mayor sistematización y la mejor descripción de cada fase del aprovisionamiento; iv) el refuerzo de los procesos de planificación; v) la mayor transparencia y la mejora del portal de contratación; y vi) el refuerzo de las facultades de la Comisión Nacional de Contratación. El Decreto Ley ha sido presentado al Grupo de Trabajo para su examen.

253. Aparte del régimen especial recogido en el Decreto Ley Nº 2/2010 sobre el Procedimiento Especial de Contratación para Trabajos de Construcción de hasta 250.000 dólares EE.UU., de 18 de febrero de 2010, que sigue en vigor, las tres categorías de procedimientos establecidas en el Decreto Ley Nº 4/2022 son: i) licitación pública (sin distinción entre una licitación pública nacional y una internacional); ii) procedimiento de solicitud de ofertas de precios (un mínimo de tres ofertas); y iii) procedimiento de adjudicación directa. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley, las licitaciones públicas eran obligatorias en el caso de las contrataciones de un valor igual o superior a 100.000 dólares EE.UU. (con muy pocas excepciones, como en el marco del régimen anterior, en que se permitían los procedimientos de solicitud de ofertas de precios y de adjudicación directa). Para las contrataciones de un valor inferior a 100.000 dólares EE.UU. estaban permitidas las licitaciones públicas y las solicitudes de ofertas de precios (en muy pocos casos era posible recurrir al procedimiento de adjudicación directa, como en el régimen anterior). Para las contrataciones de un valor inferior a 10.000 dólares EE.UU., estaban permitidas las tres categorías de procedimientos.

254. En el caso de las contrataciones de un valor inferior a 100.000 dólares EE.UU., cuando contribuían a la promoción y el desarrollo de la economía nacional, la autoridad contratante podía limitar la participación de los licitadores a particulares timorenses y/o a empresas establecidas en Timor-Leste y cuyo capital estuviera mayoritariamente (más de un 50%) en manos de ciudadanos timorenses. Esa limitación se podía aplicar también en el caso de las adquisiciones de un valor igual o superior a 100.000 dólares EE.UU., si el objeto de la contratación estaba relacionado con sectores, bienes o ámbitos administrativos designados como estratégicos y/o especialmente protegidos en virtud de una resolución del Gobierno. En las contrataciones de un valor superior a 1.000.000 de dólares EE.UU., la autoridad contratante podía incluir como condición que la propuesta contribuyera al desarrollo económico y social mediante la transferencia de tecnología o de conocimientos a trabajadores y empresas locales, gracias a la compra de una cantidad mínima de bienes y servicios en el mercado local o nacional o mediante la contratación de un número mínimo de trabajadores nacionales.

255. El representante de Timor-Leste confirmó la disposición de su país a adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. Timor-Leste pasaría a ser observador en el Acuerdo en el momento de la adhesión y presentaría una solicitud de adhesión al Acuerdo junto con una oferta de cobertura en el plazo de un año tras su adhesión a la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- **Tránsito**

256. Según el Código Aduanero de Timor-Leste, las mercancías en tránsito debían someterse a control e inspección aduanera. Su transporte se realizaba con arreglo a una declaración de tránsito, expedida por triplicado. Las declaraciones de tránsito originales tenían que presentarse en la oficina aduanera de transbordo y el transportista tenía que entregar las otras dos copias en la oficina aduanera de destino. No se aplicaban derechos a las mercancías en tránsito.

- **Políticas agrícolas**

257. El representante de Timor-Leste informó de que la agricultura era un sector fundamental para el desarrollo del país. La mayoría de los hogares de Timor-Leste eran rurales y agrícolas. La mayoría de los trabajadores trabajaban en el sector agrícola. Habida cuenta del bajo nivel de rendimiento agrícola, Timor-Leste tenía un amplio sector agrícola de baja productividad, que operaba casi a niveles de subsistencia. El único producto agrícola destinado a la exportación digno de mención era

el café, que se cultivaba en explotaciones pequeñas y proporcionaba ingresos a los hogares de aproximadamente una cuarta parte de la población. A mediano plazo, el Gobierno preveía que las exportaciones se centraran en cultivos comerciales, incluidos el café, las especias y otros productos comerciales para mercados especializados. Mejorar la productividad de las explotaciones y la infraestructura nacional de transporte y reducir el costo de expedición serían factores importantes para lograr el crecimiento de los cultivos comerciales. Además, a largo plazo, Timor-Leste tenía considerable potencial para desarrollar unos sectores forestal y pesquero comerciales rentables.

a) Importaciones

258. El representante de Timor-Leste informó de que no había políticas específicas que afectaran a las importaciones de productos agropecuarios. Los productos agropecuarios importados solo estaban sujetos a las normas establecidas en el Decreto Ley N° 36/2023 sobre la Preservación de los Vegetales y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, y el Decreto Ley N° 41/2023 sobre la Salud Animal y la Cuarentena, de 31 de mayo de 2023, que exigían permisos sanitarios y fitosanitarios para la importación, como se indicaba en la sección "Medidas sanitarias y fitosanitarias".

b) Exportaciones

259. No había prohibiciones ni restricciones a la exportación de productos agropecuarios. Estaba previsto que esa situación se mantuviera en el marco de la futura política de inversiones de Timor-Leste.

260. No se aplicaban medidas de subvención a la exportación. No había leyes, reglamentos, políticas ni programas que previeran créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de seguro.

261. El representante de Timor-Leste confirmó que su país consolidaría en cero las subvenciones a las exportaciones agropecuarias a partir de la fecha de adhesión. El Grupo de Trabajo tomó nota de este compromiso.

c) Políticas internas

262. El representante de Timor-Leste facilitó información sobre la ayuda interna y las subvenciones a la exportación en el sector agropecuario durante el período 2019-2021 en el documento [WT/ACC/SPEC/TLS/1/Rev.2](#). En respuesta a la pregunta de un Miembro, aclaró que el desarrollo del programa ganadero formaba parte de las actividades enumeradas en el cuadro justificante DS.1, en la categoría 2 a), "Establecimiento de las bases para el desarrollo de una agricultura inteligente y un plan inclusivo de seguimiento y vigilancia de la gestión de los recursos naturales; formulación de políticas basada en información objetiva y establecimiento de un marco normativo para la gestión de los recursos naturales". Además, en respuesta a una pregunta de otro Miembro, proporcionó la información relativa al valor total de la producción agropecuaria en Timor-Leste durante el período 2023-2021 (cuadro 5).

Cuadro 5 Valor total de la producción agropecuaria en Timor-Leste, 2013 2021

En \$EE.UU.

Año	Valor
2013	408.430.000
2014	444.318.000
2015	496.159.000
2016	443.338.000
2017	411.966.000
2018	455.260.000
2019	522.675.000
2020	547.868.000
2021	710.227.000

Fuente: FAOSTAT.

263. Un Miembro señaló que el Ministerio de Agricultura y Pesca se había encargado de concebir, aplicar, coordinar y evaluar las políticas aprobadas por el Consejo de Ministros en los ámbitos de la

agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería. El Ministerio podía proponer políticas y elaborar proyectos de legislación y reglamentos para establecer centros de asistencia técnica para los productores; administrar los servicios de enseñanza técnica y agrícola; fomentar la investigación agrícola y la optimización de las tierras de cultivo; controlar el uso de la tierra con fines de producción agrícola; promover y supervisar la sanidad animal; promover el sector de la agricultura y la pesca; fomentar y controlar la producción de alimentos, incluida la producción de semillas; gestionar los servicios de cuarentena; promover, en coordinación con el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, el desarrollo rural instaurando un sistema de cooperativas para la producción y comercialización de la producción agrícola; y llevar a cabo estudios de viabilidad para la instalación de sistemas de riego y de almacenamiento de agua, así como la construcción de las respectivas instalaciones. Un Miembro preguntó si se habían establecido tales medidas de ayuda al sector agropecuario hasta la fecha y pidió que se indicaran las asignaciones presupuestarias. Un Miembro preguntó también si el Gobierno de Timor-Leste tenía intención de elaborar un nuevo plan estratégico del Ministerio.

264. El representante de Timor-Leste respondió que el Ministerio de Agricultura y Pesca había trabajado sobre la base de su plan estratégico para 2014-2020 y sus planes estratégicos a corto y mediano plazo, que se habían elaborado con arreglo al Plan de Desarrollo Estratégico para 2011-2030. En relación con la repercusión de la pandemia de COVID-19 en el crecimiento económico general del país, añadió que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura mantendría el plan estratégico en vigor. El plan podría revisarse en el futuro, en consonancia con la visión establecida en el Plan de Desarrollo Estratégico para 2011-2030.

265. Añadió que las políticas agrícolas se habían elaborado con arreglo a la Política Agrícola de 2004, que había sido revisada en 2017 para reflejar cinco prioridades principales: i) aumento sostenible de la producción y la productividad; ii) mejora del acceso a los mercados y aumento del valor añadido; iii) mejora del entorno propicio para el sector agrícola; iv) desarrollo organizativo; y v) aprovechamiento sostenible de los recursos. Entre 2013 y 2017 el Ministerio había invertido un total de más de 119 millones de dólares EE.UU. en esos sectores prioritarios, y un total de más de 60,9 millones de dólares EE.UU. entre 2018 y 2021. Se había logrado una serie de resultados como consecuencia de esas asignaciones presupuestarias, en particular:

- la rehabilitación de nueve canales principales de riego en todo el país para mejorar su sistema de riego, como parte de su programa de desarrollo de la infraestructura;
- el aumento de la productividad del arroz, que pasó de 3,5 a 6 toneladas por hectárea;
- el aumento de la producción de semillas, especialmente para el arroz, el maíz y el frijol;
- el aumento de las vacunas y de los programas de alimentación animal, como parte del desarrollo del programa ganadero; y
- el desarrollo de la industria de la acuicultura en la costa sur del país.

Esas medidas se habían notificado al Grupo de Trabajo en el marco de la información relativa a la ayuda interna y las subvenciones a la exportación en el sector agropecuario que figuraba en el cuadro DS.1 (y anexo).

266. Un Miembro solicitó también información detallada sobre el Fondo de Imprevistos para la Compra de Arroz. El representante de Timor-Leste respondió que su Gobierno había establecido su objetivo en materia de seguridad alimentaria y previsto la constitución de una reserva de arroz de unas 140.000 toneladas métricas por año, de acuerdo con el consumo anual interno de arroz. El arroz se compraba en el territorio nacional y en el extranjero, en el marco de una cooperación intergubernamental. De conformidad con el Decreto Ley Nº 26/2014, de 10 de septiembre de 2014, el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos (MCAE), el Ministro encargado de supervisar al Centro Nacional de Logística, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, el Ministerio de Turismo, Comercio e Industria y el Ministerio de Finanzas publicaban una orden conjunta, basada en el estudio de diagnóstico realizado por el grupo de trabajo técnico compuesto por miembros de esos ministerios, con recomendaciones sobre las condiciones y precios específicos de acuerdo con la tendencia del mercado y el rendimiento de la producción de arroz en el país. Las intervenciones del Gobierno en el mercado se hacían a través del Centro Nacional de Logística.

V. RÉGIMEN COMERCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ASPECTOS GENERALES

267. El representante de Timor-Leste informó de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución, las leyes y reglamentos de Timor-Leste eran aplicables en la medida en que no fueran contrarios a la Constitución y a los principios contenidos en ella. En consecuencia, toda la legislación indonesia de propiedad intelectual anterior al restablecimiento de la independencia (título XX del Código Civil indonesio, relativo a la "Propiedad intelectual") permanecía formalmente en vigor. Sin embargo, en la práctica dicha legislación no se había aplicado al no existir un marco institucional adecuado para ello (por ejemplo, un organismo de registro de la propiedad intelectual). El representante confirmó que el Gobierno de Timor-Leste reconocía la necesidad urgente de proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual que tenían actividades comerciales en el país.

268. Añadió que, a pesar de la ausencia de legislación que regulara la protección y el registro de los derechos de propiedad intelectual en Timor-Leste, varias normas adoptadas por el país abordaban cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, según se describe en esta sección. Así, la Constitución disponía que el Estado garantizaría y protegería la creación, producción y comercialización de obras literarias, científicas y artísticas, con inclusión de la protección jurídica de los derechos de autor. Además, el artículo 60 de la Constitución (Propiedad intelectual) constituía la obligación del legislador de elaborar instrumentos jurídicos específicos para proteger esos derechos.

269. Añadió que, por el momento, Timor-Leste no disponía de una oficina de propiedad intelectual encargada de la administración y gestión de la legislación relativa a la propiedad intelectual.

270. Informó además de que Timor-Leste se había adherido a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 12 de septiembre de 2017, tras depositar en poder del Director General de la OMPI, en Ginebra, el instrumento de adhesión al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. La Resolución Nº 16/2017 del Parlamento Nacional de Timor-Leste, de 25 de julio de 2017, ratificó el Convenio. La adhesión a la OMPI abría vías de colaboración y asociación institucionales que ayudarían a Timor-Leste a cumplir las obligaciones sustantivas del Convenio de la OMPI y los tratados y convenios internacionales sobre propiedad intelectual, tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna). El Gobierno de Timor-Leste había suscrito con la OMPI un memorándum de entendimiento en noviembre de 2021, consciente de la importancia de contar con un régimen de propiedad intelectual equilibrado y que funcionara adecuadamente a fin de promover la innovación y la creatividad, que son los principales motores del desarrollo económico de las economías basadas en el conocimiento. El memorándum de entendimiento permitiría al Gobierno de Timor-Leste tener acceso a una asistencia técnica especializada para integrar adecuadamente las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en el marco nacional de desarrollo y gestionar la interconexión entre las amplias políticas y estrategias nacionales de propiedad intelectual y las cuestiones de política nacional pertinentes. El memorándum de entendimiento garantizaba que la asistencia de la OMPI se dirigiera a las reformas de la legislación y las políticas necesarias para cumplir el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (Acuerdo sobre los ADPIC), con los siguientes objetivos: i) elaborar una política y un plan de acción en materia de propiedad intelectual; ii) integrar los acuerdos relacionados con los derechos de propiedad intelectual en la política nacional y el marco reglamentario; y iii) establecer una oficina nacional de propiedad intelectual y ofrecer actividades de creación de capacidad. Para lograr esos objetivos, el Gobierno de Timor-Leste se comprometía a utilizar la metodología y los instrumentos de la OMPI existentes, sin dejar de reconocer las circunstancias y los requisitos nacionales específicos.

271. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre la participación de Timor-Leste en otros convenios relacionados con la propiedad intelectual, en particular los principales tratados en materia de propiedad intelectual, así como otros tratados internacionales relativos al derecho de autor, tales como los tratados de la OMPI sobre Internet, el representante de Timor-Leste respondió que el Gobierno de su país se comprometía a firmar y ratificar todos los convenios y tratados que se consideraran necesarios para disponer de un régimen moderno de propiedad intelectual, así como los que se requirieran en el contexto de la adhesión a la OMC. El calendario de adhesión a esos

convenios y tratados resultaría de la evaluación nacional de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en Timor-Leste.

272. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante añadió que la Ley Nº 14/2022 de Derecho de Autor, de 21 de diciembre de 2022, había sido aprobada y había entrado en vigor el 22 de junio de 2023. El Gobierno de Timor-Leste, con la asistencia de la USAID y la OMPI, estaba ultimando la elaboración del Código de Propiedad Industrial, que incluía disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio, patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y secretos comerciales. Ese proyecto de Código se había presentado al Grupo de Trabajo para que los Miembros lo examinaran y formularan observaciones, junto con el Decreto Ley sobre el Establecimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual, adoptado en diciembre de 2023. Aún quedaban por elaborar disposiciones específicas sobre el trato de las obtenciones vegetales.

273. Dada su condición de PMA, el Gobierno de Timor-Leste esperaba que se le concediera un plazo suficiente para integrar en su sistema nacional las obligaciones inherentes al Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta que las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual eran de carácter especializado y requerían amplios conocimientos, era necesario que el país contara con las instituciones y el capital humano adecuados, lo que llevaba tiempo. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre el calendario para la adopción de la legislación en materia de propiedad intelectual, el representante remitió al Plan de Acción para la Puesta en Práctica del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura en el **ANEXO 19**.

- Aplicación del trato nacional y del trato de la nación más favorecida a los nacionales de otros países

274. La Ley de Inversiones Privadas establecía el principio general de igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros al determinar que todos los inversores recibirían un trato que no fuera discriminatorio en cuanto a derechos y garantías, salvo en relación con la propiedad de la tierra y con los valores mínimos de inversión o reinversión. En la Ley se definía como inversión cualquier inversión directa o indirecta en el país efectuada por cuenta y riesgo del inversor privado mediante efectivo u otros bienes cuantificables monetariamente, tales como tecnología patentada, procesos técnicos, secretos industriales y modelos de utilidad, franquicias y transferencia de conocimientos técnicos, marcas, logotipos, nombres o símbolos de establecimientos registrados, así como cualquier otra forma de propiedad intelectual. El artículo 19 de la Ley (Propiedad intelectual) disponía que todos los inversores tenían derecho a la protección de los secretos industriales, el derecho de autor, los derechos de propiedad industrial, las marcas de fábrica o de comercio o cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. La Ley contenía disposiciones generales aplicables a los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros y, para el correspondiente régimen, remitía a la legislación sobre propiedad intelectual especializada específica, que aún no se había elaborado y regularía más en detalle las normas, la observancia y los mecanismos de solución de diferencias inherentes a los derechos y garantías de los inversores. Por consiguiente, se garantizaba a los inversores el derecho a transferir fondos al extranjero libremente, con inclusión de los ingresos obtenidos por la transferencia de los derechos de propiedad intelectual que constituyeran la inversión. La Ley también establecía que todos los inversores tenían derecho a proteger las patentes o los modelos de utilidad que hubieran registrado en calidad de autores, así como las marcas, logotipos, nombres o símbolos de establecimientos y otra información y objetos de protección como propiedad intelectual según la legislación aplicable.

- Derechos e impuestos

275. El representante de Timor-Leste informó de que la Ley de Inversiones Privadas preveía la posibilidad de que los inversores nacionales y extranjeros recibieran determinados beneficios fiscales e incentivos aduaneros (véase la sección "Régimen de inversiones").

2. NORMAS SUSTANTIVAS DE PROTECCIÓN

- Derecho de autor y derechos conexos

276. El representante de Timor-Leste informó de que se había adoptado la Ley Nº 14/2022 de Derecho de Autor, de 21 de diciembre de 2022. La Ley preveía un plazo de 180 días para la difusión pública antes de su entrada en vigor, en junio de 2023. La Ley tenía por objeto proteger las obras

literarias, artísticas y científicas, así como los derechos de los autores, artistas, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión. Se esperaba que la Ley estimulase la creación y producción de obras artísticas e intelectuales en la esfera de la literatura, las artes y la ciencia. Se ha distribuido una copia de la Ley al Grupo de Trabajo.

277. Un Miembro preguntó acerca de la expresión "uso privado" que figuraba en el artículo 129 de la Ley de Derecho de Autor. El representante de Timor-Leste explicó que por la expresión "uso privado" se entendía un uso que no fuese público o con fines lucrativos.

278. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de cumplir todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA, así como las normas, observancia y mecanismos de solución de diferencias inherentes, en particular mediante la adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna) y el establecimiento de la protección pertinente del derecho de autor y derechos conexos compatible con la Sección 1 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna.

- Marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios

279. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios. El Gobierno estaba ultimando el proyecto de Código de Propiedad Industrial, que contendría disposiciones sobre las marcas de fábrica o de comercio y que se iba a promulgar a comienzos de 2024. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y de establecer la protección pertinente de las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios, compatible con la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos 6 a 10 del Convenio de París.

- Indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen

280. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen. El Gobierno estaba ultimando el proyecto de Código de Propiedad Industrial, que contendría disposiciones sobre las indicaciones geográficas y que se iba a promulgar a comienzos de 2024. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de establecer la protección pertinente de las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, compatible con la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Dibujos y modelos industriales

281. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de los dibujos y modelos industriales. El Gobierno estaba ultimando el proyecto de Código de Propiedad Industrial, que contendría disposiciones sobre los dibujos y modelos industriales y que se iba a promulgar a comienzos de 2024. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de cumplir todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA, así como las normas, observancia y mecanismos de solución de diferencias inherentes, en particular mediante el establecimiento de la protección pertinente de los dibujos y modelos industriales compatible con la Sección 4 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Patentes

282. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de las patentes. El Gobierno estaba ultimando el proyecto de Código de Propiedad Industrial, que contendría disposiciones sobre las patentes y que se iba a promulgar a comienzos de 2024. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de establecer una legislación sobre patentes compatible con la Sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Protección de las obtenciones vegetales

283. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de las obtenciones vegetales. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de establecer una legislación sobre protección de las obtenciones vegetales compatible con el artículo 27.3 b) de la Sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

284. Respondiendo a la petición formulada por un Miembro de que Timor-Leste se asegurara de que, antes de su adhesión a la OMC, sus leyes pertinentes permitieran que las personas físicas o jurídicas de todos los Miembros de la OMC pudieran solicitar derechos sobre las obtenciones vegetales, el representante de Timor-Leste confirmó que su Gobierno reconocía la importancia de armonizar la legislación sobre propiedad intelectual del país con las normas internacionales y estaba trabajando para cumplir sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. También reconocía la importancia de proteger las obtenciones vegetales y de fomentar la innovación en la agricultura. Así pues, el Gobierno, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), había adoptado medidas proactivas para iniciar la redacción de legislación específica relativa a la protección de las obtenciones vegetales. Timor-Leste estaba plenamente comprometido con la elaboración y aplicación de esa legislación para 2026, de conformidad con el Plan de Acción para la Puesta en Práctica del Acuerdo sobre los ADPIC propuesto (**ANEXO 19**).

- Esquemas de trazado de los circuitos integrados

285. El representante de Timor-Leste informó de que en la actualidad no existían leyes ni medidas sustantivas conexas destinadas a garantizar la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de adherirse al Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC) y de establecer una legislación sobre esquemas de trazado de los circuitos integrados compatible con la Sección 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado IPIC.

- Prescripciones sobre la información no divulgada, incluidos los secretos comerciales y los datos de pruebas

286. El representante de Timor-Leste informó de que en ese momento no se confería protección alguna a la información no divulgada, incluidos los secretos comerciales y los datos sobre pruebas. El Gobierno estaba ultimando el proyecto de Código de Propiedad Industrial, que contendría disposiciones sobre los secretos comerciales y que se iba a promulgar a comienzos de 2024. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de adherirse al Convenio de París y establecer una legislación sobre secretos comerciales y datos de pruebas compatible con la Sección 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 10bis del Convenio de París.

3. MEDIDAS DE CONTROL DEL ABUSO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

287. El representante de Timor-Leste informó de que los DPI no estaban protegidos específicamente en Timor-Leste debido a la ausencia de leyes específicas sobre estas materias. Sin embargo, para controlar el uso de los DPI era posible recurrir a los tribunales de justicia, siendo de aplicación los procedimientos civiles generales.

288. Como mecanismo temporal, las empresas publicaban anuncios (generalmente denominados "avisos") en periódicos nacionales para notificar que un determinado DPI era propiedad exclusiva de una determinada empresa y que su uso ilícito estaba prohibido. Los avisos eran anuncios simples en los que se mencionaba el nombre y domicilio del titular del DPI junto con una descripción de los bienes y servicios amparados por ese derecho. En el caso de las patentes se incluía también un resumen. En el caso de los dibujos y modelos se solía incluir la correspondiente representación. Generalmente, las marcas de fábrica y de comercio se mostraban exactamente tal como se usaban (marca denominativa y/o figurativa) con la correspondiente lista de bienes o servicios. De acuerdo con la práctica nacional, los avisos estaban redactados en tetun y en inglés. Generalmente, las empresas volvían a publicar los avisos cada dos años para que, en caso de infracción, los titulares de los DPI dispusieran de una publicación reciente para respaldar su alegación. En la nueva publicación también podían mencionarse las licencias, los cambios de nombre o domicilio y las

cesiones para que los titulares de los DPI dispusieran de la prueba de titularidad o licencia más reciente. Aunque no existía base jurídica para esta práctica, la publicación de avisos seguía siendo el único procedimiento que podían adoptar las partes interesadas para compensar la falta de registro y protección de los DPI en Timor-Leste.

4. OBSERVANCIA

289. En relación con el párrafo 288, el representante de Timor-Leste dijo que el mecanismo de avisos había resultado hasta ahora una forma efectiva y eficiente de prevenir infracciones de marcas de fábrica o de comercio, patentes, y dibujos y modelos. Los avisos constituían una base para ejercitar una acción en caso de infracción. Las empresas indicaban que, en caso de infracción de los DPI, el envío de una "carta de cese y desistimiento" junto con una copia de un periódico nacional donde figurase el aviso contribuía a limitar la entrada o distribución de productos falsificados en Timor-Leste a pesar de la ausencia de una ley de propiedad intelectual. Si existía la falsificación, el Gobierno estaba determinado a confiscar y destruir los productos falsificados cuando se denunciasen.

290. Un Miembro pidió además que se aclarara cómo determinaba el Gobierno de Timor-Leste el titular legítimo del derecho de propiedad intelectual, a pesar de que no existía registro de propiedad intelectual, y cómo determinaba el Gobierno que los productos en cuestión eran mercancías falsificadas. En su respuesta, el representante de Timor-Leste hizo referencia al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley Nº 1/2006, de 21 de febrero de 2006), que decía que, cuando una persona mostrase una preocupación fundada de que otra persona estaba causando un daño grave de difícil reparación a su derecho, podría solicitar específicamente medidas cautelares o preventivas adecuadas para asegurar la efectividad del derecho amenazado. El Decreto Ley Nº 23/2009 sobre Infracciones Administrativas contra la Inocuidad de los Alimentos y las Empresas Alimentarias, de 5 de agosto de 2009, establecía en su artículo 21 (Fraude en las mercancías) que cualquier persona que, como mayorista o minorista, importase o vendiese bienes y mercancías con la intención de engañar a los consumidores en el marco de las relaciones comerciales sería sancionada con una multa de 3.000 dólares EE.UU. a 20.000 dólares EE.UU. si esos bienes o mercancías: i) habían sido objeto de falsificación, alteración o depreciación y se presentaban como auténticos, inalterados o intactos; o ii) eran de distinta naturaleza o de menor calidad o cantidad que los anunciados o presentados. Las autoridades públicas determinaban que un producto había sido objeto de falsificación, alteración o depreciación mediante un procedimiento de infracción administrativa basado en el artículo 38.1 del Decreto Ley Nº 23/2009. Podía interponerse un recurso ante el tribunal. Esa disposición permitía denunciar los productos falsificados a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley (por ejemplo, la Policía Nacional de Timor-Leste o la Policía de Aduanas), y se podían utilizar los avisos informales para sustentar las denuncias y las causas judiciales en caso de infracción de los DPI. El representante informó de que el Gobierno de Timor-Leste era consciente de que el sistema era imperfecto y presentaba ineficiencias. El Gobierno estaba decidido a elaborar un marco jurídico moderno de propiedad intelectual, así como a designar capital humano capacitado y establecer instituciones encargadas de la observancia.

291. El representante añadió que ya existían algunas leyes nacionales y tratados multilaterales, en los que Timor-Leste era parte, que abordaban la observancia de los DPI, como se explica en esta sección. Concretamente, el Código Aduanero (Decreto Ley Nº 14/2017, de 5 de abril de 2017) establecía la aplicación de prohibiciones o restricciones en relación con las mercancías presentadas en aduana por motivos de moralidad y seguridad pública, protección de la salud, protección de la vida de las personas y los animales, preservación de las plantas, preservación del medio ambiente, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre el artículo 59 que disponía que podían imponerse prohibiciones o restricciones a la propiedad industrial y comercial, el representante informó de que el Gobierno tenía previsto otorgar a los titulares de los derechos en Timor-Leste el derecho a solicitar la suspensión del despacho de las mercancías sospechosas de ser mercancías falsificadas o pirateadas.

- Procedimientos y recursos judiciales civiles

292. El representante de Timor-Leste informó de que no existían procedimientos ni recursos judiciales civiles previstos específicamente para abordar los derechos relacionados con la propiedad intelectual. En respuesta a la pregunta de un Miembro, añadió que en una diferencia sobre los DPI, las partes interesadas podían recurrir al procedimiento civil general para hacer valer sus derechos,

lo que incluía el uso de "medidas preventivas sin especificar" para prevenir la infracción de los DPI. El representante confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de desarrollar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA y garantizar su aplicación, entre ellas el establecimiento y la aplicación de procedimientos y recursos judiciales civiles compatibles con la Sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Procedimientos y recursos administrativos

293. El representante de Timor-Leste informó de que no se habían establecido procedimientos y recursos administrativos. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de desarrollar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA y garantizar su aplicación, entre ellas el establecimiento y la aplicación de procedimientos administrativos compatibles con la Sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Medidas provisionales

294. El representante de Timor-Leste informó de que no se habían establecido medidas provisionales. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de desarrollar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA y garantizar su aplicación, entre ellas el establecimiento y la aplicación de medidas provisionales compatibles con la Sección 3 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Medidas especiales en frontera

295. El representante de Timor-Leste informó de que, en virtud del artículo 11 del Decreto Ley N° 9/2004 por el que se establecen las normas generales de importación, almacenamiento y circulación de bienes sujetos al impuesto selectivo al consumo, de 19 de mayo de 2004, las empresas debían emitir un documento justificativo (conocimiento de embarque) para toda mercancía despachada de un depósito aduanero, que entre otros datos debería incluir información sobre el nombre comercial del producto.

296. Además, la Orden Ejecutiva N° 2002/12 de la UNTAET sobre el Comercio de Mercancías que Ostentan los Símbolos Nacionales de Timor-Leste, de 18 de mayo de 2002, también incluía disposiciones relativas a la observancia en la frontera. El artículo 3.1 de la Orden establecía que no dar pleno e inmediato cumplimiento a la citada Orden constituía un delito y daba lugar a que esta se hiciera cumplir prontamente por todos los medios legales a disposición de la administración pública de Timor-Leste. De conformidad con el artículo 3.4, estas disposiciones complementaban, pero no limitaban, sustituían u obstaculizaban en modo alguno, el enjuiciamiento por vía penal o a la imposición de sanciones penales por el uso no autorizado de marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y elementos similares objeto de derechos de propiedad intelectual e industrial respecto de los símbolos nacionales.

297. Además, el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional establecía una exención de embargo por reclamaciones sobre patentes. Mientras una aeronave de un Estado contratante estuviese empleada en la navegación aérea internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el tránsito autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no darían lugar a embargo o detención de la aeronave ni a reglamentación alguna contra su propietario u operador ni a injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en él se hallase, basándose en que la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la operación de la aeronave infringían los derechos de alguna patente, diseño o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio hubiera penetrado la aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigiría en ningún caso un depósito de garantía por la exención anteriormente mencionada de embargo o detención de la aeronave. De conformidad con el artículo 15 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, relativo al comercio ilícito de productos de tabaco, las Partes reconocían que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la elaboración y aplicación a este respecto de una legislación nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales eran componentes esenciales del control del tabaco. Siendo Timor-Leste parte en ambos Convenios, estas disposiciones se aplicaban como se reflejaba en su marco jurídico interno.

298. El representante confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de desarrollar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA y garantizar su aplicación, entre ellas el establecimiento y la aplicación de medidas especiales en frontera compatibles con la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Procedimientos penales

299. El representante de Timor-Leste informó de que no se habían establecido procedimientos penales. En respuesta a la pregunta de un Miembro, confirmó que el Gobierno de su país tenía la intención de desarrollar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC aplicables a los PMA y garantizar su aplicación, entre ellas el establecimiento y la aplicación de procedimientos penales compatibles con la Sección 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

300. El representante de Timor-Leste indicó que, dada su condición de país menos adelantado, Timor-Leste necesitaría un período de transición para cumplir todos los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Le iba a hacer falta una importante asistencia técnica y en materia de creación de capacidad por parte de los Miembros de la OMC para llevar a cabo esa labor. En relación con el párrafo 272, informó de que el país había adoptado la Ley Nº 14/2022 de Derecho de Autor, de 21 de diciembre de 2022, que protegía las creaciones artísticas e intelectuales de los autores. Se estaba creando un registro nacional para que ese sector gozara del debido reconocimiento y estuviera organizado adecuadamente. El representante confirmó además que el Decreto Ley sobre el Establecimiento del Instituto de Propiedad Industrial había sido adoptado en noviembre de 2023. Las otras leyes relacionadas con la propiedad intelectual (Código de Propiedad Industrial y Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales) se adoptarían a más tardar en 2026. En cuanto a las demás medidas necesarias para garantizar un cumplimiento adecuado y cabal, el representante de Timor-Leste había presentado el Plan de Acción con información detallada sobre las medidas que debían adoptarse para lograr la observancia del Acuerdo sobre los ADPIC (**ANEXO 19**).

301. El representante de Timor-Leste pidió que, además de los beneficios del trato especial y diferenciado para los países menos adelantados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y varias Declaraciones Ministeriales, incluidas la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y la Salud Pública (documento [WT/MIN\(01\)/DEC/2](#)), la Declaración Ministerial de Hong Kong (documento [WT/MIN\(05\)/DEC](#), párrafo 47) y la Decisión del Consejo de los ADPIC, de 29 de junio de 2021, sobre la prórroga del período de transición previsto en el párrafo 66.1 para los países menos adelantados Miembros (documento IP/C/88), el Grupo de Trabajo concediera a Timor-Leste un período de transición hasta el 1 de enero de 2027 para emprender la reforma legislativa pertinente y preparar al Gobierno para aplicar plenamente las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

302. El representante de Timor-Leste confirmó que, si se concedía el período de transición, los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que se referían, entre otras cosas, al trato nacional y al trato NMF, se aplicarían a partir de la fecha de adhesión, y Timor-Leste velaría por que cualquier modificación que se introdujera en sus leyes, reglamentos y prácticas en ese período no resultara en un grado menor de compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC del que existía en la fecha de adhesión. Añadió que en su opinión los casos de infracción no aumentarían de forma apreciable durante ese período, y que se haría frente de inmediato a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual con la cooperación y la asistencia de los titulares afectados. Confirmó que el Gobierno de Timor-Leste trataría de conseguir toda la asistencia técnica disponible a fin de asegurarse de que contaba con la capacidad necesaria para aplicar plenamente su régimen jurídico compatible con los ADPIC, una vez transcurrido el período de transición, y que pondría a disposición del Consejo de los ADPIC de la OMC la legislación relativa a los ADPIC, en su versión preliminar y en la promulgada, para su distribución a los Miembros interesados. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

303. El representante de Timor-Leste confirmó que su país aplicaría plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC el 1 de enero de 2027 a más tardar, de conformidad con el Plan de Acción que figuraba en el **ANEXO 19**, quedando entendido que durante ese período se protegerían en

Timor-Leste los derechos de propiedad intelectual mencionados en el párrafo 300. El Grupo de Trabajo tomó nota de ese compromiso.

VI. POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE SERVICIOS

304. El representante de Timor-Leste informó de que, en función de la naturaleza y la duración de las actividades que desearan llevar a cabo en Timor-Leste, los extranjeros y las entidades extranjeras podían emprender esas actividades y prestar servicios en el país siempre que establecieran presencia jurídica en Timor-Leste registrando una representación permanente de una entidad extranjera, como sucursal o como filial local (véase el ANEXO 20).

305. En este sentido, el representante explicó que, para establecerse de manera permanente en Timor-Leste una entidad no residente tenía que, entre otras cosas: i) constituir una sociedad local o registrar una representación permanente en el país (sucursal); ii) tener una sede comercial fija en Timor-Leste; iii) contratar personal para realizar trabajos en Timor-Leste por un período que superase un total de 60 días a lo largo de cualquier período de 12 meses; y/o iv) mantener en Timor-Leste una entidad que pudiera considerarse un "agente dependiente". Los proveedores extranjeros de servicios debían cumplir cuatro tipos de requisitos que también eran aplicables a las empresas locales que ejerciesen actividad: i) obtener un número de identificación fiscal (NIF); ii) obtener una licencia o autorización de actividades comerciales cuando el ejercicio de la actividad lo requiriese; iii) inscribir la entidad comercial en el Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE); y iv) cumplir las obligaciones permanentes de inscripción de determinados hechos o acontecimientos aplicables a cada tipo de entidad comercial.

306. Un Miembro preguntó sobre el plazo estimado de que disponían normalmente los proveedores extranjeros de servicios para cumplir estos requisitos, y si los requisitos y el calendario eran diferentes para los proveedores nacionales de servicios. El representante de Timor-Leste dijo que los documentos que debían presentar las entidades extranjeras incluían: i) el Acta de Deliberación, para las empresas extranjeras interesadas en establecer y registrar su empresa y crear un establecimiento permanente de esa empresa; ii) el pasaporte original, los estatutos de la empresa y el certificado de matrimonio (si procedía), que tenían que ser certificados por un notario en el país de origen, antes de ser presentados a la misión de Timor-Leste para que expidiera una certificación definitiva que acreditase su legitimidad; y iii) la ubicación determinada para la actividad comercial. Una vez se presentaban estos documentos, si cumplían los requisitos antes mencionados, el SERVE los tramitaba en un plazo de cinco días laborales. El representante añadió que las personas jurídicas y los ciudadanos nacionales y extranjeros tenían que cumplir los mismos requisitos que los extranjeros o las entidades extranjeras, a excepción del Acta de Deliberación, que solo se exigía a las entidades extranjeras.

307. Las medidas de Timor-Leste que afectan al movimiento de personas físicas figuran en el ANEXO 21.

308. El representante de Timor-Leste informó de que el artículo 54.4 de la Constitución y el artículo 7.1 de la Ley Nº 13/2017 del Régimen Especial para la Determinación de la Titularidad de los Bienes Inmuebles, de 5 de junio de 2017, restringían la propiedad de la tierra a los ciudadanos nacionales de Timor-Leste. En virtud del artículo 2 del Marco Jurídico relativo a los Bienes Inmuebles (Ley Nº 1/2003, de 10 de marzo de 2003), podían ser propietarios de tierras los ciudadanos nacionales o bien el Estado. Además, la Ley Nº 13/2017 del Régimen Especial para la Determinación de la Titularidad de los Bienes Inmuebles (Ley de Tierras), de 5 de junio de 2017, disponía que solo las personas jurídicas pertenecientes en un 100% a nacionales de Timor-Leste tenían derecho a comprar y poseer tierras en Timor-Leste. Las personas extranjeras que llevasen a cabo actividades legales en Timor-Leste únicamente podían arrendar tierras por un período de hasta 50 años: hasta 10 años en el caso de las empresas o industrias pequeñas; hasta 30 años, las empresas o industrias medianas, o iii) hasta 50 años, las empresas o industrias grandes. En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Inversiones Privadas, los inversores privados tenían derecho a arrendar tierras por un período máximo de 50 años, renovable por períodos de 25 años hasta un total de 100 años. En el caso de una inversión objeto de un acuerdo especial de inversiones, se podían negociar condiciones más favorables a fin de maximizar la inversión. El ANEXO 22 recoge otras fuentes de derecho pertinentes relativas a los intereses inmobiliarios.

309. Existían varios ministerios, organismos y asociaciones profesionales que desempeñaban un papel en la regulación de las actividades de servicios. Los principales organismos gubernamentales eran: i) el Ministerio de Comercio e Industria; ii) el Ministerio de Hacienda; iii) el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones; iv) el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura; v) el SERVE; y vi) el Ministerio de Salud. La lista completa de ministerios figura en el ANEXO 23. El representante añadió que Timor-Leste tenía su propia lista de clasificación de actividades económicas, publicada como anexo al Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017. A efectos del proceso de adhesión a la OMC se empleaba la Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas, que figuraba en el documento MTN.GNS/W/120, de 10 de julio de 1991.

310. El Decreto Ley Nº 34/2017 también había prohibido realizar sin autorización, ya fuese como principal o como agente, actividades comerciales al por mayor, al por menor, de comercio general, importación y exportación de bienes y prestación de servicios. Esa prohibición general había sido eliminada con la adopción del Decreto Ley Nº 83/2022, de 23 de noviembre de 2022. Además, algunas leyes especializadas prohibían realizar determinadas actividades sin una licencia especial expedida por un organismo de reglamentación. La lista de esas actividades figuraba en el anexo 8 D).

311. Por ejemplo, los bancos comerciales que operaban en Timor-Leste tenían que obtener una licencia del Banco Central de Timor-Leste (CBTL) y contar con un capital desembolsado mínimo de 2.000 dólares EE.UU. Las compañías de seguros también requerían licencia, debían ser sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas y contar con un capital desembolsado superior a 500.000 dólares EE.UU. Las empresas que operaban en los servicios de seguridad privada debían tener un director general con nacionalidad de Timor-Leste.

312. Las personas jurídicas que operasen en el negocio de los juegos sociales, máquinas tragamonedas y juegos tradicionales tenían que obtener una licencia de actividad previa para ejercer su actividad y estar legalmente constituidas de conformidad con la legislación de Timor-Leste. Tenían que i) demostrar su buena reputación y su capacidad técnica, económica y financiera acreditada para ejercer dicha actividad; ii) solicitar una concesión para ejercer esa actividad; y iii) contar con un capital desembolsado mínimo de 400.000 dólares EE.UU. y un saldo bancario no inferior a 250.000 dólares EE.UU.

313. En relación con la sección "Régimen de inversiones", el representante añadió que otras esferas importantes en que se requerían licencias eran, entre otras, las actividades correspondientes a las fases iniciales y ulteriores del proceso productivo del petróleo y el gas (sujetas a licencia/autorización de la Autoridad Nacional del Petróleo en virtud de la Ley Nº 3/2005 de Actividades Petroleras) y la minería. Ejercer una actividad comercial sin la autorización necesaria constituía un delito, y podían imponerse sanciones de entre 1.000 dólares EE.UU. y 10.000 dólares EE.UU. a quienes careciesen de ella.

314. El representante de Timor-Leste señaló que la política general consistía en promover la competencia abierta en todos los sectores de servicios. Los inversores o las empresas podían emplear a personal o expertos extranjeros. La política del Gobierno exigía que todas las grandes empresas garantizaran que un porcentaje mínimo del valor de la mano de obra de todos los proyectos importantes en Timor-Leste se dedicase al empleo o la formación acreditada de ciudadanos de Timor-Leste. Además, el representante informó de que no había medidas vigentes incompatibles con el trato de la nación más favorecida (NMF). En respuesta a la pregunta de un Miembro, aclaró que la política del Gobierno, plasmada en la Estrategia Nacional de Empleo 2017-2030 y la Ley de Inversiones Privadas, era promover el empleo y la formación de los ciudadanos timorenses. De conformidad con el artículo 23 2) c) de la Ley de Inversiones Privadas, los inversores podían tener acceso a mayores ventajas, si así se negociaban en el marco de acuerdos especiales de inversión con el Estado, al emplear y formar a ciudadanos timorenses. El Gobierno negociaba con los inversores la definición de ventajas especiales de naturaleza diversa. Estas negociaciones bilaterales podían incluir porcentajes de mano de obra. Aclaró que todo proyecto de inversión cuyo valor excediera de 1 millón de dólares EE.UU. se consideraba un proyecto importante.

315. Al mismo tiempo, aún existía un monopolio en la distribución de electricidad y en el suministro de agua. La Empresa Pública de Electricidad de Timor-Leste (EDTL, E.P.) operaba en este sector. Por razones sociales, también existía un servicio público de transporte funerario proporcionado por el Estado ante la falta de cobertura y el precio de los servicios privados. Los nacionales extranjeros

también tenían prohibido el ejercicio de determinadas actividades comerciales, por lo que no podían obtener una licencia para ejercer actividades en las categorías reservadas, como se indicaba en la sección "Régimen de inversiones". La lista de profesiones que no podían ser ejercidas por extranjeros era la siguiente: i) personal subalterno en bares, restaurantes, hoteles y comercios; ii) conductor en el sector público; iii) recepcionista; iv) personal doméstico, salvo las personas cualificadas para trabajar con personas vulnerables o niños; v) peluquero, salvo los extranjeros con formación específica; vi) guardia de seguridad; vii) auxiliar administrativo; viii) jefe de almacén; ix) personal auxiliar en cualquier actividad; x) personal de fotocopias; xi) jardinero; xii) vendedor de mercados tradicionales y vendedor callejero. Asimismo, los permisos de pesca artesanal/tradicional solo se concedían a nacionales de Timor-Leste (ciudadanos y personas jurídicas). Las actividades que estaban reservadas a los nacionales también incluían la prestación del servicio postal universal, servicios públicos de comunicaciones y el desarrollo y la exploración de parques nacionales, reservas marinas o terrestres u otras zonas protegidas.

316. Además, el representante informó de que existían las siguientes limitaciones a la participación de capital extranjero: i) sector de los servicios de prensa/medios de comunicación, en el que capital extranjero estaba limitado a un máximo del 30% del capital social; y ii) acceso al negocio del transporte público por carretera, que solo estaba abierto a ciudadanos de Timor-Leste o a personas jurídicas en las que más del 50% del capital social estuviese controlado por ciudadanos de Timor-Leste.

317. Con respecto a las prescripciones relativas al tipo específico de persona jurídica por medio del cual podía suministrarse un servicio, el representante señaló que en el sector de las telecomunicaciones se aplicaba una reglamentación específica que exigía que el proveedor de servicios estuviese registrado como persona jurídica en Timor-Leste y registrado como tal ante la Autoridad Nacional de Reglamentación. En el sector del transporte aéreo, los servicios solo podían ser prestados por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de Timor-Leste. En el sector de la construcción, para que las empresas de construcción civil y asesoría técnica pudieran participar en licitaciones de contratación pública era obligatorio que estuviesen certificadas y registradas. Con respecto a los requisitos de certificación y registro aplicables a esas empresas, el representante de Timor-Leste aclaró que estaban sujetas a las prescripciones establecidas en el Decreto Ley Nº 16/2017 sobre el Registro Mercantil, de 17 de mayo de 2017, y el Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017 (modificado por el Decreto Ley Nº 83/2022, de 23 de noviembre de 2022).

318. El ANEXO 24 contiene información detallada sobre la reglamentación en determinados sectores de servicios.

319. En cuanto al ANEXO 24, un Miembro pidió que se aclararan los requisitos que debían cumplir los abogados extranjeros que tenían que estar registrados en el Centro de Formación Jurídica (CLT), incluido el requisito de conocer el marco jurídico de Timor-Leste, y la manera en que el CLT evaluaba ese conocimiento. El representante de Timor-Leste explicó que la formación inicial para desarrollar una trayectoria profesional en el poder judicial, en particular como fiscal y defensor del pueblo, se impartía en el Centro de Formación Jurídica y Judicial (CFJJ/CLT) del Ministerio de Justicia. Con carácter excepcional, y hasta el establecimiento del Colegio de Abogados de Timor-Leste, el CLT mantuvo todas las competencias relativas a la formación de abogados. El examen tenía lugar en el CLT, donde la prueba era realizada por un tribunal designado directamente por el Ministro de Justicia. El examen constaba de tres pruebas: i) una prueba escrita para evaluar el conocimiento y la comprensión de la resolución de asuntos de derecho civil, mercantil y penal, así como el derecho procesal civil y penal; ii) una entrevista orientada a evaluar los conocimientos jurídicos, la capacidad de pensamiento crítico y argumentación del candidato; y iii) una prueba psicológica.

320. Un Miembro también pidió que se proporcionase información sobre el marco reglamentario de los servicios ambientales relacionados con el tratamiento, la eliminación y el saneamiento de las aguas residuales. El representante de Timor-Leste respondió que este sector de servicios era objeto de reformas con miras a elaborar un marco jurídico moderno. Hizo referencia a los artículos 41 y 42 del Decreto Ley Nº 26/2012 sobre la Ley Básica de Medio Ambiente, de 4 de julio de 2012, que determinaba la facultad del Estado de establecer los mecanismos necesarios para asegurar el tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales y de los efluentes de alcantarillado. La Ley requería que todo establecimiento o planta que evacuase aguas residuales se asegurase de que se tratasen de acuerdo con las normas ambientales. La importación de desechos peligrosos estaba prohibida, mientras que la identificación, el control, la producción, el

transporte, el almacenamiento, la exportación y la utilización de residuos peligrosos estaban sujetos a una legislación especial. Asimismo, habida cuenta del impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos en el agua dulce, el representante de Timor-Leste se refirió también a los principios en materia de gestión de residuos sólidos, establecidos en virtud del artículo 10 del Decreto Ley N° 2/2017 por el que se aprueba el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, de 22 de marzo de 2017, que disponía que la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos obedecía a los principios de protección de la salud pública y el medio ambiente; de fomento de la universalidad y la igualdad de acceso; de calidad y continuidad del servicio y protección de los intereses de los usuarios; de sostenibilidad económica y financiera de los servicios; del usuario como contribuyente; de responsabilidad del ciudadano con la adopción de conductas preventivas en materia de generación de residuos, así como de prácticas que facilitasen la reutilización, el reciclaje o las demás formas de valorización de residuos; de transparencia en la prestación de los servicios; de eficiencia y mejora continua en el uso de los recursos asociados, gracias a la evolución de los requisitos técnicos y a las mejores técnicas ambientales disponibles; de fomento de la solidaridad económica y social, una planificación territorial correcta y el desarrollo regional.

321. En relación con el ANEXO 24, un Miembro también preguntó qué sectores/subsectores de servicios se consideraban sensibles y altamente sensibles. El representante de Timor-Leste respondió que su país tenía una estructura económica simple, si bien la elaboración de políticas y legislación relativas a los sectores de servicios se encontraba en las primeras fases. Al mismo tiempo, como se indicaba en la sección "Régimen de inversiones", con arreglo a la Lista Negativa de Inversiones de Timor-Leste, estaba prohibido realizar inversiones nacionales y extranjeras en las siguientes actividades: i) altamente sensibles: actividades delictivas, actividades relacionadas con reservas naturales, producción y distribución de armas y municiones; y ii) sensibles: actividades relacionadas con la ofensa de costumbres tradicionales, servicios postales y de mensajería, y actividades relacionadas con los servicios funerarios. Aparte de estas actividades, Timor-Leste adoptó un enfoque liberalizado respecto del sector de los servicios, con algunas limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional aplicables a las inversiones extranjeras y a los extranjeros.

322. En respuesta a la pregunta de un Miembro, el representante de Timor-Leste informó de que, el 13 de junio de 2022, su Gobierno se había sumado a la Iniciativa Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en el ámbito de los Servicios y que era el primer Gobierno en proceso de adhesión y el primer PMA en hacerlo. Timor-Leste pasaría a ser participante en la Declaración relativa a la Conclusión de las Negociaciones sobre la Reglamentación Nacional en el ámbito de los Servicios en el momento de su adhesión. El Grupo de Trabajo tomó nota de este compromiso.

VII. TRANSPARENCIA

- Publicación de información sobre el comercio

323. El representante de Timor-Leste informó de que los instrumentos jurídicos solo entraban en vigor tras su publicación en el "Jornal da República". También se publicaban en línea en el sitio web del "Jornal da República", que formaba parte del sitio web del Ministerio de Justicia en la dirección www.mj.gov.tl. La mayoría de los instrumentos jurídicos se comunicaban proporcionando un enlace al número correspondiente del "Jornal da República".

324. El sitio web del "Jornal da República" también contenía una página web de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT): <http://www.jornal.gov.tl/lawsTL/index-e.htm>, que incluía los reglamentos de la UNTAET promulgados entre octubre de 1999 y mayo de 2002, y una página web con la legislación de Timor-Leste desde su independencia en mayo de 2002 hasta que la ONU dejó de actualizar el sitio web a mediados de 2012: <http://www.jornal.gov.tl/lawsTL/-RDTL-Law/index-e.htm>. También contenía enlaces a los instrumentos jurídicos oficiales en portugués y, en algunos casos, enlaces a traducciones no oficiales al inglés.

325. Además, el sitio web del Gobierno de Timor-Leste (<http://timor-leste.gov.tl/?lang=en>) contenía una selección de leyes correspondientes a seis categorías. Se actualizaba periódicamente y proporcionaba información en tres idiomas -portugués, tetun e inglés- sobre las principales decisiones de política adoptadas semanalmente en el Consejo de Ministros. Algunos de los sitios web de los distintos ministerios, así como el sitio web del Banco Central de Timor-Leste, también contenían enlaces a la legislación pertinente.

326. Un Miembro preguntó si Timor-Leste ya había establecido o tenía previsto establecer procedimientos para permitir la formulación de observaciones sobre instrumentos jurídicos antes de su finalización, y si se celebraban consultas públicas sobre las leyes y decretos en proyecto o provisionales antes de su finalización y publicación. El representante de Timor-Leste respondió que, durante el proceso de redacción de los diferentes instrumentos legislativos, el Gobierno podía celebrar consultas públicas con las partes interesadas pertinentes. La celebración de tales consultas quedaba a discreción del Gobierno. En relación con el párrafo 188, informó además de que su Gobierno estaba trabajando en el establecimiento, para mayo de 2024, de un mecanismo de consultas públicas transparentes para todos los proyectos de propuestas legislativas referentes a reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad.

327. El representante de Timor-Leste confirmó que, con efecto a partir de su adhesión, Timor-Leste aplicaría plenamente y sin dilación las disposiciones del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el artículo III del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, el artículo 63 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC y otras disposiciones de los Acuerdos de la OMC en materia de transparencia que requerían notificación y/o publicación. Confirmó también que ninguna ley, reglamento, decisión judicial, disposición administrativa ni otra medida de aplicación general que se refiriera o afectara al comercio de mercancías o servicios y a los ADPIC entraría en vigor si no había sido publicado previamente en el "Jornal da República", así como en los sitios web oficiales de los Ministerios competentes. Al publicarse esas leyes, reglamentos y otras medidas se indicaría la fecha de su entrada en vigor; también se publicaría una lista de los productos y/o servicios afectados por la medida en cuestión. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

- Notificaciones

328. El representante de Timor-Leste informó de que su Gobierno reconocía la importancia de los requisitos de notificación previstos en los Acuerdos de la OMC. Por ello, tenía intención de presentar todas las notificaciones iniciales prescritas en los Acuerdos de la OMC dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su adhesión. Todos los reglamentos, leyes y otras medidas que promulgase ulteriormente Timor-Leste y que debían notificarse de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de la OMC serían notificados en un plazo y de una manera que fuesen compatibles con las prescripciones de la OMC.

329. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre cómo se proponía el Gobierno gestionar sus obligaciones de notificación, el representante explicó que, una vez que Timor-Leste se convirtiera en Miembro de la OMC, cumpliría sus obligaciones de notificación iniciales y notificaría inmediatamente a los Miembros todo cambio ulterior con respecto a cada modificación de sus leyes, instrumentos legislativos u otras medidas que promulgase posteriormente de conformidad con las normas de la OMC.

330. Un Miembro pidió que se aclarara si la Secretaría Permanente para la Adhesión, a la que se hace referencia en el párrafo 86, se encargaría de presentar notificaciones. En respuesta, el representante de Timor-Leste informó de que la Secretaría sería el órgano encargado de coordinar y aplicar las obligaciones de notificación.

331. El representante de Timor-Leste confirmó que, a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Adhesión, Timor-Leste presentaría todas las notificaciones iniciales prescritas en el Acuerdo sobre la OMC. Todos los reglamentos, leyes y otras medidas que promulgase ulteriormente Timor-Leste y que debían notificarse de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de la OMC serían notificados en un plazo y de una manera que fuesen compatibles con las prescripciones de la OMC. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

VIII. ACUERDOS COMERCIALES

332. El representante de Timor-Leste informó de que su país no era parte en ningún acuerdo de unión aduanera o libre comercio ni en ningún otro acuerdo bilateral o multilateral relativo al comercio de bienes y servicios, la inversión o la propiedad intelectual. No era miembro de ningún acuerdo comercial regional o acuerdo de integración de mercados de trabajo. El país era parte en los siguientes acuerdos: i) Acuerdo entre Timor-Leste e Indonesia sobre los Pasos Fronterizos Tradicionales y los Mercados Reglamentados, firmado en Yakarta (Indonesia) el 11 de junio de 2003; y ii) el Acuerdo de Cooperación entre Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) sobre Cine y Medios Audiovisuales, firmado en Luanda (Angola) el 14 de mayo de 2005, así como varios acuerdos bilaterales (incluidos los tratados bilaterales sobre inversiones), enumerados en el ANEXO 25. En respuesta a una pregunta de un Miembro, el representante aclaró que estos acuerdos bilaterales no preveían ventajas/privilegios asociados al comercio de servicios. Las exportaciones de Timor-Leste también se beneficiaban de arreglos comerciales preferenciales concedidos unilateralmente, a saber:

- el Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos;
- el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea;
- el Sistema Generalizado de Preferencias de Australia; y
- el Sistema Generalizado de Preferencias de Nueva Zelandia.

333. Al mismo tiempo, el Gobierno reconocía la importancia de la cooperación regional. Desde 2011, cuando Timor-Leste solicitó oficialmente su adhesión a la ASEAN, había estado llevando a cabo las reformas institucionales y jurídicas necesarias hacia el pleno cumplimiento de la normativa de la Comunidad Económica de la ASEAN.

334. En respuesta a la pregunta de un Miembro sobre los planes del Gobierno de su país de iniciar negociaciones comerciales para establecer acuerdos comerciales, el representante de Timor-Leste dijo que el Gobierno estaba dispuesto a considerar la posibilidad de entablar negociaciones con otros países y, en su momento, firmar acuerdos comerciales para salvaguardar intereses mutuos y potenciar los beneficios mutuos, respetando al mismo tiempo los compromisos inherentes a la adhesión a la OMC. El representante explicó que el Gobierno hizo los preparativos técnicos necesarios para crear un equipo de negociación encargado de la adhesión de Timor-Leste a los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Esos esfuerzos quedaron reflejados en algunos cursos de formación relacionada con el comercio realizados por los funcionarios. Paralelamente, teniendo en cuenta el compromiso de Timor-Leste de adherirse a la OMC y la ASEAN, el Gobierno seguía trabajando en el fortalecimiento de su marco institucional y jurídico para que estuviese en conformidad con estos acuerdos. La situación respecto del proceso de adhesión de Timor-Leste a la ASEAN figura en el ANEXO 26.

335. La lista de organizaciones multilaterales y programas de otras organizaciones multilaterales relacionados con el comercio de los que era miembro o en los que participaba Timor-Leste figura en el ANEXO 27.

336. El representante de Timor-Leste confirmó que el Gobierno de su país observaría en sus acuerdos comerciales las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, incluidos el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, la Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (Cláusula de Habilitación), adoptada por el GATT en 1979, y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, y velaría por que, a partir de la fecha de su adhesión, se cumpliesen las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre la OMC en materia de notificación, consulta y otras prescripciones relativas a las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras y otros arreglos comerciales preferenciales en los que Timor-Leste fuera parte o pudiera pasar a ser parte. El Grupo de Trabajo tomó nota de esos compromisos.

CONCLUSIONES

337. El Grupo de Trabajo tomó nota de las explicaciones y declaraciones de Timor-Leste acerca de su régimen de comercio exterior, reflejadas en el presente informe. También tomó nota de los compromisos contraídos por Timor-Leste en relación con algunos asuntos específicos, que se recogen en los párrafos 51, 63, 75, 93, 100, 110, 114, 116, 122, 125, 133, 146, 150, 152, 164,

167, 173, 178, 180, 190, 231, 233, 239, 255, 261, 302, 303, 322, 327, 331 y 336 de este informe. El Grupo de Trabajo tomó nota de que esos compromisos se habían incorporado al párrafo 2 del Protocolo de Adhesión de la República Democrática de Timor-Leste a la OMC.

338. Después de haber examinado el régimen de comercio exterior de Timor-Leste, y habida cuenta de las explicaciones, compromisos y concesiones formulados por el representante de Timor-Leste, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que debía invitarse a Timor-Leste a adherirse al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo XII. A tal efecto, el Grupo de Trabajo ha preparado el proyecto de Decisión y el proyecto de Protocolo de Adhesión que se reproducen en el apéndice del presente informe, y toma nota de la Lista de concesiones y compromisos en materia de mercancías (documento [WT/ACC/TLS/34/Add.1](#)) y de la Lista de compromisos específicos en materia de servicios (documento [WT/ACC/TLS/34/Add.2](#)) de Timor-Leste anexas al Protocolo. Se propone que la Conferencia Ministerial adopte esos textos cuando adopte el informe. Cuando se haya adoptado la Decisión, el Protocolo de Adhesión quedará abierto para su aceptación por Timor-Leste, que pasará a ser Miembro 30 días después de haber aceptado dicho Protocolo. Así pues, el Grupo de Trabajo convino en que había finalizado su labor en relación con las negociaciones para la adhesión de Timor-Leste al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC.

**ANEXO 1: Leyes, reglamentos y demás información facilitada
por Timor-Leste al Grupo de Trabajo**

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
POLÍTICAS ECONÓMICAS	
Reglamento Nº 2001/14 de la UNTAET sobre la Moneda Oficial y la Moneda de Curso Legal de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 1/2003, Marco Jurídico relativo a los Bienes Inmuebles (Ley de Tierras)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 14/2003, Régimen Jurídico de las Empresas Públicas	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 20/2003, Moneda de Curso Legal en Timor-Leste	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 19/2004, Régimen Jurídico relativo a la Afectación Oficial y al Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 4/2005, Ley de Inversiones Nacionales	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 5/2005, Ley de Inversiones Extranjeras	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 5/2005 del Gobierno, Normas de Procedimiento para la Inversión Nacional	WT/ACC/TLS/9
Decreto Nº 6/2005 del Gobierno, Normas de Procedimiento para la Inversión Extranjera	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 8/2005, Impuesto sobre el Petróleo	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 13/2005, Ley de Actividades Petroleras	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 7/2005, Licitación Pública para la Adjudicación de Contratos Petroleros	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 28/2008 sobre el Suministro Público de Productos Esenciales	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 20/2008 del Gobierno sobre el Suministro Público de Productos Esenciales	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 20/2008, Autoridad Nacional del Petróleo	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 13/2008 del Gobierno por el que se regula la intervención del Gobierno en el suministro público y los precios de los productos esenciales	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 6/2008 por la que se establecen las medidas para estabilizar los precios, luchar contra la inflación y evitar la especulación; Reglamento sobre la Intervención del Gobierno en el Mercado	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 4/2009, Importación y Exportación de Efectivo	WT/ACC/TLS/5
Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2011-2030	WT/ACC/TLS/27
Resolución Nº 13/2012 del Gobierno, Régimen para el Establecimiento de los Márgenes de Venta Máximos de Determinados Productos Esenciales	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Nº 6/MTCI/III/2011 sobre el Precio de Venta del Maíz de Producción Local	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 4/2011, Delitos de Monopolización y Especulación	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 11/MTCI/VI/2011 por la que se regula el suministro público de arroz y otros productos esenciales	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 5/2011, Ley Orgánica del Banco Central de Timor-Leste (CBTL)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 29/2011, Precios Justos	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 31/2011, Timor Gap - Empresa Pública de Gas y Petróleo de Timor	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 14/2011, Ley de Inversiones Privadas	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 17/2011, Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 4/2012, Código Laboral	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 1/2012, Sector de Elaboración Avanzada	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 5/2012, Ley de Huelga	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 14/2012, Suministro Público de Arroz	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 42/2012, Régimen Jurídico de las Asociaciones Público-Privadas	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 1/2013, Reglamentación del Suministro Público de Arroz y Normalización de los Precios	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Nº 2/2013, Suministro Público de Arroz en Oe-cusse Ambeno	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 5/2013, Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (1ª Modificación)	WT/ACC/TLS/5
Reglamento Nº 1/2013 del BCTL, Régimen de Licencias y Supervisión de los Agentes de Transferencias Monetarias	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 2/2014, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 42/2012, de 7 de septiembre de 2012, por el que se aprueba el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas	WT/ACC/TLS/7

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Decreto Ley Nº 8/2014, Régimen Jurídico de las Asociaciones Público-Privadas	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 16/2014, Unidad de Información Financiera	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 24/2014, Régimen Jurídico para el Establecimiento de la Política de Turismo en Timor-Leste	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 26/2014, Establecimiento del Centro Nacional de Logística	WT/ACC/TLS/21
Decreto Ley Nº 17/2015, Sistema Nacional de Pagos	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 43/2015 del Gobierno, Participación del Gobierno en las Inversiones del Sector de la Extracción de Cemento y Piedra Caliza	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 44/2015 del Gobierno, Participación de la Empresa Estatal Timor Gap en el Sector de la Prospección Petrolera	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 45/2015, Establecimiento del Organismo de Promoción de las Inversiones y Exportaciones, Institución Pública (TradeInvest)	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 1/2016, Autoridad Nacional del Petróleo	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 7/2016 del Gobierno, Consejo Nacional del Trabajo	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 8/2016, Ley de Protección del Consumidor	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 32/2016, Régimen Jurídico de las Operaciones Petrolíferas Marítimas en Timor-Leste	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 13/2016 del Gobierno, Reglamento de las Cuentas Bancarias en el marco de la Asociación Público-Privada para el Puerto de Tíbar	WT/ACC/TLS/7
Reglamento Nº 2/2016 de la Autoridad Nacional del Petróleo y los Recursos Minerales, Actividades de Comercialización en las Fases Ulteriores del Proceso Productivo (reglamenta el registro y la concesión de licencias para la venta de combustibles, biocombustibles y lubricantes)	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 36/2016 del Gobierno, Reserva de las Actividades de Prospección de Materiales de Construcción para las Empresas Locales	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Nº 64/2016, Normas Específicas de Concesión de Licencias para las Actividades de Prospección de Minerales	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 39/2016, Subdivisión del Bloque de Prospección en Tierra	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 9/2017 del Gobierno, Política Nacional de TIC en 2017-2019	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 16/2017 del Gobierno, Política Nacional de Turismo 2030	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 4/2017, Importación y Exportación de Efectivo	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 8/2017, Expropiación por Motivos de Interés Público	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 10/2017, Ley de Sociedades Mercantiles	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Conjunta Nº 32/2017, Reglamentación del Precio de Reventa del Arroz	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 11/2017 de Migración y Asilo	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 13/2017, Régimen Especial para la Determinación de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Ley de Tierras)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 28/2017 del Gobierno, Modelos de Actas Constitutivas de Empresas Comerciales	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 27/2017 del Gobierno, Establecimiento de los Criterios relativos a la Obligación de Designar un Órgano de Supervisión o un Auditor Externo en las Empresas Comerciales	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 44/2017 del Gobierno sobre la Estrategia Nacional de Empleo (2017-2030)	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 15/2017, Ley de Inversiones Privadas	WT/ACC/TLS/5
Reglamento Nº 3/2017, Acuñación y Utilización de Monedas	WT/ACC/TLS/7
Guía de Inversiones de Timor-Leste, de 2017	WT/ACC/TLS/21
Decreto Nº 4/2019 del Gobierno, 1ª Modificación del Decreto Nº 2/2018 del Gobierno por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de la Inversión Privada	WT/ACC/TLS/7 WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley Nº 16/2019, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 3/2011, de 26 de enero de 2011, y del Estatuto del Banco Comercial Nacional de Timor-Leste, S.A.	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 4/2019, Régimen Laboral y Migratorio Especial Aplicable al Proyecto de Bayu-Undan; disposiciones adicionales aplicables en la Ley Nº 11/2017 de Migración y Asilo	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 1/2019, 1ª Modificación de la Ley Nº 13/2005 de Actividades Petroleras, de 2 de septiembre de 2005	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 6/2019, 2ª Modificación de la Ley Nº 13/2005 de Actividades Petroleras, de 2 de septiembre de 2005	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 9/2020, Proyecto Integrado de Identificador Único de los Ciudadanos y Residentes Timorenses	WT/ACC/TLS/15
Resolución Nº 29/2020 del Gobierno, Establecimiento de la Comisión de Coordinación y Supervisión de las Reformas Institucionales	WT/ACC/TLS/21

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Resolución Nº 38/2020 del Gobierno, Programa de Reforma de la Administración Pública 2019-2023	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 8/2021, Régimen Jurídico para la Clasificación y Calificación del Suelo	WT/ACC/TLS/27
Ley Nº 10/2021, 1ª Modificación de la Ley Nº 11/2017 de Migración y Asilo	WT/ACC/TLS/21
Plan de Recuperación Económica de Timor-Leste para 2020-2023	WT/ACC/TLS/19
Instrucción Nº 08/2009 del CBTL por la que se aprueba la Instrucción Pública Nº 4/2009 sobre Importación y Exportación de Efectivo	WT/ACC/TLS/19
Instrucción Nº 5/2017 del CBTL, Identificación de Clientes, Mantenimiento de Registros y Declaración de Transacciones	WT/ACC/TLS/19
Decreto Ley Nº 9/2022, Régimen Jurídico de Construcción y Urbanismo	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 14/2022, Código de Registro Catastral	WT/ACC/TLS/23
Resolución Nº 34/2022 del Gobierno, Apoyo al Sector Privado	WT/ACC/TLS/27
Estrategia de Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas	WT/ACC/TLS/27
Ley Nº 1/2023 de Insolvencia	WT/ACC/TLS/27
Plan de Reformas en Materia de Inversión (revisión) de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/32
Guía de Inversiones de Timor-Leste, edición de 2023	WT/ACC/TLS/32
Proyecto de Ley de Insolvencia	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Código de Insolvencia	WT/ACC/TLS/26
Proyecto de Ley de Competencia	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley por el que se regula la estructura funcional del SERVE	WT/ACC/TLS/26
MARCO PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS	
Constitución de la República Democrática de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 1/2002, Publicación de Actos Normativos	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 2/2002, Interpretación de la Legislación Aplicable	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 10/2003, Interpretación del Artículo 1 de la Ley Nº 2/2002, de 7 de agosto de 2002, y Fuentes del Derecho	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 5/2004, Estatuto de los Diputados	WT/ACC/TLS/5
Código de Procedimiento Penal - Decreto Ley Nº 13/2005	WT/ACC/TLS/5
Código de Procedimiento Civil - Decreto Ley Nº 1/2006	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 25/2008 del Parlamento Nacional, Ratificación de la UNCAC	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 32/2008, Procedimiento Administrativo	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 2/2009 de Protección de Testigos, de 6 de mayo de 2009	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 9/2009, Política Nacional de Timor-Leste (PNTL)	WT/ACC/TLS/5
Código Penal - Decreto Ley Nº 19/2009	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 11/2009, División Administrativa Territorial (Gobierno Local)	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 6/2009 sobre la 1ª Modificación del Código Penal, previo Examen Parlamentario	WT/ACC/TLS/5
Código Civil - Ley Nº 10/2011	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 3/2004 de Partidos Políticos	WT/ACC/TLS/17
Decreto Nº 1/2015 del Gobierno, Procedimiento Aplicable a la Financiación Pública y las Normas de Ejecución del Presupuesto del Estado de 2015	WT/ACC/TLS/9
Reglamento Nº 1/2016 del Parlamento Nacional	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 4/2016, División Administrativa Territorial (Gobierno Local)	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 6/2017 por la que se establecen las bases de la ordenación territorial	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Conjunta Nº 42/2017, Reglamentación de las Competencias de las Autoridades Municipales y las Administraciones Municipales en el Sector de las Obras Públicas	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Conjunta Nº 43/2017, Reglamentación de las Competencias de las Autoridades Municipales y las Administraciones Municipales en el Sector del Agua y el Saneamiento	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 51/2017 del Gobierno, Reglamento del Consejo de Ministros	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 14/2018, Estructura Orgánica del VIII Gobierno Constitucional	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 12/2019, Código de Conducta de los Miembros del Gobierno	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 27/2020, 2ª Modificación del Decreto Ley Nº 14/2018, Estructura Orgánica del VIII Gobierno Constitucional	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 7/2020, Prevención y Lucha contra la Corrupción	WT/ACC/TLS/15
Ley de Presupuestos Anuales para 2021 (Ley Nº 14/2020, modificada por la Ley Nº 8/2021)	WT/ACC/TLS/15
Ley Nº 3/2021 por la que se autoriza al Gobierno a modificar el Código de Procedimiento Civil	WT/ACC/TLS/15
Ley Nº 6/2021, Régimen Jurídico de Arbitraje Voluntario y 1ª Modificación del Código de Procedimiento Civil	WT/ACC/TLS/15

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Resolución Nº 8/2021, Adhesión de Timor-Leste a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958	WT/ACC/TLS/15
Decreto Ley Nº 16/2021, Estructura General de la Administración Pública	WT/ACC/TLS/27
Ley Nº 23/2021 de Gobiernos Locales y Descentralización Administrativa	WT/ACC/TLS/21
Ley Nº 25/2021 del Sistema de Tribunales	WT/ACC/TLS/21
Ley Nº 12/2022, 1ª Modificación de la Ley Nº 25/2021, Sistema de Tribunales	WT/ACC/TLS/27
Ley Nº 15/2022, Presupuesto del Estado para 2023 (Artículo 3)	WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley Nº 70/2022, Gestión de los Parques Industriales	WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley Nº 83/2022, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas	WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley Nº 87/2022, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 14/2017, Código Aduanero	WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley Nº 95/2022, Normas de Origen	WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Decreto del Gobierno sobre el Establecimiento de la Secretaría Permanente para la Adhesión a la OMC	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Decreto Ley sobre el Régimen Jurídico de las Infracciones Administrativas	WT/ACC/TLS/26
POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE MERCANCÍAS	
Orden Ejecutiva Nº 2002/12 sobre el Comercio de Mercancías que Ostenten los Símbolos Nacionales de Timor-Leste (UNTAET)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 19/2003, Reglamentación de los Derechos Portuarios	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 21/2003, Cuarentenas y Controles Sanitarios de las Mercancías Importadas y Exportadas	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 6/2004, Bases Generales del Régimen Jurídico para la Gestión y Regulación de las Pesquerías y la Acuicultura	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 5/2004 del Gobierno, Reglamentación General de la Pesca	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 12/2004, Reglamentación de las Actividades Farmacéuticas	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 4/2004, Proporción del Seguro de las Mercancías Importadas	WT/ACC/TLS/17
Orden Ministerial Nº 10/2004, Derechos de Licencia para Actividades Farmacéuticas	WT/ACC/TLS/17
Orden Ministerial Nº 12/2004, Clasificación de los Medicamentos	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 4/2005, Bases Generales del Régimen Jurídico para la Gestión y Regulación de las Pesquerías y la Acuicultura	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 10/2005, Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 11/2005, Infracciones Administrativas del Régimen Jurídico de Aprovisionamiento y el Régimen Jurídico de Contratación Pública	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 12/2005, Régimen Jurídico de Contratación Pública	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 8/2006, Reglamentación de los Derechos de Aduana	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 1/2006 del Gobierno, Normas y Procedimientos de Aplicación de Cuarentenas y Controles Sanitarios de las Mercancías Importadas y Exportadas	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 14/2006, 1ª Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 8/2008, Ley de Impuestos y Derechos	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 24/2008, 2ª Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 5/2009, Concesión de Licencias para la Venta de Agua Potable	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 2/2009, Régimen Jurídico Especial de Contratación del Servicio Autónomo de Medicamentos y Equipos de Salud (SAMES)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 23/2009, Infracciones Administrativas contra la Inocuidad de los Alimentos y las Empresas Alimentarias	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 1/2009, Procedimiento de Expedición del Certificado de Origen para el Café	WT/ACC/TLS/7
Decreto Nº 8/2009 del Gobierno, Reglamentación de la Contratación Especial para el Sector Prioritario	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 29/2009 sobre la Contratación Especial para Proyectos Prioritarios	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 1/2010, Tercera Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 2/2010, Contratación Especial para Obras de Construcción de hasta USD 250.000	WT/ACC/TLS/5

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Decreto Ley Nº 3/2010, Estructura Orgánica de la Comisión Técnica y de Supervisión de la Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 14/2010, Medidas de Contratación Temporales	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 11/2011, Organismo Nacional de Desarrollo	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 14/2011, Comisión Nacional de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 15/2011, Cuarta Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 30/2011, Condiciones y Procedimientos para la Importación de Vehículos Automóviles	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 38/2011, Quinta Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 9/2012 del Gobierno, Acuerdo de Transacción entre el Estado y Timor Telecom	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 18/2011, Programas de Desarrollo Descentralizado I y II	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 24/2011, Régimen de Licencias para Actividades Comerciales	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 28/2011, Reglamento de la Industria y la Comercialización de Productos Alimenticios	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 35/2012, Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE)	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 26/2012, Ley Básica de Medio Ambiente	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 36/2012, Control de la Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 11/2013, Régimen Jurídico de Contratación del Plan de Desarrollo Integrado de Distrito (PDID)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 5/2015, Creación de la Zona de Libre Comercio y la Zona Franca Aduanera Industrial de la Región de Oe-Cusse Ambeno (ZEESM)	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 10/2014, Reglamentación de la Concesión de Licencias a Mataderos	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 13/2014, Reglamentación de los Requisitos de Higiene para la Venta de Carne y Productos Cárnicos	WT/ACC/TLS/9
Ley Nº 3/2014, Creación de la Región Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) y la Zona Especial de Economía Social de Mercado (ZEESM) de Oe-Cusse Ambeno y Ataúro	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 28/2014, Régimen Especial de Contratación para la Región Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (ZEESM)	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 37/2014, Acuerdo Especial de Inversiones con Heineken	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 28/2015, Reglamentación de los Derechos Portuarios (1ª Modificación del Decreto Ley Nº 19/2003)	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 1/2016, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 20/2008	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 6/2016 del Gobierno, Comisión Nacional de Facilitación del Comercio	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 5/2016, Sistema Nacional de Zonas Protegidas	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 12/2016, Régimen Jurídico Especial de Contratación del Servicio Autónomo de Medicamentos y Equipos de Salud (SAMES)	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 15/2016, Régimen Jurídico de Contratación del Plan de Desarrollo Integrado de Distrito (PDID)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 26/2016, Establecimiento de la Autoridad de Inspección y Supervisión de las Actividades Económicas, Sanitarias y Alimentarias	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 35/2016, Creación de la Comisión de Establecimiento de la Autoridad de Inspección y Supervisión de las Actividades Económicas, Sanitarias y Alimentarias	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 42/2016 del Gobierno, Adopción de las Normas de la Declaración de Arusha (Revisada) de la Organización Mundial de Aduanas	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 41/2016 del Gobierno, Aprobación de la Aportación de Capital y la Participación del Estado en TL Cement	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 2/2017, Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 7/2017, Servicio de Registro y Verificación Empresarial (SERVE)	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 9/2017, Estructura Orgánica de la Autoridad Aduanera	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 12/2017 del Gobierno, Política Nacional de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 13/2017, Estructura Orgánica de la Autoridad Tributaria	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 14/2017, Código Aduanero de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 14/2017, Régimen Jurídico de la Silvicultura	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 16/2017, Procedimiento de Registro Mercantil (o Comercial)	WT/ACC/TLS/5

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Resolución Nº 43/2017 del Gobierno, Examen de la Documentación Técnica en el Proceso de Contratación de Obras Públicas	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 23/2017, Sistema de Garantía de Créditos para Pequeñas y Medianas Empresas	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 24/2017 del Gobierno, Adopción del Sistema Informático SIDUNEA World como Plataforma para la Ventanilla Única Nacional	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 28/2017, Régimen de Vigilancia de Entrada y Salida de Vehículos en el Territorio Nacional	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 34/2017, Régimen de Licencias para Actividades Comerciales	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 3/2017, Importación de Narcóticos o Sustancias Psicotrópicas	WT/ACC/TLS/17
Orden Ministerial Nº 11/2017, Productos Medicinales Naturales	WT/ACC/TLS/17
Decreto Ley Nº 10/2018, Estatuto Jurídico del Instituto de Calidad de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/7
Orden Ministerial Nº 34/2018, Cuadro de Emolumentos del SERVE	WT/ACC/TLS/17
Ley Nº 3/2019, 1ª Modificación de la Ley Nº 3/2014, Creación de la Región Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) y la Zona Especial de Economía Social de Mercado (ZEESM) de Oe-Cusse Ambeno y Ataúro	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 5/2019, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 8/2008, Ley de Impuestos y Derechos	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 27/2019, 2ª Modificación del Decreto Ley Nº 20/2008, Creación de la Autoridad Nacional del Petróleo y los Recursos Minerales	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 6/2020, Marco Jurídico para la Protección y la Conservación de la Diversidad Biológica	WT/ACC/TLS/18
Decreto Ley Nº 30/2019, Sexta Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 2/2020, Establecimiento de la Estructura Orgánica de la Autoridad Aduanera	WT/ACC/TLS/21
Decreto Ley Nº 7/2020, Importación, Transporte, Almacenamiento y Utilización de Explosivos para Actividades de Construcción Civil y Extracción Petrolera y Minera	WT/ACC/TLS/17
Resolución Nº 31/2020 del Gobierno, Establecimiento de la Comisión Interministerial de Reforma Fiscal y de Gestión de las Finanzas Públicas y de la Subcomisión Interministerial de Reforma de la Gestión del Patrimonio del Estado	WT/ACC/TLS/15
Decreto Ley Nº 5/2021, Séptima Modificación del Régimen Jurídico de Contratación	WT/ACC/TLS/19
Decreto Ley Nº 15/2021, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 10/2018 sobre el Estatuto Jurídico del Instituto de Calidad de Timor-Leste, I.P.	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 10/2022, Aprobación de Medidas para Reforzar la Distribución de Cestas de Alimentos Básicos a las Familias Timorenses Más Necesitadas y para Apoyar a los Agentes Económicos Locales y Crear un Régimen Especial de Contratación Pública con este Fin, en el marco del Plan de Recuperación Económica	WT/ACC/TLS/30
Resolución Nº 20/2022 del Gobierno, Establecimiento de la Comisión Interministerial para la Coordinación de la Cadena de Valor y el Fomento de la Producción Local	WT/ACC/TLS/30
Decreto Ley Nº 22/2022, Régimen Jurídico de Aprovisionamiento y Contratación Pública y las Respectivas Infracciones	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 39/2022, 1ª Modificación del Decreto Ley Nº 5/2011 sobre Licencias Ambientales	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 41/2022, Establecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, I.P., y Aprobación de su Estatuto	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 42/2022, Establecimiento de la Autoridad Designada para Luchar contra el Cambio Climático, I.P., y Aprobación de su Estatuto	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 43/2022, Empresa Minera de Timor-Leste	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 44/2022, Marco Jurídico de los Parques Industriales	WT/ACC/TLS/23
Ley Nº 11/2023, Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo	WT/ACC/TLS/30
Decreto Nº 3/2023 del Gobierno, Establecimiento de la Secretaría Nacional para la Adhesión a la Organización Mundial del Comercio	WT/ACC/TLS/30
Resolución Nº 24/2023 del Gobierno, 1ª Modificación de la Resolución Nº 6/2016 del Gobierno sobre la Creación de la Comisión Nacional de Facilitación del Comercio (CONFAC)	WT/ACC/TLS/30
Decreto-Ley Nº 36/2023, Cuestiones Fitosanitarias y la Cuarentena	WT/ACC/TLS/30

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Decreto-Ley N° 37/2023, 1ª Modificación del Decreto-Ley N° 16/2017 sobre el Registro Mercantil; 1ª Modificación del Decreto-Ley N° 7/2017 sobre el Servicio de Registro y Verificación Empresarial, I.P. (SERVE); 2ª Modificación del Decreto Ley N° 16/2004 sobre la Ley de Cooperativas	WT/ACC/TLS/30
Decreto Ley N° 40/2023 sobre Metrología	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley N° 41/2023 sobre la Salud Animal y la Cuarentena	WT/ACC/TLS/30
Resolución sobre la Ratificación del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), adoptada por el Parlamento Nacional el 15 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley sobre Concesión de Licencias Comerciales, adoptado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley sobre Concesión de Licencias Industriales, adoptado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley sobre el Reglamento para la Organización de los Servicios de Inspección de Buques, adoptado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Política industrial, adoptada por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley sobre Medidas Comerciales Correctivas, adoptado por el Consejo de Ministros el 6 de diciembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Proyecto de Ley de Plaguicidas	WT/ACC/TLS/15
Proyecto de Decreto Ley sobre la Cuarentena (Sanidad Animal)	WT/ACC/TLS/5 WT/ACC/TLS/9
Proyecto de Decreto Ley sobre la Cuarentena (Preservación de los Vegetales)	WT/ACC/TLS/5 WT/ACC/TLS/9
Proyecto de prescripciones para la importación de animales y productos de origen animal y de plantas y productos vegetales (prescripciones de cuarentena)	WT/ACC/TLS/15
Proyecto de Decreto Ley sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas (revisión)	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Política Industrial	WT/ACC/TLS/23
Resolución del Gobierno sobre el Establecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (revisión)	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Decreto Ley sobre Normas de Origen	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Decreto Ley sobre Licencias de Importación	WT/ACC/TLS/26
Proyecto de Ley de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo	WT/ACC/TLS/26
Proyecto de Ley de Promoción de las Exportaciones	WT/ACC/TLS/15 WT/ACC/TLS/26
Proyecto de Decreto Ley relativo al Reglamento sobre el Procedimiento de Registro Mercantil (Modificación del Decreto Ley N° 16/2017)	WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Decreto Ley sobre el Régimen de Licencias para Actividades Industriales	WT/ACC/TLS/23 WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Decreto Ley sobre Concesión de Licencias Comerciales	WT/ACC/TLS/30
Proyecto de Decreto Ley sobre el Reglamento para la Organización de los Servicios de Inspección de Buques	WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Resolución del Parlamento sobre la Ratificación del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías	WT/ACC/TLS/30
Proyecto de Política sobre Medidas Comerciales Correctivas	WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Plan de Reformas en Materia de Inversión	WT/ACC/TLS/30
Proyecto de Ley del IVA	WT/ACC/TLS/32
RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADA CON EL COMERCIO	
Código Civil de Indonesia (Título XX - Propiedad intelectual)	WT/ACC/TLS/5
Resolución N° 16/2017 del Parlamento, Ratificación del Convenio internacional que establece la OMPI	WT/ACC/TLS/5
Ley N° 14/2022 de Derecho de Autor	WT/ACC/TLS/27
Decreto Ley sobre el Establecimiento del Instituto de Propiedad Industrial, adoptado el 6 de diciembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Proyecto de Código de Propiedad Industrial	WT/ACC/TLS/23 WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Ley de Derecho de Autor	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Decreto Ley sobre el Establecimiento del Instituto de Propiedad Industrial	WT/ACC/TLS/23
POLÍTICAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE SERVICIOS	
Reglamento N° 8/2000 de la UNTAET, Régimen de Licencias y Supervisión de los Bancos	WT/ACC/TLS/5

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Decreto Ley Nº 2/2003, Ley Básica de Transporte por Carretera	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 11/2003, Reglamentación del Sector de las Telecomunicaciones	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 13/2003, Bases del Sistema Nacional de Electricidad	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 18/2003, Contratos de Transporte por Carretera	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 4/2004, Suministro de Agua para el Consumo Público	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 17/2004, Servicios Postales	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 18/2004, Reglamentación de los Servicios Privados de Salud	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 5/2006, Certificación de los Operadores de Transporte Aéreo	WT/ACC/TLS/5
Ley Nº 6/2005, Régimen de Licencias, Supervisión y Reglamentación de las Compañías de Seguros y los Intermediarios de Seguros	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 1/2007, Régimen de Licencias de las Compañías de Seguros Generales	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 2/2007, Régimen de Licencias de los Intermediarios de Seguros	WT/ACC/TLS/5
Decreto Nº 9/2008 del Gobierno, Reglamentación de los Servicios de la Red de Telecomunicaciones Móviles	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 6/2009, Reglamentación de los Juegos de Azar con Fines Sociales y Recreativos	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 7/2009, Reglamentación de los Restaurantes y Establecimientos Similares	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 1/2009, Reglamentación de la Lotería Popular	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 21/2009, Servicio de Transporte Funerario	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 6/2010, Régimen de Licencias y Supervisión de Otras Instituciones de Depósito	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 26/2010, Registro de Empresarios Particulares del Sector de la Construcción	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 27/2010, Régimen de Certificación y Registro de Empresas de Consultoría del Sector de la Construcción	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 5/2011, Régimen de Licencias Ambientales	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 3/2011, Transformación del Instituto de Microfinanzas en Sociedad de Capital Público (Banco Comercial Nacional de Timor-Leste (BNCTL))	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 51/2011, Régimen Jurídico de las Actividades de Publicidad	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 12/2012, Contrato de Representación	WT/ACC/TLS/5
Decreto Ley Nº 15/2012, Reglamentación del Sector de las Telecomunicaciones	WT/ACC/TLS/5
Instrucción Pública Nº 1/2013, Régimen de Licencias y Supervisión de los Agentes de Transferencias Monetarias	WT/ACC/TLS/5
Orden Ministerial Nº 2/2014, Reglamentación de las Actividades de Extracción de Minas y Canteras	WT/ACC/TLS/7
Ley Nº 5/2014, Ley de Medios de Comunicación	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 32/2014, Régimen Jurídico de la Seguridad Privada	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 6/2016, Régimen Jurídico de Concesión de Licencias, Explotación y Control de la Actividad de los Juegos y el Entretenimiento, las Máquinas de Juego y los Juegos Tradicionales	WT/ACC/TLS/9
Resolución Nº 33/2015 del Gobierno, Arrendamiento de Tierras para la Construcción de un Hotel (Pelican Paradise)	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 33/2016, Reglamentación de la Concesión de Licencias a Proveedores de Servicios de Electricidad y de las Tarifas	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 19/2016, Régimen Jurídico de Concesión de Licencias y de Funcionamiento de las Agencias de Viajes y de Turismo	WT/ACC/TLS/5
Resolución Nº 36/2017 del Gobierno, Modificación de la Resolución Nº 33/2015 del Gobierno, Arrendamiento de Tierras para la Construcción de un Hotel (Pelican Paradise)	WT/ACC/TLS/7
Decreto Ley Nº 29/2017, Organismo Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	WT/ACC/TLS/9
Decreto Ley Nº 29/2020, Creación de la Empresa Pública de Electricidad de Timor-Leste (EDTL, E.P.)	WT/ACC/TLS/15
Decreto Ley Nº 40/2020, Creación de la Autoridad Nacional del Sector Energético (ANE, I.P.)	WT/ACC/TLS/15
Ley Nº 12/2021, Código Minero	WT/ACC/TLS/23
Decreto Ley Nº 35/2021, Planificación Territorial	WT/ACC/TLS/27
Ley Nº 4/2022, Régimen Jurídico de las Asociaciones Profesionales Públicas	WT/ACC/TLS/23

Ley/reglamento	Notificación de la legislación
Decreto Ley sobre Comercio Electrónico, adoptado el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Decreto Ley sobre el Registro Nacional de Buques y Navíos, adoptado el 18 de noviembre de 2023	WT/ACC/TLS/32
Proyecto de Decreto Ley sobre Comercio Electrónico	WT/ACC/TLS/23
Proyecto de Decreto Ley sobre el Registro Nacional de Buques y Navíos	WT/ACC/TLS/27
Proyecto de Ley del Colegio de Abogados	WT/ACC/TLS/27
ACUERDOS COMERCIALES	
Resolución Nº 2/2004 del Gobierno, Acuerdo de Protección de las Inversiones entre Timor-Leste y Portugal	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 8/2011 del Gobierno, Acuerdo de Protección de las Inversiones entre Timor-Leste y Alemania	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 18/2014 del Gobierno, Cooperación Económica entre Timor-Leste y China	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 45/2016 del Gobierno, Aprobación de la Cooperación Comercial entre Timor-Leste y Kuwait	WT/ACC/TLS/7
Resolución Nº 14/2016 del Parlamento, Ratificación del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados	WT/ACC/TLS/7

ANEXO 2: Indicadores comerciales y económicos de Timor-Leste

ANEXO 2 A):Producto interior bruto, 2013-2020

(En millones de dólares EE.UU.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agricultura, silvicultura y pesca	300,2	296,5	283,4	279,6	271,3	279,2	286,1	293,6
Explotación de minas y canteras	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	342,6	282,0
Extracción de petróleo crudo y gas natural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,3	281,5
Explotación de otras minas y canteras	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,3	0,5
Manufacturas y otras industrias*	11,2	12,1	16,4	19,1	25,9	26,3	37,9	33,4
De las cuales: manufacturas	10,3	11,3	15,5	18,1	24,8	25,5	37,2	33,0
Construcción	255,4	225,2	274,0	293,7	203,5	215,4	237,1	167,8
Comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio de comidas	276,1	283,9	290,9	309,8	288,5	260,7	287,8	247,0
Información y comunicaciones	41,0	21,7	36,5	41,4	40,0	41,5	55,1	60,9
Actividades financieras y de seguros	11,4	12,5	11,9	14,5	23,6	21,6	31,8	25,5
Actividades inmobiliarias	155,1	177,7	180,7	187,0	195,7	189,6	193,0	191,3
Servicios profesionales científicos, técnicos, de gestión y de apoyo	42,2	49,8	50,2	48,6	51,3	41,2	38,3	17,5
Administración pública, defensa, enseñanza, actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	310,0	364,0	385,6	405,0	442,4	471,3	470,5	472,5
Otras actividades de servicios	63,0	59,6	57,6	64,4	63,2	50,6	49,8	35,2
Equivalencia: valor añadido, bruto, al costo de los factores	1.467,1	1.504,6	1.588,8	1.664,7	1.607,1	1.599,0	2.030,0	1.826,8
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,3	281,5
Sector no petrolero	1.467,1	1.504,6	1.588,8	1.664,7	1.607,1	1.599,0	1.688,7	1.545,3
Más: impuestos menos subvenciones a productos	35,2	35,6	9,6	7,5	4,1	-3,6	14,7	45,3
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	25,2
Sector no petrolero	35,2	35,6	9,6	7,5	4,1	-3,6	12,2	20,1
Equivalencia: producto interior bruto (producción)	1.502,3	1.540,2	1.598,4	1.672,1	1.611,3	1.595,4	2.044,7	1.872,1
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	306,7
Sector no petrolero	1.502,3	1.540,2	1.598,4	1.672,1	1.611,3	1.595,4	1.701,0	1.565,4
Discrepancia estadística	-19,0	9,2	-4,0	-24,1	-30,8	-31,6	3,3	30,1
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sector no petrolero	-19,0	9,2	-4,0	-24,1	-30,8	-31,6	3,3	30,1
PIB	1.483,3	1.549,3	1.594,4	1.648,1	1.580,4	1.563,8	2.047,9	1.902,2
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	306,7
Sector no petrolero	1.483,3	1.549,3	1.594,4	1.648,1	1.580,4	1.563,8	1.704,2	1.595,5

* Electricidad y gas; más suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación.

Fuente: Cuentas nacionales, Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda.

ANEXO 2 B): Balanza de pagos, 2013-2020

(En millones de dólares EE.UU.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cuenta corriente, con exclusión de otros ingresos primarios	658.458	723.125	781.145	768.356	705.226	701.274	623.306	-
I. Cuenta corriente	2.391.665	1.093.840	203.619	544.484	283.529	191.193	132.949	84,918
A. Bienes y servicios	1.050.674	1.196.707	1.217.997	1.114.985	958.108	937.898	923.029	316,731
1. Bienes, f.o.b.	619.722	602.962	635.394	546.462	614.819	588.568	566.498	135,987
2. Servicios	430.952	593.745	582.603	568.523	343.288	349.330	356.530	452,717
B Ingresos primarios	3.328.249	2.134.183	1.296.807	544.079	735.327	842.632	1.126.451	296,627
1. Remuneración de los empleados	3.946	1.316	927	477	1.821	2.685	2.144	4,265
2. Ingresos de las inversiones	274.180	315.901	311.116	319.730	311.809	329.866	372.340	292,363
3. Otros ingresos primarios (ingresos obtenidos de la JPDA), crédito	3.050.123	1.816.965	984.764	223.872	421.697	510.081	756.255	-
C. Ingresos secundarios	114.090	156.364	124.809	26.422	60.748	95.927	70.474	64,814
II. Cuenta de capital, excluidas las reservas	20.130	13.745	29.006	47.400	34.030	51.554	25.825	12,433
III. Cuenta financiera	2.564.102	1.378.097	32.214	485.480	498.426	249.367	20.982	271,944
IV. Total general (I + II + III)	152.308	270.513	264.839	11.604	248.927	109.728	137.791	199,459
V. Errores y omisiones	44.245	105.764	45.064	145.194	14.556	19.747	155.406	199,216
VI. Posición de la balanza de pagos (IV + V)	196.553	376.277	219.775	156.797	263.483	129.474	17.615	243
VII. Variación en los activos de reserva	196.553	376.277	219.775	156.797	263.483	129.474	17.615	243
a) Posición de los activos de reserva	686.994	311.467	437.867	280.952	544.435	673.909	656.295	656,537
b) Variación en los activos de reserva + Transacciones con activos de inversión de cartera netos del Fondo Soberano (Fondo del Petróleo)	2.586.911	1.384.373	68.985	860.858	76.905	66.118	-251.625	489,469
c) Posición de los activos del Fondo Soberano (Fondo del Petróleo), valor al final del período	14.952.099	16.538.618	16.217.573	15.844.327	16.799.313	15.822.994	17.691.816	19,990
VIII. Errores y omisiones	6,8	16,7	6,7	24,8	2,25	3,10	25,1	13,9

Fuente: Banco Central de Timor-Leste.

ANEXO 2 C)**Comercio de bienes y servicios, 2013-2020***(En millones de dólares EE.UU.)*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones totales de bienes y servicios	77,9	66,2	48,5	51,8	38,2	45,6	39,6	22,4
Importaciones totales de bienes y servicios	1033,5	1131,5	906,9	937,6	871,2	943	872,10	742,7
Comercio total	1.111,40	1.197,70	955,40	989,40	909,40	988,60	911,70	765,10

Fuente: SCN, Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda.

Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 2013-2020*(En millones de dólares EE.UU.)*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones								
Bienes	27,0	15,8	12,0	25,4	11,0	15,6	16,0	9,4
Servicios	60,3	51,8	36,5	27,2	21	21,8	14,9	5,8
Importaciones								
Bienes	395,5	432,3	484,7	534,0	542,2	473,3	504,0	495,6
Servicios	482,7	546,9	422,2	446,6	352,3	447,2	356,9	292,4

Fuente: SCN, Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda.

Composición de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 2013-2020*(En millones de dólares EE.UU.)*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones								
Bienes	27,0	15,8	12,0	25,4	11,0	15,6	489,1	1.633,8
01 Animales y productos de origen animal	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 Cultivos y hortalizas	26,4	15,2	10,7	24,0	9,7	14,0	14,1	8,3
03 Grasas y aceites comestibles	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
04 Productos alimenticios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0
05 Productos minerales (aceite y gases de petróleo)	0,4	0,5	0,9	1,0	0,9	0,7	473,8	1.624,9
06 Productos químicos y productos conexos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
07 Plástico/caucho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
08 Madera y sus manufacturas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
09 Metales comunes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,3
10 Vehículos y material de transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Servicios	60,3	51,8	36,5	27,2	21,0	21,8	14,9	5,8
a. Transporte	0,6	0,8	1,5	1,8	1,8	2,2	3,4	0,7
b. Viajes	36,7	25,2	28,1	20,7	15,4	14,1	8,6	3,8
c. Servicios de seguros y de pensiones	1,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,6	0,5	-0,2
d. Servicios de telecomunicaciones, informática e información	18,2	24,4	5,1	2,3	1,9	1,2	0,9	1,0
e. Bienes y servicios del Estado	3,7	0,9	1,8	2,4	1,9	3,6	1,5	0,4
Importaciones								
Bienes	395,5	432,3	484,7	534,0	542,2	473,3	553,4	
Sector petrolero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	228,0
Sector no petrolero	395,5	432,3	484,7	534,0	542,2	473,3	504,0	495,6
Importaciones de bienes, f.o.b.	394,0	430,4	482,8	531,4	539,3	470,3	501,7	493,8
Importaciones de bienes, valor c.i.f. ajustado	438,1	475,6	536,8	591,1	599,7	522,9	558,0	549,1
Importaciones de bienes en las estadísticas comerciales, c.i.f.	398,3	432,4	488,0	537,4	545,1	475,4	507,3	508,4
01 Animales y productos de origen animal	12,2	15,8	16,7	21,8	36,9	33,8	31,0	28,0
02 Cultivos y hortalizas	21,8	34,1	33,1	44,8	47,4	48,6	49,7	42,0
03 Grasas y aceites comestibles	3,0	3,3	4,5	4,5	9,8	10,8	11,8	10,6
04 Productos alimenticios	43,8	43,0	50,1	69,9	66,7	63,1	60,7	66,2

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05 Productos minerales	82,2	93,8	134,9	133,3	137,9	120,1	139,7	148,5
06 Productos químicos y productos conexos	10,3	14,0	11,1	16,1	17,2	19,0	19,7	16,1
07 Plástico/caucho	5,2	7,4	10,6	12,3	11,7	10,9	11,3	12,4
08 Piel y cueros sin curtir	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	1,7	3,3
09 Madera y sus manufacturas	1,8	2,1	3,7	3,3	2,8	2,6	3,1	3,2
10 Papel y cartón	4,4	6,4	4,4	5,5	5,4	5,3	6,9	4,6
11 Textiles	28,4	21,6	16,2	10,3	12,8	9,3	8,7	11,7
12 Calzado/sombrerería	2,1	2,0	3,6	4,2	4,1	4,3	7,4	8,4
13 Piedra/vidrio	3,9	4,2	4,2	6,3	5,6	4,0	5,2	4,9
14 Piedras y metales preciosos	0,3	15,7	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
15 Metales comunes	23,5	21,5	28,6	37,6	28,2	20,5	22,7	23,7
16 Máquinas y aparatos eléctricos	78,7	57,7	77,3	79,2	71,4	48,6	49,9	54,7
17 Vehículos y material de transporte	62,0	72,7	72,1	71,7	74,0	60,7	64,3	52,7
18 Aparatos e instrumentos	3,0	3,0	3,0	4,6	3,7	3,7	3,3	5,0
19 Armas y municiones	0,9	0,7	0,5	0,4	0,0	0,2	0,2	0,3
20 Varios	11,4	14,1	12,7	10,9	9,8	9,2	8,9	12,1
Ajuste para las importaciones no registradas y no notificadas	39,9	43,3	48,8	53,8	54,6	47,5	50,6	40,7
<i>Tasa de ajuste</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Servicios	482,7	546,9	422,2	446,6	352,3	447,2	563,4	1.142,8
a. Servicios de mantenimiento y reparación, n.i.p.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1	509,5
b. Transporte	41,6	43,4	57,4	63,8	61,1	51,2	62,5	75,2
b. Viajes	41,6	47,7	60,6	67,2	55,6	42,3	45,8	15,1
d. Construcción	73,0	200,3	90,2	92,3	24,9	190,7	174,5	393,7
e. Servicios de seguros y de pensiones	11,6	11,8	13,9	15,4	15,5	13,6	14,8	15,5
f. Servicios financieros	-4,0	-10,3	-1,8	8,1	7,5	8,0	8,4	7,5
g. Cargos por el uso de la propiedad intelectual, n.i.p.	0,0	0,1	0,1	1,2	0,4	0,0	0,6	0,0
h. Servicios de telecomunicaciones, informática e información	23,2	13,0	10,1	7,4	6,2	3,8	5,7	3,0
i. Otros servicios prestados a las empresas	108,1	101,5	70,1	75,9	68,4	31,2	43,5	28,1
j. Bienes y servicios del Estado	187,6	139,5	121,5	115,3	112,7	106,3	97,4	98,2

Fuente: Cunetas nacionales, Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda.

ANEXO 3: INDICADORES INCLUIDOS EN EL INFORME *DOING BUSINESS*

En cuanto a la facilidad general para hacer negocios, en 2020 Timor-Leste ocupaba el puesto 181 entre 190 países según los indicadores incluidos en el informe *Doing Business* del Banco Mundial.

Indicador	Posición en 2020
Apertura de un negocio	68
Comercio fronterizo	107
Acceso a electricidad	126
Facilidad para el pago de impuestos	136
Registro de la propiedad	187
Resolución de situaciones de insolvencia	168
Cumplimiento de contratos	190

Se han registrado las siguientes novedades relacionadas con indicadores específicos de *Doing Business*:

- Cumplimiento de contratos: con el fin de mejorar este indicador, en 2019, el Gobierno remitió al Parlamento Nacional un paquete de tres iniciativas legislativas. En 2021, el Parlamento Nacional aprobó este paquete de tres medidas legislativas, que tienen el potencial de mejorar el cumplimiento de los contratos:
 - la resolución por la que se autoriza la adopción por Timor-Leste de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (aprobada por la Resolución Nº 8/2021, de 17 de marzo de 2021);
 - la Ley relativa al Arbitraje Nacional e Internacional (promulgada por la Ley Nº 6/2021, de 31 de marzo de 2021, por la que se aprueba el Régimen Jurídico de Arbitraje Voluntario y la Primera Modificación del Código de Procedimiento Civil; y
 - la ley por la que se simplifican los procedimientos de las causas civiles y comerciales para agilizar su gestión (aprobada por la Ley Nº 3/2021, de 2 marzo de 2021, por la que se autoriza al Gobierno a modificar el Código de Procedimiento Civil);
- Obtención de electricidad: se han logrado verdaderos avances entre 2015 y 2019 en relación con este indicador, como se demuestra en los documentos del Banco Mundial. Este indicador tiene el potencial de seguir mejorando, ya que se han aprobado los proyectos de reforma institucional del sector. Entre otras cosas, se está estableciendo actualmente un nuevo órgano regulador para el sector de la energía (véanse los Decretos Ley Nºs 29/2020, de 22 de julio de 2020, y 40/2020, de 25 de septiembre de 2020);
- Obtención de crédito: el Gobierno, como único accionista del Banco Comercial Nacional de Timor-Leste (en adelante, el BNCTL), ha aprobado recientemente el presupuesto general del Estado para 2021, a fin de capitalizar aún más el banco con un importe total de 40 millones de dólares EE.UU. para mejorar los mecanismos y el acceso al crédito con tipos de interés más bajos. Ese crédito tiene como objeto mejorar el acceso para el sector privado, especialmente para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Además, a fin de facilitar el acceso del sector privado al crédito, el BNCTL firmó un acuerdo con el Instituto Público de Apoyo al Desarrollo Empresarial (en adelante, el IADE) para ayudar a los jóvenes empresarios a obtener créditos rápidamente para iniciar sus negocios.

La Ley Nº 7/2020 relativa a la Prevención y la Lucha contra la Corrupción, de 28 de agosto de 2020, armonizada con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), fue aprobada por el Parlamento, lo que creó expectativas de una lucha más eficaz contra la corrupción.

El Gobierno puso en marcha un proyecto integrado de identificador único de los ciudadanos y residentes timorenses, mediante la Resolución Nº 9/2020, de 19 de marzo de 2020, cuyo fin es mejorar la prestación general de servicios y crear las bases para un gobierno electrónico. Esto tiene el potencial de mejorar la transparencia y reducir los trámites burocráticos para las empresas.

ANEXO 4: Marco legislativo para la lucha contra la corrupción

El título VI del Código Penal sobre los Delitos Cometidos en el Ejercicio de las Funciones Públicas, en su artículo 292 relativo a la corrupción pasiva por actividades ilícitas, prevé que el funcionario que, bien personalmente, o a través de un intermediario, con su consentimiento o ratificación, pida o acepte, para sí mismo o para un tercero, sin que le sea debida, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o prometa, a cualquier persona, un acto u omisión contrarios a los deberes de su cargo, aunque sean anteriores a la petición o aceptación en cuestión, será castigado con una pena de prisión de 3 a 15 años. El agente que, antes de la práctica del hecho, repudie de forma voluntaria la oferta o la promesa que aceptó, o devuelva la ventaja o, en el caso de un bien fungible, su valor, se verá exento de sanción. La sanción se verá especialmente atenuada si el agente presta asistencia concretamente en la recaudación de pruebas decisivas para la identificación o la captura de otras personas responsables.

Los artículos 5 y 19 de la Resolución Nº 12/2019 del Parlamento Nacional sobre el Código de Conducta de los Miembros del Gobierno para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción, de 13 de marzo de 2009, prevén que los miembros del Gobierno deben asumir el compromiso de prevenir y luchar contra la corrupción, especialmente la corrupción privada, la extorsión o los sobornos, y se les prohíbe: a) ofrecer, aceptar o facilitar el pago de un soborno; b) ofrecer o autorizar, directa o indirectamente, una ventaja indebida para cualquier persona o agente público que implique un lucro personal directo o para terceras personas intermediarias. Los miembros del Gobierno deben comunicar al Fiscal General los actos que puedan ser constitutivos de intentos de corrupción. No deberán recibir ofertas en efectivo y solo podrán recibir ofertas por un valor simbólico que no excedan de los 250 dólares EE.UU. Se registrará el valor de las ofertas en una rúbrica específica con todas las ofertas provenientes de la misma persona, física o jurídica, en el curso del año natural. Al mismo tiempo, los miembros del Gobierno pueden recibir ofertas de otros Estados, cuyo rechazo podría interpretarse como una falta de respeto institucional.

A nivel institucional, se han creado varios órganos de vigilancia independientes, en particular:

- La Comisión de Lucha contra la Corrupción (en adelante, la CAC), que ha desempeñado un papel activo en vigilar y conseguir que los funcionarios públicos rindan cuentas y en obtener importantes resultados en relación con las investigaciones. Además de la CAC, existe el Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos y la Justicia (PDHJ), con mandato en la esfera de los derechos humanos y la buena gobernanza. Entre sus funciones figura la de recibir e investigar quejas de los ciudadanos y del público contra la administración pública. También se requiere al PDHJ que interponga ante la CAC o la Oficina del Fiscal General reclamaciones que impliquen potencialmente cargos penales. El PDHJ y la CAC también desempeñan un papel más amplio, que incluye crear conciencia sobre cuestiones relacionadas con la corrupción y proporcionar recomendaciones al Gobierno sobre prácticas de buena gobernanza.
- La Inspección General del Estado (IGE), como órgano de control e inspección de la administración pública, cuya misión consiste en controlar la gestión financiera y el uso de los recursos en los servicios de la administración pública.
- Una Cámara de Cuentas del Tribunal Superior Administrativo, Fiscal y de Cuentas, de carácter independiente, establecida en 2012 con el mandato de vigilar la legalidad del gasto público y auditar las cuentas públicas.
- La Oficina del Fiscal General, que tiene el mandato de investigar y enjuiciar los delitos penales, entre ellos los delitos relacionados con la corrupción, asistido por el órgano de la policía criminal que trabaja en el ámbito de las investigaciones penales (como, por ejemplo, la Unidad de la Policía de Investigaciones Penales y la Unidad de la Policía Científica, de Investigación y Penal (PCIC)).

Por lo tanto, Timor-Leste ha construido un sistema para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz, a todos los niveles. Al mismo tiempo, la sociedad civil contribuye a, y ejerce, un examen profundo de los eventuales casos de corrupción en general.

ANEXO 5: Resumen de la reglamentación en materia de IED

Leyes y reglamentos	Restricciones sectoriales	Restricción sobre la propiedad de la tierra	Prescripciones en materia de resultados	Incentivos a la inversión
<p>Ley Nº 15/2017 de Inversiones Privadas (PIL)</p> <p>Decreto Nº 2/2018 del Gobierno, Reglamentación de los Procedimientos de Inversión Privada</p> <p>Otras leyes pertinentes: Ley de Sociedades, Código Minero, etc.</p>	<p>Sectores restringidos:</p> <p>Actividades delictivas; actividades relacionadas con reservas naturales; actividades relacionadas con la ofensa de costumbres tradicionales; distribución de armas y municiones; servicios postales y de mensajería; servicios funerarios</p> <p>Otros sectores:</p> <p>Consúltese la lista negativa</p>	<p>Tierras de titularidad pública o privada:</p> <p>Derecho de arrendamiento de entre 5 y 50 años. Prorrogable un máximo de 150 años (Decreto Ley Nº 19/2004 del Gobierno sobre el Régimen Jurídico relativo al Arrendamiento de Propiedades y Bienes del Estado)</p> <p>Tierras de titularidad pública o privada:</p> <p>Arrendamiento por un máximo de 50 años, prorrogable por un período de 25 a 100 años (<i>PIL</i>, artículo 25) - aplicable a inversiones privadas que cuenten con una declaración de beneficios o un acuerdo especial de inversiones</p>	<p>Creación de empleo a nivel local; transferencia de conocimientos (formación) a nivel local; transferencia de tecnología.</p> <p>Prescripciones en materia de contenido nacional (solo para las actividades mineras).</p> <p>No se aplican prescripciones en materia de resultados de exportación.</p>	<p>Sectores productivos:</p> <p>Agricultura, pesca, turismo, industria de transformación.</p> <p>Declaraciones de beneficios y Acuerdo Especial de Inversiones</p> <p>Incentivos fiscales y parafiscales:</p> <p>Valores mínimos de inversión o reinversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.000 \$EE.UU. para los inversores nacionales; - 500.000 \$EE.UU. para los inversores extranjeros; - 250.000 \$EE.UU. para las empresas conjuntas. <p>Ayuda a los inversores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concesión de autorizaciones, visados, permisos y registros - Servicios de facilitación

ANEXO 6: Empresas de propiedad estatal

Nº	Nombre	Sector	Legislación por la que se creó	Capitalización y estructura de propiedad, cuantía de las transferencias públicas	Finalidad y mandato
1.	Radio and Television of Timor-Leste (RTTL, E.P.)	Radio y Televisión	Decreto Ley Nº 42/2008 de 26 de noviembre de 2008	En el artículo 6 del Decreto Ley se fija su capital social en 8.335.031 dólares EE.UU.	Radio and Television of Timor-Leste, E.P. (RTTL, Tetum) es una empresa nacional de emisiones de radio y televisión de Timor-Leste.
2.	Timor Gas and Petroleum (Timor Gap, E.P.)	Petróleo y Gas	Decreto Ley Nº 31/2011 sobre Timor Gap - Timor Gas and Petroleum, E.P.	En el artículo 6 del Decreto Ley por el que se creó Timor Gap se indica que el capital inicial de la empresa (procedente del presupuesto del Estado) es de 2.500.000 dólares EE.UU. La cuantía anual de las transferencias públicas varía en función del programa de trabajo y del presupuesto asignado para cada año. Los préstamos públicos y privados constituyen otra fuente de financiación de los proyectos de esta empresa.	<p>Las empresas privadas y públicas pueden competir para obtener contratos petroleros. Cuando se conceda un contrato petrolero a una empresa privada, el Estado tendrá derecho a participar en este a través de su empresa de propiedad estatal (normalmente en forma de empresa conjunta) con una participación de hasta el 20%.</p> <p>La cartera de operaciones de Timor Gap E.P. abarca los sectores de actividades correspondientes a las fases iniciales, de elaboración avanzada y de servicios de apoyo, por lo que esta inversión resulta compleja y atractiva. En lo que respecta al sector de las actividades correspondientes a las fases iniciales, todos los proyectos se hallan en la actualidad en la fase de prospección, y todavía no han generado beneficios. Sin embargo, en los otros sectores (elaboración avanzada y servicios), Timor Gap E.P. tiene ahora la oportunidad de generar beneficios. La política general del Gobierno consiste en invertir en la exploración y explotación de los recursos petroleros, creando al mismo tiempo un sector de servicios sólido que abarque la elaboración avanzada y otros servicios de apoyo, con lo que se logrará la eficiencia de los costos y una mayor rentabilidad.</p>
3.	National Airport Administration and Air Navigation of Timor-Leste (ANATL, E.P.)	Aviación	Decreto Nº 8/2005 del Gobierno, de 16 de noviembre de 2005.	El artículo 7 del Decreto del Gobierno prevé que el capital social de este organismo se fijará mediante una orden ministerial conjunta del Ministro de Planificación y Hacienda y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Cada Ministro tiene competencia jurídica para fijar un máximo de 20 millones de dólares EE.UU.; toda cuantía superior a esta debe estar aprobada por el Consejo de Ministros o el Parlamento.	Organismo nacional de aviación encargado de estudiar y desarrollar la infraestructura de aeropuertos y servicios de navegación aérea. Goza de autonomía administrativa y financiera, y cuenta con su propio patrimonio.

Nº	Nombre	Sector	Legislación por la que se creó	Capitalización y estructura de propiedad, cuantía de las transferencias públicas	Finalidad y mandato
4.	Electricity of Timor-Leste (EDTL, E.P.)	Electricidad y Energía	Decreto Ley Nº 29/2020, sobre la Creación de Timor-Leste Electricity (EDTL, E.P.)	El artículo 10 del Decreto Ley dispone que el capital social de esta empresa es de 94.424.461 dólares EE.UU.	El objetivo de EDTL, E.P. es crear un conjunto de medidas de reestructuración para reformar el sector de la electricidad con el fin de ampliar el suministro de electricidad y modernizar el sistema eléctrico nacional. Esto incluye la aplicación de un sistema de gestión destinado a mejorar el servicio público que presta la empresa y elevar los niveles y la calidad del suministro de energía y su fiabilidad a precios asequibles, teniendo en cuenta la viabilidad y sostenibilidad de su funcionamiento. Electricity of Timor-Leste, E.P. está facultada para proponer, vigilar y asegurar la ejecución de la política nacional del sector de la energía, garantizando la gestión sostenible e integrada de la producción, la transmisión, la distribución y la venta de electricidad, principalmente por medio del establecimiento y la prestación de servicios públicos de suministro de energía eléctrica. Al llevar a cabo sus actividades, aplica la política social y económica del Gobierno con, entre otras, estas atribuciones: i) prestar apoyo al Gobierno en el establecimiento de la política sobre recursos energéticos; ii) proponer al Gobierno un Plan Nacional de Electrificación; iii) proponer la creación y el mantenimiento de un registro sobre distribución de la electricidad, zonas de servidumbre y el Sistema Nacional de Electricidad; iv) promover el uso eficiente de la energía eléctrica; v) asegurar el suministro público de electricidad para el consumo, a través de las actividades y la gestión del Sistema Nacional de Electricidad en todo el país; vi) promover una mejora continua de la calidad del suministro eléctrico mediante planes y programas; y vi) poner en marcha un sistema integrado entre las diversas infraestructuras de suministro eléctrico.
5.	Water of Timor-Leste (BTL, E.P.)	Agua y saneamiento	Decreto Ley Nº 41/2020 de 25 de septiembre de 2020.	El artículo 10 del Decreto Ley establece el capital social de la empresa en 12.880.000 dólares EE.UU.	Se creó para promover una mayor eficiencia y sostenibilidad en la aplicación de la estrategia adoptada por el Gobierno para la prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento al público. La misión de la empresa es ayudar al Gobierno en la aplicación de las políticas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento mediante la gestión integrada y sostenible de los servicios relacionados con el agua y el saneamiento; dotar de acceso universal y equitativo al agua potable y los servicios de saneamiento a las poblaciones de todo el territorio; mantener unos servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento regulares, ininterrumpidos y eficientes; promover servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento asequibles que contribuyan al desarrollo económico y al progreso social, medioambiental y tecnológico; mejorar la salud pública; y promover el desarrollo de la industria, el comercio y la

Nº	Nombre	Sector	Legislación por la que se creó	Capitalización y estructura de propiedad, cuantía de las transferencias públicas	Finalidad y mandato
6.	Mining Company of Timor-Leste ("Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A.")	Minería	Decreto Ley Nº 43/2022 sobre la Mining Company of Timor-Leste, de 8 de junio de 2022	<p>El artículo 4 1) 2) del Decreto Ley establece que el capital inicial, suscrito y desembolsado en su integridad por el Estado, de la empresa, constituida en forma de sociedad anónima, es de 600.000 dólares EE.UU. La cuantía de las transferencias públicas varía en función del programa de trabajo y del presupuesto asignado para cada año. Los préstamos públicos y privados también constituyen otra de las fuentes de financiación de los proyectos de esta empresa.</p> <p>La cartera de inversiones irá ampliándose a medida que crezca la inversión.</p> <p>Al ser de propiedad íntegramente estatal en el momento de su creación, "toda transferencia de acciones de CMTL, S.A. a una entidad que no esté directa o indirectamente controlada por el Estado debe ser autorizada por el Consejo de Ministros, previa propuesta motivada de la Asamblea General/Asamblea de Accionistas de CMTL, S.A.".</p>	<p>investigación.</p> <p>La finalidad y el mandato de la empresa, de conformidad con artículo 3 1) 2) del Decreto Ley, "será la realización de las actividades mineras establecidas por la legislación, incluidos el reconocimiento, la prospección y exploración, la evaluación, el desarrollo, la explotación, la elaboración, el transporte y la comercialización de los minerales, así como las actividades relacionadas con el cierre de minas". Para lograr su objetivo, CMTL, S.A. podrá emprender actividades complementarias o accesorias a las actividades mineras y el suministro de servicios relacionados con las actividades mineras, en particular los servicios de consultoría técnica, comercial y de gestión en el sector minero. Su cartera de operaciones comprende las actividades correspondientes a las fases iniciales, las fases ulteriores del proceso productivo y los servicios de apoyo a la minería.</p> <p>La política general del Gobierno consiste en invertir en la exploración y explotación de los recursos minerales como nueva fuente de ingresos para el Estado, y al mismo tiempo en crear un servicio sólido gracias a otros servicios de apoyo a la industria extractiva, lo cual asegurará la eficacia en función de los costos y aumentará la rentabilidad de la empresa.</p>
7.	National Commercial Bank of Timor-Leste (BNCTL, S.A.)	Banca comercial	Decreto Ley Nº 3/2011 de 26 de enero de 2011 sobre la Transformación del Instituto de Microfinanzas en Sociedad de Capital Público (National Commercial Bank of Timor Leste (BNCTL))	<p>El Decreto Ley transformó el Instituto de Microfinanzas, creado por la Orden Ejecutiva Nº 2001/8 de la UNTAET, en una sociedad anónima de propiedad íntegramente estatal. El artículo 5 1) 2) del Decreto Ley Nº 3/2011 establece que el capital inicial de la empresa, suscrito y desembolsado en su integridad por el Estado, es de 5.000.000,00 dólares EE.UU. Compete a la</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 1) 2) del Decreto Ley Nº 3/2011, el BNCTL tiene por objeto prestar servicios bancarios y financieros a fin de reducir la pobreza y favorecer el desarrollo de actividades económicas en todo el territorio de Timor-Leste. Para cumplir este objetivo, BNCTL, S.A. puede ejercer ese tipo de actividades bancarias en los términos definidos en la ley y en su licencia bancaria.</p>

Nº	Nombre	Sector	Legislación por la que se creó	Capitalización y estructura de propiedad, cuantía de las transferencias públicas	Finalidad y mandato
				Asamblea General decidir acerca de las posibles ampliaciones de capital.	
8.	The Company for the Management of Industrial Parks (GESPIN, S.A.)	Parques industriales	Decreto Ley Nº 70/2022 sobre "GESPIN-Management of Industrial Parks, S.A.", de 28 de septiembre de 2022	La empresa, constituida como sociedad anónima, cuenta con un capital inicial, suscrito y desembolsado en su integridad por el Estado, de 600.000 dólares EE.UU. La transferencia de acciones de GESPIN, S.A. debe ser autorizada por el Consejo de Ministros previa propuesta motivada del miembro del Gobierno responsable de industria.	GESPIN, S.A. vela por que se lleven a cabo las funciones necesarias —de carácter económico, financiero, patrimonial y de gestión del personal— para asegurar el funcionamiento ordinario de los parques industriales de los que se ocupa, así como de todas las actividades complementarias, subsidiarias o accesorias que hacen posible su labor. De conformidad con el artículo 4 1) del Decreto Ley, como entidad encargada de la gestión de parques industriales, GESPIN S.A., en particular: i) realiza todas las operaciones necesarias para la instalación de un parque industrial; ii) suministra servicios comunes para apoyar a los usuarios del parque industrial; iii) lleva a cabo acciones para promocionar y dar publicidad a un parque industrial; iv) realiza las obras necesarias para la construcción del parque industrial; y v) vela por el funcionamiento ordinario del parque industrial.

ANEXO 7: Mantenimiento en vigor de las leyes vigentes antes de la independencia

El artículo 165 de la Constitución de Timor-Leste (en vigor desde el 20 de mayo de 2002) establece que las leyes y los reglamentos vigentes en Timor-Leste antes de su independencia de Indonesia seguirán aplicándose a todas las cuestiones salvo en el caso de que sean incompatibles con la Constitución o sus principios.

El artículo 1 de la Ley Nº 2/2002, de 19 de mayo de 2002, de Interpretación de la Legislación Aplicable establece que la legislación aplicable en Timor-Leste a 19 de mayo de 2002 permanecerá en vigor *mutatis mutandis* para todo aquello que no sea contrario a la Constitución ni a los principios consagrados en ella.

Es posible que sigan en vigor leyes (reglamentos, directivas, órdenes ejecutivas y notificaciones) promulgadas por la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNTAET) entre octubre de 1999 y mayo de 2002. En la mayoría de los casos, los reglamentos de la UNTAET se han derogado en virtud de leyes parlamentarias o decretos-leyes ulteriores. En el caso en que un reglamento de la UNTAET no se haya derogado explícitamente pero sea incompatible con una ley parlamentaria o un Decreto Ley posterior, estos últimos prevalecerán sobre el reglamento de la UNTAET. Esta norma también se aplicaría a la legislación de la UNTAET que contraviniese la Constitución.

El artículo 3.1 del primer reglamento de la UNTAET, el Reglamento Nº 1999/1 sobre las Facultades de la Administración de Transición de Timor-Leste, de 27 de noviembre de 1999, dispone que la legislación vigente en Timor-Leste con anterioridad al 25 de octubre de 1999 será aplicable mientras no sea reemplazada por reglamentos de la UNTAET o por textos legislativos promulgados ulteriormente por las instituciones de Timor constituidas democráticamente, siempre que no estén en contradicción con las disposiciones establecidas en el artículo 2, con el cumplimiento del mandato encomendado a la UNTAET en virtud de la Resolución Nº 1272 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni con otros reglamentos y directivas que promulgue el Administrador de Transición.

Esto significa que es posible que todavía se aplique una ley indonesia que estaba vigente en Timor-Leste el 25 de octubre de 1999, si no ha sido reemplazada por un reglamento de la UNTAET entre el 25 de octubre de 1999 y el 19 de mayo de 2002 o por las disposiciones jurídicas de Timor-Leste. En el caso de que una ley indonesia no se haya derogado pero sea incompatible con una ley parlamentaria o un Decreto Ley posterior, estos últimos prevalecerán sobre la ley indonesia en la medida de la incompatibilidad.

El mantenimiento en vigor de las leyes indonesias o de la UNTAET se confirmó en virtud de la Ley Nº 10/2003, de 20 de noviembre de 2003, de Interpretación del Artículo 1 de la Ley Nº 2/2002, de 7 de agosto de 2002, y Fuentes del Derecho, que establece en su artículo 2: i) que la legislación es la única fuente de derecho inmediata en Timor-Leste; ii) que las leyes son disposiciones genéricas promulgadas por los órganos competentes del Estado; y iii) que las fuentes de derecho de Timor-Leste son: a) la Constitución; b) las leyes del Parlamento Nacional y del Gobierno; y c) subsidiariamente, los reglamentos y otros instrumentos jurídicos de la UNTAET, mientras no sean derogados, así como la legislación Indonesia con arreglo al artículo 1 de la mencionada Ley.

Dada la adopción del nuevo Código Civil de Timor-Leste (Ley Nº 10/2011, de 14 de septiembre de 2011, que reemplazó el anterior Código Civil indonesio, que se había aplicado ampliamente), no es habitual encontrar legislación indonesia en vigor.

ANEXO 8: Clasificación de las actividades económicas en Timor-Leste**ANEXO 8 A): Clasificación de las actividades económicas - Riesgo bajo
(derogada por el Decreto Ley N° 83/2022, de 23 de noviembre de 2022)**

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
C		INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
13		Fabricación de productos textiles
131	1310	Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles
139		Fabricación de otros productos textiles
	1391	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
	1392	Fabricación de tapices y alfombras
	1393	Fabricación de cuerdas y redes
	1394	Elaboración de lana para colchones
	1399	Fabricación de otros productos textiles, no especificados
14		Industria de las prendas de vestir
141		Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
	1411	Fabricación de prendas de vestir en serie
	1412	Prendas confeccionadas
142	1420	Fabricación de artículos de piel
143	1430	Fabricación de artículos de punto
16		Industrias de la madera y del corcho y sus manufacturas, excepto muebles; fabricación de artículos de espartería y cestería
161	1610	Aserrado, acepilladura e impregnación de madera
162		Fabricación de artículos de madera, corcho, paja y materiales trenzables, excepto muebles
	1624	Fabricación de artículos de espartería y cestería
18		Impresión y reproducción de grabaciones
181		Impresión y actividades de servicios relacionadas con la impresión
	1811	Impresión de periódicos
	1812	Otras actividades de impresión
	1813	Actividades de servicios relacionadas con la impresión
182	1820	Reproducción de grabaciones
32		Otras industrias manufactureras
321		Fabricación de joyas, orfebrería, bisutería y artículos conexos; acuñación de moneda
	3212	Fabricación de bisutería
322	3220	Fabricación de instrumentos musicales
323	3230	Fabricación de artículos de deporte
329	3290	Industrias manufactureras, no especificadas
33		Reparación, mantenimiento de productos de metal, maquinaria y equipo
331		Reparación y mantenimiento de productos de metal, maquinaria y equipo
	3311	Reparación y mantenimiento de productos de metal (excepto maquinaria y equipo)
	3312	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
	3313	Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y óptico
	3314	Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico
	3315	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, excepto vehículos
	3316	Reparación y mantenimiento de otros tipos de equipo
332	3320	Instalación de maquinaria y equipo industriales
F		CONSTRUCCIÓN
41		Desarrollo inmobiliario (desarrollo de proyectos de edificios); construcción de edificios
411		Desarrollo inmobiliario (desarrollo de proyectos de edificios)
G		COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
45		Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
451	4510	Comercio de vehículos automotores
453	4530	Comercio de partes y accesorios de motocicletas
454		Comercio de motocicletas y sus partes y accesorios
	4541	Comercio al por mayor y al por menor de motocicletas y sus partes y accesorios
46		Comercio al por mayor (incluso por agentes), excepto el de vehículos automotores y motocicletas
461	4610	Agentes comerciales al por mayor

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
464		Venta al por mayor de bienes de consumo, excepto alimentos, bebidas y tabaco
	4641	Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado
	4642	Venta al por mayor de aparatos eléctricos de uso doméstico y aparatos de radio y televisión
	4649	Venta al por mayor de otros bienes de consumo
465		Venta al por mayor de equipo de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)
	4651	Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática
	4652	Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
	4653	Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
	4659	Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
466		Otras actividades de venta al por mayor especializada
	4663	Venta al por mayor de madera en bruto y productos derivados
	4664	Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería
	4669	Venta al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra y otros productos no especificados
469	4690	Venta al por mayor no especializada
47		Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
471		Venta al por menor en comercios no especializados
	4719	Actividades de venta al por menor en comercios no especializados sin predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco
474		Venta al por menor de equipo de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en comercios especializados
	4741	Venta al por menor de ordenadores, equipo periférico, programas de informática y equipo de telecomunicaciones en comercios especializados
	4742	Venta al por menor de equipo de sonido y de vídeo en comercios especializados
	4762	Venta al por menor de discos, CD, DVD, casetes y artículos similares, artículos de deporte, juegos y juguetes en comercios especializados
477		Venta al por menor de otros productos en comercios especializados
	4771	Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero y de viaje en comercios especializados
	4773	Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados
	4774	Venta al por menor de artículos de segunda mano en comercios especializados
478		Venta al por menor en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4781	Venta al por menor de productos alimenticios agrícolas en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4782	Venta al por menor de alimentos elaborados, bebidas y tabaco en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4783	Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, maletas y artículos similares en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4784	Venta al por menor de artículos y equipo de uso doméstico en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4786	Venta al por menor de artículos de papelería, periódicos y artículos de deporte en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4787	Venta al por menor de productos de artesanía, juguetes y pinturas en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4789	Venta al por menor de otros productos en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
479		Venta al por menor no realizada en comercios, ferias o mercados
	4791	Venta al por menor por correo o por Internet
	4792	Venta al por menor por otros medios, no realizada en comercios, puestos de venta, ferias o unidades de venta móviles
H		TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
52		Almacenamiento y actividades auxiliares del transporte (incluida la manipulación)
521	5210	Almacenamiento
53		Actividades postales y de mensajería
531	5310	Actividades postales sujetas a las obligaciones de servicio universal
532	5320	Otras actividades postales y de mensajería
J		ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
58		Actividades de edición
581		Edición de libros, periódicos y otras publicaciones
	5811	Edición de libros
	5812	Edición de listas para consulta

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
	5813	Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
	5819	Otras actividades de edición
582	5820	Edición de programas informáticos
59		Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música
591		Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión
	5911	Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión y técnicas de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión
	5912	Distribución de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión
	5913	Exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo
592	5920	Actividades de grabación de sonido y edición de música
62		Consultoría de informática, programación informática y actividades conexas
620		Consultoría de informática, programación informática y actividades conexas
	6201	Programación informática
	6202	Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas y utilización de equipo informático
	6209	Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos
63		Actividades de servicios de información
631		Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
	6311	Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas
	6312	Portales web
639		Otras actividades de servicios de información
	6391	Actividades de agencias de noticias
	6392	Otras actividades de servicios de información no especificadas
L		ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
68		Actividades inmobiliarias
681	6810	Compra y venta de bienes inmuebles
682	6820	Arrendamiento de bienes inmuebles
M		ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y SIMILARES
69		Actividades jurídicas y de contabilidad
691	6910	Actividades jurídicas
692	6920	Actividades de contabilidad y auditoría; consultoría fiscal
70		Actividades de oficinas principales y actividades de consultoría de gestión
701	7010	Actividades de oficinas principales
702	7020	Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión
74		OTRAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y SIMILARES
741	7410	Actividades de diseño
742	7420	Actividades de fotografía
743	7430	Actividades de traducción e interpretación
749	7490	Otras actividades de consultoría, científicas, técnicas y similares no especificadas
N		ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
77		Actividades de alquiler
771	7710	Alquiler de vehículos
772	7720	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
773		Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
	7731	Alquiler de medios de transporte marítimos y fluviales
	7732	Alquiler de maquinaria y equipo para actividades de construcción y de ingeniería civil
	7733	Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluidos los ordenadores)
	7734	Alquiler de otras máquinas y equipos no especificados
774	7740	Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor
78		Actividades de empleo
781	7810	Actividades de empresas de contratación y colocación
782	7820	Actividades de agencias de empleo temporal
783	7830	Otras actividades de dotación de recursos humanos
79		Agencias de viajes, operadores turísticos, otros servicios de reservas y actividades conexas
799	7990	Otros servicios de reservas y actividades conexas
81		Actividades relacionadas con los edificios, la plantación y el mantenimiento de jardines
811	8110	Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
812	8120	Actividades de limpieza
813	8130	Actividades de plantación y mantenimiento de jardines

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
82		Actividades de servicios administrativos y de apoyo a las empresas
821	8210	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
822	8220	Actividades de centros de llamadas
823	8230	Organización de ferias, congresos y otros eventos similares
829		Actividades de servicios de apoyo a las empresas no especificadas
	8291	Actividades de envasado y empaquetado
	8299	Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas no especificadas
R		ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE INTERPRETACIÓN, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
90	900	Teatro, música, danza y otras actividades artísticas y literarias
	9001	Teatro, música, danza y otras actividades relacionadas con las artes escénicas
	9002	Creación artística y literaria
91	910	Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales
	9101	Actividades de bibliotecas y archivos
	9102	Actividades de museos y lugares y monumentos históricos
	9103	Actividades de zoos, jardines botánicos, acuarios y parques y reservas naturales
93		Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
931		Actividades deportivas
	9311	Actividades de clubes deportivos
	9319	Otras actividades deportivas
932	9320	Actividades de esparcimiento y recreativas
S		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
94		Actividades de asociaciones
941		Actividades de asociaciones empresariales, de empleadores y profesionales
	9411	Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
	9412	Actividades de asociaciones profesionales
942	9420	Actividades de sindicatos
949		Actividades de otras asociaciones
	9491	Actividades de organizaciones religiosas
	9493	Actividades de asociaciones de jóvenes y de estudiantes
	9499	Actividades de otras asociaciones no especificadas
95		Reparación de ordenadores y de efectos personales y enseres domésticos
951		Reparación de ordenadores y equipo de comunicaciones
	9511	Reparación de ordenadores y equipo periférico
	9512	Reparación de equipo de comunicaciones
952		Reparación de efectos personales y enseres domésticos
	9521	Reparación de televisores y otros bienes de consumo similares
	9522	Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería
	9523	Reparación de muebles y accesorios domésticos
	9529	Reparación de relojes, joyas y otros efectos personales y enseres domésticos
96	960	Otras actividades de servicios personales
	9601	Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel
	9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza
	9603	Pompas fúnebres y actividades conexas
	9609	Otras actividades de servicios personales no especificadas
T		ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO Y ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES PARA USO PROPIO
97-970	9700	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
98		Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
981	9810	Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio
982	9820	Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio
U		ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRATERRITORIALES
99-990	9900	Actividades de organizaciones internacionales y otras instituciones extraterritoriales

Fuente: Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017.

**ANEXO 8 B): Clasificación de las actividades económicas - Riesgo medio
(derogada por el Decreto Ley N° 83/2022, de 23 de noviembre de 2022)**

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
A		AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y ACUICULTURA
01		Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
011		Cultivos no perennes
	0111	Cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
	0112	Cultivo de arroz
	0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
	0119	Cultivo de otras plantas no perennes
012		Cultivo de plantas perennes
	0121	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
	0122	Cultivo de cítricos
	0123	Cultivo de frutos oleaginosos
	0124	Cultivo de café
	0129	Otras plantas perennes
013	0130	Cultivo de materiales vegetales para la propagación de plantas
014		Ganadería
	0141	Cría de ganado bovino y búfalos
	0142	Cría de equinos, asnos y mulos
	0143	Cría de ovejas y cabras
	0144	Cría de cerdos
	0145	Cría de aves de corral
	0149	Cría de otros animales
015	0150	Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)
016	0160	Actividades de servicios relacionadas con la agricultura y la ganadería
017	0170	Caza y actividades de servicios conexas
02		Silvicultura y exploración forestal
021		Silvicultura y otras actividades forestales
	0211	Plantaciones forestales
	0212	Bosques naturales
022	0220	Exploración forestal
023	0230	Recolección de productos forestales distintos de la madera
024	0240	Actividades de servicios relacionadas con la silvicultura y la exploración forestal
03		Pesca y acuicultura
031		Pesca
	0311	Pesca marítima
	0312	Pesca continental
032	0320	Acuicultura
034	0340	Actividades de servicios relacionadas con la pesca y la acuicultura
C		INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
10		Industria alimentaria
103	1030	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
104	1040	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
105	1050	Elaboración de productos lácteos
106		Elaboración de cereales y leguminosas; elaboración de almidones, productos derivados del almidón y productos conexos
	1061	Elaboración de cereales y leguminosas
	1062	Elaboración de almidones, productos derivados del almidón y productos conexos
107		Elaboración de productos de panadería y otros productos a base de harina
	1071	Productos de panadería
	1072	Elaboración de pasteles, galletas y tostadas
1	1073	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
	1074	Industria del café
	1079	Elaboración de otros productos alimenticios no especificados
108	1080	Elaboración de piensos para animales
11		Elaboración de bebidas
110		Elaboración de bebidas
	1101	Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas
	1102	Elaboración de vinos (incluido el vino de palma)
	1103	Elaboración de cerveza y malteado
	1104	Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
12		Elaboración de productos de tabaco
120	1200	Elaboración de productos de tabaco
15		Fabricación de productos de cuero y productos conexos
151	1510	Curtido y acabado de productos de cuero y distintos de los de cuero; fabricación de artículos de viaje y productos para uso personal, artículos de cuero fino, artículos de talabartería y guarnicionería
152	1520	Fabricación de calzado
16		Industrias de la madera y del corcho y sus manufacturas, excepto muebles; fabricación de artículos de espartería y cestería
162		Fabricación de artículos de madera, corcho, espartería y cestería, excepto muebles
	1621	Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera
	1622	Fabricación de otros productos de carpintería para la construcción
	1623	Fabricación de recipientes de madera
	1629	Fabricación de otros productos de madera y corcho
17		Fabricación de pasta de madera, papel, cartón y otros productos de papel
171		Fabricación de pasta de madera, papel y cartón (excepto cartón ondulado)
172		Fabricación de papel y cartón ondulado, papel y productos de cartón
22		Fabricación de productos de caucho y de plástico
221	2210	Fabricación de productos de caucho
222	2220	Fabricación de productos de plástico
23		Fabricación de otros productos minerales no metálicos
231	2310	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
232		Fabricación de productos de cerámica refractaria
233		Fabricación de productos de cerámica para la construcción
234		Fabricación de otros productos de porcelana y cerámica no refractaria
237		Aserrado, corte y acabado de piedras ornamentales y otras piedras de construcción
239		Fabricación de productos minerales no metálicos no especificados
	2391	Fabricación de productos de cerámica para fines domésticos y ornamentales y otros productos, excepto para la construcción
	2392	Fabricación de productos de cerámica para la construcción
	2393	Fabricación de productos de hormigón para la construcción
	2394	Fabricación de hormigón listo para usar
	2395	Aserrado, corte y acabado de piedra de construcción
	2399	Fabricación de otros productos minerales no metálicos no especificados
24		Industrias metalúrgicas básicas
241	2410	Industria del acero y fabricación de ferroaleaciones
242	2420	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y accesorios de acero conexos
25		Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo
251		Fabricación de depósitos, recipientes, calderas y radiadores metálicos para calefacción central
	2511	Fabricación de estructuras para puertas, ventanas y elementos metálicos similares
	2512	Fabricación de depósitos, recipientes, calderas y generadores de vapor
259		Fabricación de otros productos de metal, tratamiento y revestimiento de metales y actividades mecánicas generales
	2591	Fabricación de productos forjados, estampados y laminados
	2592	Tratamiento y revestimiento de metales y actividades mecánicas generales
	2593	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
	2599	Fabricación de otros productos de metal no especificados
26		Fabricación de equipo informático, equipo de comunicación, productos de electrónica y de óptica
261	2610	Fabricación de componentes y tableros electrónicos
262	2620	Fabricación de ordenadores y equipo periférico
263	2630	Fabricación de equipo y dispositivos de comunicaciones
264	2640	Fabricación de receptores de radio y televisión y bienes de consumo similares
265	2650	Fabricación de instrumentos y aparatos de medición, prueba y navegación y de relojes
27		Fabricación de equipo eléctrico
271	2710	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control para instalaciones eléctricas, acumuladores, baterías y cables aislados y sus accesorios
272	2720	Fabricación de lámparas eléctricas y otro equipo eléctrico de iluminación
273	2730	Fabricación de aparatos de uso doméstico
279		Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
28		Fabricación de maquinaria y equipo no especificados
281	2810	Fabricación de maquinaria y equipo de uso general

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
282	2820	Fabricación de otra maquinaria y equipo de uso especial
29		Fabricación de vehículos automotores, remolques, semirremolques y componentes para vehículos automotores
291	2910	Fabricación de vehículos automotores
292	2920	Fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques
293	2930	Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
30		Fabricación de otro equipo de transporte
301	3010	Construcción de buques
302	3020	Fabricación de material rodante para trenes
303	3030	Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa
304	3040	Fabricación de vehículos militares de combate
309		Fabricación de otro equipo de transporte no especificado
31		Fabricación de muebles y colchones
310		Fabricación de muebles y colchones
	3101	Fabricación de muebles de madera
	3102	Fabricación de muebles de bambú
	3109	Fabricación de colchones y otros muebles
32		Otras industrias manufactureras
321		Fabricación de joyas, orfebrería, bisutería y artículos conexos; acuñación de moneda
	3211	Fabricación de joyas, orfebrería y artículos conexos; acuñación de moneda
324	3240	Fabricación de juegos y juguetes
325	3250	Fabricación de instrumentos y materiales médicos y quirúrgicos
D		ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA CALIENTE Y FRÍA Y AIRE FRÍO
35		Electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría y aire frío
353		Producción y distribución de vapor, agua caliente y fría, y aire frío por tuberías; producción de hielo
	3531	Producción y distribución de vapor, agua caliente y fría, y aire frío y aire frío por tuberías
	3532	Producción de hielo
F		CONSTRUCCIÓN
43		Actividades especializadas de construcción
433	4330	Actividades de acabado en edificios
439		Otras actividades especializadas de construcción
	4391	Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios
	4399	Otras actividades especializadas de construcción no especificadas
G		COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
45		Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
452	4520	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
454		Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas, sus partes y accesorios
	4542	Mantenimiento y reparación de motocicletas, sus partes y accesorios
46		Comercio al por mayor (incluso por agentes), excepto el de vehículos automotores y motocicletas
462	4620	Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
463	4630	Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
47		Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
471		Venta al por menor en comercios no especializados
	4711	Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco
472		Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco
	4721	Venta al por menor de frutas y hortalizas en comercios especializados
	4722	Venta al por menor de pan, productos de panadería y de confitería en comercios especializados
	4729	Venta al por menor de otros alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados
477		Venta al por menor de otros productos en comercios especializados
	4772	Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados
478		Venta al por menor en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
	4785	Venta al por menor de combustibles y lubricantes en puestos de venta, ferias y unidades móviles de venta
H		TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
52		Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
522		Actividades de apoyo al transporte
	5221	Actividades de apoyo al transporte terrestre
	5222	Actividades de apoyo al transporte acuático

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
	5223	Actividades de apoyo al transporte aéreo
	5224	Manipulación de la carga
	5225	Actividades de transitarios y agentes de aduanas de flete marítimo
	5226	Actividades de transitarios y agentes de aduanas de flete aéreo
	5229	Otras actividades de apoyo al transporte
I		ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE RESTAURANTES Y SIMILARES
56		Servicios de restaurantes y similares
562		Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas
	5621	Suministro de comidas por encargo
	5629	Otros servicios de suministro de comidas por encargo
J		ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
60		Actividades de radio y televisión
601	6010	Actividades de radio
602	6020	Actividades de televisión
61		Telecomunicaciones
611	6110	Actividades de telecomunicaciones alámbricas
612	6120	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
613	6130	Actividades de telecomunicaciones por satélite
619	6190	Otras actividades de telecomunicaciones
M		ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y SIMILARES
71		Actividades de arquitectura, ingeniería y actividades técnicas conexas; ensayos y análisis técnicos
711	7110	Actividades de arquitectura, ingeniería y actividades técnicas conexas
712	7120	Ensayos y análisis técnicos
72		Actividades de investigación científica y desarrollo
721		Investigaciones y desarrollo en el campo de las ciencias físicas y naturales
	7211	Investigaciones y desarrollo en el campo de las ciencias naturales
	7212	Investigaciones y desarrollo en el campo de las ciencias físicas y la ingeniería
722		Investigaciones y desarrollo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades
	7221	Investigaciones y desarrollo en el campo de las ciencias sociales
	7222	Investigaciones y desarrollo en el campo de las humanidades
73		Publicidad, estudios de mercado y encuestas de opinión
731		Publicidad
732		Estudios de mercado y encuestas de opinión
75		Actividades veterinarias
750	7500	Actividades veterinarias
N		ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
79		Agencias de viajes, operadores turísticos, otros servicios de reservas y actividades conexas
791	7910	Agencias de viajes y operadores turísticos
80		Actividades de investigación y seguridad
801	8010	Actividades de seguridad privada
802	8020	Actividades de servicios de sistemas de seguridad
P		ENSEÑANZA
85		Enseñanza
855	8550	Servicios y actividades de apoyo a la enseñanza
Q		ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL
88		Actividades de asistencia social sin alojamiento
881	8810	Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad
889		Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
	8891	Actividades de atención a la infancia sin alojamiento
	8899	Otras actividades de asistencia social sin alojamiento no especificadas
R		ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE INTERPRETACIÓN, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
92-920	9200	Loterías y otras apuestas deportivas
S		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
94		Actividades de asociaciones
949		Actividades de otras asociaciones
	9492	Actividades de organizaciones políticas

Fuente: Decreto Ley N° 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017.

**ANEXO 8 C): Clasificación de las actividades económicas - Riesgo alto
(derogada por el Decreto Ley N° 83/2022, de 23 de noviembre de 2022)**

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
B		INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
05		Extracción de carbón de piedra y lignito
051	0510	Extracción de carbón de piedra (incluida la antracita)
052	0520	Extracción de lignito
06		Extracción de petróleo y gas natural
061	0610	Extracción de petróleo crudo
062	0620	Extracción de gas natural
07		Extracción y preparación de minerales metalíferos
071	0710	Extracción y preparación de minerales de hierro
072	0720	Extracción y preparación de minerales no ferrosos
08		Otras industrias extractivas
081		Extracción de piedra, arena y arcilla
	0811	Extracción de piedra de construcción
	0812	Extracción de arena
	0813	Extracción de piedras machacadas
	0814	Extracción de arcilla y caolín
089		Industrias extractivas no especificadas
	0891	Extracción de minerales para la industria química y la fabricación de abonos
	0892	Extracción de sal
	0893	Otras industrias extractivas no especificadas
09		Actividades de servicios relacionadas con las industrias extractivas
091	0910	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas natural, excepto la prospección
099	0990	Otras actividades de servicios relacionadas con las industrias extractivas
C		INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
10		Industria alimentaria
101	1010	Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos
102	1020	Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos
19		Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y aglomerados de combustibles
191	1910	Fabricación de productos de coque
192	1920	Fabricación de productos de la refinación del petróleo y aglomerados de combustibles
20		Fabricación de sustancias químicas y fibras sintéticas o artificiales, excepto productos farmacéuticos
201		Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias
202		Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
	2021	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y productos de higiene
	2029	Fabricación de otros productos químicos no especificados
203	2030	Fabricación de pinturas, barnices y productos similares, masillas y tintas de imprenta
204		Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador
205		Fabricación de otros productos químicos
206		Fabricación de fibras sintéticas o artificiales
21		Fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos
211		Fabricación de productos farmacéuticos básicos
212		Fabricación de preparados farmacéuticos
23		Fabricación de otros productos minerales no metálicos
235		Fabricación de cemento, cal y yeso
236		Fabricación de artículos de hormigón, yeso y cemento
239		Fabricación de productos abrasivos y otros productos minerales no metálicos
25		Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo
252	2520	Fabricación de armas y municiones
26		Fabricación de equipo informático, equipo de comunicación, productos de electrónica y de óptica
266		Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico
D		ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA CALIENTE Y FRÍA Y AIRE FRÍO
35		Electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría y aire frío
351	3510	Generación, transporte, distribución y comercio de energía eléctrica

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
352	3520	Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; comercio gas
E		DESCONTAMINACIÓN
36 - 360	3600	Recogida, tratamiento y distribución de agua
37 - 370	3700	Captación, tratamiento y eliminación de aguas residuales
38		Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; valoración de materiales
381		Recogida de desechos
	3811	Recogida de desechos no peligrosos
	3812	Recogida de desechos peligrosos
382		Tratamiento y eliminación de desechos
	3821	Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos
	3822	Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos
383	3830	Valoración de materiales
39 - 390	3900	Actividades de descontaminación y similares
F		CONSTRUCCIÓN
41 - 410	4100	Construcción de edificios (residenciales y no residenciales)
42		Obras de ingeniería civil
421	4210	Construcción de carreteras, puentes, túneles, pistas para aeropuertos y líneas de ferrocarril
422	4220	Construcción de redes de transporte de agua, alcantarillado, distribución eléctrica, telecomunicaciones y otras redes
429	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil
43		Actividades especializadas de construcción
431	4310	Demolición y preparación del terreno
432		Instalaciones eléctricas, de fontanería y aire acondicionado y otras instalaciones
	4321	Instalaciones eléctricas
	4322	Instalaciones de fontanería y aire acondicionado
	4329	Otras instalaciones para obras de construcción
G		COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
46		Comercio al por mayor (incluso por agentes), excepto el de vehículos automotores y motocicletas
466		Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo y sus partes
	4661	Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos
	4662	Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
47		Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
473	4730	Venta al por menor de combustibles en comercios especializados
H		TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
49		Transporte por vía terrestre y transporte por oleoductos o gasoductos
491	4910	Transporte por ferrocarril
492		Otras actividades de transporte por vía terrestre (transporte de pasajeros por vía terrestre)
	4921	Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre
	4922	Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre
	4923	Transporte de carga por carretera
493	4930	Transporte por oleoductos y gasoductos
50		Transporte por vía acuática
501		Transporte de pasajeros marítimo
	5011	Transporte de pasajeros marítimo
	5012	Transporte de carga marítimo
502	5020	Transporte de carga marítimo
51		Transporte aéreo
511	5110	Transporte de pasajeros por vía aérea
512	5120	Transporte de carga por vía aérea
I		ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE RESTAURANTES Y SIMILARES
55		Actividades de alojamiento
551		Establecimientos hoteleros
	5511	Establecimientos hoteleros
	5512	Casas de vacaciones
552		Campamentos y parques de caravanas
	5521	Campamentos
	5522	Parques de caravanas
559	5590	Otros lugares de alojamiento
56		

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
561		
	5611	
	5612	
563	5630	Establecimientos de comidas y bebidas
K		ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
64		Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
641		Intermediación monetaria
	6411	Banca central
	6412	Banca pública
	6419	Otros tipos de intermediación monetaria
642	6420	Actividades de sociedades de cartera
643	6430	Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares
649		Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
	6491	Arrendamiento financiero
	6492	Casas de empeños
	6493	Cooperativas de crédito
	6494	Otras actividades de concesión de crédito
	6495	Compañías de capital riesgo
	6499	Otras actividades de servicios financieros, no especificadas, excepto las de seguros y fondos de pensiones
66		Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros y de seguros
661		Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
	6611	Administración de mercados financieros
	6612	Actividades de intercambio comercial de activos transferibles y otros instrumentos financieros realizadas en nombre de terceros
	6619	Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
662	6620	Actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones
663	6630	Actividades de gestión de fondos
O		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA
84		Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
841		Administración pública en general y aplicación de la política económica y social
	8411	Administración pública central
	8412	Administración regional y local
	8413	Administración pública - salud, enseñanza, actividades culturales y sociales, excepto planes de seguridad social de afiliación obligatoria
	8414	Administración pública - actividades económicas
	8415	Actividades de apoyo a la administración pública en su conjunto
842		Relaciones exteriores, defensa, justicia, seguridad, orden público y protección civil
	8421	Relaciones exteriores
	8422	Actividades de defensa
	8423	Actividades relacionadas con la justicia
	8424	Actividades relacionadas con la seguridad, el orden público y la protección civil
843	8430	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
P		ENSEÑANZA
85		Enseñanza
851		Enseñanza preescolar y básica, 1 ^{er} y 2 ^o ciclos
	8511	Enseñanza preescolar
	8512	Enseñanza básica, 1 ^{er} y 2 ^o ciclos
852		Enseñanza básica, 3 ^{er} ciclo y secundaria
	8521	Enseñanza básica, 3 ^{er} ciclo
	8522	Enseñanza secundaria de formación general
	8523	Enseñanza de formación técnica y profesional
853	8530	Enseñanza superior
854		Otros tipos de enseñanza
	8541	Aptitud profesional
	8549	Otros tipos de enseñanza no especificados
Q		ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL
86		Actividades de atención de la salud humana
861	8610	Actividades de instalaciones para pacientes hospitalizados

Código (clasificación de Timor-Leste)		Actividad
862	8620	Actividades de clínicas ambulatorias, dentales y de odontología
869		Otras actividades de atención de la salud humana
	8691	Laboratorios de análisis clínicos
	8692	Centros de recogida y bancos de órganos
	8699	Otras actividades de atención de la salud humana no especificadas
87		Actividades de asistencia social con alojamiento
871	8710	Actividades de centros de atención ambulatoria integrada continua con alojamiento
872	8720	Actividades de atención con alojamiento en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos
873	8730	Actividades de asistencia social con alojamiento en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad
879	8790	Otras actividades de asistencia social con alojamiento

Fuente: Decreto Ley Nº 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, de 27 de septiembre de 2017.

ANEXO 8 D): Clasificación de las actividades económicas de conformidad con el Decreto Ley N° 34/2017 sobre el Régimen de Licencias para Actividades Económicas, modificado por el Decreto Ley N° 83/2022, de 23 de noviembre de 2022 - Actividades sujetas al régimen de licencias

Código (clasificación de Timor-Leste)				Actividad
A				AGRICULTURA, PRODUCCIÓN PECUARIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
	01			Agricultura, producción pecuaria, caza y actividades de servicios conexas
		012		Cultivo de plantas perennes
			0124	Cultivo de café
		014		Producción pecuaria
			0149	Cría de otros animales
	03			Pesca y acuicultura
		031		Pesca
			0311	Pesca marítima
			0312	Pesca continental
		032	0320	Acuicultura
B				INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
	05			Extracción de carbón de piedra y lignito
		051	0510	Extracción de carbón de piedra, incluida la antracita
		052	0520	Extracción de lignito
	06			Extracción de petróleo crudo y gas natural
		061	0610	Extracción de petróleo crudo
		062	0620	Extracción de gas natural
	07			Extracción y preparación de minerales metalíferos
		071	0710	Extracción y preparación de mineral y hierro
		072	0720	Extracción y preparación de minerales no ferrosos
	08			Otras industrias extractivas
		081		Extracción de piedra y arcilla
			0811	Extracción de piedra para la construcción
			0812	Extracción de arena
			0813	Extracción de piedras machacadas
			0814	Extracción de arcilla y caolín
	09			Actividades de servicios relacionadas con las industrias extractivas
		091	0910	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas natural, excepto la prospección
		090	0990	Otras actividades de servicios relacionados con la explotación de minas y canteras
C				INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
	10			Industria alimentaria
		101	1010	Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos
		102	1020	Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos
		103	1030	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
		104	1040	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
		105	1050	Elaboración de productos lácteos
		106		Elaboración de legumbres y hortalizas y productos de origen vegetal, elaboración de almidones, productos derivados del almidón y productos similares
			1061	Elaboración de cereales y leguminosas
			1062	Elaboración de almidones, productos derivados del almidón y productos similares
		107		Elaboración de productos alimenticios y otros productos alimenticios
			1071	Productos de panadería
			1072	Elaboración de productos de pastelería, pasteles, galletas y tostadas
			1073	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
			1074	Industria del café
			1079	Elaboración de otros productos alimenticios
		108	1080	Elaboración de piensos para animales
	11	110		Elaboración de bebidas
			1101	Producción de bebidas alcohólicas destiladas

Código (clasificación de Timor-Leste)				Actividad
			1102	Elaboración de vinos, incluido el vino de palma
			1103	Elaboración de cerveza y malteado
			1104	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
	19			Fabricación de coque, productos del petróleo y de la refinación del petróleo
		191	1910	Fabricación de productos de hornos de coque
		192	1920	Fabricación de productos de la refinación del petróleo y "pellets" para combustible
	25			Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo
		252	2520	Fabricación de armas y municiones
		259		Fabricación de otros productos de metal, tratamiento y revestimiento de metales para actividades mecánicas generales
			2593	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
D				ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AGUA CALIENTE Y FRÍA, Y AIRE FRÍO
	35			Electricidad, gas, vapor, agua caliente y fría, y aire frío
		351	3510	Producción, transporte, distribución y comercio de electricidad
		353	3530	producción y distribución de vapor, agua caliente y fría, y aire frío por tuberías; producción de hielo
E				RECOGIDA, DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA, GESTIÓN DE RESIDUOS DEL SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACIÓN
	36	360	3600	Recogida y tratamiento de agua, distribución de agua
F				CONSTRUCCIÓN
	41	410	4100	Construcción de edificios residenciales y no residenciales
	42			Obras de ingeniería civil
		421	4210	Construcción de carreteras, puentes, túneles, puertos y transbordadores
		422	4220	Construcción de redes de distribución de agua, alcantarillado, distribución eléctrica, telecomunicaciones y otras redes
		423	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil
	43			ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
		434		Otras actividades específicas de construcción
			4399	Otras actividades especializadas de construcción
G				COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
	45			Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
		451	4510	Comercio de productos de la industria del automóvil
	46			Comercio al por mayor (incluso por agentes), excepto el de vehículos automotores y motocicletas
		466		Otras actividades de venta al por mayor especializada
			4661	Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos
	47			Venta al por menor y comercio de vehículos automóviles y vehículos
		473	4730	Venta al por menor de automóviles y combustible para motores en tiendas especializadas
		477		Venta al por menor de productos de otros productos en comercios especializados
			4772	Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados
H				TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
	49			Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías
		492		otro tipo de transporte terrestre
			4921	Transporte urbano y suburbano de pasajeros
			4922	otras actividades de transporte por vía terrestre y transporte de pasajeros
			4923	transporte por carretera de mercancías
	51			Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
		511	5110	transporte aéreo y carga

Código (clasificación de Timor-Leste)				Actividad
		512	5120	Transporte aéreo y de carga
	53			Actividades postales y de mensajería
		531	5310	Actividades postales sujetas a obligaciones de servicio universal
		532	5320	Otras actividades postales y de mensajería
I				ALOJAMIENTO Y COMIDAS POR ENCARGO (SERVICIOS DE RESTAURANTES Y SIMILARES)
	55			Alojamiento
		552		Campamentos y parques de caravanas
			5521	Campamentos
			5522	Parques de caravanas
		559	5590	otros lugares de alojamiento
	56			(Restaurantes y similares)
		561		Servicios de restaurante, incluidas las actividades de restauración y mobiliario
			5611	Restaurante tradicional
			5612	Restaurante en soportes móviles
		562		Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas
			5621	Suministro de comidas por encargo
			5629	Otras actividades de servicios alimentarios
		563	5630	Comidas y bebidas
J				ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN
	58			Actividades editoriales
		581		Publicación de libros, periódicos y otro tipo de información
			5813	Publicación de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
	60			Actividades de radio y televisión
		601	6010	Actividades de radio
		602	6020	Actividades de televisión
	61			Telecomunicaciones
		611	6110	Actividades de telecomunicaciones alámbricas
		612	6120	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
		613	6130	Actividades de telecomunicaciones por satélite
K				ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ACTIVOS
	64			actividades financieras, de seguros y de fondos de pensiones
		641		Intermediación monetaria
			6411	Banca central
			6412	Banca pública
			6419	Otros tipos de intermediación monetaria
		642	6420	Actividades de sociedades de cartera
		643	6430	Fondos y entidades financieras similares
		649		Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
			6491	Actividades de arrendamiento financiero
			6492	Casas de empeños
			6493	Cooperativas de crédito
			6494	Otras actividades de concesión de crédito
			6495	Riesgos de garantía de capital
			6499	Otras actividades de servicios financieros excepto las de seguros y fondos de pensiones
	65			Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria
		651	6510	seguros
		652	6520	Reaseguros
		653	6530	Fondos de pensiones
	66			Actividades auxiliares y servicios financieros y de seguros
		661		Actividades auxiliares y servicios financieros para valores y fondos de pensiones
			6611	Administración del mercado financiero
			6612	Activos y otras actividades de intercambio comercial de instrumentos financieros realizadas en nombre de terceros
			6619	Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
		662	6620	actividades auxiliares de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
		663	6630	actividades de gestión de fondos

Código (clasificación de Timor-Leste)				Actividad
M				ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA SIMILARES
	69			Actividades jurídicas y de contabilidad
		691	6910	Actividades jurídicas
		692	6920	Actividades de contabilidad y auditoría, consultoría fiscal
	73			Publicidad, estudios de mercado y encuestas de opinión
		731	7310	Publicidad
		732	7320	Enfoque de mercado y tasas de apertura
N				ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
	79			Agencias de viajes, operadores turísticos, otros servicios de reservas y actividades conexas
		791	7910	Agencias de viajes y operadores turísticos
		799	7990	Otros servicios de reserva y actividades conexas
	80			Actividades de investigación y seguridad
		801	8010	Actividades de seguridad privada
		802	8020	actividades de servicios de sistemas de seguridad
		803	8030	Actividades de investigación
P				ENSEÑANZA
	85			enseñanza
			8511	enseñanza preescolar
			8512	enseñanza básica, 1er y 2º ciclos
		852		enseñanza básica, 3er ciclo y secundaria
			8521	enseñanza básica, 3er ciclo
			8522	enseñanza secundaria de formación general
			8523	enseñanza de formación técnica y profesional
			8530	enseñanza superior
Q				Actividades de atención de la salud humana y asistencia social
	86			actividades de atención de la salud humana
		861	8610	actividades de centros asistenciales para pacientes hospitalizados
		862	8620	actividades de atención clínica y ambulatoria, dental y de odontología
		869		Otras actividades de atención de la salud humana
			8691	Laboratorios de análisis clínicos
			8692	centros de recogida y bancos de órganos
			8699	Otras actividades de atención de la salud humana
R				ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS RECREATIVOS
	92	920	9200	Otros tipos de lotería y juegos de apuestas
	93			Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
		931		Actividades deportivas
			9311	Actividades de clubes deportivos
			9319	Otras actividades deportivas
		932	9320	Actividades de esparcimiento y recreativas
S				OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
	94			Actividades de asociaciones
		941		Actividades de asociaciones empresariales, de empleadores y profesionales
			9412	Actividades de organizaciones y profesionales

- las actividades marcadas con "*" están sujetas a la obtención de una licencia de conformidad con el reglamento sectorial.
- las actividades con posibles riesgos ambientales están sujetas a la obtención de una licencia de conformidad con el Decreto Ley Nº 5/2011 sobre Licencias Ambientales, de 9 de febrero de 2011, modificado por el Decreto Ley Nº 39/2022, de 8 de junio de 2022.

ANEXO 9: Comité Nacional de Facilitación del Comercio

En el artículo 3 del anexo de la Resolución Nº 6/2016 del Gobierno sobre el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CONFAC), de 17 de febrero de 2016, modificada por la Resolución Nº 24/2023 del Gobierno, de 24 de mayo de 2023, se enumeran los ministerios y organismos que componen este Comité y que son los siguientes:

1. El CONFAC está integrado por miembros ejecutivos, un grupo de trabajo técnico, una secretaría y miembros observadores.
2. Miembros ejecutivos:
 - a) Ministro Coordinador de Asuntos Económicos (MCAE);
 - b) Ministro de Hacienda;
 - c) Ministro de Obras Públicas;
 - d) Ministro de Transporte y Comunicaciones;
 - e) Ministro del Interior;
 - f) Ministro de Turismo, Comercio e Industria;
 - g) Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación;
 - h) Ministro de Agricultura y Pesca.
3. Miembros del grupo de trabajo técnico:
 - a) Comisario de la Autoridad Aduanera;
 - b) Coordinador del Programa de Reforma Fiscal;
 - c) Representante del MCAE;
 - d) Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para Asuntos de la ASEAN;
 - e) Inspector General de la Autoridad de Inspección y Supervisión de las Actividades Económicas, Sanitarias y Alimentarias (AIFAESA);
 - f) Director de la Administración de la Autoridad Portuaria de Timor-Leste (APORTIL);
 - g) Director de la Autoridad de Aviación Civil de Timor-Leste (AACTL);
 - h) Director Nacional de Inmigración;
 - i) Director Nacional de Cuarentena y Bioseguridad;
 - j) Director de Promoción de las Exportaciones de TradeInvest;
 - k) Director Ejecutivo del SERVE;
 - l) Presidente del Instituto de Calidad de Timor-Leste;
 - m) Director Ejecutivo del Organismo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC Timor-Leste);
 - n) Director General de Transportes y Comunicaciones;
 - o) Director Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industria;
 - p) Gerente de Concesión de Licencias y Reglamentación del Banco Central de Timor-Leste.

4. Miembros no ejecutivos:
 - a) El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, o su representante;
 - b) El Presidente de la Asociación de Agentes de Aduanas, o su representante;
 - c) La Presidenta de la Asociación Empresarial de Mujeres de Timor-Leste, o su representante;
 - d) Un representante del puerto de Timor;
 - e) Un representante de los funcionarios marítimos;
 - f) Un representante de las compañías aéreas de transporte de pasajeros y carga;
 - g) Un representante del sector de la banca comercial;
 - h) Un representante de las compañías de seguros.
5. Miembros observadores:
 - a) Grupo Banco Mundial;
 - b) Banco Asiático de Desarrollo;
 - c) UNCTAD;
 - d) USAID.
6. El Director General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria y el Comisario de la Autoridad Aduanera coordinarán conjuntamente el grupo de trabajo técnico.

ANEXO 10: Disposiciones legislativas relacionadas con la facilitación del comercio

El Código Aduanero sirve de marco y orientación para toda la legislación aduanera subsidiaria que es necesario elaborar. El título XXI (Disposiciones finales) del Código se refiere al plazo, los reglamentos de aplicación, las medidas de aplicación y la legislación complementaria. A continuación se dan algunos ejemplos de reglamentos de aplicación, medidas de aplicación y legislación complementaria inherente al Código Aduanero:

Artículo 2 (Buenas prácticas administrativas):

1. En el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Ley, el Gobierno aprobará, mediante Resolución del Consejo de Ministros, una "Guía de buenas prácticas administrativas". 2. La Guía mencionada en el párrafo anterior es un documento de referencia normalizado para las actuaciones de la administración pública.

Artículo 15 (Publicación):

1. Sin perjuicio de las disposiciones del siguiente párrafo y a propuesta del Director General de Aduanas, el Ministro aprueba los formularios relativos a las declaraciones de aduana, la recaudación de los ingresos tributarios aduaneros, la aplicación del sistema de valoración en aduana de las mercancías o la percepción de los derechos establecidos en el presente Código y otros textos de la legislación aduanera en vigor. 2. Los formularios para el control aduanero de personas, mercancías y medios de transporte serán aprobados por el Director General. 3. La lista actualizada de todos los formularios en vigor, así como los lugares en los que se pueden comprar deberán publicarse, siempre que sea posible, en el sitio web del Ministerio de Hacienda o de la Autoridad Aduanera.

La sección III (Asociación Pública Profesional Representativa de los Expedidores Oficiales), artículo 43 (Representatividad):

1. La Asociación Representativa de los Expedidores Oficiales es la asociación profesional que representa a los titulares de las respectivas tarjetas profesionales. 2. La afiliación a la Asociación es obligatoria y constituye una condición indispensable para que el expedidor oficial pueda ejercer su profesión. 3. Los estatutos de la Asociación, así como sus modificaciones, son aprobados mediante un instrumento adecuado y se publican en el Boletín Oficial.

Artículo 79 (Registros y pagos):

1. Es responsabilidad del Director General, a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial, aprobar: a) los documentos requeridos o establecidos por la legislación aduanera que podrán ser transmitidos a través de un registro electrónico estipulado; b) el pago requerido o establecido por la legislación aduanera que podrá realizarse en un formato electrónico estipulado; c) el sistema de información aduanera para el que se podrán transmitir dichos documentos, o mediante el cual se podrán efectuar esos pagos. 2. La transmisión electrónica de documentos o los pagos indicados en el párrafo anterior están sujetos a la autorización del Director General con arreglo al artículo 80, u a otras condiciones que puedan estipularse. 3. El Director General podrá decidir que los documentos o los pagos a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo sean transmitidos por vía electrónica, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer.

Artículo 179 (Mercancías cuya importación está prohibida):

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación especial y de los instrumentos de derecho internacional suscritos por el Gobierno de Timor-Leste, está prohibido importar determinadas mercancías que se definirán en una lista aprobada por el Ministro.

Artículo 180 (Mercancías cuya importación está sujeta a condiciones):

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación especial y de los instrumentos de derecho internacional suscritos por el Gobierno de Timor-Leste, solo las mercancías incluidas en una lista que será aprobada por el Ministro podrán ser importadas con sujeción a condiciones, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el instrumento jurídico correspondiente.

Con arreglo al artículo 197 (Concepto) del capítulo V (Almacén aduanero):

1. El procedimiento de depósito en aduana permitirá almacenar las mercancías importadas en un almacén aduanero, independientemente de la cantidad, el país o el lugar de origen y de destino de las mercancías, en régimen de suspensión de derechos y otros gravámenes de importación o sin someterlas a medidas de política comercial.

En esas circunstancias, el artículo 204 (Operaciones autorizadas) dispone lo siguiente:

2. Las operaciones habituales de manipulación de esas mercancías se deben especificar en una lista que será aprobada por el Ministro, a propuesta del Director General, y solo se llevarán a cabo previa autorización del Director de Aduanas, que determinará en qué condiciones.

Artículo 226 (Documentos que acompañan a los bienes sujetos al ISC) de la sección V (Circulación de bienes sujetos al impuesto selectivo al consumo (ISC) y control de la salida de las instalaciones portuarias):

1. Para la circulación de bienes sujetos al ISC que estén en régimen de suspensión se necesita un documento de acompañamiento cuyo modelo será aprobado por orden del Ministro.

Artículo 323 (Obligación de garantía) del capítulo IV (Garantía de la deuda aduanera):

1. En el marco de la aplicación de la legislación aduanera, si las autoridades aduaneras exigen una garantía para asegurar el pago de una deuda aduanera, dicha garantía siempre será otorgada por el deudor. 2. Cuando el deudor es un servicio de la administración pública, la garantía bancaria puede ser sustituida por una carta de compromiso de pago. 3. La lista de servicios de la administración pública autorizados a utilizar esa carta será aprobada por el Ministro.

ANEXO 11: Proyecto de ventanilla única nacional: actividades y calendario

Organismo	Tipo	Plazo	Acuerdo (memorando de entendimiento)	Situación
Primera fase				
TradeInvest Timor-Leste I.P.	Público	Febrero de 2021	Firmado	En curso de ejecución
Ministerio de Turismo, Comercio e Industria (Importación de Vehículos Comerciales - aprobación previa)	Público	Octubre de 2021 Enero de 2022	Protocolo de cooperación firmado	En curso de ejecución
Secretaría de Estado de Medio Ambiente - Departamento de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono	Público	Septiembre de 2021	Protocolo de cooperación firmado	En curso de ejecución
APORTIL (Autoridad Portuaria de Timor-Leste, I.P.) (Expedición de notas de salida)	Público	Octubre de 2021 Agosto de 2021	Protocolo de cooperación firmado	En curso de ejecución
Ministerio de Salud - Servicio Autónomo de Medicamentos y Equipos de Salud (SAMES) Dirección Nacional de Farmacia y Medicamentos Dirección Nacional de Licencias y Registro de Actividades relacionadas con la Salud	Público	Octubre de 2021 Enero de 2022 Agosto de 2022 Septiembre de 2022	Protocolo de cooperación firmado Se está negociando un protocolo de cooperación con ambas Direcciones.	En curso de ejecución Se ha desarrollado un módulo - Se ha completado la formación básica del personal sobre SIDUNEA Mundo. Se espera la confirmación del Ministerio de Salud para proseguir la formación del personal y planificar el despliegue. El desarrollo del módulo está en curso.
Dirección Nacional de Cuarentena y Bioseguridad, Ministerio de Agricultura y Pesca	Público	Octubre de 2021 Julio de 2022	Protocolo de cooperación firmado	En curso de ejecución
Dirección Nacional de Transporte Terrestre, Ministerio de Transporte y Comunicaciones - Aprobación de importación de vehículos comerciales y expedición de matrículas	Público	Junio de 2022 Marzo de 2022	Protocolo de cooperación firmado	En curso de ejecución
Autoridad Tributaria/ SERVE	Público	Septiembre de 2022	En elaboración	Está en curso la labor técnica con los consultores de sistemas.
Ministerio de Turismo, Comercio e Industria (automatización del proceso para la expedición de los certificados de origen)	Público	Agosto de 2022	En elaboración	Módulo desarrollado - A la espera del consentimiento del MTCI para los tests de aceptación por los usuarios

Organismo	Tipo	Plazo	Acuerdo (memorando de entendimiento)	Situación
Servicios de Inmigración de Timor-Leste	Público	Diciembre de 2022	En elaboración	La interfaz entre sistemas está pendiente de que se ultime el propio sistema del Departamento de Inmigración (sistema de información de gestión de fronteras, BMIS)
Nuevo Puerto de Timor (Bollore)	Asociación público-privada	Agosto de 2022	En elaboración	Discusión final con el Puerto de Timor sobre la conectividad del sistema y el almacenamiento e intercambio de datos
Bancos comerciales (BNU y BNCTL)	Privado	Diciembre de 2022	En curso	Sujeto a una discusión en curso con el BNCTL
Comunidad del comercio <ul style="list-style-type: none"> - Comerciantes - Agentes de aduanas - Transitarios - Transportistas 	Privado	En curso y caso por caso		Puesta en marcha para comerciantes, agentes de aduanas, transitarios y transportistas al mismo tiempo que para los correspondientes organismos gubernamentales
Interfaz con Indonesia	Público	Diciembre de 2022	En elaboración	La primera reunión con la DGCE-RI se celebró en diciembre de 2021. Actualmente las dos partes prevén celebrar una segunda reunión en agosto o septiembre.
Segunda fase				
Interfaz con un país de la CPLP (Brasil)	Público	2023	Pendiente	Pendiente
Interfaz con la ventanilla única de la CPLP	Público	2023	Pendiente	Pendiente
Pasarela entre los países de la CPLP y de la ASEAN	Público	2023	Pendiente	Pendiente

El proyecto de la ventanilla única nacional de Timor-Leste se divide en dos fases.

En la primera fase, participan nueve organismos gubernamentales, una empresa privada (Bollore - Nuevo Puerto de Timor) e Indonesia:

- TradeInvest Timor-Leste;
- Ministerio de Turismo, Comercio e Industria;
- Dirección Nacional de Transporte Terrestre;
- Departamento de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente;
- Ministerio de Salud;
- Autoridad de Cuarentena, Ministerio de Agricultura y Pesca;
- Autoridad Portuaria de Timor-Leste;
- Nuevo Puerto de Timor (sociedad Bollore);

- Autoridad Tributaria y Servicio de Registro y Verificación Empresarial, institución pública (SERVE);
- Servicios de Inmigración;
- Indonesia.

Esta fase también incluirá la participación de actores del sector privado (comerciantes, agentes, transitarios y transportistas), que son los destinatarios de la plataforma de la ventanilla única.

El proceso comprende: i) la creación de capacidad para los funcionarios públicos; ii) el examen y la optimización de los procedimientos internos de cada institución; y iii) la facilitación de infraestructura electrónica para cada organismo gubernamental en el marco de la plataforma SIDUNEA Mundo.

Del mismo modo, el Gobierno, por conducto de la Autoridad Aduanera, ha impartido sesiones para familiarizar a los nueve organismos y está examinando los procedimientos internos de cada uno de ellos. Además, durante esta fase, la Autoridad Aduanera tiene previsto colaborar con varias instituciones privadas, en particular bancos comerciales, con el ánimo de alcanzar acuerdos en un breve plazo.

El Gobierno planea vincular la ventanilla única nacional de Timor-Leste y el sistema piloto de intercambio de datos de Indonesia en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre el Comercio Transfronterizo entre Indonesia y Timor-Leste. A la larga, esto facilitará que se vincule a la ventanilla única de la ASEAN.

La segunda fase consistirá en el intercambio de datos con los países de la CPLP, la ventanilla única de la CPLP y la ventanilla única de la ASEAN. Se pretende vincular la ventanilla única nacional de Timor-Leste con la del Brasil, como Estado miembro de la CPLP, y ultimar la unión entre la ventanilla única de la ASEAN y la de la CPLP por medio de la pasarela nacional del TL-TSWS (sistema de ventanilla única comercial de Timor-Leste).

ANEXO 12: Categorías de compromisos en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC

Disposición	Título/ descripción	Categoría	Fecha indicativa para la aplicación (categorías B y C)	Fecha definitiva para la aplicación (categorías B y C)	Asistencia y apoyo para las actividades de creación de capacidad requeridos para la aplicación (categoría C)
Artículo 1 Publicación y disponibilidad de la información					
Artículo 1.1	Publicación	B	2023	2025	-
Artículo 1.2	Información disponible por medio de Internet	B	2023	2025	
Artículo 1.3	Servicios de información	B	2022	2024	-
Artículo 1.4	Notificación	B	2022	2024	-
Artículo 2 Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas					
Artículo 2.1	Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor	A	-	-	-
Artículo 2.2	Consultas	B	2022	2024	-
Artículo 3 Resoluciones anticipadas					
		A	-	-	-
Artículo 4 Procedimientos de recurso o de revisión					
		B	2023	2026	
Artículo 5 Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia					
Artículo 5.1	Notificaciones de controles o inspecciones reforzados	B	2022	2024	-
Artículo 5.2	Retención	B	2022	2024	-
Artículo 5.3	Procedimientos de prueba	A	-	-	-
Artículo 6 Disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones					
Artículo 6.1	Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas y de sanciones	A	-	-	-
Artículo 6.2	Disciplinas específicas en materia de derechos	A	-	-	-

Disposición	Título/ descripción	Categoría	Fecha indicativa para la aplicación (categorías B y C)	Fecha definitiva para la aplicación (categorías B y C)	Asistencia y apoyo para las actividades de creación de capacidad requeridos para la aplicación (categoría C)
	y cargas de tramitación aduanera establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas				
Artículo 6.3	Disciplinas en materia de sanciones	C	2023	2026	Recursos humanos y formación <ul style="list-style-type: none"> Actividades de creación de capacidad y formación dirigidas a los funcionarios de aduanas para el establecimiento y la aplicación de esta disposición
Artículo 7 Levante y despacho de las mercancías					
Artículo 7.1	Tramitación previa a la llegada	B	2022	2025	
Artículo 7.2	Pago electrónico	B	2022	2024	
Artículo 7.3	Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas	B	2022	2025	-
Artículo 7.4	Gestión de riesgo	B	2023	2026	
Artículo 7.5	Auditoría posterior al despacho de aduana	B	2023	2026	
Artículo 7.6	Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante	B	2022	2024	-
Artículo 7.7	Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados	B	2022	2025	
Artículo 7.8	Envíos urgentes	B	2023	2025	
Artículo 7.9	Mercancías perecederas	B	2022	2025	-
Artículo 8 Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera					
		B	2022	2024	
Artículo 9 Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero					
		B	2022	2024	-
Artículo 10 Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito					

Disposición	Título/ descripción	Categoría	Fecha indicativa para la aplicación (categorías B y C)	Fecha definitiva para la aplicación (categorías B y C)	Asistencia y apoyo para las actividades de creación de capacidad requeridos para la aplicación (categoría C)
Artículo 10.1	Formalidades y requisitos de documentación	B	2022	2024	
Artículo 10.2	Aceptación de copias	A	-	-	-
Artículo 10.3	Utilización de las normas internacionales	A	-	-	-
Artículo 10.4	Ventanilla única	B	2022	2024	
Artículo 10.5	Inspección previa a la expedición	A	-	-	-
Artículo 10.6	Recurso a agentes de aduanas	A	-	-	-
Artículo 10.7	Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes	A	-	-	-
Artículo 10.8	Mercancías rechazadas	A	-	-	-
Artículo 10.9	Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo	B	2022	2024	-
Artículo 11 Libertad de tránsito					
		B	2023	2024	-
Artículo 12 Cooperación aduanera					
		A	-	-	-

ANEXO 13: Lista de mercancías exentas de derechos de importación

- a) Mercancías que acompañan a una persona que llega a Timor-Leste procedente de otro territorio:
 - i) doscientos cigarrillos y 2,5 litros de bebidas sujetas a impuestos especiales al consumo por persona;
 - ii) mercancías por un valor máximo de 300 dólares EE.UU., de naturaleza no comercial y destinadas exclusivamente al uso personal o disfrute del viajero, o mercancías destinadas a regalo cuya naturaleza y cantidad indiquen que no se importan o no están destinadas a ser importadas con fines comerciales;
 - iii) mercancías de naturaleza no comercial, con excepción de los artículos de joyería, destinadas exclusivamente al uso personal o disfrute del viajero y que el viajero transporta en su equipaje o lleva encima al entrar en Timor-Leste;
 - iv) enseres domésticos que acompañan a antiguos residentes de Timor-Leste que regresan a Timor-Leste para establecer su residencia permanente.
- b) Importaciones de los tipos siguientes:
 - i) exentas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y la Convención sobre Relaciones Consulares, de 1963;
 - ii) exentas en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas;
 - iii) exentas en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados.
- c) Mercancías reimportadas en la misma condición en que se exportaron.
- d) Mercancías, excepto el alcohol y el tabaco, importadas por organizaciones de beneficencia registradas de conformidad con cualquier ley promulgada a tal efecto en Timor-Leste, si dichas mercancías se van a utilizar para fines benéficos de asistencia humanitaria y socorro, educación o asistencia sanitaria.
- e) Mercancías para su admisión temporal, si el importador ha aportado una garantía que cubra los derechos de importación de la manera prescrita.
- f) Mercancías procedentes de los países vecinos y destinadas al consumo del personal internacional de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) o de los miembros de las fuerzas de pacificación, siempre que las mercancías se comercialicen de conformidad con las normas de venta prescritas.
- g) Fórmulas para lactantes concebidas especialmente para lactantes de menos de un (1) año de edad que, tras su preparación, se consumen en forma líquida y proporcionan los beneficios para la salud que normalmente aportaría la leche materna.
- h) Tampones y toallas sanitarias.
- i) Mercancías no descritas en los párrafos anteriores:
 - i) si se trata de mercancías importadas en Timor-Leste, con excepción de los artículos personales que acompañan a un viajero;
 - ii) si el derecho de importación que se aplicaría de no existir el presente párrafo es inferior o igual a 10 dólares EE.UU.

- j) Importaciones realizadas por el Estado u otras personas jurídicas públicas de armas y municiones para la Policía Nacional de Timor-Leste, la Policía Científica para las Investigaciones Penales y las Fuerzas de Defensa de Timor-Leste.
- k) Importaciones de bienes donados o utilizados en la producción o la construcción de bienes donados al Estado por otros Estados, por personas jurídicas de derecho público de otros Estados o por organizaciones internacionales.

**ANEXO 14: Derechos y cargas por los servicios prestados
previstos en el Código Aduanero**

Artículo del Decreto Ley Nº 14/2017	Nombre de la carga	Cuantía (\$EE.UU.)
Artículo 101	Sanción administrativa por una declaración en aduana incorrecta que da lugar a un pago insuficiente	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 136.2	Multa administrativa por la no presentación de las mercancías a las autoridades aduaneras	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 136.3	Multa administrativa a la persona responsable del medio de transporte que incumple la obligación de presentar las mercancías a las autoridades aduaneras en casos en los que faltan mercancías	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 136.4	Multa administrativa a la persona responsable del medio de transporte cuando el volumen descargado supera la cantidad notificada a las autoridades aduaneras	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 139.4	Multa administrativa a la persona que retira mercancías de las zonas bajo supervisión aduanera antes de su despacho para la libre circulación	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 145.5	Multa administrativa a la persona que no informa a las autoridades aduaneras sobre mercancías de naturaleza comercial	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 187.1	Tasa de importación temporal	Por cada mes o parte de mes, el 3% del derecho íntegro
Artículo 188.5	Multa administrativa por la no reexportación, en el plazo de tiempo prescrito, de las mercancías importadas temporalmente	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 201.5	Multa administrativa por retirar las mercancías del depósito antes de recibir autorización de las autoridades aduaneras	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 201.6	Multa administrativa por no notificar a las autoridades aduaneras la cantidad exacta de las mercancías en depósito	No se especifica en el Decreto Ley
Artículo 202.3	Aportación de una garantía financiera que cubra los derechos de aduana suspendidos durante el almacenamiento en depósito	El 50% de los derechos El 20%-30% de los impuestos sobre el consumo aplicables
Artículo 273.2	Tasa de despacho de mercancías en el caso de que no se hayan cumplido las formalidades aduaneras en el plazo de tiempo exigido y las mercancías superen los plazos legales de almacenamiento	La cuantía de los derechos de aduana y otros derechos aplicables más una tasa del 5% del valor de las mercancías
Artículo 315.7	Interés compensatorio cuando la deuda se prolongue o la liquidación se demore por motivos atribuibles al declarante	4%
Artículo 320.5	Interés por el pago atrasado de derechos y cargas	Por cada mes o parte de mes de atraso, el 3% de la deuda total
Artículo 377.1	Por la llegada, el control y la salida de cada buque que desarrolla actividades comerciales de transporte de mercancías o pasajeros	100 \$EE.UU. por buque o 200* \$EE.UU. por buque (* domingos, festivos y noches)
Artículo 377.2	Por visitas a bordo, sellado, verificaciones	50 \$EE.UU. o 100* \$EE.UU. por el trámite de cada documento administrativo
Artículo 378.1	Por la llegada, el control y la salida de cada avión que desarrolla actividades comerciales de transporte de mercancías o pasajeros	100 \$EE.UU. o 200* \$EE.UU. por avión
Artículo 378.2	Por visitas a bordo, sellado, verificaciones	50 \$EE.UU. o 100 \$EE.UU. por el trámite de cada documento administrativo
Artículo 379.1	Por la entrada y el despacho fiscal de las mercancías de cada vehículo de transporte comercial terrestre	25 \$EE.UU. o 50* \$EE.UU. por vehículo en el puesto aduanero 50 \$EE.UU. o 100* \$EE.UU. por vehículo en otras ubicaciones
Artículo 380.1	Entrada y despacho de equipaje no acompañado	10 \$EE.UU. o 20* \$EE.UU.
Artículo 380.2	Entrada y despacho fiscal de automóviles	25 \$EE.UU. o 50* \$EE.UU.
Artículo 380.3	Entrada y despacho fiscal de bicicletas y motocicletas	15 \$EE.UU. o 30* \$EE.UU.
Artículo 381.1	Por cada operación de desnaturalización, coloración, marcado fiscal o destrucción de mercancías, o asistencia en esas actividades	10 \$EE.UU. o 20* \$EE.UU.

Artículo del Decreto Ley N° 14/2017	Nombre de la carga	Cuantía (\$EE.UU.)
Artículo 382.1	Por servicios solicitados por los contribuyentes que conlleven el desplazamiento de empleados fuera de las instalaciones aduaneras	Desplazamientos de hasta 40 km: 25 \$EE.UU. Desplazamientos de hasta 100 km: 50 \$EE.UU. Desplazamientos de más de 100 km: 75 \$EE.UU. Pernoctación: 30 \$EE.UU.
Artículo 383	Tasa por pago insuficiente si la verificación definitiva da como resultado un derecho de más de 50 \$EE.UU.	10 \$EE.UU. por declaración

Nota: Las multas o sanciones administrativas descritas en los artículos 101, 136, 139, 145 y 188 no se especifican en la Ley. La cuantía debe definirse en virtud de otros reglamentos.

ANEXO 15: Plan de Acción para la redacción de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley de Impuestos y Derechos (revisión)

En sus esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos, el Gobierno de Timor-Leste está redactando y revisando tres leyes, a saber, la Ley de Impuestos y Derechos (revisión), el Código de Procedimiento Tributario y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los plazos previstos para la elaboración y aplicación de las leyes son los siguientes:

i. Ley de Impuestos y Derechos revisada

Medidas necesarias	Fecha de conclusión prevista	Situación
• Revisión del proyecto de ley revisado por el Ministerio de Hacienda	1 ^{er} semestre de 2022	En curso
• Recopilación de opiniones, observaciones y reacciones de terceros sobre la ley revisada y celebración de consultas y debates públicos con las partes interesadas de los sectores privado y público	1 ^{er} semestre de 2022	En curso
• Debate y aprobación por el Consejo de Ministros	1 ^{er} semestre de 2023	Pendiente
• Debate y aprobación por el Parlamento Nacional	2 ^o semestre de 2023	Pendiente
• Promulgación por el Presidente	2 ^o semestre de 2023	Pendiente
• Sensibilización pública sobre los cambios realizados y la introducción de nuevos artículos	2 ^o semestre de 2023	Pendiente
• Aplicación efectiva	1 ^{er} semestre de 2024	Pendiente

ii. Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

Medidas necesarias	Fecha de conclusión prevista	Situación
• Elaboración del proyecto de documento de política para la Ley del IVA	Diciembre de 2015	Finalizado
• Recopilación de opiniones, observaciones y reacciones de terceros sobre la ley revisada y celebración de consultas y debates públicos con las partes interesadas de los sectores privado y público	2 ^o semestre de 2023	En curso
• Debate y aprobación por el Consejo de Ministros	2 ^o semestre de 2023	Pendiente
• Debate y aprobación por el Parlamento Nacional	1 ^{er} semestre de 2024	Pendiente
• Promulgación por el Presidente	2 ^o semestre de 2024	Pendiente
• Sensibilización pública	2 ^o semestre de 2024	Pendiente
• Aplicación efectiva	1 ^{er} semestre de 2025	Pendiente

**ANEXO 16: Plan de Acción para la aplicación del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC**

Actividad/Descripción	Medidas necesarias	Plazo para la aplicación
Establecimiento de organismos nacionales de normalización, con inclusión de un Servicio de Información sobre OTC, y mejora de los marcos jurídicos y reglamentarios nacionales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de un organismo nacional de normalización (IQTL, IP); 2. Obtención de asistencia técnica de la ONUDI y de otros asociados para el desarrollo; 3. Establecimiento de un Servicio de Información sobre OTC; 4. Elaboración de políticas, estrategias y marcos jurídicos y reglamentarios nacionales sobre las medidas relacionadas con los OTC, así como con respecto a los procedimientos para las consultas públicas. 	2023
Creación de capacidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obtención de asistencia técnica de la ONUDI y de otros asociados para el desarrollo; 2. Formación de funcionarios clave de los ministerios/organismos competentes, incluidos los departamentos dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura (MALFF), el Ministerio de Comercio e Industria (MCI), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Secretario de Estado para el Medio Ambiente, la AIFAESA, el IQTL, la Autoridad Aduanera y el sector privado; 3. Asistencia a los organismos nacionales de normalización para su participación en la labor internacional de normalización y a los consumidores para su participación en las actividades realizadas en esta esfera, incluida la participación de Timor-Leste en la CEI, la ISO, la OMSA, el Codex Alimentarius, la CIPF, la Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico y la OIML; 4. Fortalecimiento de las capacidades de pruebas de productos (laboratorios de microbiología, química, textiles, cuero, electricidad) con miras al reconocimiento internacional de sus servicios para la prueba de conformidad con las exigencias de los compradores extranjeros; 5. Fortalecimiento de las capacidades de metrología (calibración), normalización y acreditación con miras al reconocimiento internacional de sus servicios para la calibración de equipos de pruebas de productos nacionales; 6. Posible inclusión de la recomendación formulada por Nueva Zelanda de estrechar los lazos con organismos regionales especializados en la esfera de la normalización y la acreditación (APAC, APMP, APLMF y PASC). 	2025

Actividad/Descripción	Medidas necesarias	Plazo para la aplicación
Armonización regional de normas y sistemas de evaluación de la conformidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de proyectos de ley de metrología, de normas y de sistemas y procedimientos de evaluación de la conformidad; 2. Examen técnico de los proyectos de ley; 3. Consultas públicas; 4. Aprobación por el Consejo de Ministros; 5. Aprobación por el Parlamento Nacional; 6. Promulgación por el Presidente de la República; 7. Consultas públicas informativas; y 8. Aplicación efectiva 	2023
Establecimiento y mejora de sistemas y servicios de inspección y certificación para la evaluación de la conformidad con arreglo a normas relativas a productos y a sistemas (incluidas las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), con mayor énfasis en las asociaciones entre el sector público y el privado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de procedimientos operativos especializados internos sobre las directrices aplicables a los sistemas de inspección y certificación; 2. Establecimiento de un laboratorio normalizado para la inspección; 3. Consultas públicas informativas, centradas en el sector privado; y 4. Aplicación efectiva 	2023
Creación de sistemas de acreditación nacionales y/o regionales para la acreditación de laboratorios nacionales, organismos de inspección, órganos de certificación, etc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de una Ley del Sistema Nacional de Calidad; 2. Establecimiento de criterios de acreditación; 3. Establecimiento de una norma y una reglamentación de garantía y control de la calidad de las mercancías; 4. Consulta pública informativa sobre la Ley del Sistema Nacional de Calidad; 5. Establecimiento de un organismo único de acreditación; 6. Aplicación efectiva 	2024-2025
Actividades de divulgación dirigidas a organismos regionales especializados en el ámbito de la normalización y la acreditación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC); 2. Cooperación para la Acreditación de Asia y el Pacífico (APAC); 3. Foro Internacional de Acreditación (IAF); 4. Programa de Metrología de Asia y el Pacífico (APMP); 5. Foro de Metrología Legal de Asia y el Pacífico (APLMF); 6. Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC) 	2025
Aplicación plena del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC		1 de enero de 2026

ANEXO 17: Especies invasoras en Timor-Leste

La invasión de *Chromolaena odorata* (maleza de Siam) en tierras de cultivo, pastizales, tierras desbrozadas y bosques degradados es evidente en Timor-Leste y es dañina tanto para los cultivos como para los animales. Su rápida capacidad de propagación aumenta el riesgo de incendios en matorrales. Se han señalado otras posibles especies invasoras, entre ellas las siguientes: *Lantana gorse*, *Catharanthus roseus*, *Jatropha gossypifolia*, *Ziziphus mauritiana* y *Calotropis gigantea*.

La Base de Datos Mundial de Especies Invasoras recoge las siguientes especies invasoras en Timor-Leste¹:

Chromolaena odorata, *Leucaena leucocephala*, *Thevetia peruviana*, *Mimosa diplotricha*, *Cyprinus carpio*, *Lutjanus kasmira*, *Gallus*, *Porphyrio*, *Cervus timorensis russa* y *Varanus indicus*. Diferentes estudios señalan también el hábitat, la distribución geográfica y el grado de invasión de estas especies.

Véase el siguiente cuadro, que figura en el anexo II del Decreto Ley y recoge la Lista Provisional de Especies Invasoras Prohibidas, elaborada a partir de la lista de plantas y animales incluida en la Estrategia y Plan de Acción Nacionales sobre Biodiversidad y de las especies invasoras señaladas en el documento del portal de la Base de Datos Mundial de Especies Invasoras (GISD):

Lista Provisional de Especies Invasoras Prohibidas

Denominación taxonómica	Nombre(s) común(es) en español
<i>Bufo marinus</i>	Sapo de caña
<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	Sapo común asiático
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa
<i>Aedes aegypti</i>	Mosquito de la fiebre amarilla
<i>Paratrechina longicornis</i>	Hormiga loca amarilla
<i>Varanus indicus</i>	Varano del manglar
<i>Jatropha gossypifolia</i>	-
<i>Sida acuta</i>	Malva del Brasil
<i>Lantana camara</i>	-
<i>Tithonia diversifolia</i>	-
<i>Parkinsonia sp.</i>	Palo verde
<i>Prosopis pallida</i>	Algarrobo pálido
<i>Ziziphus mauritiana</i>	Ramnáceas
<i>Chromolaena odorata</i>	Maleza de Siam
<i>Mimosa diplotricha</i>	Mimosa gigante
<i>Leucaena leucocephala</i>	-
<i>Thevetia peruviana</i>	Adelfa amarilla

¹ Especies invasoras en Timor-Leste. Base de Datos Mundial de Especies Invasoras: [http://issg.org/data/base/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Timor-Leste%20\(East%20Timor\)&ri=18888&hci=-1&ei=-1&fr=1&sts=&lang=EN](http://issg.org/data/base/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Timor-Leste%20(East%20Timor)&ri=18888&hci=-1&ei=-1&fr=1&sts=&lang=EN).

ANEXO 18: Plan de Acción para aplicar el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Estrategia 1 Establecer un sistema centralizado y un marco reglamentario de control de los alimentos: 1. Establecer nuevos ministerios, o fortalecer los ministerios existentes, con responsabilidades relacionadas con los alimentos; 2. Combinar y/o centralizar las responsabilidades de control de los alimentos entre el MAF, el MoH, el MTCI y la AIFAESA; 3. Aclarar las responsabilidades de control de los alimentos entre los organismos gubernamentales; y 4. Crear nuevas infraestructuras o fortalecer las infraestructuras existentes.	1.1. Institucionalización del control de los alimentos - Establecer un sistema de control de los alimentos funcional que tenga a su cargo y coordine las actividades de control de los alimentos en el país, y cuente con la capacidad necesaria para realizar lo siguiente, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales: <ul style="list-style-type: none"> evaluación del riesgo sanitario y fitosanitario; inspección y certificación de cuarentena y bioseguridad; recolección y análisis de muestras por parte de un laboratorio nacional de alimentos moderno, acreditado y recientemente establecido; elaboración de medidas de control sanitario y fitosanitario; elaboración de políticas y de legislación en materia sanitaria y fitosanitaria; establecimiento de actividades de observancia, seguimiento y evaluación pertinentes y adecuadas; desarrollo de conocimientos científicos y técnicos y de las capacidades de formación como prioridad fundamental. - Dos opciones en función de la voluntad política:	- Se ha establecido y puesto en marcha un nuevo sistema de control de los alimentos coordinado a nivel nacional, basado en un modelo con un solo organismo o un modelo interinstitucional y respaldado por legislación adecuada.	2023-2025
	1. Establecer un nuevo modelo con un único organismo de control de los alimentos en un solo ministerio; o 2. Establecer un modelo de control de los alimentos interinstitucional sirviéndose de los ministerios existentes: MoH, MALFF, MCI, AIFAESA.	- Se ha establecido y puesto en marcha un modelo de control de los alimentos integrado por uno o por varios organismos, cuyas responsabilidades están claramente establecidas por ley.	2023-2024
	- Aclarar la responsabilidad de cada ministerio en el marco del modelo interinstitucional (por ejemplo, el MoH, el MALFF, el MCI y la AIFAESA) y eliminar las responsabilidades y actividades de control de los alimentos de los demás ministerios existentes (Ministerio de Pesca (MoF), Ministerio de Medio Ambiente (MoE), etc.) para evitar confusiones y fomentar la colaboración.		2023-2024
	- Promover la colaboración y la cooperación entre las Direcciones clave, como la Dirección de Cuarentena y Bioseguridad y la Dirección de Servicios Veterinarios. Designar a Directores con experiencia y conocimientos técnicos. Solicitar la colaboración, el intercambio de		

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Establecer un mecanismo nacional para la gestión de todos los aspectos del control de los alimentos y la difusión de la información	<p>recursos y la organización de actividades de formación y de mejora de las competencias.</p> <p>- Establecer una Junta Nacional de Gestión del Control de los Alimentos o un Comité Nacional de Control de los Alimentos, bajo la dirección de un Presidente designado y con amplia experiencia, que cuente con el apoyo de una pequeña secretaría para coordinar y supervisar la aplicación de las actividades de control de los alimentos entre los organismos gubernamentales.</p> <p>El Comité o la Junta Nacional de Gestión debería ser el mecanismo nacional encargado de publicar y notificar a todas las organizaciones pertinentes, los interlocutores comerciales y los Gobiernos extranjeros toda la información pertinente sobre las MSF, los procedimientos de cuarentena e inspección, los niveles de tolerancia de plaguicidas y las normas sobre inocuidad de los alimentos que se hayan adoptado o se proyecte adoptar.</p> <p>Este mecanismo debería incluir un servicio nacional de información sobre las MSF en el marco de la OMC y de la oficina del Codex, la ASEAN, la OMSA y la CIPF.</p>	<p>- Se ha establecido una Junta Nacional de Gestión del Control de los Alimentos o un Comité Nacional de Control de los Alimentos. Se ha establecido la Presidencia, la Secretaría y la composición y se celebran y documentan reuniones periódicas.</p> <p>- Se elaboran y distribuyen informes de las reuniones;</p> <p>- Informes periódicos sobre la consecución de los objetivos establecidos de los programas.</p>	2023-2024
- Comités técnicos	<p>- Establecer comités técnicos nacionales dependientes de la Junta Nacional de Gestión del Control de los Alimentos para coordinar y supervisar el desarrollo y la ejecución de las actividades relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias, incluida la elaboración de legislación pertinente, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el Comité de Inocuidad de los Alimentos (sanidad animal y enfermedades animales, salud humana); • el Comité de Plagas y Enfermedades Vegetales; • el Comité de Observancia, Seguimiento y Evaluación. 	<p>- Se han establecido y puesto en marcha los comités técnicos nacionales;</p> <p>- Se ha aprobado y puesto en vigor la legislación de apoyo;</p> <p>- Se han elaborado y aplicado medidas en materia de inocuidad de los alimentos y seguridad fitosanitaria y zoonosaria.</p> <p>- Plan nacional de viabilidad financiera</p>	2023-2024 2024-2025
- Laboratorio de inocuidad de los alimentos	<p>- Establecer un laboratorio nacional de inocuidad de los alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a corto plazo, reunir los laboratorios existentes de inocuidad de los alimentos (MoH), cuarentena y bioseguridad (MALFF) y protección fitosanitaria (MALFF) en una nueva instalación como inicio del establecimiento del nuevo laboratorio nacional de inocuidad de los alimentos; • a corto plazo, garantizar el mantenimiento de la capacidad de laboratorio existente y crear nuevas capacidades para los 	<p>- Personal calificado con formación en ciencias aplicadas, química, microbiología y biología;</p>	2023 2023-2024

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
- Instalaciones de cuarentena e inspección	análisis relacionados con la protección de la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales;	- Registros e informes de las formaciones sobre la garantía de la calidad de los laboratorios y los métodos de análisis;	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> organizar talleres de formación para el personal de laboratorio con el apoyo de proveedores externos, como Gobiernos extranjeros (por ejemplo, la UE, los Estados Unidos, Australia), ONG, el Banco Mundial, la OMS/FAO, la ASEAN y el APEC; 	- Se ha completado la documentación sobre la garantía de la calidad.	2024-2025
	<ul style="list-style-type: none"> a medio plazo, establecer un nuevo laboratorio nacional de referencia para los alimentos en unas nuevas instalaciones específicas; 	- Se ha impartido formación especializada sobre los análisis microbiológicos y químicos.	2023-2024
	<ul style="list-style-type: none"> adquirir la infraestructura, el equipo y el personal capacitado suficientes para que el nuevo laboratorio pueda facilitar el cumplimiento de todas las prescripciones del país en relación con la alimentación humana, la sanidad y la seguridad de los animales y la preservación de los vegetales, y trabajar en pos de las mejores prácticas internacionales y la acreditación: financiación interna (Estado) y externa (Gobiernos extranjeros, ONG, Banco Mundial); 	- Acreditación ISO 17025 para determinados parámetros microbiológicos y químicos;	2023-2026
	<ul style="list-style-type: none"> impartir formación especializada y práctica sobre los parámetros microbiológicos y químicos en función de las necesidades específicas del laboratorio; 	- Participación en las comparaciones entre laboratorios;	
- Centros de formación del personal	<ul style="list-style-type: none"> obtener la acreditación ISO 17025 para los parámetros microbiológicos y químicos; 	- Informes de los laboratorios;	
	<ul style="list-style-type: none"> prestar servicios al sector privado. 	- Observaciones formuladas por los "usuarios" de los servicios de laboratorio.	2023-2024
	- Establecer instalaciones específicas para la cuarentena y la inspección y los servicios veterinarios;	- Se han asignado y puesto en funcionamiento el espacio y las instalaciones específicas y apropiadas, con una dotación de personal adecuada, para las Direcciones de Cuarentena e Inspección y de Servicios Veterinarios.	2023-2024
Elaborar normas y códigos de buenas prácticas (o adoptar normas y códigos de buenas prácticas internacionales)	- Ubicar en un mismo lugar la Dirección de Cuarentena e Inspección y la Dirección de Servicios Veterinarios;	Se han establecido instalaciones adecuadas, que reciben apoyo permanente.	2023-2024
	- Establecer nuevas instalaciones o prever servicios de asistencia y apoyo adecuados para las instalaciones existentes de formación del personal, combinando la financiación y los recursos del Estado y de los proveedores externos.		
Elaborar normas y códigos de buenas prácticas (o adoptar normas y códigos de buenas prácticas internacionales)	1.2. Elaborar una nueva legislación adecuada y aplicable, o reforzar la existente, para apoyar las MSF, con inclusión de un Código de Normas Alimentarias que abarque la inocuidad de los alimentos, las plagas y enfermedades de las plantas y la sanidad animal, la cuarentena, la inspección y la certificación, la observancia, el seguimiento y la evaluación.		
	- Examinar el marco jurídico actual y formular un marco general de control de los alimentos bajo la dirección de la Junta Nacional de Control de los Alimentos y los comités técnicos que permita debatir,	- Se ha elaborado el marco de control de alimentos para apoyar el sistema de control de los alimentos coordinado a nivel nacional;	2023-2024

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
adecuados) en toda la cadena agroalimentaria	adoptar y formular recomendaciones sobre la aprobación de normas relativas a la preservación de los vegetales, la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos;		
Ley de Control de los Alimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar una Ley de Control de los Alimentos de alcance general; - Elaborar un Código de Normas Alimentarias (similar al Código de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia (ANZFSC)) que contenga todos los reglamentos sobre las esferas prioritarias para el Gobierno: aditivos alimentarios, contaminantes y sustancias tóxicas naturales, límites máximos de residuos (LMR) de productos químicos de uso agrícola o veterinario (insumos agroalimentarios, como los plaguicidas), etiquetado de los alimentos, normas especiales (por ejemplo, preparados para lactantes, alimentos modificados genéticamente, etc.); - Utilizar los comités técnicos establecidos (véase <i>supra</i>) para examinar y elaborar normas sobre la preservación de los vegetales, la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos y lograr que sean aprobadas por el Gobierno de Timor-Leste. - Elaborar (o preferiblemente adoptar manuales existentes a nivel internacional) sobre: <ul style="list-style-type: none"> - buenas prácticas de higiene; - buenas prácticas agrícolas; - buenas prácticas ganaderas; - buenas prácticas acuícolas; - buenas prácticas de fabricación; - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) - Impartir talleres de formación para los usuarios de los manuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha adoptado una Ley de Control de los Alimentos de alcance general. - Nuevo Código de Normas Alimentarias que incluye reglamentos sobre las esferas prioritarias: aditivos alimentarios, contaminantes y sustancias tóxicas naturales, LMR de productos químicos de uso agrícola o veterinario (insumos agroalimentarios, como los plaguicidas), etiquetado de los alimentos, normas alimentarias especiales (por ejemplo, preparados para lactantes, alimentos modificados genéticamente, etc.); Se han establecido y puesto en marcha comités técnicos que se ocupan de la preservación de los vegetales, la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos; Se han adoptado manuales, que se distribuyen a los usuarios. Se ha impartido formación. 	<ul style="list-style-type: none"> 2023-2024 2023-2025 2023-2024 2023-2024 2023-2024

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Estrategia 2 Crear capacidad científica y técnica para el análisis del riesgo (evaluación del riesgo, gestión del riesgo, comunicación del riesgo) y la elaboración de normas	2.1. Establecer un mecanismo para impartir formación científica y técnica al personal del Gobierno de Timor-Leste que abarque todos los aspectos de la labor relacionada con las MSF		
	- Establecer una nueva autoridad o nombrar a un ministerio o una autoridad existente responsable de velar por que el personal competente del Gobierno cuente con la debida formación sobre todos los aspectos del control de los alimentos en toda la cadena agroalimentaria (evaluación del riesgo, cuarentena, inspección y certificación, seguimiento y vigilancia, análisis de laboratorio, etc.).	Se ha nombrado a un ministerio o una autoridad responsable de la formación del personal del Gobierno sobre el sistema del control de los alimentos;	2023-2024
	- Establecer centros de formación del personal (véase el punto "Crear nuevas infraestructuras o fortalecer las infraestructuras existentes" <i>supra</i>);	Se han establecido y puesto en funcionamiento centros de formación del personal;	2023-2025
	- Identificar proveedores de formación externos adecuados y recurrir a ellos, por ejemplo, Gobiernos extranjeros y ONG (el PNUD, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, la FAO y la OMS).	Se han determinado los recursos necesarios y contratado a proveedores externos.	2023-2024
	2.2. Participación de Timor-Leste en los foros internacionales con recursos suficientes		
	- Adhesión de Timor-Leste a la Comisión del Codex Alimentarius. Garantizar la participación a las reuniones y establecer un punto de contacto nacional del Codex dependiente de la Junta Nacional (Nota: Los puntos de contacto del Codex, la OMC, el Servicio de Información MSF, la OIE, la CIPF y la ASEAN ubicados en un mismo lugar);	- Miembro del Codex ²	2023
	- Adhesión de Timor-Leste a la CIPF y participación activa;	- Miembro de la CIPF ³	2023
	- Pasar a formar parte de la ASEAN y de la Organización Mundial del Comercio y velar por que se disponga de los recursos suficientes para participar activamente;	- Miembro de la ASEAN y la OMC ⁴	2023
	- Fomentar la participación de Timor-Leste en los comités internacionales (Comisión del Codex Alimentarius, CIPF, OIE e INFOSAN).	- Participación documentada de Timor-Leste en los comités internacionales	2024, 2025

² Timor-Leste se convirtió en el 188º miembro de la Comisión del Codex Alimentarius el 21 de febrero de 2018.

³ Ya tiene la condición de observador.

⁴ Ya se ha iniciado el proceso de adhesión.

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Crear capacidad científica y técnica para el análisis del riesgo (evaluación del riesgo, gestión del riesgo, comunicación del riesgo) y la elaboración de normas	2.3. Establecer un servicio nacional de información sobre MSF y puntos de contacto del Codex, la ASEAN, la OIE y la CIPF, que estén ubicados en un mismo lugar		
	- Poner en marcha en un mismo lugar un servicio de información sobre MSF, el Codex, la OMSA y la CIPF para cumplir las obligaciones establecidas en el Acuerdo MSF de la OMC;	- Se ha establecido el servicio de información sobre MSF; - Se han establecido los servicios de información del Codex, la OIE, la CIPF y la ASEAN; - Se han ubicado en un mismo lugar todos los servicios de información, con una única Secretaría dependiente de la Junta Nacional de Gestión;	2023-2024
	- Impartir formación al personal sobre los principios de análisis de riesgos aplicados por el Comité del Codex, los procedimientos de la OMSA y la CIPF y los Acuerdos OTC y MSF;	- Se ha impartido formación al personal sobre el análisis del riesgo, los Acuerdos MSF y OTC y los procedimientos y las normas del Codex; - Registros de formación del personal calificado.	2023-2024
	- Elaborar procedimientos operativos normalizados para tramitar las consultas nacionales e internacionales sobre los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de certificación; - Difundir entre los participantes en las cadenas de valor información sobre las notificaciones de MSF presentadas a la OMC, las normas del Codex y las cuestiones relativas a la OMSA y la CIPF.	- Se han elaborado procedimientos operativos normalizados en materia de MSF y OTC para tramitar las consultas nacionales e internacionales. - Se han elaborado y difundido fichas informativas, folletos y guías entre los actores de las cadenas de valor.	2023-2024 2023-2024
<u>Estrategia 3</u>	3.1. Mecanismos para evitar riesgos en toda la cadena alimentaria; cuestiones sanitarias y fitosanitarias		
Recopilar datos sanitarios y fitosanitarios y realizar evaluaciones del riesgo y formular determinaciones en materia de regionalización para evitar riesgos en toda la cadena alimentaria Utilizar los datos sobre cuestiones fitosanitarias que ya se hayan recopilado, y colaborar en las iniciativas propuestas y los planes de acción ya previstos por diversos Gobiernos extranjeros y ONG, como el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia (DAFF) y la	- Recopilar datos pertinentes sobre los riesgos sanitarios y fitosanitarios en toda la cadena alimentaria, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • plagas y enfermedades de las plantas • sanidad animal • inocuidad de los alimentos - Utilizar los datos recopilados y verificados; establecer una metodología de evaluación de riesgos compatible con las normas de la OMC basada en los principios establecidos por el Codex, la OMSA y la CIPF; y realizar evaluaciones del riesgo con miras a la preservación de los vegetales y la protección de la salud de las personas y los animales;	- Se ha puesto en marcha la recopilación de datos relativos a las esferas sanitarias y fitosanitarias de las plagas y enfermedades de las plantas y las enfermedades animales. - Se han comprobado y utilizado los datos para realizar evaluaciones del riesgo; se ha establecido una metodología de evaluación de riesgos.	2023-2025 2023-2025

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial Riesgos fitosanitarios	<p>- En lo que respecta a las plagas y enfermedades de las plantas, identificar las que <u>podrían entrar</u> en el país, su modo de radicación o propagación y las posibles consecuencias económicas y biológicas. Evaluar la probabilidad de entrada, y de establecimiento o radicación de esas plagas o enfermedades.</p> <p>- En cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, se debería dar prioridad a la adopción de las siguientes medidas inmediatas:</p> <p>1. Por lo que se refiere a las importaciones, adherirse a cualquier plan de protección fitosanitaria existente que considere el Gobierno, y participar en él. Las prioridades a corto y medio plazo deberían consistir en realizar los más de 500 análisis del riesgo de las importaciones necesarios para evaluar el riesgo que representan las importaciones en Timor-Leste, y esta labor requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comparar las listas de plagas y enfermedades presentes en los países exportadores con las presentes en Timor-Leste; • determinar las plagas vinculadas con el producto importado; • determinar las plagas que representan un riesgo inaceptable; • gestionar los riesgos imponiendo condiciones, tratamientos, certificación e inspección de los productos importados para garantizar el cumplimiento, rechazando el comercio de esos productos y aplicando medidas de mitigación del riesgo, como la cuarentena posterior a la entrada; • fortalecer los procesos de inspección y crear una base de datos central para clasificar las empresas y los alimentos en función del riesgo; • formular determinaciones en materia de regionalización basadas en la evaluación de las características fitosanitarias de una región, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de programas de erradicación o de control, y los criterios o directrices adecuados elaborados por las organizaciones internacionales competentes. 	<p>- Se han identificado y clasificado las plagas y las enfermedades de las plantas.</p> <p>- Se han evaluado las consecuencias.</p> <p>- Se negocian las colaboraciones.</p> <p>- Se han empezado los análisis del riesgo de las importaciones.</p>	2023-2025
			2023-2025
			2023-2025
			2024
			2023-2025
			2023-2025
			2023-2025
			2023-2025
			2024-2025

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Riesgos sanitarios	<p>2. Por lo que se refiere a las exportaciones, trabajar para facilitar las exportaciones de productos vegetales de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> participando en los análisis del riesgo de las importaciones de los países importadores facilitando listas de las plagas presentes en Timor-Leste; negociando las condiciones de importación con los países importadores; garantizando el cumplimiento de las condiciones de exportación a los países importadores, y elaborando una certificación adecuada para las exportaciones de 11 productos vegetales (café arábica y robusta, nueces de la India, cocos, tamarindos, judías de la especie Vigna mungo (frijol mungo), cacahuets (maníes), maíz, clavo, vainilla y madera de sándalo) a los 23 países a los que Timor-Leste exporta estos productos básicos; aumentando la capacidad técnica necesaria para evaluar los riesgos relacionados con el comercio de exportación, entre otras cosas: <ol style="list-style-type: none"> elaborando una lista de las plagas y enfermedades presentes en Timor-Leste y decidir qué riesgos se deben gestionar; elaborando medidas adecuadas para gestionar estos riesgos; confirmando que las medidas de gestión del riesgo impiden de manera eficaz la entrada de organismos viables (por ejemplo, inspeccionando las importaciones e identificando los organismos interceptados), y participando en la negociación de las condiciones impuestas a los productos de exportación por los interlocutores comerciales importadores. <p>- Para que las medidas sanitarias funcionen, el plan de acción ha de adherirse a cualquier plan de inocuidad de los alimentos existente que considere el Gobierno, y participar en él, como, por ejemplo, el plan entre la AIFAESA y el MoH, y el plan de trabajo elaborado por la USAID, la Universidad Texas A&M y el proyecto Avansa, junto con una comparación de los sistemas de inocuidad de los alimentos ya establecidos a nivel internacional en otros países (Indonesia, China, Australia) y en la FAO/OMS y el Codex.</p>	<p>- Se ha puesto en marcha la labor relativa a los riesgos de los alimentos exportados.</p> <p>- Se han facilitado listas de las plagas presentes en Timor-Leste a los interlocutores comerciales para acelerar el análisis del riesgo de las importaciones por los países importadores;</p> <p>- Se llevan a cabo negociaciones;</p> <p>- Se cumplen las condiciones de exportación de los interlocutores comerciales y se han puesto en marcha las certificaciones adecuadas.</p> <p>Se han establecido y puesto en marcha iniciativas de creación de capacidad técnica.</p> <p>Se ha elaborado y se utiliza la lista de plagas y enfermedades de las plantas;</p> <p>Se han formulado medidas;</p> <p>Se aplican eficazmente medidas de riesgo.</p> <p>Participación continua en negociaciones sobre el comercio de exportación;</p>	<p>2023-2025</p> <p>2023</p> <p>2023</p> <p>2023</p> <p>2023-2025</p> <p>2023</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2025</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2025</p> <p>2023-2025</p>

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
	<p>- Las prioridades a corto y medio plazo en relación con la inocuidad de los alimentos deberían ser las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comenzar la recopilación exhaustiva de bases de datos sobre la composición y el consumo de los alimentos, utilizando los datos sobre los alimentos cultivados, importados y exportados por Timor-Leste que ya han sido recopilados por la Dirección de Cuarentena y Bioseguridad y la Dirección de Servicios Veterinarios, así como cualquier otra información pertinente. • Evaluar la idoneidad para Timor-Leste de las normas de Indonesia (o China, o de ambas, dado que estos países son sus principales interlocutores comerciales) y las normas del Codex en relación con los niveles máximos (NM) de aditivos alimentarios, los productos químicos contaminantes, los alérgenos y las biotoxinas; los LMR de plaguicidas y de medicamentos para uso veterinario, y los valores de referencia de los patógenos comunes transmitidos por los alimentos. • Realizar una evaluación del riesgo de cada combinación de alimento/producto químico/biotoxina utilizando los NM y los LMR de los interlocutores comerciales (Indonesia, China, Australia o los niveles del Codex), la ingesta diaria admisible (IDA), y la ingesta diaria tolerable provisional (IDTP) o la ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) del Comité mixto FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios (JEFCA), junto con las estimaciones de los niveles de exposición (para un adulto medio de 60 kg a 70 kg y para un niño de 20 kg), a fin de poder determinar el riesgo. Por ejemplo, se importan 349 productos alimenticios, y existen cientos de contaminantes, aditivos alimentarios y plaguicidas, y se deberá evaluar por separado el riesgo que representa cada uno. • Colaborar en la elaboración de instrumentos legislativos pertinentes y adecuados sobre inocuidad de los alimentos, incluido un Código de Normas Alimentarias (Leyes alimentarias) para Timor-Leste similar al Código de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda. • Evaluar la adecuación del etiquetado de los productos alimenticios importados y exportados por Timor-Leste. Comparar y contrastar dicho etiquetado con las normas de etiquetado del Codex y de los países exportadores. 	<p>Se ha iniciado y prosigue la recopilación de datos sobre la composición y el consumo de los alimentos.</p> <p>Se han evaluado las normas de inocuidad de los alimentos de los países exportadores y se han comparado con las del Codex;</p> <p>Se ha iniciado y prosigue la realización de evaluaciones del riesgo.</p> <p>Se ha elaborado y aplicado la legislación alimentaria. Se ha establecido el Código de Normas Alimentarias;</p> <p>Se ha evaluado la adecuación del etiquetado de los alimentos y se ha comparado con el etiquetado aplicado por el Codex y los países exportadores. Se han adoptado medidas correctivas en los casos necesarios;</p>	<p>2023</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2026</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2024</p> <p>2023-2026</p>

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
Identificar MSF proporcionales a las evaluaciones del riesgo Establecer niveles adecuados de protección Desarrollar sistemas de seguimiento y vigilancia Aplicar las MSF	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la capacidad del Gobierno de Timor-Leste y de la Universidad Nacional de Timor-Leste a efectos de la evaluación del riesgo en materia de inocuidad de los alimentos, incluidas la evaluación química, biológica y del riesgo (toxicología, microbiología) y la evaluación de la exposición. 	Se ha evaluado la capacidad del Gobierno y de otras fuentes;	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> • Formular recomendaciones al Gobierno de Timor-Leste sobre la evaluación de la capacidad. 	Se han formulado recomendaciones, que se han presentado al Gobierno;	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar o recomendar documentos orientativos, manuales y material de formación adecuados para la creación de capacidad en materia de análisis del riesgo. 	Se han elaborado y utilizado documentos orientativos y manuales de formación;	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar módulos de formación para instructores sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias para orientar al personal de la cadena alimentaria en materia de buenas prácticas de higiene (BPH), buenas prácticas acuícolas, buenas prácticas ganaderas (BPG), buenas prácticas de fabricación y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC); 	Se han elaborado materiales de formación, que se hacen llegar a los grupos destinatarios mediante módulos de formación para instructores sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias; Registros de formación; Encuestas de referencia y finales antes y después de las formaciones y aplicación; Registros de las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos, las BPH, las buenas prácticas acuícolas, las BPG, las buenas prácticas de fabricación y los APPCC; Productos alimenticios libres de productos químicos;	2023-2026
	<ul style="list-style-type: none"> • Formular determinaciones en materia de regionalización basadas en la evaluación de las características sanitarias de una región, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de programas de erradicación o de control, y los criterios o directrices adecuados elaborados por las organizaciones internacionales competentes. 		2024-2025
	- Identificar, sobre la base de la labor de evaluación del riesgo mencionada <i>supra</i> , las MSF que mitigarán cada uno de los riesgos, con arreglo a los testimonios científicos obtenidos en publicaciones científicas o en el propio país, y elaborar una metodología de evaluación de riesgos compatible con las normas de la OMC basada en los principios establecidos por el Codex, la OMSA y la CIPF.	Se han elaborado y aplicado MSF;	2023-2026

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer, para cada MSF, un nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria o un nivel adecuado de protección (NADP), basado en el riesgo y en las medidas disponibles para mitigarlo, y garantizar que esos NADP estén justificados por la evaluación del riesgo y se apliquen de forma coherente para evitar distinciones arbitrarias o injustificables en el nivel de protección, si tales distinciones tuvieran por resultado una restricción encubierta del comercio internacional. - Establecer sistemas de seguimiento y evaluación para las medidas de control de los alimentos introducidas en toda la cadena alimentaria; - Aplicar MSF sobre la base de las evaluaciones del riesgo y en consonancia con las mejores prácticas internacionales. 	<p>Se han establecido niveles adecuados de protección;</p> <p>Adopción y aplicación de estrategias de gestión integrada de plagas y enfermedades de las plantas, enfermedades animales e inocuidad de los alimentos;</p> <p>Se supervisan y evalúan las MSF;</p> <p>Se aplican las MSF;</p>	<p>2023-2027</p> <p>2023-2027</p> <p>2023-2027</p>
<u>Estrategia 4</u>	4.1. Desarrollar sistemas de vigilancia y de respuesta frente a las enfermedades de transmisión alimentaria		
Sistemas de vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria y de respuesta en materia de inocuidad de los alimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer las actividades de vigilancia y de respuesta de emergencia frente a las enfermedades de transmisión alimentaria; 	- Se han elaborado documentación y encuestas sobre la vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria;	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar procedimientos para evaluar y rastrear los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria; 	- Se han adoptado procedimientos operativos normalizados;	2023-2024
	<ul style="list-style-type: none"> - Impartir formación a los funcionarios encargados de las cuestiones sanitarias sobre la recopilación de datos, la información y la presentación de informes sobre las enfermedades de transmisión alimentaria; 	<ul style="list-style-type: none"> - Registros de formación; - Se han recopilado datos; 	2023-2024
	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar una red nacional de recopilación, cotejo, notificación y difusión de datos al público; 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de evaluación/auditorías; - Informes de seguimiento; 	2023-2025
	<ul style="list-style-type: none"> - Estimar el total de enfermedades de transmisión alimentaria presentes en Timor-Leste. 	- Informes de vigilancia de las enfermedades.	2023-2025
Estrategia 5			
Transparencia: notificación y acceso a la documentación	<p>a) Identificar la autoridad en la que recae la responsabilidad de presentar notificaciones a la OMC y de garantizar el constante cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia;</p> <p>b) Establecer directrices o leyes que impongan la obligación de publicar las medidas en proyecto en una etapa temprana a efectos de la presentación de observaciones;</p> <p>c) Incluir en las leyes o en los procedimientos administrativos la obligación de facilitar a los Miembros ejemplares del texto de las medidas en proyecto; e</p>		<p>2023</p> <p>2024</p> <p>2024</p>

Estrategias	Objetivos y resultados	Indicadores de resultados	Plazo para la aplicación
	d) Incluir en las leyes o en los procedimientos administrativos la obligación de prever un plazo prudencial para la formulación de observaciones por los Miembros y el público y de establecer un proceso para tomar en cuenta esas observaciones sin discriminación alguna.		2024
Aplicación plena del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias			1 de enero de 2028

ANEXO 19: Plan de Acción para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC

Actividades	Medidas necesarias	Plazo para la aplicación
Firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Timor-Leste y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para que esta ayude al Gobierno a elaborar un régimen de propiedad intelectual y preparar el camino para el proceso de elaboración de la estrategia nacional de propiedad intelectual	<ol style="list-style-type: none"> Validación técnica del memorándum de entendimiento; Firma del memorándum de entendimiento. 	Noviembre de 2021
Formulación y aplicación de la estrategia nacional de propiedad intelectual	<ol style="list-style-type: none"> Con la ayuda de la OMPI, Timor-Leste llevará a cabo la labor preparatoria para el proceso de elaboración de la estrategia nacional de propiedad intelectual; y Celebración de reuniones con las partes interesadas y determinación del régimen de propiedad Intelectual necesario para garantizar el cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. 	2022
Elaboración de una Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos	<ol style="list-style-type: none"> Establecimiento de un equipo de trabajo integrado por los ministerios/organismos competentes para facilitar el proceso; Celebración de reuniones con las partes interesadas; Elaboración de los proyectos de ley; Consultas públicas; Aprobación por el Consejo de Ministros; Aprobación por el Parlamento Nacional; Promulgación por el Presidente de la República; Consultas públicas informativas; y Aplicación efectiva 	2022
Establecimiento de una Oficina Nacional de Propiedad Intelectual	<ol style="list-style-type: none"> Designación de un centro de coordinación de la propiedad intelectual en Timor-Leste; Elaboración de las disposiciones necesarias para establecer una Oficina Nacional de Propiedad Intelectual; y Elaboración de leyes relacionadas con la propiedad intelectual con la asistencia técnica de la OMPI y de otros asociados para el desarrollo. 	2023
Elaboración del Código de Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal; Patentes; Modelos de Utilidad; Indicaciones Geográficas; Dibujos y Modelos Industriales; Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados; Protección de la Información no Divulgada; y Secretos Comerciales)	<ol style="list-style-type: none"> Establecimiento de un equipo de trabajo integrado por los ministerios/organismos competentes para facilitar el proceso; Celebración de reuniones con las partes interesadas; Elaboración de los proyectos de ley; Consultas públicas; Aprobación por el Consejo de Ministros; Aprobación por el Parlamento Nacional; Promulgación por el Presidente de la República; Consultas públicas informativas; y Aplicación efectiva. 	2022-2024

Actividades	Medidas necesarias	Plazo para la aplicación
Creación de capacidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación del personal, incluidos los funcionarios de aduanas, los agentes de policía y las demás personas encargadas de esferas relacionadas con la propiedad intelectual; 2. Actividades de divulgación y formación sobre leyes relacionadas con la propiedad intelectual; 3. Formación del personal, incluidos los funcionarios de aduanas, los agentes de policía y los demás responsables de la base de datos sobre marcas de fábrica o de comercio registradas; y 4. Creación de una base de datos sobre marcas de fábrica o de comercio registradas. 	2023-2024
Ratificación de los Acuerdos de la OMPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de un equipo de trabajo integrado por los ministerios/organismos competentes para facilitar el proceso; 2. Celebración de reuniones con las partes interesadas; 3. Consultas públicas; 4. Aprobación por el Consejo de Ministros; 5. Ratificación de los Acuerdos de la OMPI; 6. Consultas públicas informativas; y 7. Aplicación efectiva. 	2024
Elaboración de una Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de un equipo de trabajo integrado por los ministerios/organismos competentes para facilitar el proceso; 2. Celebración de reuniones con las partes interesadas; 3. Elaboración de los proyectos de ley; 4. Consultas públicas; 5. Aprobación por el Consejo de Ministros; 6. Aprobación por el Parlamento Nacional; 7. Promulgación por el Presidente de la República; 8. Consultas públicas informativas; y 9. Aplicación efectiva. 	2026
Aplicación plena del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio		1 de enero de 2027

ANEXO 20: Formas jurídicas de empresas disponibles en virtud de la Ley Nº 10/2017 de Sociedades Mercantiles, de 17 de mayo de 2017**a) Representación permanente (sucursal) de una empresa extranjera**

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Nº 10/2017, una sociedad constituida en otro país que desarrolle actividades comerciales en Timor-Leste está sujeta a las disposiciones de la legislación en materia de registro mercantil y deberá inscribirse como representación permanente (sucursal) de la sociedad extranjera (artículo 14 del Decreto Ley Nº 16/2017, de 17 de mayo de 2017, sobre el Registro Mercantil). Deberá nombrar un representante legal con residencia habitual en Timor-Leste, asignar capital para llevar a cabo actividades mercantiles en el país y registrar las resoluciones respectivas. En la solicitud de inscripción deben constar los documentos que establece el Decreto Ley Nº 35/2012, de 18 de julio de 2012, sobre el "SERVE, I.P.", lo que incluye una prueba de constitución de la sociedad matriz extranjera en el país de origen (por ejemplo, el certificado de registro), los estatutos de la sociedad, la resolución del órgano pertinente de la sociedad matriz sobre el registro de una representación permanente en Timor-Leste, la designación de los representantes locales, la asignación de capital, un poder notarial por el que se concedan facultades de gestión a los representantes de la representación permanente y un mapa en el que se indique la ubicación de la sede social en Timor-Leste. Todos los documentos emitidos en el extranjero deben traducirse a uno de los idiomas oficiales de Timor-Leste (portugués o tetun) y deben ser certificados por la representación diplomática de Timor-Leste acreditada en el país de origen.

b) Empresario a título individual

Una persona física extranjera también puede llevar a cabo actividades comerciales en Timor-Leste sin necesidad de constituir una sociedad o de registrar una sucursal de una sociedad extranjera si se inscribe como empresario a título individual. El artículo 33 del Decreto Ley Nº 7/2006 y el artículo 24 del Decreto Ley Nº 35/2012 establecen los documentos que deben acompañar la solicitud de registro. Un empresario a título individual debe desarrollar su actividad utilizando su propio nombre, completo o abreviado, seguido del acrónimo "ENIN". No se permite a un empresario a título individual adoptar otro nombre comercial (artículo 42 del Decreto Ley Nº 35/2012). Como se ha mencionado anteriormente, el empresario a título individual debe obtener una licencia comercial o una autorización de actividad en función de si la actividad que se propone desarrollar se considera de alto o bajo riesgo de conformidad con el Decreto Ley Nº 35/2012. Asimismo, el empresario a título individual debe obtener un visado para entrar y residir legalmente en Timor-Leste (véase el anexo "Medidas que afectan al movimiento de personas físicas").

c) Sociedad de responsabilidad limitada privada

El capital de las sociedades de responsabilidad limitada se representa mediante "participaciones" ("cuotas"), que son una forma inmaterial de expresar el capital social como porcentaje del total. Una persona física o jurídica extranjera puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada privada. Puede ser el único propietario del capital de la empresa (en cuyo caso se denominará sociedad de responsabilidad limitada privada unipersonal) o poseer una parte. Ciertas leyes relativas a actividades económicas específicas pueden prescribir una participación extranjera (o timorense) mínima o máxima. Por ejemplo, el artículo 9.1 g) del Decreto Ley Nº 1/2012 de Actividades Petroleras Avanzadas, de 1 de febrero de 2012, exige que las compañías que deseen obtener una licencia de actividades avanzadas tengan una participación timorense del 5% como mínimo.

El capítulo II de la Ley Nº 10/2017 establece las disposiciones relativas a las sociedades de responsabilidad limitada. Las principales características de una sociedad de responsabilidad limitada privada son las siguientes:

1. El capital de una sociedad limitada privada se divide en participaciones y los titulares de participaciones son responsables solidarios del pago de todas las participaciones, de conformidad con el artículo 173.
2. Las participaciones no se incorporarán en los certificados negociables y no pueden denominarse acciones.

3. Los estatutos sociales de la sociedad especificarán, además de lo dispuesto en el artículo 7 4), el coeficiente de capital de cada titular de participaciones.
4. La denominación de estas sociedades estará formado, con o sin siglas, por el nombre o la razón social de todos, uno o algunos de los titulares de participaciones, o por un nombre específico, o por la combinación de ambos, pero en cualquier caso, deberá acabar con la palabra "Limitada" o la abreviatura "Lda."
5. Salvo lo dispuesto en el párrafo 1 más arriba y en el siguiente artículo, las deudas de la sociedad a los acreedores se limitan al valor de las participaciones de la sociedad.
6. Los estatutos sociales de la sociedad pueden estipular que uno o más titulares de participaciones específicas, además de ser responsables del pago de las participaciones a la sociedad de conformidad con el artículo 167 1), también respondan ante los acreedores de la sociedad hasta una determinada suma.
7. Una sociedad de responsabilidad limitada privada no podrá tener más de 30 titulares de participaciones.
8. Los titulares de participaciones podrán fijar libremente el capital de la sociedad.

d) Sociedad anónima

Una persona física o jurídica extranjera puede constituir una sociedad anónima para desarrollar actividades económicas en Timor-Leste, pero esta debe tener como mínimo tres accionistas y un capital mínimo de 50.000 dólares EE.UU.

El capítulo III de la Ley Nº 10/2017 establece las disposiciones relativas a las sociedades anónimas. Las principales características de una sociedad anónima son las siguientes:

1. Las sociedades anónimas deben tener como mínimo tres accionistas, sin perjuicio de las disposiciones relativas a las filiales.
2. Las disposiciones del párrafo 1 más arriba no se aplicarán a las sociedades de las que el Estado posea la totalidad o la mayoría del capital, que podrán ser constituidas por solo uno o dos accionistas.
3. El capital social de las sociedades anónimas no podrá ser inferior a 50.000 dólares EE.UU.
4. El capital social se dividirá en acciones, que deberán tener un valor equivalente igual a 1 dólar de los Estados Unidos o múltiplos de uno, representadas por títulos de las acciones.
5. La obligación de los accionistas se limitará al valor de las acciones suscritas.
6. La razón social de estas sociedades estará formada, con o sin siglas, por nombres u otros elementos, pero, en cualquier caso, deberá acabar con la expresión "*sociedade anónima*" o la abreviatura "S.A.".
7. La sociedad anónima no podrá constituirse si el capital social no está totalmente suscrito y se ha desembolsado al menos el 25%.

ANEXO 21: Medidas que afectan al movimiento de personas físicas

La legislación pertinente que afecta a la entrada o la estancia temporal de personas físicas es:

- la Ley Nº 11/2017 de Inmigración y Asilo, de 24 de mayo de 2017 (denominada en lo sucesivo Ley de Inmigración);
- la Decisión Nº 232/SEPFOPE-GSE/D/X/2013, de 1 de octubre de 2013, emitida por la Secretaría de Estado para la Política de Formación Profesional y Empleo (SEPFOPE), sobre la concesión de la autorización necesaria para que los empleados extranjeros puedan trabajar en Timor-Leste y la concesión de los visados pertinentes (para fines de trabajo).

La concesión de visados compete a:

- La concesión de un visado de cortesía compete al organismo público encargado de asuntos exteriores.
- La concesión de los visados de trabajo, los visados de negocios, los visados de estancia temporal y los visados de establecimiento de residencia compete al servicio público encargado de inmigración.
- La concesión de los visados de tránsito, los visados turísticos y los visados de tránsito aeroportuario compete al jefe del servicio público encargado de inmigración.
- La decisión de conceder un visado de trabajo requiere un dictamen motivado del organismo gubernamental que supervisa el empleo.
- La decisión de conceder visados de negocios clase II y visados de residencia con el fin de llevar a cabo una actividad profesional también requiere un dictamen motivado por parte de los organismos gubernamentales que supervisan la inversión privada y el empleo.

La Ley de Inmigración (Ley Nº 11/2017, de 24 de mayo de 2017) prevé nueve categorías de visados:

- Visados de cortesía: El visado de cortesía lo expide el Ministerio encargado de asuntos exteriores al extranjero que viaja al territorio nacional en visita de servicio o de carácter oficial. Tiene una validez de un año y permite períodos de estancia de hasta 30 días y entradas múltiples.
- Visado de tránsito: El visado de tránsito se expide a un extranjero que tenga la intención de entrar en el territorio nacional con el fin de proseguir su viaje a otro país. Es válido por un período máximo de setenta y dos horas, permite dos entradas en territorio nacional y no puede prorrogarse.
- Visado turístico: El visado turístico se concede a extranjeros que viajan al territorio nacional para hacer turismo. Tiene una validez de 30 días y puede prorrogarse una vez por un período igual, permitiendo una sola entrada, a menos que el extranjero viaje a Oecusse Ambeno o desde allí, en cuyo caso se permiten múltiples entradas. Los extranjeros titulares de un visado turístico no están autorizados a realizar actividades profesionales en el territorio nacional.
- Visado de tránsito aeroportuario: El visado de tránsito aeroportuario se expedirá a un extranjero que tenga la intención de acceder a la zona internacional del aeropuerto y que viaje en la misma aeronave u otra aeronave de conformidad con el documento de transporte; no puede prorrogarse.
- Visado de trabajo: El visado de trabajo tiene por objeto permitir al titular entrar en el territorio nacional con el fin de ejercer una actividad profesional por cuenta ajena, en forma de contrato de trabajo o de prestación de servicios. Tiene una validez máxima de un año, puede prorrogarse por períodos iguales y permite múltiples entradas. Un visado de trabajo permite al titular ejercer la actividad profesional que justificó su concesión.

- Visado de negocios, clase I y II: El visado de negocios se divide en clase I y clase II y se concede a los extranjeros que se proponen desarrollar actividades económicas en el territorio nacional. A los efectos de inmigración, la "actividad económica" es la producción, distribución y venta de bienes o servicios, independientemente de su naturaleza, en el marco de las actividades económicas del país, de conformidad con la Ley de Inversiones Privadas.
 - El visado de negocios clase I está destinado a los extranjeros que se proponen entrar en el territorio nacional con el fin de desarrollar actividades de prospección empresariales o de inversiones. Tiene una validez de un período máximo de 60 días, permite múltiples entradas y no puede prorrogarse.
 - El visado de negocios clase II está destinado a los extranjeros que tengan la intención de establecerse en el territorio nacional con el fin de llevar a cabo actividades económicas por ser socios o administradores de una sociedad mercantil registrada, o pendiente de registrar, en la República Democrática de Timor-Leste, y que desempeñen un cargo pertinente en ella, siempre que residan o tengan previsto residir en el territorio nacional durante un período de más de ciento ochenta y tres días al año. El período inicial tiene una validez de seis meses, prorrogable por períodos de dos años y permite entradas múltiples. La prórroga del visado de negocios clase II depende, en particular, del registro efectivo de la sociedad mercantil ante el organismo competente y del cumplimiento continuo de las obligaciones jurídicas a las que están sujetas las sociedades mercantiles de conformidad con la legislación aplicable, así como de la estancia del titular en el territorio nacional durante un período de más de ciento ochenta y tres días al año.
- Visado de estancia temporal: El visado de estancia temporal se expide a los estudiantes que deseen iniciar o continuar sus estudios en el territorio nacional, a los extranjeros que deseen realizar actividades especializadas, a quienes deseen ejercer un voluntariado y a los familiares a cargo de extranjeros titulares de un visado de estancia temporal, un permiso especial de estancia, un visado de trabajo o un visado de negocios clase II. El visado de estancia temporal para estudios es válido durante el período de estudio y puede prorrogarse seis meses, permitiendo entradas múltiples. Un visado de estancia temporal para desarrollar actividades especializadas de carácter cultural, deportivas, de investigación científica, para fines periodísticos o para desempeñar actividades altamente calificadas en calidad de artista, deportista, investigador, corresponsal de un órgano de comunicación social extranjero o técnico altamente calificado, tiene una validez equivalente a la duración del contrato o la misión hasta un máximo de un año, pudiendo prorrogarse por períodos iguales y permitiendo entradas múltiples. El visado de estancia temporal para desarrollar actividades de voluntariado de corta duración tiene una validez máxima de 120 días, y permite entradas múltiples. Los visados temporales de estancia para familiares a cargo de extranjeros tendrán la misma validez que el visado del familiar que ejerce de cabeza de familia y se prorrogarán en términos idénticos, permitiéndose entradas múltiples.
- Visado de establecimiento de residencia: El visado de establecimiento de residencia tiene por objeto permitir al titular entrar en el territorio nacional con el fin de solicitar un permiso de residencia temporal para el ejercicio de una actividad profesional o con fines de reagrupación familiar. El visado de establecimiento de residencia solo se concede al interesado que demuestre su intención de permanecer permanentemente en el territorio nacional, posea los medios necesarios de subsistencia, tenga alojamiento asegurado y no tenga antecedentes penales. Tiene una validez de 90 días y permite entradas múltiples. Si un extranjero solicita un visado con arreglo al artículo 40 con la intención de ejercer una actividad profesional, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la concesión del visado: el objetivo de proporcionar mano de obra calificada a diversos sectores de la economía, con miras a aumentar la productividad y asimilar la tecnología, y el objetivo de crear puestos de trabajo para los nacionales, invirtiendo en su formación. El número de extranjeros que pueden obtener este visado según lo dispuesto en el párrafo anterior del artículo 40, así como los sectores de la economía en los que no podrán ejercer su actividad, se fijarán periódicamente mediante resolución del Gobierno.

La Ley de Inmigración (Ley Nº 11/2017, de 24 de mayo de 2017) también prevé dos tipos de permisos de residencia:

- Permiso de residencia temporal: El permiso de residencia temporal tiene una validez de dos años, renovable por períodos iguales y se expide: 1) para el ejercicio de la actividad profesional; 2) a un ciudadano extranjero casado desde hace más de dos años pero menos de cinco años con un ciudadano nacional, que tenga la intención de residir en Timor-Leste; 3), con fines de reagrupación familiar; 4) a las víctimas del tráfico de personas o víctimas de redes de asistencia a la inmigración ilegal de personas; y 5) por motivos excepcionales. El permiso de residencia temporal puede concederse a los ciudadanos extranjeros que de manera acumulativa:
 - se encuentren en territorio nacional;
 - demuestren tener una intención justificada de residir permanentemente en el territorio nacional;
 - presentan documentos de viaje válidos;
 - demuestren disponer de medios de alojamiento y subsistencia adecuados durante el período requerido;
 - hayan residido legalmente en el territorio nacional como titulares de un visado de establecimiento de residencia o estén cubiertos por una de las líneas de exención de ese visado;
 - durante el período de residencia en el territorio nacional, no hayan sido condenados por delitos con penas que, de manera individual o acumulativa, superen un año de prisión.
- Permiso de residencia permanente: No tiene límite de validez y se concede a los extranjeros que, de manera acumulativa:
 - hayan tenido la condición de residentes legales en el territorio nacional durante por lo menos 10 años consecutivos o sean hijos menores o estén a cargo de ciudadanos nacionales, o cuando se trate de ciudadanos extranjeros casados con un ciudadano nacional durante más de cinco años, o hayan sido titulares de un permiso de residencia temporal durante al menos seis años;
 - durante el período de residencia previsto en el párrafo anterior, no hayan sido condenados por delitos con penas que, de manera individual o acumulativa, superen un año de prisión;
 - hayan dispuesto de medios de alojamiento y subsistencia adecuados durante su período de residencia en el territorio nacional, siempre y cuando sea previsible que sigan disponiendo de ellos;
 - la finalidad de obtener la residencia permanente declarada en la solicitud no presente contradicciones con los documentos presentados, o con las declaraciones formuladas;
 - durante su residencia en Timor-Leste hayan contribuido en términos positivos a la economía o al bienestar social del país.

ANEXO 22: Fuentes de derecho pertinentes relativas a los intereses inmobiliarios

1. Ley Nº 1/2003 del Marco Jurídico relativo a los Bienes Inmuebles, de 10 de marzo de 2003;
2. Decreto Ley Nº 19/2004 sobre el Régimen Jurídico relativo a la Afectación Oficial y al Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado, de 29 de diciembre de 2004;
3. Ley Nº 12/2005 del Régimen Jurídico de los Bienes Inmuebles (Parte II/Arrendamiento entre Particulares), de 16 de junio de 2005;
4. Ley Nº 08/2017 de Expropiación por Motivos de Interés Público, de 26 de abril de 2017;
5. Decreto Ley Nº 14/2022 sobre el Registro Catastral, de 6 de abril de 2022;
6. Decreto Ley Nº 65/2022 sobre el Acceso, Aplicación y Gestión de la Información sobre el Registro de la Propiedad, de 31 de agosto de 2022;
7. Orden Ministerial Nº 48/2022 sobre el Formulario Oficial para la Certificación de los Derechos de Propiedad, de 9 de noviembre de 2022;
8. Orden Ministerial Nº 49/2022 sobre el Número de Identificación de la Propiedad Único, de 9 de noviembre de 2022;
9. Orden Ministerial Nº 50/2022 sobre el Formulario Oficial para los Certificados de Registro de la Propiedad, de 9 de noviembre de 2022;
10. Orden Ministerial Nº 51/2022 sobre los Diversos Formularios Oficiales para el Registro de la Propiedad, de 9 de noviembre de 2022;
11. Orden Nº 19/GM/MJ/III/2009 del Ministerio de Justicia, de 20 de marzo de 2009, por la que se definen las pequeñas, medianas y grandes empresas e industrias;
12. Decreto Ley Nº 6/2011 sobre las Normas de Reubicación de Ocupantes Ilícitos de Propiedades Estatales, de 9 de febrero de 2011;
13. Decreto Ley Nº 27/2011 sobre la Regularización de la Titularidad de Bienes Inmuebles en Casos no Impugnados, de 6 de julio de 2011 (proyecto "Ita Nia Rai");
14. Ley Nº 14/2011 de Inversiones Privadas, de 28 de septiembre de 2011;
15. Ley Nº 10/2011 de Aprobación del Código Civil, de 14 de septiembre de 2011;
16. Orden Nº 16/2011 del Ministerio de Justicia sobre los Estudios Catastrales y los Procedimientos de Recopilación de Información, de 27 de julio de 2011;
17. Orden Nº 23/2011 del Ministerio de Justicia sobre la Conversión de las Declaraciones de Titularidad en Títulos de Propiedad en Casos no Impugnados, de 23 de noviembre de 2011; y
18. Ley Nº 13/2017 del Régimen Especial para la Determinación de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Ley de Tierras), de 5 de junio de 2017.

La situación existente en virtud de las leyes mencionadas *supra* puede cambiar como consecuencia de la Ley de Tierras, aprobada por el Parlamento Nacional el 26 de abril de 2017 y promulgada por el Presidente de la República el 5 de junio de 2017, cuya finalidad es resolver las discrepancias e incertidumbres surgidas en las fases posteriores a la colonización, la ocupación y el conflicto en el país. La Ley de Tierras es un conjunto de medidas que consta de los siguientes instrumentos principales:

- I. La Ley del Régimen Especial para la Determinación de la Titularidad de los Bienes Inmuebles ("Ley de Tierras"), que establece los criterios para el reconocimiento de los derechos de propiedad, establece criterios y mecanismos para la solución de diferencias relativas a la tierra, reconoce las tierras comunales y crea zonas de protección comunitaria.
- II. La Ley de Expropiaciones, que estipula los procedimientos y las restricciones aplicables a las expropiaciones por parte del Estado, así como las normas para la determinación de las compensaciones derivadas de los procedimientos de expropiación.
- III. La Ley de Creación del Fondo Inmobiliario, por la que se crea un fondo financiero para el pago de compensaciones derivadas de la aplicación de los proyectos de ley mencionados anteriormente.

- Arrendamiento de tierras propiedad del Estado

El Marco Jurídico relativo a los Bienes Inmuebles, aprobado en virtud de la Ley Nº 1/2003, de 10 de marzo de 2003, establece que el Estado tiene en propiedad ciertas tierras (artículo 4.1). En concreto, los bienes inmuebles del Estado se clasifican según si pertenecen i) al dominio privado del Estado, o ii) al dominio público del Estado, que se define como aquellas zonas establecidas por ley que no pueden ser objeto de apropiación privada, a menos que una ley establezca expresamente otra cosa y permita su arrendamiento, concesión o uso temporal. Asimismo, la Ley Nº 1/2003 faculta al Estado para expulsar a terceros de las tierras del Estado (artículo 7), si bien la facultad de expulsar a ocupantes ilegales se ejerce sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe por terceras partes (artículo 9). La Ley también establece que el Estado puede asumir temporalmente el control administrativo de tierras abandonadas (artículo 15) y, en particular, autoriza al Estado a arrendar tierras abandonadas a nacionales o extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas (artículo 15.3).

El arrendamiento de bienes inmuebles de titularidad pública se rige principalmente por el Decreto Ley Nº 19/2004 sobre el Régimen Jurídico relativo a la Afectación Oficial y al Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado, de 29 de diciembre de 2004. Este Marco Jurídico permite específicamente al Estado arrendar bienes inmuebles de su propiedad a nacionales o extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas (artículo 9). La Ley establece que el Estado tiene la obligación de garantizar al arrendatario el uso y disfrute del bien inmueble (artículo 7 b)). De conformidad con el artículo 11, la cuantía del arrendamiento se determinará de acuerdo con un marco general que puede "establecer un marco especial para ciudadanos nacionales".

En el caso de arrendamientos a "medianas o grandes empresas o industrias pertenecientes a ciudadanos timorenses y a empresas nacionales o extranjeras" (artículo 10.1 d)), el Decreto Ley establece un proceso público de licitación y concesión de arrendamientos a cargo de un comité de arrendamientos (artículo 12). Este procedimiento no se aplica a las personas que ocupaban bienes inmuebles del Estado en la fecha de entrada en vigor de la Ley Nº 19/2004, porque en esos casos el Estado puede negociar directamente con esas personas sin estar obligada a iniciar un procedimiento de licitación (artículo 26). Independientemente del requisito de convocar una licitación, es bastante habitual que el Estado entable negociaciones directamente con las partes interesadas en arrendar tierras de titularidad pública.

En el caso de las tierras abandonadas, el Estado solo puede conceder un período de arrendamiento de tres años, renovable por períodos de idéntica duración, a menos que el propietario reivindique posteriormente las tierras (artículo 22.2 del Decreto Ley Nº 19/2004).

De conformidad con el artículo 14.2 del Decreto Ley Nº 19/2004, un contrato de arrendamiento está sujeto a los plazos máximos siguientes en función del tipo de arrendatario o del uso al que se destinen las tierras:

- a) 5 años: tierras destinadas a alojamiento privado;
- b) 10 años: tierras utilizadas por pequeñas empresas e industrias de carácter privado;
- c) 20 años: tierras utilizadas por organismos humanitarios y ONG;

- d) 30 años: tierras utilizadas por medianas empresas e industrias;
- e) 50 años: tierras utilizadas por grandes empresas e industrias o destinadas a la explotación agropecuaria; y
- f) 50 años: tierras utilizadas por organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas.

La definición de pequeñas, medianas y grandes empresas e industrias se establece en la Orden Nº 19/GM/MJ/III/2009 del Ministerio de Justicia, de 20 de marzo de 2009, y es como sigue:

- a) grandes empresas e industrias: inversiones por un valor igual o superior a 20 millones de dólares EE.UU. o que conlleven el arrendamiento de bienes inmuebles estatales con una superficie superior a 5 hectáreas (para fines turísticos) o superior a 100 hectáreas (para otros fines);
- b) medianas empresas e industrias: inversiones por un valor superior a 1 millón de dólares EE.UU.; y
- c) pequeñas empresas e industrias: inversiones por un valor igual o inferior a 1 millón de dólares EE.UU.

Las disposiciones del Decreto Ley Nº 19/2004 relativas al período de arrendamiento de las tierras de titularidad pública no se aplican si el arrendamiento se realiza en el marco de la Ley de Inversiones Privadas, aprobada en virtud del Decreto Ley Nº 14/2011. De conformidad con la Ley de Inversiones Privadas, pueden concederse ciertos beneficios y exenciones a los inversores que reúnan todos los criterios necesarios para obtener el certificado de inversión (documento expedido por las autoridades que establece, entre otras cosas, los deberes del inversor, los incentivos y beneficios que concede el Estado, las condiciones de su revocación y las fechas de inicio, ejecución y finalización del proyecto de inversión o reinversión). El artículo 24 de la Ley de Inversiones Privadas prevé que el Estado puede celebrar un contrato de arrendamiento con el titular de un certificado de inversión por un período máximo de 50 años, renovable una sola vez por idéntico plazo.

Arrendamiento de tierras cuyo arrendador es un propietario inscrito en el registro establecido en virtud del Decreto Ley Nº 27/2011, de 6 de julio de 2011.

En 2008, en virtud de una Orden del Ministerio de Justicia, se aprobó el inicio de un estudio catastral. El estudio se llevó a cabo como parte de un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) denominado Ita Nia Rai (que en tetun significa "nuestra tierra"), de 2008 a 2012, año en que la USAID traspasó el proyecto al Ministerio de Justicia. El estudio catastral recopiló registros de reivindicaciones de tierras en ciertas zonas locales tanto de particulares, entidades jurídicas, comunidades y grupos como del Estado y publicó mapas en los que se indicaban las parcelas de tierra y los reclamantes que reivindicaban un derecho sobre ellas. Durante ese período, se concedió a los reclamantes que habían reivindicado la titularidad de una determinada parcela de tierra (siempre que ningún tercero hubiese impugnado esa reivindicación en el plazo de tiempo establecido) un título de propiedad "definitivo", cuya validez solo podía impugnarse ante los tribunales. Esa base de datos de mapas, parcelas de tierra y reclamantes constituyó la base del Registro de la Propiedad, creado en virtud de la Ley Nº 27/2011 y regulado por las Ordenes Ministeriales Nº 16/2011 sobre Procedimientos de Recopilación de Datos, de 27 de julio de 2011, y Nº 23/2011 sobre la Conversión de las Declaraciones de Titularidad en Títulos de Propiedad en Casos no Impugnados, de 23 de noviembre de 2011.

En virtud del Decreto Ley Nº 27/2011 se creó el Catastro Nacional, base de datos que contiene la información recabada durante el estudio catastral (artículo 3), y se estableció que el Catastro Nacional constaría de la base de datos catastral y de la base de datos del Registro de la Propiedad (artículo 3.2). De conformidad con la Orden Nº 23/2011 del Ministerio de Justicia, los resultados del estudio catastral se organizaron en dos listas: una lista de parcelas de tierra de titularidad no impugnada y una lista de parcelas cuya titularidad se había impugnado. De conformidad con el artículo 8 del Decreto Ley Nº 27/2011 y el reglamento de aplicación de la Orden Ministerial Nº 23/2011, los reclamantes de parcelas de tierra cuya titularidad no se hubiese impugnado se inscribieron en el Registro como titulares de las parcelas. Si bien el proceso admitía reivindicaciones

de entidades jurídicas, solo las reivindicaciones no impugnadas formuladas por personas físicas timorenses dieron lugar a la inscripción de los reclamantes como titulares (artículo 1.2 a) y b) del Decreto Ley Nº 27/2011 y artículo 2.1 a) de la Orden Ministerial Nº 23/2011).

Con la inscripción se establece la presunción de que el titular registrado es el propietario de la parcela de tierra inscrita (artículo 4.2), pero sigue siendo posible impugnar en cualquier momento el reconocimiento de la titularidad que se ha inscrito (artículo 8.3). Recae en la persona que impugna la reivindicación la carga de demostrar que el titular registrado no es el propietario de las tierras.

La inscripción en el Registro del reconocimiento de la titularidad también afecta al período de tiempo que debe transcurrir para justificar, en el caso de una ocupación no impugnada, la reivindicación de la titularidad por prescripción adquisitiva. Por lo general, la legislación de Timor-Leste relativa a la adquisición de un título de propiedad requiere un período de 25 años o bien, si la tenencia es de buena fe, de 20 años (artículo 1216 del Código Civil de Timor-Leste, aprobado en virtud de la Ley Nº 10/2011). Sin embargo, cuando existe "un título de compra inscrito", la adquisición de la titularidad por prescripción se producirá tras 15 años o, si la tenencia es de buena fe, tras solo 10 años (artículo 1214 del Código Civil).

Un titular registrado puede transmitir su propiedad. En consonancia con el artículo 53.4 de la Constitución, el artículo 10.5 del Decreto Ley Nº 27/2011 dispone que solo puede inscribirse en el Registro una transmisión de propiedad a una persona que sea nacional de Timor-Leste.

La ley protege la titularidad de una persona que, previo pago y de buena fe, compre tierras al titular registrado y que inscriba su propiedad. Un tercero que, previo pago y de buena fe, compre derechos sobre una propiedad al propietario registrado, obtendrá, tres años después de la fecha de inscripción de la transferencia, derechos que no podrán verse afectados por ulteriores reclamaciones (artículos 10.8 y 10.9). Habida cuenta de lo anterior, los arrendatarios deberían asegurarse siempre de que el presunto propietario haya inscrito sus "derechos de propiedad" en el marco del proyecto Ita Nia Rai y obtenido el título de propiedad definitivo mencionado *supra*. Si el presunto propietario posee ese título, el arrendatario puede fiarse de la situación jurídica de la propiedad, dado que, en principio, el titular registrado está facultado para garantizar el uso y disfrute de la tierra arrendada.

Tras una pausa, el Gobierno reanuda el programa de estudio catastral. Este programa de estudio y registro incrementará gradualmente la superficie de tierra sujeta al régimen de registro en virtud del Decreto Ley Nº 27/2011.

- Arrendamiento de otras tierras y disposiciones jurídicas alternativas

Si las tierras no han sido objeto del estudio catastral o lo han sido pero están en litigio, es más difícil verificar su titularidad. Sin embargo, como ya se ha dicho, el Gobierno de Timor-Leste procura mejorar la certidumbre del régimen de tenencia mediante la aprobación de las nuevas leyes descritas anteriormente.

Además de los contratos de arrendamiento, en los artículos 1414 y siguientes del Código Civil se detallan las condiciones para la constitución de derechos de superficie, mecanismo jurídico alternativo para obtener acceso a la tierra en Timor-Leste. El derecho de superficie es un derecho real que consiste en la capacidad de construir o mantener, temporalmente o a perpetuidad, una edificación (o una plantación) en las tierras de un tercero. En virtud de esta disposición, una persona puede construir y mantener, temporalmente o a perpetuidad, edificios o estructuras en propiedades de titularidad pública o privada. Al contrario de lo que sucede en un acuerdo de concesión, por ejemplo, los derechos de superficie ofrecen la ventaja de que el titular pasa a ser el propietario de la edificación o las instalaciones una vez terminadas, mientras que el Estado o el propietario particular sigue siendo el propietario de la tierra sobre la que se han construido. El titular de los derechos de superficie puede vender, arrendar o gravar de otro modo sus derechos con la autorización del cedente. Los derechos de superficie requieren el pago de una tasa, que puede ser anual o única en el momento de su constitución. Tras el vencimiento de los derechos de superficie, las construcciones pasan a ser automáticamente propiedad del titular de la tierra. Sin embargo, a menos que las partes hayan acordado otra cosa, el titular del derecho de superficie tendría derecho a percibir una compensación. Como en el caso de los arrendamientos, pueden otorgarse derechos de superficie respecto de tierras privadas o ciertas zonas del dominio privado del Estado.

ANEXO 23: Ministerios y organismos estatales responsables de la reglamentación de sectores y subsectores de servicios específicos

Sector/subsector de servicios	Ministerio/organismo estatal responsable
Servicios financieros (incluidos servicios de seguros y servicios conexos)	Ministerio de Hacienda Banco Central de Timor-Leste (CBTL)
Servicios de telecomunicaciones y audiovisuales	Autoridad Nacional de las Comunicaciones
Servicios de enseñanza	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Cultura Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
Petróleo, gas y minería	Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales y Autoridad Nacional del Petróleo y los Recursos Minerales
Servicios jurídicos	Ministerio de Justicia
Servicios de profesionales sanitarios (servicios de hospital, servicios médicos y odontológicos, y otros servicios de salud humana)	Ministerio de Salud
Servicios de construcción	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones
Servicios de transporte (transporte por carretera, incluido el transporte de pasajeros)	Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Servicios de transporte aéreo	Administración de Aeropuertos y Navegación Aérea de Timor-Leste
Servicios turísticos	Oficina Nacional de Turismo

ANEXO 24: Reglamentación del comercio de servicios

Servicios prestados a las empresas

Servicios profesionales

- Servicios jurídicos

La Ley Nº 11/2008, de 30 de junio de 2008 (modificada por el Decreto Ley Nº 39/2012, de 1 de agosto de 2012, la Ley Nº 1/2013, de 13 de febrero de 2013, y la Ley Nº 4/2015, de 30 de diciembre de 2015), establece que, hasta que se cree y entre en funcionamiento el Colegio de Abogados de Timor-Leste, la profesión jurídica estará reservada a las personas registradas como abogados en el Centro de Formación Jurídica (CLT).

En el artículo 2.3 se enumeran los requisitos que deben reunir los abogados extranjeros para registrarse en el CLT, que son, entre otros: i) poseer una licenciatura en derecho; ii) disponer de una licencia para ejercer en otro país; iii) conocer el marco jurídico de Timor-Leste; iv) dominar por lo menos uno de los idiomas oficiales de Timor-Leste a nivel oral y escrito; y v) tener una experiencia mínima de cinco años en la práctica jurídica. Asimismo, de conformidad con las modificaciones más recientes de la legislación aplicable, los abogados extranjeros deben i) ejercer en asociación con un abogado timorense, y ii) acordar con este último los honorarios aplicables.

El Decreto Ley Nº 3/2004, de 4 de febrero de 2003, establece el Marco Jurídico aplicable a los Notarios, uno de cuyos requisitos es que los notarios sean nacionales de Timor-Leste. El Decreto Ley Nº 2/2012, de 15 de febrero de 2012, establece el marco aplicable a los registradores y notarios.

- Servicios médicos, farmacéuticos y odontológicos

El Decreto Ley Nº 14/2004, de 1 de septiembre de 2004 (modificado por el Decreto Ley Nº 40/2011, de 21 de septiembre de 2011), dispone que todo el personal médico (a saber, médicos, parteras, enfermeras, terapeutas y técnicos de diagnóstico) debe registrarse en el Ministerio de Salud, que se encarga de evaluar las calificaciones respectivas. Los médicos extranjeros pueden solicitar el registro en el Ministerio de Salud y deben obtener un visado de trabajo o de residencia con arreglo a las disposiciones generales de la ley y las normas que establece el Decreto Ley Nº 14/2004, modificado por el Decreto Ley Nº 40/2011.

En el Decreto Ley Nº 18/2004, de 1 de diciembre de 2004, se establecen las prescripciones relativas a los servicios privados de salud, lo que incluye el trámite de licencias que debe realizarse antes de abrir al público esas instalaciones sanitarias.

El Decreto Ley Nº 13/2012, de 7 de marzo de 2012, establece las normas que rigen la carrera de los profesionales de la salud empleados por el Estado.

El Decreto Ley Nº 12/2004 sobre Actividades Farmacéuticas, de 26 de mayo de 2004, establece las prescripciones en materia de licencias aplicables a la importación, el almacenamiento, la venta al por mayor, la venta al por menor y la exportación de medicamentos para uso humano.

Otros servicios prestados a las empresas

- Servicios de publicidad

El Decreto Ley Nº 51/2011 sobre el Marco Jurídico de las Actividades de Publicidad, de 21 de diciembre de 2011, establece las normas y los principios que deben cumplir los mensajes publicitarios, particularmente a efectos de protección del consumidor. El Decreto Ley contiene una lista de servicios y productos que no pueden publicitarse (por ejemplo, armas y municiones), así como una lista de productos cuya publicidad está sujeta a disposiciones específicas, como el tabaco, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, los automóviles y los bienes inmuebles. Aparte de esas disposiciones sobre el contenido, la prestación de servicios de publicidad (en concreto, las normas y prescripciones para la concesión de licencias a los profesionales de la publicidad) está todavía sin reglamentar.

- **Servicios relacionados con la agricultura, la caza y la silvicultura**

El Reglamento Nº 2000/17 de la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNTAET), de 10 de mayo de 2000, prohíbe la exploración y la exportación de madera. Actualmente no hay en vigor ninguna otra disposición que reglamente las actividades agropecuarias, cinegéticas o silvícolas ni los servicios auxiliares.

- **Servicios relacionados con la pesca**

En virtud del Decreto Ley Nº 6/2004, de 21 de abril de 2004, se aprobó el Régimen Jurídico de Gestión y Ordenación de la Pesca, que establece el trámite para la obtención de licencias que deben realizar los que deseen desarrollar actividades pesqueras. Las personas físicas y las entidades jurídicas extranjeras no pueden obtener licencias de pesca artesanal ni de pesca de altura, que están reservadas a los nacionales. En el Decreto Nº 5/2004 del Gobierno de Reglamentación General de la Pesca, de 28 de julio de 2004, se pormenorizan los trámites de licencias así como las normas para la adquisición y la transferencia de la propiedad de los buques de pesca.

- **Servicios relacionados con la minería**

La Ley Nº 12/2021 sobre el Código Minero, de 30 de junio de 2021, tiene por objeto regular de forma exhaustiva todas las actividades mineras, incluidas las labores de reconocimiento, prospección y exploración, evaluación, desarrollo, procesamiento, refinado y comercialización de minerales en Timor-Leste. El Código regula la realización de actividades mineras y otras formas de explotación que implican el uso de instalaciones industriales, así como la venta de minerales en los mercados nacional e internacional. Establece un régimen jurídico moderno a través de un marco integrado para regular con eficacia la expedición de permisos para las actividades mineras en el país, lo que incluye la regulación de los respectivos procedimientos administrativos para la concesión de licencias y autorizaciones a las personas físicas y jurídicas interesadas en llevar a cabo esas operaciones, la definición de las zonas de concesiones, los derechos y obligaciones de las partes interesadas, así como las normas relativas a la inspección y supervisión de las actividades mineras, las sanciones y multas aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Minero y las normas específicas para la protección del medio ambiente y el pago de las tasas que correspondan. La finalidad de la Ley es promover y facilitar el descubrimiento y la explotación de recursos minerales en Timor-Leste, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar un desarrollo ecológicamente sostenible y, en particular, de reconocer y promover la obtención de beneficios económicos y sociales importantes para el país y unos ingresos adecuados para el Estado gracias a la explotación eficaz de los recursos minerales.

Servicios de comunicaciones

En virtud del Decreto Ley Nº 15/2012, de 28 de mayo de 2012, se creó la Autoridad Nacional de las Comunicaciones (NCA), organismo encargado de la supervisión y reglamentación de este sector. La NCA gestiona el registro de proveedores de servicios de telecomunicaciones y entidades explotadoras de redes de telecomunicaciones y concede licencias del espectro radioeléctrico.

- **Servicios postales**

Los servicios postales se rigen por el Decreto Ley Nº 17/2004, de 3 de noviembre de 2004 (artículos 11 y 12). De conformidad con este Decreto Ley, los servicios postales universales están sujetos a un régimen de exclusividad, mientras que los demás servicios (como los de mensajería) están abiertos a la competencia.

- **Servicios de mensajería**

El artículo 12 del Decreto Ley Nº 17/2004 permite la prestación de servicios de mensajería en condiciones de competencia y siempre que se cumplan ciertos umbrales. Actualmente, varios servicios de mensajería operan en el país con licencia en el marco de la reglamentación general de las actividades empresariales y del Decreto Ley Nº 17/2004.

- Servicios de telecomunicaciones

El Decreto Ley Nº 15/2012 reglamenta la prestación de servicios de telecomunicaciones en Timor-Leste, que se definen como "todo servicio comercial mayorista o minorista prestado previo pago por el usuario y consistente, íntegramente o en parte, en telecomunicaciones". Las telecomunicaciones se definen a su vez como "la transmisión, recepción o emisión de señales que representan símbolos, texto, imágenes, sonidos o información de cualquier tipo a través de cables, sistemas ópticos, medios radioeléctricos y otros sistemas electromagnéticos".

Los interesados en utilizar el espectro radioeléctrico, operar equipos de radio o prestar servicios de telecomunicaciones o de redes de telecomunicaciones en Timor-Leste deben obtener una licencia de la NCA. El capítulo V del Decreto Ley Nº 15/2012 (artículos 30 a 33) contiene las disposiciones relativas al registro obligatorio de proveedores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de redes de telecomunicaciones. En el artículo 32 se establece que la NCA está facultada para eximir del registro a un operador.

- Servicios audiovisuales

De conformidad con la Ley de Medios de Comunicación (Ley Nº 5/2014, de 19 de noviembre de 2014), los servicios de radio y televisión requieren una licencia de espectro radioeléctrico expedida por la NCA. El artículo 24 de la Ley dispone que la "participación de personas físicas o jurídicas extranjeras en el capital social de una empresa de medios de comunicación no puede superar el 30%".

Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos

El Decreto Ley Nº 27/2010, de 22 de diciembre de 2010, establece las disposiciones relativas a la certificación y el registro de empresas de construcción y empresas consultoras del sector de la construcción. El Decreto Ley Nº 26/2010, de 22 de diciembre de 2010, establece las normas para el registro de empresarios a título individual del sector de la construcción. De conformidad con el artículo 6, solo los ciudadanos nacionales pueden solicitar el registro como empresarios a título individual. El Decreto Ley Nº 2/2010, de 18 de febrero de 2010, establece los procedimientos especiales para la concesión de contratos de construcción de hasta 250.000 dólares EE.UU. a empresas locales con sede en los subdistritos.

Servicios de enseñanza**- Servicios de enseñanza primaria**

El Decreto Ley Nº 7/2010 sobre el Marco Jurídico de Administración y Gestión del Sistema de Enseñanza Básica contiene las normas aplicables a la enseñanza pública primaria.

En virtud del Decreto Ley Nº 23/2010, de 9 de diciembre de 2010, se aprobaron las normas de carrera de los educadores infantiles y los profesores de enseñanza básica y secundaria empleados por el Estado.

- Servicios de enseñanza secundaria

En virtud del Decreto Ley Nº 33/2011, de 3 de agosto de 2011, se aprobó el Marco Jurídico de Administración y Gestión del Sistema de Enseñanza Secundaria pública.

- Servicios de enseñanza superior

En virtud del Decreto Ley Nº 8/2009 sobre el Marco Jurídico de las Instituciones de Enseñanza Superior, de 19 de mayo de 2009, dichas instituciones pueden constituirse como fundación, asociación, cooperativa, sociedad limitada o sociedad anónima. Este Decreto Ley incluye una serie de prescripciones que cada tipo de institución debe cumplir.

- **Servicios relacionados con el medio ambiente**

El Decreto Ley Nº 5/2011 sobre el Régimen de Licencias Ambientales, de 9 de septiembre de 2011, reglamenta los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones ambientales y sociales y prescribe que deben someterse a un sistema de concesión de licencias ambientales en función de las características y del sector del proyecto.

Servicios financieros

Todos los servicios de seguros y relacionados con los seguros

- **Leyes y reglamentos pertinentes**

Las leyes y los reglamentos pertinentes relativos a los servicios de seguros y relacionados con los seguros son los siguientes:

- Ley Nº 6/2005 sobre el Marco Jurídico del Régimen de Licencias, la Supervisión y la Reglamentación de las Compañías de Seguros y los Intermediarios de Seguros, de 6 de julio de 2005;
- Instrucción Nº 1/2007 de la Autoridad Bancaria y de Pagos relativa al Régimen de Licencias de las Compañías de Seguros Generales;
- Instrucción Nº 2/2007 de la Autoridad Bancaria y de Pagos relativa al Régimen de Licencias de los Intermediarios de Seguros;
- Resolución Nº 8/2007 del Consejo de Administración sobre las Tasas Administrativas Aplicables a las Compañías de Seguros y a los Intermediarios de Seguros; e
- Instrucción Pública Nº 7/2010 sobre el Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros para Vehículos de Motor.

- **Organismo supervisor**

El Banco Central de Timor-Leste (creado en virtud de la Ley Nº 5/2011, de 15 de julio de 2011, y que sustituyó a la Oficina Central de Pagos (CPO) y a la Autoridad Bancaria y de Pagos (BPA)) es el organismo supervisor del sector de los seguros. El Banco Central se encarga, entre otras cosas, de lo siguiente:

- conceder licencias a las compañías de seguros y los intermediarios de seguros, supervisarlos y reglamentarlos;
- velar por la protección de los intereses legítimos de los asegurados y los aseguradores;
- definir, en forma de instrucciones, las normas de conducta de las compañías de seguros y de los intermediarios de seguros; y
- publicar instrucciones en forma de órdenes.

- **Entidades autorizadas**

Solo pueden desarrollar actividades de seguros:

- las sociedades anónimas constituidas en Timor-Leste (no se imponen restricciones a la participación extranjera en el capital social); y
- las sucursales de compañías de seguros extranjeras inscritas en Timor-Leste.

- Trámite de licencias

Una solicitud de licencia de establecimiento de una compañía de seguros irá acompañada de la documentación y la información siguientes:

- el acuerdo de constitución de la compañía;
- una copia de los estatutos sociales;
- una copia del acuerdo de accionistas, si procede;
- el organigrama de la sociedad, un desglose del capital y una relación del personal en cuestión;
- la identificación de los miembros de los órganos corporativos; y
- otros documentos e información considerados necesarios para el desempeño de las funciones de supervisión, que se definirán en una instrucción del Banco Central.

La aprobación preliminar, en su caso, tendrá una validez de un año contado a partir de la fecha en que se conceda. La aprobación definitiva de una compañía de seguros está supeditada al cumplimiento de los requisitos siguientes:

- la constitución de la compañía de conformidad con la Ley de Sociedades de Timor-Leste o la inscripción de la sucursal de una compañía constituida en una jurisdicción extranjera;
- la suscripción y el desembolso del capital social mínimo obligatorio;
- la elaboración de un plan empresarial de la compañía basado en un análisis riguroso y fundamentado en premisas razonables;
- el compromiso por escrito de observar las disposiciones de la Ley Nº 6/2005;
- la idoneidad de las calificaciones, la experiencia y la integridad de los miembros del consejo de administración, del consejo de auditoría y de los principales accionistas de la compañía, así como de las personas que tengan o deseen tener un interés pertinente en ella, habida cuenta del plan empresarial y de las actividades financieras de la compañía de seguros;
- un capital social mínimo registrado de 500.000 dólares EE.UU.;
- un consejo de administración compuesto por un mínimo de tres miembros, todos ellos residentes en Timor-Leste;
- el cumplimiento de todas las demás condiciones relativas a la gobernanza contenidas en el capítulo VIII de la Ley Nº 6/2005; y
- otros requisitos que el Banco Central de Timor-Leste determine en virtud de una instrucción, con el fin de garantizar la observancia de las disposiciones de la Ley Nº 6/2005.

El Banco Central puede denegar una licencia si considera que su concesión menoscabaría los intereses de los futuros asegurados o aseguradores. La licencia tiene un período de validez indefinido y es intransferible. El Banco Central es independiente e imparcial en la adopción de decisiones relativas a la concesión de licencias a compañías de seguros.

- Seguros obligatorios

Actualmente, el seguro de responsabilidad civil a terceros para vehículos de motor (Instrucción Pública Nº 7/2010) es el único seguro obligatorio en Timor-Leste.

- **Servicios de seguros de vida, de accidentes y de enfermedad**

Seguros de vida: según la definición de la Ley Nº 6/2005, un seguro de vida es aquel que cubre a una o varias personas, representadas por una o varias pólizas, y cuya indemnización está supeditada a la vida o al fallecimiento de una determinada persona o conlleva el pago de una anualidad. Los productos de ahorro o de pensiones relacionados con la vida, el fallecimiento o la incapacitación de una persona se consideran seguros de vida.

De conformidad con la Ley Nº 6/2005, el Banco Central de Timor-Leste definirá, en virtud de una instrucción, las categorías de seguros autorizadas en la esfera de los seguros de vida. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado tal instrucción. Asimismo, a diferencia de los reglamentos de las compañías de seguros distintos de los de vida, no se ha publicado ninguna instrucción específica relativa a la concesión de licencias a compañías de seguros de vida. De conformidad con la Ley, una compañía de seguros no puede desarrollar simultáneamente actividades de seguros de vida y actividades de seguros generales (que abarcan todos los tipos de seguros, con inclusión de los de enfermedad y con excepción de los de vida y de las demás categorías de actividades que determine el Banco Central mediante una instrucción).

No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de seguros de vida.

- **Servicios de seguros distintos de los seguros de vida**

En Timor-Leste, los seguros distintos de los seguros de vida se denominan "seguros generales" (en contraposición a los seguros de vida). Según la definición de la Ley Nº 6/2005, los seguros generales son todos los tipos de seguros, con inclusión de los de enfermedad y con excepción de los de vida y de todas las demás categorías de actividades que determine el Banco Central mediante una instrucción. De conformidad con la Ley Nº 6/2005, el Banco Central de Timor-Leste definirá, mediante una instrucción, las categorías de seguros autorizadas en la esfera de los seguros generales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado tal instrucción. Los requisitos jurídicos y procedimientos específicos para la concesión de licencias a compañías de seguros generales se establecen en la Instrucción Nº 1/2007.

Seguros de accidentes: según la definición de la Ley Nº 6/2005, un seguro de accidentes es aquel que cubre el riesgo de daños causados por un suceso fortuito. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de seguros de accidentes.

Seguros de enfermedad: según la definición de la Ley Nº 6/2005, un seguro de enfermedad es aquel que cubre el riesgo de pérdidas financieras ocasionadas por daños causados a la salud de una persona. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de seguros de salud.

Aparte de lo anterior, no hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de seguros generales.

- **Reaseguro y retrocesión**

Según la definición de la Ley Nº 6/2005, un reaseguro es una protección financiera que una compañía de seguros proporciona a otra compañía de seguros. No hay disposiciones relativas a la retrocesión ni otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de reaseguro.

Servicios auxiliares de los seguros (incluidos los de corredores y agencias de seguros)

- **Entidades autorizadas**

Los intermediarios de seguros deben obtener licencia del Banco Central de Timor-Leste y estar registrados en él. La actividad de intermediación de seguros en Timor-Leste está reservada a:

- agentes;
- subagentes; y
- corredores.

Agentes: de conformidad con el artículo 20 de la Ley Nº 6/2005, la función de un agente es comercializar, en representación de una compañía de seguros, productos y servicios de seguros adecuados a las necesidades de los tomadores y asegurados a cambio del pago por esa compañía de una comisión, de un salario fijo o de una combinación de ambos. La relación entre el agente y la compañía de seguros se regirá en virtud de un contrato escrito, que establecerá las facultades específicas del agente y definirá explícitamente los actos que deberá realizar el agente cuya responsabilidad asume la compañía. La ley vigente prohíbe que los agentes actúen en nombre de más de una compañía de seguros. De conformidad con las disposiciones del artículo 11.2 de la Ley Nº 6/2005 y del artículo 4.1 de la Instrucción Nº 2/2007, los agentes pueden ser personas físicas o jurídicas con un capital mínimo registrado de 5.000 dólares EE.UU.

Subagentes: los subagentes actúan en nombre de agentes de seguros y no pueden representar a más de un agente. Cada año, los subagentes presentarán por escrito al Banco Central una confirmación del agente de seguros en cuyo nombre están autorizados a actuar. Los subagentes son remunerados mediante comisión, salario fijo o ambos por los agentes de seguros a los que representan. De conformidad con las disposiciones combinadas del artículo 11.2 de la Ley Nº 6/2005 y del artículo 4.1 de la Instrucción Nº 2/2007, los subagentes pueden ser personas físicas o jurídicas con un capital mínimo registrado de 5.000 dólares EE.UU.

Corredores: de conformidad con el artículo 21 de la Ley Nº 6/2005, los corredores de seguros deben obtener la póliza de seguros más adecuada a las necesidades de los tomadores o asegurados. Los corredores son remunerados mediante comisión por la compañía de seguros cuya póliza han comercializado. Los corredores deben mantener una lista actualizada de las compañías de seguros en cuyo nombre están autorizados a actuar, lista que puede ser examinada en todo momento por el Banco Central. De conformidad con el artículo 11.3 de la Ley Nº 6/2005, los corredores de seguros adoptarán la forma de sociedad mercantil con un capital social superior a 25.000 dólares EE.UU. La legislación vigente, en particular la Ley Nº 6/2005 y la Instrucción Nº 2/2007, solo establece las prescripciones en materia de licencias y registro de los intermediarios de seguros.

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Con excepción de unas pocas disposiciones, en su mayoría reglamentos publicados por el Banco Central de Timor-Leste, el marco jurídico aplicable se rige aún por la legislación y los reglamentos elaborados por la UNTAET, que asumió los poderes legislativo y ejecutivo en el territorio de Timor-Leste durante el período de transición a la independencia respecto de la República de Indonesia (del 25 de octubre de 1999 al 19 de mayo de 2002).

El marco jurídico de Timor-Leste se basa en el modelo bancario universal, en el que no existe una separación obligatoria entre las actividades bancarias (como la captación de depósitos y la concesión de préstamos) y las transacciones de valores, es decir, entre los servicios bancarios comerciales y los de inversión.

- Organismo regulador

El Banco Central de Timor-Leste supervisa el sector bancario y financiero. Como parte de dicha función de supervisión, el Banco Central se encarga de reglamentar e inscribir las instituciones bancarias y financieras del país (incluidas las sucursales de instituciones bancarias y financieras extranjeras), así como de concederles licencias, vigilar la observancia del marco jurídico aplicable e imponer multas y sanciones en caso de incumplimiento. El Banco Central está facultado para publicar reglamentos e instrucciones sobre asuntos cautelares y de vigilancia.

- Autorización de funcionamiento

Uno de los principios fundamentales del marco reglamentario es que solo las instituciones financieras debidamente autorizadas y registradas en el Banco Central pueden ejercer directamente una actividad financiera en Timor-Leste. Con el fin de obtener la licencia necesaria, las instituciones bancarias y financieras deben constituirse con arreglo a la legislación de Timor-Leste, es decir, mediante una sociedad constituida en el país o una sucursal de una institución financiera extranjera registrada en el país.

La legislación de Timor-Leste distingue tres clases de licencias de actividad bancaria: A, B y C. Esta clasificación de las licencias está relacionada directamente con el ámbito de las actividades que el titular de la licencia está autorizado a ejercer en Timor-Leste de conformidad con el artículo 24 del Reglamento.

- **Requisitos de capital**

En virtud del artículo 4.1 del Reglamento, el Banco Central se encarga de establecer el capital reglamentario mínimo de los bancos autorizados, que no será inferior al equivalente de 2.000.000 de dólares EE.UU. El Banco Central puede incrementar periódicamente los requisitos de capital mínimo en virtud de una instrucción.

De conformidad con la Instrucción CPO/B-2000/1 sobre Solicitudes de Licencias Bancarias, el capital reglamentario mínimo depende de la clasificación de la licencia bancaria. Actualmente, la cuantía mínima exigida para las licencias de clase A es de 6.000.000 de dólares EE.UU.; para las de clase B, de 4.000.000 de dólares EE.UU.; y para las de clase C, de 2.000.000 de dólares EE.UU. Con arreglo a la Instrucción CPO/B-2000/2 sobre Capital Reglamentario, el coeficiente mínimo de garantía de los bancos constituidos en Timor-Leste es del 12%, con independencia del tipo de licencia.

- **Cuestiones fundamentales**

Reglamento sobre el Régimen de Licencias y la Supervisión de los Bancos

El Reglamento Nº 2000/8 de la UNTAET sobre el Régimen de Licencias y la Supervisión de los Bancos (el "Reglamento") es el principal texto jurídico del sector bancario y financiero de Timor-Leste. En él se establecen los principios y normas fundamentales (que, en determinados casos, el organismo regulador desarrolla por medio de instrucciones específicas) de todo el sistema bancario y financiero. El Reglamento abarca diferentes aspectos pertinentes para las instituciones bancarias, como los siguientes: i) la solicitud, la expedición y la revocación de licencias bancarias; ii) la gobernanza empresarial; iii) el secreto profesional; iv) las actividades financieras autorizadas; v) las normas relativas al mantenimiento de registros; vi) la auditoría; vii) los informes y las inspecciones; viii) las infracciones, las sanciones y las medidas correctivas; y ix) la insolvencia. El Reglamento también contiene disposiciones aplicables a los accionistas, directores, agentes y empleados de las instituciones bancarias.

Instrucción del Banco Central de Timor-Leste sobre el Sistema de Información del Registro de Créditos

En 2009, el Banco Central creó el Sistema de Información del Registro de Créditos (en virtud de la Instrucción Nº 3/2009) en Timor-Leste con el fin de proporcionar a las instituciones bancarias y financieras que operan en el país información relativa a los créditos concedidos y previstos de las demás instituciones bancarias y financieras. Los operadores del mercado local han considerado que este Sistema es un instrumento esencial para fines de evaluación del riesgo. Las entidades participantes deben presentar al Sistema de Información del Registro de Créditos datos detallados sobre cada crédito concedido, a saber: i) información sobre el prestatario; ii) la cuantía del crédito concedido; y iii) el tipo de garantía (si procede).

Instrucciones, normas y directrices del organismo regulador

Aunque muchos aspectos pertinentes para el desarrollo de las actividades bancarias y financieras siguen sin estar regulados en Timor-Leste (en especial si se compara con otras jurisdicciones desarrolladas), el organismo regulador ha aprobado ya varios reglamentos mediante la publicación de instrucciones, normas y directrices.

Las principales instrucciones aprobadas hasta el momento abarcan una serie de cuestiones que suelen abordar los organismos reguladores del sector financiero de otros países, como los siguientes: i) los requisitos de capital y liquidez; ii) las cualificaciones de los directivos; iii) los riesgos crediticios; iv) las transacciones con personas, entidades bancarias y filiales vinculadas; v) los préstamos a empleados; vi) las obligaciones en materia de notificación y divulgación pública; vii) la auditoría; viii) la inversión en valores de renta variable; ix) la clasificación de los activos; x) el sistema de control interno; xi) la inversión en bienes raíces; y xii) el mantenimiento de registros.

En febrero de 2013, el Banco Central publicó las Directrices sobre el Régimen de Licencias y las Operaciones de los Agentes de Transferencias Monetarias con el fin de alentar un crecimiento firme y eficiente de los servicios de remesas en la economía y reducir el riesgo de que los agentes de transferencias monetarias en Timor-Leste se conviertan en cómplices o víctimas de delitos financieros y sufran perjuicios indirectos. Asimismo, en febrero de 2015, el Banco Central publicó las Directrices sobre el Uso de Agentes en Actividades Bancarias sin Sucursal. Estas Directrices se aplican: i) a todos los bancos autorizados de conformidad con el Reglamento; ii) a las demás instituciones de captación de depósitos; y iii) a las personas y demás entidades que presten servicios de agentes bancarios.

Legislación específica por productos

Con excepción de unas pocas disposiciones aplicables a la concesión de créditos y a la apertura y el mantenimiento de cuentas y depósitos bancarios, no existe todavía en Timor-Leste ningún texto jurídico específico por producto bancario/financiero. Eso significa que, por regla general, los productos que ofrecen las instituciones bancarias y financieras solo están sujetos a las disposiciones en materia de contratos que figuran en la ley general y en particular en el Código Civil de Timor-Leste.

Aplicación de las normas e investigación

El Reglamento faculta al Banco Central para adoptar medidas e imponer sanciones (según se describe en la ley aplicable) a una institución financiera, sus directivos y principales accionistas en caso de incumplimiento de: i) una disposición reglamentaria; ii) una restricción o disposición de una autorización expedida por el Banco Central; y iii) cualquier disposición contenida en un acuerdo de aplicación concluido entre la institución financiera en cuestión y el Banco Central.

Si se considera que una institución financiera (o alguno de sus directores o principales accionistas) ha incumplido alguna disposición reglamentaria, el Banco Central puede, entre otras cosas: i) emitir advertencias por escrito; ii) concluir un acuerdo de cumplimiento con el consejo de administración en el que se establezca un programa de medidas correctivas; iii) emitir órdenes por escrito en las que se pida el cese de las infracciones y la aplicación de las medidas correctivas; iv) imponer multas; v) suspender temporalmente o destituir a los directivos; y vi) revocar la licencia bancaria.

Reclamación y reparación

No existen disposiciones específicas relativas a la reclamación y la reparación en Timor-Leste. Sin embargo, en la práctica, los consumidores pueden presentar las reclamaciones relacionadas con instituciones bancarias al Banco Central, que pedirá al banco que proporcione información y exponga su opinión sobre el caso. Una vez concluidos los procedimientos de investigación, el Banco Central puede archivar el caso (si determina que la institución financiera cumplió la legislación vigente y que, por consiguiente, la reclamación del consumidor carece de fundamento jurídico) o bien, si acepta la reclamación, ordenar por escrito a la institución financiera que adopte medidas correctivas, que pueden incluir una reparación o indemnización.

- Jerarquía de los acreedores

Insolvencia

De conformidad con el Reglamento, en caso de liquidación de los activos de un banco, el crédito garantizado se reembolsará en la medida en que lo permita la ejecución de la garantía, o bien la garantía se transferirá al acreedor garantizado.

Se pagará prioritariamente el crédito restante antes que todas las demás deudas, en el orden siguiente:

- a) los gastos necesarios y razonables realizados por el administrador y el Banco Central, incluidos los honorarios profesionales;
- b) los depósitos, por una cuantía que no supere en 10 veces el salario mensual medio por depositante;
- c) la cuantía no satisfecha de los depósitos con arreglo al punto b) anterior;

- d) otras reclamaciones de acreedores del banco.

Si la cuantía disponible para el pago de cualquier clase de crédito enumerado anteriormente es insuficiente para satisfacer el pago íntegro, dichos créditos se pagarán en proporciones iguales. Tras el pago de todos los créditos reclamados, se satisfarán los créditos restantes admisibles que no se hayan presentado en el plazo especificado en la instrucción del Banco Central. La cuantía restante una vez pagados todos los créditos de los depositantes y de otros acreedores se distribuirá entre los accionistas del banco conforme a sus derechos e intereses.

Resolución bancaria

Si el Banco Central determina que un banco es insolvente o prevé razonablemente que pasará a ser insolvente en los próximos 90 días, podrá tomar posesión y control del banco a través de un administrador judicial. Por ley, el administrador judicial puede, entre otras cosas: a) mantener las operaciones, siempre que no sean i) de captación de depósitos ni ii) de concesión de préstamos a nuevos clientes; b) suspender las operaciones; c) tomar dinero en préstamo sin garantías o, si no fuera posible, ofreciendo como garantía los activos del banco; d) interrumpir o limitar el pago de obligaciones; e) nombrar o destituir directivos, empleados o asesores profesionales; f) ejecutar cualquier instrumento en nombre del banco; y g) iniciar, defender o realizar en su nombre cualquier acción o proceso judicial.

- Secreto bancario

De conformidad con el Reglamento, los directivos, empleados y agentes actuales y pasados de las instituciones bancarias y financieras mantendrán el secreto de todas las cuestiones relativas a la actividad y a los clientes de la institución financiera. La información sujeta a secreto bancario incluye, aunque no exclusivamente, los saldos de las cuentas de los clientes, la cuantía, las condiciones y el uso de los ingresos procedentes de los préstamos bancarios, las relaciones comerciales de los clientes, y los destinatarios y la cuantía de los pagos realizados por el banco. Solo puede divulgarse información confidencial: i) al Banco Central (incluidos sus inspectores y los auditores designados por él); ii) a los auditores externos de la institución bancaria; iii) a las autoridades judiciales; iv) a las autoridades supervisoras de los bancos extranjeros; y v) siempre que la divulgación sea necesaria para proteger los intereses del banco en procesos judiciales.

- Promoción de productos financieros

Las leyes y los reglamentos de Timor-Leste no reglamentan las actividades de comercialización y promoción de productos financieros ni proporcionan una definición al respecto.

- Abuso de mercado

El Reglamento establece el principio según el cual los bancos deberán abstenerse de realizar transacciones o de utilizar prácticas de cualquier tipo que les confieran, individualmente o junto con terceros, una posición dominante en los mercados monetario, de capitales o de divisas. De conformidad con dicho Reglamento, los bancos también se abstendrán de utilizar prácticas manipulativas que puedan dar lugar a una ventaja desleal a su favor o en beneficio de terceros. Asimismo, un banco no exigirá, como condición para poder concluir un contrato con él, que una persona contrate servicios o productos financieros de una filial.

- Gobernanza empresarial

De conformidad con el Reglamento, los bancos se gestionarán a través de un consejo de administración y dispondrán de un comité de auditoría. Los bancos deben contar con un comité de gestión de riesgos o comités separados de gestión de créditos y de activos y pasivos. El consejo de administración de un banco estará formado por un número impar de miembros, con un mínimo de tres y un máximo de siete.

- Remuneración y primas

De conformidad con la Instrucción CPO/B-2001/9 sobre la Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración y del Personal Directivo Superior de los Bancos Recientemente

Autorizados, la remuneración del consejo de administración y del personal directivo superior de una institución bancaria de nueva constitución está sujeta a la aprobación previa del Banco Central durante los tres primeros años de funcionamiento de la entidad. Por lo general, el Banco Central no aprobará la propuesta de remuneración de los miembros del consejo de administración y del personal directivo superior si comprende, entre otras cosas: i) la posibilidad de adquirir una clase diferente de acciones del banco con derechos de voto mayores que los derechos de voto vinculados a otras clases de acciones; ii) la posibilidad de adquirir acciones del banco por un precio de emisión original inferior al precio pagado por otros inversores; o bien iii) si la remuneración propuesta suscita otras preocupaciones relativas a la supervisión.

Asimismo, la remuneración propuesta tampoco será aprobada por el Banco Central: i) si se prevé que afecte negativamente a las perspectivas de ingresos o a la situación financiera del banco en un futuro; o bien ii) si no corresponde a la experiencia y a la competencia de la persona. En el caso concreto de los miembros del consejo de administración, el Banco Central no aprobará la remuneración propuesta: i) si no se basa en la asistencia a las reuniones; ii) si supera el salario del personal directivo superior del banco; o bien iii) si incluye primas.

En lo que respecta al personal directivo superior, la remuneración: i) será acorde a la remuneración que reciben personas con cargos y calificaciones similares en bancos que llevan a cabo actividades financieras similares; y ii) no deberá incluir incentivos que no estén vinculados a la estrategia empresarial a largo plazo y a la situación financiera global del banco. Una remuneración supeditada al volumen, a los resultados o a la rentabilidad a corto plazo o a la asunción de riesgos excesivos no será aprobada por el Banco Central.

- Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público

De conformidad con el Reglamento aplicable y la legislación conexas, actualmente existen dos tipos de instituciones autorizadas a aceptar depósitos y otros fondos reembolsables del público, a saber:

- los bancos; y
- las demás instituciones de captación de depósitos autorizadas en virtud de la Instrucción N° 6/2010.

La apertura y el mantenimiento de cuentas y depósitos bancarios aún no están muy reglamentados en Timor-Leste. Los acuerdos pertinentes están sujetos principalmente a unas pocas disposiciones contenidas en:

- la Instrucción N° 3/2003 sobre la Apertura y el Mantenimiento de Cuentas de Depósito, que especifica la documentación y la información que deben facilitarse obligatoriamente en el marco de un acuerdo de cuenta bancaria; y
- la Instrucción N° CPO/B-2001/3 sobre la Notificación de las Condiciones de los Depósitos y Créditos, que aborda la información que los bancos deben proporcionar obligatoriamente a sus clientes en relación con las condiciones aplicables a los servicios prestados en el marco de un acuerdo de depósito bancario.

El Banco Central había actualizado el marco reglamentario para la apertura y el mantenimiento de cuentas bancarias con el fin de mejorar los derechos de los clientes. Este marco entró en vigor el 1 de enero de 2016.

- Préstamos de todo tipo, incluidos, entre otros, créditos personales, créditos hipotecarios, *factoring* y financiación de transacciones comerciales

No existen disposiciones jurídicas que rijan específicamente los diferentes tipos de préstamos. Por lo tanto, las observaciones siguientes se aplican a cualquier tipo de préstamo, es decir, con independencia de si la transacción subyacente es un crédito personal, un crédito hipotecario, una operación de *factoring* o la financiación de transacciones comerciales.

- **Modelo de acuerdo de préstamo**

No existe un modelo normalizado de acuerdo de préstamo en Timor-Leste. El Código Civil de Timor-Leste, aprobado en virtud de la Ley Nº 10/2011, de 14 de septiembre de 2011, establece el principio general de "libertad contractual", por el que las partes pueden establecer libremente, con sujeción a los límites legales aplicables, el contenido del contrato y concluir contratos diferentes de los tipos previstos expresamente en la ley (artículo 340 del Código Civil). Por consiguiente, el principio fundamental es que las partes pueden acordar libremente las condiciones de un acuerdo de préstamo, siempre que la finalidad de la financiación no sea contraria al orden público ni a los principios éticos (artículo 271 del Código Civil).

- **Cláusulas imperativas**

De conformidad con la Instrucción sobre la Documentación de Créditos (Instrucción Nº CPO CPO/B-2001/8), los acuerdos de préstamo contendrán, como mínimo, los elementos siguientes: i) la fecha y la cuantía principal del crédito; ii) la finalidad del crédito; iii) el tipo de interés; iv) el calendario de amortización, incluida la fecha de vencimiento; v) las demás condiciones del crédito; vi) la descripción de las garantías y el derecho legal a la garantía en caso de impago del prestatario; vii) cualquier seguro cuya contratación se exija al prestatario; y viii) la fecha o las fechas en que el prestatario dispondrá de las cuantías del crédito.

- **Modelo de acuerdo de préstamo**

En virtud del Decreto Ley Nº 45/2012 sobre el Modelo de Acuerdo de Préstamo, de 21 de noviembre de 2012, los acuerdos de préstamo concluidos por instituciones bancarias constituidas en Timor-Leste pueden formalizarse por medio de un documento escrito de carácter privado.

- **Derecho aplicable**

El Código Civil contiene varias disposiciones sobre la determinación del derecho aplicable y cuestiones relacionadas con los conflictos de leyes que deben tenerse en cuenta a la hora de examinar un préstamo. El artículo 40 del Código Civil establece que las partes pueden determinar libremente la legislación que rige sus acuerdos, siempre que dicha determinación corresponda a un interés legítimo de las partes o esté relacionada con un elemento del contrato que sea pertinente a efectos de derecho internacional privado (por ejemplo, la legislación relativa a la residencia, a la sede o al domicilio social de una de las partes; al lugar de celebración o de aplicación del contrato; o a la ubicación de los bienes inmuebles).

De acuerdo con lo anterior, los acuerdos de préstamo que concluyan los bancos y sus clientes en Timor-Leste se regirán, en principio, por la legislación de Timor-Leste, a menos que la naturaleza de los elementos de una transacción concreta justifiquen la elección de una legislación extranjera. Con arreglo a la legislación de Timor-Leste, los tribunales locales no aceptarán una legislación extranjera elegida por las partes, si esto conlleva la vulneración de un principio fundamental de orden público o de las disposiciones obligatorias de la legislación local aplicable. Los artículos 20 y 21 del Código Civil establecen que: i) la elección de la legislación no se considera pertinente si está motivada por una intención fraudulenta de evitar la aplicación de la legislación que en otras circunstancias se aplicaría; y ii) las disposiciones de una legislación extranjera no son aplicables si contravienen los principios fundamentales de orden público de Timor-Leste. Sin embargo, no existe una definición legal de orden público nacional o internacional, lo que significa que el juez determinará en cada caso el contenido de ese concepto. Algunos ejemplos de principios de orden público y normas obligatorias son las prescripciones formales relativas a los acuerdos de préstamo, las normas sobre garantías, las normas relacionadas con los intereses y los requisitos mínimos de los acuerdos de préstamo.

- **Tipo de interés**

El Código Civil establece límites a los intereses aplicables a un préstamo. De conformidad con el artículo 1066 del Código Civil, el tipo de interés acordado no puede superar el tipo de interés legal más el 3%, si el préstamo está provisto de una garantía real, o el 5%, si no lo está. El tipo de interés de demora no puede superar el tipo de interés legal más el 7%, si el préstamo está provisto de una garantía real, o el 9%, si no lo está. Cualquier tipo de interés que exceda de los límites mencionados se considerará usurario y se declarará nulo y sin efecto. En la práctica, la disposición del artículo 1066 del Código Civil no es aplicable, dado que el Gobierno todavía no ha aprobado un tipo de interés legal. No obstante, el tipo de interés acordado no debe contravenir el principio de buena fe

al conceder una ventaja excesiva e injustificada al prestamista, habida cuenta de las circunstancias específicas del mercado y del préstamo (artículos 273 a 275 del Código Civil).

- Servicios financieros de arrendamiento con opción de compra

De conformidad con el artículo 24.3 d) del Reglamento, los bancos de las clases A y B están autorizados a prestar servicios financieros de arrendamiento con opción de compra. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios financieros de arrendamiento con opción de compra.

- Todos los servicios de pago y transferencia monetaria

De conformidad con el Decreto Ley N° 17/2015 sobre el Sistema Nacional de Pagos, de 24 de junio de 2015, los servicios de pago son:

- los servicios de depósito y retirada de dinero en efectivo;
- la ejecución de pagos;
- la emisión o la compra de instrumentos de pago;
- la prestación de servicios de transferencia de fondos; y
- todos los demás servicios auxiliares de transferencia monetaria que también conlleven la emisión de moneda electrónica e instrumentos de moneda electrónica (con excepción de la prestación de servicios de Internet o comunicaciones o servicios de acceso a redes).

De conformidad con el artículo 7 del Decreto Ley N° 17/2015, ninguna persona o entidad empresarial puede prestar servicios de pago ni operar uno de los sistemas (incluidos los sistemas de pago, compensación o liquidación) sin la debida autorización del Banco Central.

De acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento, la licencia bancaria comprende lo siguiente:

- los servicios de pago y cobro; y
- la emisión y gestión de medios de pago (con inclusión de las tarjetas de pago, los cheques de viaje y los giros bancarios).

- Garantías y compromisos

No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente las garantías bancarias o los compromisos similares.

- Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes

Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en un mercado extrabursátil, o de otro modo, de lo siguiente:

a.	instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de depósito, etc.)	81339**
b.	divisas	81333
c.	productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones	81339**
d.	instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, "swaps", acuerdos de tipo de interés a plazo, etc.	81339**
e.	valores transferibles	81321*
f.	otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive	81339**

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento, los bancos están autorizados a:

- comprar y vender divisas a cambio de dinero en efectivo por cuenta de un cliente;
- tomar prestados fondos y comprar y vender por cuenta propia o de clientes (con excepción de la suscripción de valores): i) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras de cambio y certificados de depósito); ii) títulos de deuda; iii) futuros y opciones vinculados a títulos de deuda o a tipos de interés; o iv) instrumentos basados en el tipo de interés (solo los bancos de las clases A y B).

No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente los servicios relacionados con el intercambio comercial por cuenta propia o de clientes.

- Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas emisiones

De conformidad con el artículo 24.4 del Reglamento, solo los bancos de la clase A están autorizados a prestar servicios relacionados con la suscripción y distribución de deuda y valores de renta variable y la negociación con valores. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente los servicios relacionados con el intercambio comercial por cuenta propia o de clientes.

La Instrucción CPO/B-2001/2 sobre las Inversiones de los Bancos en Capital Social establece que ningún banco podrá tener (directa o indirectamente) una participación en el capital social de una entidad dedicada a actividades no financieras: i) que represente una participación significativa; ii) que supere su valor corriente neto, equivalente al 15% del capital reglamentario del banco; o iii) cuando el valor corriente neto total de toda su participación en esa entidad supere el equivalente al 100% del capital reglamentario del banco, sin haber obtenido autorización previa por escrito del Banco Central de Timor-Leste. Asimismo, los bancos no pueden poseer (directa o indirectamente) acciones de un banco constituido en Timor-Leste.

Por último, las limitaciones y restricciones indicadas anteriormente no se aplican a lo siguiente: i) las participaciones en capital social adquiridas por un banco como reembolso de un crédito concedido por ese banco (que no pueden exceder de un año contado desde la fecha de adquisición o de un plazo mayor, si así lo aprueba el Banco Central en respuesta a una solicitud por escrito del banco); y ii) las participaciones en capital social que un banco posea como agente en actividades de suscripción o corretaje de valores o gestión de carteras de inversiones.

- Corretaje de cambios

De conformidad con el artículo 24.3 c) del Reglamento, los bancos de las clases A y B están autorizados a prestar servicios de corretaje de cambios. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de corretaje de cambios.

- Administración de activos; por ejemplo, administración de fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia y servicios fiduciarios

De conformidad con el artículo 24.4 a) y b) del Reglamento, solo los bancos de la clase A están autorizados a prestar: i) servicios fiduciarios, lo que incluye la inversión y la administración de los fondos fiduciarios recibidos y la administración de valores; y ii) servicios en calidad de gestor de carteras de inversiones o asesor de inversiones. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de estos servicios.

- **Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables**

De conformidad con la Ley Nº 5/2011, el Banco Central de Timor-Leste se encarga del régimen de licencias, del registro y de la supervisión de los sistemas de pago, compensación y liquidación de valores. La misma norma se deriva del Decreto Ley Nº 17/2015 sobre el Sistema Nacional de Pagos, de 24 de junio de 2015, por el que los bancos deben obtener autorización del Banco Central para utilizar sistemas de pago, compensación y liquidación.

Con arreglo al artículo 9.1 del Decreto Ley Nº 17/2015, todos los operadores de sistemas elaborarán normas por escrito que estipulen la administración, la gestión y el funcionamiento de los sistemas que utilizan. Dichas normas abarcarán como mínimo: i) la gestión de la liquidez; ii) el riesgo crediticio y la liquidación; iii) el momento en que se consideran definitivas las instrucciones de pago y las liquidaciones; iv) la gobernanza y el acceso; v) las emergencias y el riesgo operativo; vi) los derechos y obligaciones de los participantes en el sistema y los operadores. Sin embargo, todavía no se han aprobado disposiciones jurídicas que aborden específicamente la prestación de servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables.

- **Servicios de asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades enumeradas en el artículo 1B del documento MTN/TNC/W/50, con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas**

De conformidad con el artículo 24.3 del Reglamento, los bancos de las clases A y B están autorizados a prestar servicios en calidad de agentes o consultores financieros, con excepción de los servicios de asesoramiento sobre inversiones, que solo pueden prestar los bancos de la clase A. No hay otras disposiciones jurídicas pertinentes que rijan específicamente la prestación de servicios de asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares.

Servicios sociales y de salud

- **Servicios de hospital**

El Decreto Ley Nº 18/2004 sobre Servicios Privados de Salud, de 1 de diciembre de 2004, establece las normas para la concesión de licencias a hospitales privados. Este Decreto Ley no contiene prescripciones relativas a la nacionalidad de los inversores ni de las personas responsables. No obstante, también deben observarse las disposiciones sobre el régimen de licencias y la acreditación de los profesionales de la salud.

- **Otros servicios de salud humana (excepto los comprendidos en la partida 93191)**

El Decreto Ley Nº 18/2004 sobre Servicios Privados de Salud, de 1 de diciembre de 2004, establece las normas para la concesión de licencias a hospitales privados, incluidas las clínicas, las clínicas dentales, etc. Este Decreto Ley no contiene prescripciones relativas a la nacionalidad de los inversores ni de las personas responsables. No obstante, también deben observarse las disposiciones sobre el régimen de licencias y la acreditación de los profesionales de la salud.

Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes

Timor-Leste no ha aprobado ninguna ley que reglamente específicamente los servicios de turismo y relacionados con los viajes. Sin embargo, el Decreto Ley Nº 24/2014, de 3 de septiembre de 2014, establece el marco general para la política de turismo en Timor-Leste, que incluye los principios generales que deben observarse en el sector.

- Hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro de comidas desde el exterior por contrato)

En lo que respecta a los restaurantes, el Decreto Ley Nº 7/2009, de 15 de enero de 2009, reglamenta el trámite de licencias y la actividad de los restaurantes y establecimientos similares que sirven comida y bebida, como los bares, los clubes nocturnos y los establecimientos de comidas y bebidas tradicionales. El Decreto Ley también establece los requisitos específicos para obtener una licencia. Antes de la concesión de una licencia, el establecimiento se somete a una inspección.

- Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Este sector se rige por lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 10/2011, de 16 de marzo de 2011, sobre el Marco Jurídico de Utilidad Pública de las Federaciones de Deportes, el Decreto Ley Nº 18/2014, de 24 de julio de 2014, sobre el Reglamento de Clubes y Empresas Deportivos, y el Decreto Ley Nº 6/2009 sobre el Reglamento de los Juegos de Azar con Fines Sociales y Recreativos, que incluye las prescripciones aplicables en materia de licencias.

Servicios de transporte

- Servicios de transporte marítimo

Timor-Leste no ha aprobado ninguna ley específica que reglamente los servicios de transporte marítimo. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones está elaborando un reglamento sobre estos servicios con la asistencia de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

- Servicios de transporte aéreo

Este sector está bajo la supervisión de la Administración de Aeropuertos y Navegación Aérea de Timor-Leste (TLAANA). Timor-Leste ha promulgado el Decreto Ley Nº 1/2003, de 10 de marzo de 2003, que establece el marco jurídico general aplicable a los servicios de transporte aéreo. El Decreto Ley Nº 5/2006, de 1 de marzo de 2006, establece las condiciones, los requisitos y el procedimiento jurídico de certificación de las empresas de transporte aéreo para el ejercicio de sus actividades. La TLAANA se encarga de otorgar este certificado.

- Servicios de transporte por carretera

El Decreto Ley Nº 2/2003, de 10 de marzo de 2003, establece el marco jurídico general aplicable al sistema de transporte por carretera, que define sus propósitos fundamentales y principios generales. El Decreto Ley también contiene algunas disposiciones relativas a los transportes privados y públicos, que deberán reglamentarse de manera más específica (cabe señalar que no se han promulgado otras leyes ni reglamentos relativos a este sector).

De conformidad con el artículo 15 del Decreto Ley Nº 2/2003, el acceso a la profesión de transportista público por carretera solo está abierto: i) a los nacionales de Timor-Leste; ii) a las empresas con una participación timorense de al menos el 50%; o iii) a los extranjeros que gocen de los mismos derechos y trato que los nacionales de Timor-Leste. Esta disposición también indica que las personas interesadas que reúnan las condiciones mencionadas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Transportistas por Carretera, que todavía no se ha creado.

- Transporte de pasajeros

El artículo 16 del Decreto Ley Nº 2/2003 dispone que el transporte regular urbano y local es un servicio público que puede prestarse previa obtención de una licencia o concesión otorgada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones. El transporte interurbano de pasajeros puede realizarse con carácter privado, en cuyo caso las empresas de transporte asumen plenamente el riesgo y los costos derivados. De conformidad con el artículo 17 del Decreto Ley Nº 2/2003, también se requiere una autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones por cada ruta en la que se presten servicios.

- **Transporte de carga**

El artículo 20 del Decreto Ley N° 2/2003 estipula que el marco jurídico que se ha de establecer deberá reglamentar la competencia y la seguridad del transporte.

- **Servicios de transporte por tuberías**

El Decreto Ley N° 20/2008 sobre la Autoridad Nacional del Petróleo (NPA), de 19 de junio de 2008, y el Decreto Ley N° 1/2012 sobre el Sector de Elaboración Avanzada, de 1 de febrero de 2012, establecen que el transporte de combustibles y otros productos del petróleo a través de oleoductos está sujeto a la concesión de licencias por la NPA. El Decreto Ley N° 1/2012 también prevé la aprobación de reglamentos más detallados sobre el transporte de productos del petróleo por oleoductos, pero la NPA aún no los ha aprobado.

- **Transporte de combustibles**

El Decreto Ley N° 20/2008 sobre la Autoridad Nacional del Petróleo (NPA), de 19 de junio de 2008, y el Decreto Ley N° 1/2012 sobre el Sector de Elaboración Avanzada, de 1 de febrero de 2012, establecen que el transporte de combustibles está sujeto a la concesión de licencias por la NPA. El Decreto Ley N° 1/2012 también prevé la aprobación de reglamentos más detallados sobre el transporte de productos del petróleo, pero hasta la fecha la NPA no los ha aprobado aún.

No existe reglamentación relativa a sectores/subsectores de servicios no mencionados en el presente anexo.

ANEXO 25: Acuerdos bilaterales

ACUERDOS	FECHA DE RATIFICACIÓN
Estados Unidos - Acuerdo de Cooperación	Resolución Nº 2/2003 del Parlamento, de 3 de enero de 2003
Australia - Tratado del Mar de Timor	Resolución Nº 2/2003 del Parlamento, de 1 de abril de 2003
Brasil - Acuerdo de Cooperación	Resolución Nº 9/2004 del Parlamento, de 11 de noviembre de 2004
Portugal - Acuerdo para evitar la doble imposición y luchar contra la evasión fiscal	Resolución Nº 2/2004 del Gobierno, de 28 de enero de 2004
China - Acuerdo comercial	Resolución Nº 18/2014 del Gobierno, de 24 de julio de 2014
Estados Unidos - Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica	Resolución Nº 19/2004 del Parlamento, de 24 de diciembre de 2004
Australia - Tratado sobre Determinados Acuerdos Marítimos	Resolución Nº 4/2007 del Parlamento, de 8 de marzo de 2007
Australia - Acuerdo de Explotación Común	Resolución Nº 5/2007 del Parlamento, de 8 de marzo de 2007
Australia - Mar de Timor	Resolución Nº 5/2007 del Parlamento, de 8 de marzo de 2007
Alemania - Acuerdo de Cooperación	Resolución Nº 5/2008 del Parlamento, de 7 de mayo de 2008
Indonesia - Pasos fronterizos tradicionales y mercados regulados	Resolución Nº 21/2009 del Parlamento, de 2 de mayo de 2009
Acuerdo General de Cooperación Económica, Comercial, Técnica, Científica y Cultural	Resolución Nº 12/2009 del Gobierno, de 5 de agosto de 2009
España - Acuerdo de Cooperación	Resolución Nº 19/2010 del Parlamento, de 14 de julio de 2010
Japón - Acuerdo de Cooperación en materia de Formación e Información	Resolución Nº 5/2014 del Parlamento, de 26 de marzo de 2014
Indonesia - Exención de Visados para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos	Resolución Nº 6/2014 del Parlamento, de 18 de junio de 2014
Portugal - Acuerdo para crear la Escuela Portuguesa	Resolución Nº 9/2015 del Parlamento, de 5 de agosto de 2015
Unión Europea - Acuerdo sobre la Exención de Visados para los Titulares de todos los Pasaportes	Resolución Nº 10/2015 del Parlamento, de 5 de agosto de 2015
Santa Sede - Acuerdo	Resolución Nº 18/2015 del Parlamento, de 11 de noviembre de 2015
Nueva Zelanda - Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA)	Resolución Nº 4/2017 del Parlamento, de 8 de marzo de 2017
Camboya - Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica, Comercial y Técnica	Resolución Nº 17/2017 del Parlamento, de 23 de agosto de 2017
Australia - Acuerdo sobre el Establecimiento de las Respectivas Fronteras Marítimas	Resolución Nº 15/2019 del Parlamento, de 27 de agosto de 2019
Australia - Acuerdo sobre Servicios Aéreos (ASA)	Resolución Nº 6/2021 del Parlamento, de 16 de febrero de 2021
Tailandia - Acuerdo sobre la Exención de Visado para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios	Resolución Nº 21/2022 del Parlamento, de 13 de julio de 2022
Camboya - Acuerdo sobre la Exención de Visado para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios	Resolución Nº 22/2022 del Parlamento, de 13 de julio de 2022
Emiratos Árabes Unidos - Acuerdo sobre Servicios Aéreos (ASA)	Resolución Nº 23/2022 del Parlamento, de 13 de julio de 2022
Estados Unidos - Acuerdo sobre el <i>Millennium Challenge</i>	Resolución Nº 42/2022 del Parlamento, de 19 de octubre de 2022

Tratados bilaterales sobre inversiones

PAÍS	TRATADO
Portugal	Acuerdo sobre la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, aprobado en virtud de la Resolución Nº 2/2004 del Gobierno, de 28 de enero de 2004, y en vigor desde el 7 de abril de 2004
Qatar	Acuerdo entre el Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste y el Gobierno del Estado de Qatar sobre la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, firmado el 21 de enero de 2012
Kuwait	Acuerdo entre el Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste y el Gobierno del Estado de Kuwait sobre la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, firmado el 1 de junio de 2007
Kuwait	Tratado de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste y el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado el 1 de junio de 2007
Alemania	Tratado entre la República Federal de Alemania y la República Democrática de Timor-Leste sobre la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, Resolución Nº 8/2011 del Gobierno, de 16 de marzo de 2011, firmado el 21 de enero de 2012 (no ratificado)
Viet Nam	Viet Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste y el Gobierno de la República Socialista de Viet Nam, firmado el 4 de septiembre de 2013

ANEXO 26: Situación relativa a la adhesión de Timor-Leste a la ASEAN

Consolidación interna

- Desde 2015 se han promulgado reformas legislativas progresivas destinadas a adaptarse a las prescripciones de la ASEAN. El Programa de Trabajo (2018-2023) del VIII Gobierno Constitucional (debatido y aprobado por el Parlamento Nacional) establece (página 131) la intención de "reforzar las relaciones con los Estados miembros de la ASEAN y de seguir promoviendo las reformas nacionales para adaptarse a las políticas y las normas de la ASEAN".
- La Resolución Nº 14/2019 del Gobierno establece que las reformas legislativas supervisadas por el Ministerio de Reforma Jurídica y Asuntos Parlamentarios deben facilitar la adhesión a la ASEAN teniendo en cuenta la armonización con las prescripciones de la ASEAN.
- En 2019 se puso en marcha el Programa de Movilización de Timor-Leste y la ASEAN (TLAMP) y se identificaron los Factores Esenciales para la Adhesión (CEA). El TLAMP es un proceso en curso con objetivos a largo plazo a fin de cumplir las prescripciones de la ASEAN, mientras que los CEA consisten en una serie de acuerdos clave de la ASEAN que pueden aplicarse dentro de un plazo razonable (objetivo a medio y corto plazo).
- Se ha establecido un grupo de trabajo interministerial sobre los tres pilares de la Comunidad de la ASEAN, así como el Equipo Económico Básico de la ASEAN. Se han impartido y se seguirán impartiendo varias formaciones dentro y fuera del país a los miembros de los grupos de trabajo.

Colaboración bilateral

- En 2019, el Ministro de Asuntos Exteriores hizo varias "visitas diplomáticas" a los Estados miembros de la ASEAN; esos encuentros prosiguen hasta la fecha a través de reuniones virtuales, incluidas reuniones periódicas con los embajadores residentes y los representantes en Dili de los Estados miembros de la ASEAN.
- Se ha designado al Representante Permanente de Timor-Leste en la secretaría de la ASEAN en Yakarta para facilitar la colaboración bilateral con los Estados miembros de la ASEAN, tanto a nivel político como técnico.

Misión investigadora de la ASEAN:

- En septiembre de 2019, la ASEAN envió a Dili una misión investigadora sobre el pilar de la Comunidad Política y de Seguridad a fin de evaluar el compromiso, la capacidad y la preparación técnica de Timor-Leste para aplicar los acuerdos de la ASEAN y participar en las reuniones de la ASEAN y otras actividades pertinentes.
- Debido a la pandemia de COVID-19, los altos funcionarios de la ASEAN celebraron en octubre de 2020 reuniones virtuales sobre el pilar sociocultural con los ministerios y los organismos competentes. Asimismo, entre el 7 y el 9 de diciembre de 2020, se celebró una reunión virtual sobre el pilar económico en la que se evaluaron en profundidad la implicación de la adhesión de Timor-Leste a los acuerdos económicos de la ASEAN, los planes estratégicos nacionales y la aplicación de políticas.
- Los pilares de la Comunidad Sociocultural y de la Comunidad Económica de la ASEAN llevaron a cabo una misión investigadora sobre la adhesión de Timor-Leste del 5 al 9 de julio y del 18 al 21 de julio de 2022, respectivamente.
- La misión investigadora del pilar de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN concluyó en 2019.
- Las delegaciones de las misiones investigadoras de la ASEAN y la secretaría de la ASEAN elaborarán el informe de la misión investigadora y lo presentarán a la Reunión de Altos Funcionarios de Asuntos Económicos en agosto de 2022. La Reunión de Altos Funcionarios de Asuntos Económicos examinó el informe y presentó un informe completo de evaluación, que se someterá al examen de la Reunión de Ministros de Economía de la ASEAN en septiembre de 2022.

- El Grupo de Trabajo del Consejo de Coordinación de la ASEAN sobre la solicitud de adhesión a la ASEAN presentada por Timor-Leste, compuesto por altos funcionarios de los pilares de la Comunidad Económica, la Comunidad Sociocultural y la Comunidad Política y de Seguridad, se reunió en octubre de 2022 para refundir los tres informes de evaluación de las misiones investigadoras y los correspondientes resultados de la Reunión Ministerial de la ASEAN con vistas a la Cumbre de la ASEAN que se celebrará en noviembre de 2022.
- La ASEAN admite nuevos miembros por consenso en el marco de la Cumbre de la ASEAN sobre la base de la recomendación del Consejo de Coordinación de la ASEAN (Carta de la ASEAN, artículo 6.3).
- En la Cumbre de la ASEAN celebrada el 11 de noviembre de 2022, los líderes de la ASEAN, basándose en las misiones investigadoras sobre todos los pilares, emitieron una declaración sobre la solicitud de adhesión de Timor-Leste a la ASEAN, en la que acordaron en principio admitir a Timor-Leste como 11º miembro de la ASEAN, conceder a Timor-Leste la condición de observador y autorizar la participación del país en todas las reuniones de la ASEAN, incluidas las sesiones plenarias de las cumbres, así como formalizar una hoja de ruta fundamentada en criterios objetivos con miras a la plena adhesión de Timor-Leste y basada en particular en los hitos identificados en los informes de las misiones investigadoras llevadas a cabo en relación con los tres pilares de la comunidad de la ASEAN.
- En la 42ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en mayo de 2023 durante la Presidencia de Indonesia, se adoptó la hoja de ruta para la incorporación plena de Timor-Leste a la ASEAN.

Próximos pasos:

Los Estados miembros de la ASEAN, los asociados externos de la ASEAN y la secretaría de la ASEAN seguirán trabajando con Timor-Leste para poner en práctica la hoja de ruta hasta que el país se convierta en miembro de pleno derecho. De acuerdo con las recomendaciones de las misiones investigadoras, han dado comienzo las actividades de formación sobre cuestiones relacionadas con la Comunidad Económica de la ASEAN.

ANEXO 27: Participación de Timor-Leste en las organizaciones económicas multilaterales y en programas de otras organizaciones multilaterales relacionados con el comercio

- Asociación Internacional de Fomento (AIF);
 - Banco Asiático de Desarrollo (BAsD);
 - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF);
 - Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI);
 - Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP);
 - Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP);
 - Corporación Financiera Internacional (CFI);
 - Corte Internacional de Justicia (CIJ);
 - Fondo Monetario Internacional (FMI);
 - Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI);
 - Organización de las Naciones Unidas (ONU);
 - Organización Internacional del Trabajo (OIT);
 - Organización Marítima Internacional (OMI);
 - Organización Mundial de Aduanas (OMA);
 - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);
 - Organización Mundial de la Salud (OMS);
 - Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE);
 - Organización Mundial del Turismo (OMT);
 - Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y
 - Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
-

APÉNDICE

Proyecto de Decisión

ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Decisión de [...]

La Conferencia Ministerial,

Teniendo en consideración el párrafo 2 del artículo XII y el párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio ("Acuerdo sobre la OMC") y el Procedimiento de adopción de decisiones de conformidad con los artículos IX y XII del Acuerdo sobre la OMC acordado por el Consejo General ([WT/L/93](#)),

Tomando nota de la solicitud de adhesión de la República Democrática de Timor-Leste al Acuerdo sobre la OMC de fecha 7 de abril de 2015,

Observando los resultados de las negociaciones encaminadas al establecimiento de las condiciones de adhesión de la República Democrática de Timor-Leste al Acuerdo sobre la OMC y habiendo preparado un Protocolo de Adhesión de la República Democrática de Timor-Leste,

Decide lo siguiente:

La República Democrática de Timor-Leste puede adherirse al Acuerdo sobre la OMC en los términos y condiciones enunciados en el Protocolo anexo a la presente Decisión.

PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Preámbulo

La Organización Mundial del Comercio (denominada en adelante "OMC"), en virtud de la aprobación de la Conferencia Ministerial de la OMC, concedida de conformidad con el artículo XII del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC"), y la República Democrática de Timor-Leste (denominada en adelante "Timor-Leste"),

Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Timor-Leste al Acuerdo sobre la OMC, que figura en el documento WT/ACC/TLS/34, de fecha 18 de enero de 2024 (denominado en adelante "informe del Grupo de Trabajo"),

Tomando en consideración de los resultados de las negociaciones sobre la adhesión de Timor-Leste al Acuerdo sobre la OMC,

Conviene en lo siguiente:

PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES

1. En la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo con arreglo al párrafo 8, Timor-Leste se adherirá al Acuerdo sobre la OMC de conformidad con el artículo XII de ese Acuerdo y, en consecuencia, pasará a ser Miembro de la OMC.
2. El Acuerdo sobre la OMC al que se adherirá Timor-Leste será el Acuerdo sobre la OMC, incluidas sus Notas Explicativas, rectificado, enmendado o modificado de otra forma por los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Este Protocolo, que comprenderá los compromisos mencionados en el párrafo 337 del informe del Grupo de Trabajo, formará parte integrante del Acuerdo sobre la OMC.
3. Salvo disposición en contrario en el párrafo 337 del informe del Grupo de Trabajo, las obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC que deban ponerse en aplicación en un plazo contado a partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo serán cumplidas por Timor-Leste como si hubiera aceptado ese Acuerdo en la fecha de su entrada en vigor.
4. Timor-Leste podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 del artículo II del AGCS siempre que tal medida esté consignada en la lista de exenciones del artículo II anexa al presente Protocolo y cumpla las condiciones establecidas en el Anexo del AGCS sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II.

PARTE II - LISTAS

5. Las Listas reproducidas en el anexo del presente Protocolo pasarán a ser la Lista de concesiones y compromisos anexa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (denominado en adelante "GATT de 1994") y la Lista de compromisos específicos anexa al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS") correspondientes a Timor-Leste. El escalonamiento de las concesiones y los compromisos enumerados en las Listas se aplicará conforme a lo indicado en las partes pertinentes de las Listas respectivas.
6. A los efectos de la referencia que se hace en el párrafo 6 a) del artículo II del GATT de 1994 a la fecha de dicho Acuerdo, la fecha aplicable con respecto a las Listas de concesiones y compromisos anexas al presente Protocolo será la fecha de entrada en vigor de este Protocolo.

PARTE III - DISPOSICIONES FINALES

7. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de Timor-Leste, mediante firma o formalidad de otra clase, hasta el 30 de agosto de 2024 o una fecha posterior que pudiera decidir el Consejo General.

8. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de su aceptación por Timor-Leste.

9. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General de la OMC. El Director General de la OMC remitirá sin dilación a cada Miembro de la OMC y a Timor-Leste una copia autenticada del presente Protocolo, así como una notificación de la aceptación del mismo por Timor-Leste, de conformidad con el párrafo 7.

10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en [...], el día [...], en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico, salvo que en alguna de las Listas anexas se especifique que es auténtica solo en uno de estos idiomas. El informe del Grupo de Trabajo es auténtico únicamente en inglés.

ANEXO

LISTA CLXXVIII – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Auténtica únicamente en idioma inglés.

(Distribuida en el documento [WT/ACC/TLS/34/Add.1](#))

LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SERVICIOS

LISTA DE EXENCIONES DEL ARTÍCULO II (NMF)

Auténtica únicamente en idioma inglés.

(Distribuida en el documento [WT/ACC/TLS/34/Add.2](#))]
